

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

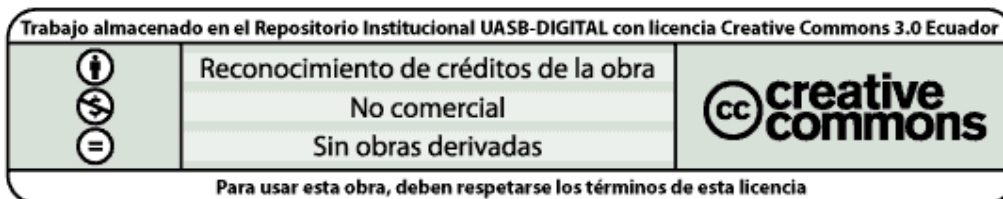
Programa de Maestría en Derecho
Mención en Derecho Constitucional

**El proceso de seguimiento de sentencias en la justicia
constitucional como garantía efectiva de los derechos
constitucionalmente reconocidos**

Autor: Susana Carolina Toral Burbano

Tutora: Dra. Eddy De La Guerra Zúñiga

Quito, 2016



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN DE TESIS

Yo, Susana Carolina Toral Burbano, autora de la tesis intitulada *El proceso de seguimiento de sentencias en la justicia constitucional como garantía efectiva de los derechos constitucionalmente reconocidos* mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Fecha:

Firma:

Resumen

La Corte Constitucional para el período de transición en la primera sentencia de jurisprudencia vinculante No. 001-10-JPO-CC, refirió respecto de la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias constitucionales, de oficio o a petición de parte, considerando que de por medio se encuentra la materialización de la reparación integral, en base a lo anotado se advierte la capacidad de la Corte Constitucional de iniciar un proceso de seguimiento de cumplimiento de sus fallos. Sobre esta premisa, el eje trascendental del presente trabajo de investigación, es el análisis del proceso de seguimiento en la justicia constitucional, el cual de una manera poco perceptible pasa a ser una garantía efectiva de los derechos constitucionales, coadyuvando para el efectivo cumplimiento de las medidas de reparación integral.

Ahora bien, para poder llevar a cabo un estudio integral, se analizó la evolución de la reparación integral en el marco constitucional y su efectiva materialización, para posteriormente identificar el proceso de trasconstitucionalismo vertical a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su aproximación y convergencia con la Corte Constitucional ecuatoriana y colombiana en el proceso de reparación integral y seguimiento de cumplimiento de dictámenes y sentencias constitucionales. Como desenlace del presente trabajo se determinó la funcionalidad, eficacia e importancia del proceso de seguimiento, a la luz de la Corte Constitucional del Ecuador, todo esto en base a casos prácticos.

Para la elaboración de la presente investigación fue necesario la aplicación del enfoque cualitativo, el cual se facilitó la recopilación de la información doctrinaria y legal respecto al proceso de seguimiento, tanto en la CIDH, así como en las cortes constitucionales de Ecuador y Colombia. De la misma manera se evidencia la utilización de los métodos comparativo, dogmático y exegético jurídico, todo esto acompañado de una investigación empírica, lo que permitió una valoración en cuanto a las ventajas e inconvenientes del proceso de seguimiento en la justicia constitucional.

Finalmente se ha de señalar que, a lo largo de la investigación se advierte la necesidad del proceso de seguimiento tanto a nivel nacional como internacional, ya que por medio de este se hace efectiva la reparación integral, así como la tutela judicial efectiva de los derechos reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales.

A mamá y papá...

Mis alas....

*A todas y cada una de las personas
que hicieron que valga la pena*

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	14
--------------------	----

CAPÍTULO I

EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LA EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL	17
1.1. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos	19
1.2. La reparación integral	41
1.2.1. Dimensión de la reparación integral	51
1.2.2. Criterios de reparación integral.....	53

CAPÍTULO II

INTERACCIÓN Y REFERENCIAS CRUZADAS ENTRE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LAS CORTES CONSTITUCIONALES DE ECUADOR Y COLOMBIA EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS.....	66
2.1. Las sentencias de la Corte Interamericana, su vinculatoriedad y cumplimiento... ..	68
2.1.1. Mecanismos de la Corte Interamericana para ejecutar sus sentencias.....	82
2.1.2. Proceso de seguimiento de cumplimiento de sentencias a la luz de la Corte Interamericana de derechos humanos	90
2.2. Proceso de aproximación y convergencia entre las cortes constitucionales de Ecuador y Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos	100

CAPÍTULO III

EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.....	124
3.1. La Secretaría Técnica Jurisdiccional y la Dirección Técnica de Seguimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales.....	128
3.2. Fase de seguimiento de las sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional.....	130
3.2.1. Causas en la Fase de Seguimiento «abril de 2014 a marzo 2015».....	136

3.2.2. Autos de verificación emitidos dentro de la fase de seguimiento «abril de 2014 a marzo 2015»	141
3.2.3. Tipos de medidas de reparación integral emitidas por la Corte Constitucional.....	160
3.2.4. Medidas de verificación de cumplimiento continuo.....	183
3.2.5. Actuaciones de la Corte Constitucional dentro de la Fase de Seguimiento..	188
3.2.6. Causas archivadas	191
3.3. Efectividad de la fase de seguimiento.....	193
3.4. Factibilidad de ejecución de las medidas de reparación integral	202
CONCLUSIONES	206
BIBLIOGRAFÍA	209
ANEXO	216

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Propuestas de autores respecto a las obligaciones del Estado	29
Cuadro 2. Tipos de daño: Inmaterial y Material.....	55
Cuadro 3. Medidas de reparación: Restitución.....	58
Cuadro 4. Medidas de reparación: Satisfacción.....	60
Cuadro 5. Medidas de reparación: Garantías de no repetición	61
Cuadro 6. Medidas de reparación: Obligación de investigar, juzgar y sancionar	62
Cuadro 7. Etapa de supervisión de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos	95
Cuadro 8. Tipos de medida de reparación integral a la luz de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte ecuatoriana y colombiana	103
Cuadro 9. Causas de la Corte Constitucional en fase de seguimiento	137
Cuadro 10. Detalle de las causas en fase de seguimiento atendiendo al tipo de garantía jurisdiccional.....	138
Cuadro 11. Autos de verificación emitidos por la Corte Constitucional	144
Cuadro 12. Tipos de disposiciones en los autos de verificación emitidos por la Corte Constitucional.....	153
Cuadro 13. Efectividad de los autos de verificación	156
Cuadro 14. Tipos de medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Constitucional.....	161
Cuadro 15. Procesos de ejecución de reparación económica tramitados por los tribunales de lo contencioso administrativo -previo a la emisión de las reglas-.....	173
Cuadro 16. Formas de determinación de montos	181
Cuadro 17. Medidas de verificación continúa	183
Cuadro 18. Actividades realizadas por el pleno de la Corte Constitucional en fase de seguimiento.....	189
Cuadro 19. Causas de la Corte Constitucional archivadas	191
Cuadro 20. Efectividad de las medidas de reparación integral No.1	196
Cuadro 21. Efectividad de las medidas de reparación integral No.2	196
Cuadro 22. Efectividad de las medidas de reparación integral No.3	197
Cuadro 23. Modificación de la vía de determinación del monto de reparación económica	203

Cuadro 24. Casos suspendidos de la fase de seguimiento	205
--	-----

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Informes emitidos por la Corte IDH dentro de la etapa de supervisión ..	96
Gráfico 2. Tipos de acciones en el proceso de seguimiento	139
Gráfico 3. Autos de verificación	143
Gráfico 4. Tipos de disposiciones emitidas en los autos de verificación	154
Gráfico 5. Tipos de medidas de reparación integral ordenadas	162
Gráfico 6. Reglas para el proceso de reparación económica cuando el Estado es el encargado del pago	169
Gráfico 7. Formas de determinación del monto de reparación económica	182
Gráfico 8. Medidas de reparación con verificación de cumplimiento continua	184
Gráfico 9. Actividades realizadas por la Corte Constitucional en fase de seguimiento	190
Gráfico 10. Causas archivadas	192
Gráfico 11. Análisis de las medidas de reparación integral dictadas por la Corte Constitucional del Ecuador	198
Gráfico 12. Diseño de las medidas de reparación integral	201

INTRODUCCIÓN

La jurisdicción constitucional tiene por objeto garantizar los derechos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, este objetivo se logra a través de la declaración de la vulneración de derechos mediante sentencia constitucional, dictada por la autoridad jurisdiccional competente. De esta manera, la declaración de la vulneración de derechos comporta indefectiblemente la reparación integral por el daño material e inmaterial causado, es decir, el intento por lograr que la persona o personas titulares del derecho violado gocen de sus derechos de la manera más adecuada posible, restableciéndose la situación anterior a la vulneración.

En este sentido, el artículo 86 numeral 3 de la Constitución de la República establece que en la sustanciación de garantías jurisdiccionales, las juezas y jueces en caso de constatar vulneración a derechos, deberán declarar tal vulneración, ordenar la reparación integral, material e inmaterial; adicionalmente por su lado, la Corte Constitucional para el período de transición en la primera sentencia de jurisprudencia vinculante No. 001-10-JPO-CC, señaló que: “[...] la Corte Constitucional, de oficio o a petición de parte, considerando que de por medio se encuentra la materialización de la reparación integral, y sin necesidad de que comparezca exclusivamente el afectado está en la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias constitucionales”.

Ahora bien, el presente trabajo de investigación centra su atención, en establecer la importancia, así como la eficacia del proceso de seguimiento en la justicia constitucional, esto se debe a que no basta con que se dicte una sentencia, sino que, la eficacia de las mismas radica en su cumplimiento integral, lo que se traduce directamente en la protección real de los derechos constitucionales.

Así, el primer capítulo del presente trabajo centra su atención en el desarrollo de los derechos humanos, su evolución en el transcurso del tiempo y más que eso, su vigencia y primacía actual. En este mismo sentido, es necesario entender cuáles han sido los elementos que han tenido que conjugarse para llegar a la concepción actual de cada uno de los derechos, para ello, es indispensable referirse a la exigibilidad y justiciabilidad de los mismos.

Cabe destacar que el análisis planteado no se agota con la mera declaratoria de los derechos en los textos constitucionales, así como, en los tratados internacionales, sino que, resulta indispensable examinar la implementación de garantías y

mecanismos de protección de defensa en la jurisdicción constitucional, producto de ello, los derechos han pasado de ser meras declaratorias de buenas intenciones, a erigirse como pilares fundamentales dentro del Estado de Derecho.

Bajo este esquema, es necesario considerar que, en caso de declaratoria de vulneración de uno o varios derechos constitucionalmente reconocidos, es obligación del operador de justicia dictaminar medidas de reparación integral, esto, atiende al hecho que no basta la declaratoria de vulneración en una sentencia o resolución jurisdiccional, ya que, al existir la certeza de una transgresión de derechos estos deben retornar a su estado anterior. En atención a lo referido, existe un amplio conjunto de medidas de reparación, cada una de las cuales atiende a un tipo de vulneración y por consiguiente resarcen los daños causados a las víctimas.

Una vez analizados los temas antes anotados, el segundo capítulo se encuentra dirigido a analizar si la suscripción de convenios internacionales en materia de derechos humanos, obligan directamente a los estados a ejecutar lo dispuesto en ellos, esto por cuanto, no tendría ningún sentido que los estados suscriban acuerdos internacionales si los mismos carecen de fuerza de ejecución.

Para ello, fue fundamental el estudio de los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma “*pacta sunt servanda*” los cuales se encuentran universalmente reconocidos, motivo por el cual, los estados signatarios de los tratados internacionales se encuentran obligados a acatar las decisiones dictadas por los organismos supranacionales en ejercicio de su potestad jurisdiccional, toda vez que con la suscripción, ratificación y aceptación de su competencia, consienten y reconocen la validez y legitimidad de sus decisiones, no obstante de la existencia o no de mecanismos de supervisión del cumplimiento de estas.

Con las consideraciones anotadas, se precisó respecto de la vinculatoriedad de los tratados internacionales en materia de ejecución, siendo necesario determinar si en la actualidad existe un proceso de aproximación y divergencia entre las cortes, es decir, si los fallos emitidos por los organismos internacionales a más de ser ejecutados -en mayor o menor medida-, han sido acogidos por las legislaciones nacionales, replicando los criterios sentados, o si, por el contrario, los países suscriptores han optado por alejarse de la jurisprudencia internacional.

Sobre la base del estudio realizado en tanto en el capítulo uno como dos, el tercer capítulo se circunscribió al estudio de todos los elementos antes expuestos, pero en el ámbito nacional, es decir, se examinó el proceso de seguimiento de cumplimiento

de las sentencias en la Corte Constitucional del Ecuador, para lo cual fue indispensable determinar si la Corte ecuatoriana posee un proceso especializado para dar seguimiento a sus sentencias y en caso de tenerlo que tan efectivo resulta en la justicia constitucional ecuatoriana.

CAPÍTULO I

EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LA EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL

*Los derechos humanos son sus derechos.
Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos.
Entiéndanlos e insistan en ellos.
Nútranlos y enriquezcanlos. . .
Son lo mejor de nosotros.
Denles vida.*

Kofi Annan

Conforme lo ha establecido el constituyente, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales¹; los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación².

Mediante este reconocimiento expreso en el texto constitucional se observa como el Estado ecuatoriano vincula directamente su accionar a la defensa y protección de los derechos fundamentales, involucrando ineludiblemente la observancia de principios como son la aplicación más favorable a los derechos, optimización de principios, constitucionales y la obligación de la aplicación del precedente constitucional; concomitantemente, este compromiso estatal conlleva el respeto, protección, garantía y promoción de cada uno de los derechos reconocidos en el texto constitucional.

Con base a lo referido, se puede afirmar que toda actividad estatal se encuentra obligada a respetar los derechos constitucionales, aplicando una actitud pasiva frente a ellos, es decir, el Estado no puede vulnerar estos al momento de ejercer su actividad³.

Ahora bien, conforme lo anotado se infiere que los derechos encuentran su concreción en el reconocimiento en el texto constitucional; no obstante, su exigibilidad

¹ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tít. II, “Derechos”, cap. primero, “Principio de aplicación de los derechos”, art. 10, ([Quito]: Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014): 4.

² *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tít. II, “Derechos”, cap. primero, “Principio de aplicación de los derechos”, art. 11, ([Quito]: Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014): 4.

³ Rafael Oyarte, *Derecho constitucional ecuatoriano y comparado* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014), 62.

nace a partir de la imperiosa necesidad que demandan sus beneficiarios directos frente al Estado. Esta exigencia y la obligación estatal de satisfacer las demandas sociales provocan que los derechos pasen de ser meras declaraciones de buenas intenciones a ser sean concebidos como instrumentos útiles mediante los cuales se promueve, asegura y garantiza la plena ejecución de los mismos.

El panorama planteado en los párrafos anteriores, es tan solo un reflejo del reconocimiento de los derechos a través de la historia, así, el primer capítulo del presente trabajo centra su atención en el desarrollo de los derechos humanos, su evolución en el transcurso del tiempo y más que eso, su vigencia y primacía actual. En este mismo sentido, es necesario entender cuáles han sido los elementos que han tenido que conjugarse para llegar a la concepción actual de cada uno de los derechos, así, es indispensable referirse a la exigibilidad y justiciabilidad de los mismos.

Los derechos deben ser vistos desde un prisma, el cual nos permitirá observar cada una de las aristas que poseen; entre una de sus tantas debe advertirse la existencia de un vínculo estrecho entre el Estado, la exigibilidad y la justiciabilidad. Esta relación triangular, desde ningún punto de vista puede ser entendida por separado, sino que, atiende a una concepción de forma conjunta, ya que al conjugar estos tres elementos se logra la concepción de cada uno de los derechos humanos tal y como lo conocemos hoy en día, es decir, como un elemento susceptible de reclamo y más allá de eso, susceptibles de ser reparados en caso de una vulneración.

Cabe destacar que el análisis planteado no se agota con la mera declaratoria de los derechos en los textos constitucionales, así como, en los tratados internacionales, sino que, resulta indispensable examinar la implementación de garantías y mecanismos de protección de defensa en la jurisdicción constitucional, producto de ello, los derechos han pasado de ser meras declaratorias de buenas intenciones, a erigirse como pilares fundamentales dentro del Estado de Derecho.

Bajo este esquema, resulta indispensable considerar que, en caso de declaratoria de vulneración de uno o varios derechos constitucionalmente reconocidos, es obligación del operador de justicia dictaminar medidas de reparación integral, esto, atiende al hecho que no basta la declaratoria de vulneración en una sentencia o resolución jurisdiccional, ya que, al existir la certeza de una transgresión de derechos estos deben retornar a su estado anterior. En atención a lo referido, existe un amplio conjunto de medidas de reparación, cada una de las cuales atiende a un tipo de vulneración y por consiguiente resarcen los daños causados a las víctimas.

Finalmente conviene destacar que, la reparación integral involucra varios criterios y dimensiones, puesto que, no en todos los casos es factible la restitución de un derecho, motivo por el cual se han creado medidas compensatorias que si bien no restablecen el derecho pretenden apaciguar el dolor de los afectados. Por los motivos expuestos, el estudio de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos va de la mano con las medidas de reparación integral, en virtud de que, la exigencia de los mismos implica indefectiblemente su reconocimiento, así como la existencia de garantías jurisdiccionales y mecanismos eficaces y efectivos para que sean reparados en caso de evidente transgresión.

1.1. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos

¿Desde qué momento un derecho se torna exigible? ¿Cuándo un derecho adquiere la categoría de justiciable? ¿Son conceptos análogos la exigibilidad y justiciabilidad? Previo a responder todas las inquietudes planteadas, es necesario considerar desde qué momento los derechos humanos adquirieron la relevancia que hoy los caracteriza y reviste, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En primer lugar, debe entenderse que los derechos no nacen por sí solos, no fueron ni son un producto divino, los derechos son un producto asimilado en la conciencia colectiva⁴, consecuencia de años de lucha, que responden a las necesidades de los hombres, considerados como una prerrogativa natural del ser humano, un producto que pese a ser susceptible de modificación nunca será objeto de regresividad⁵, en este sentido, los derechos alcanzados de forma progresiva no pueden

⁴ Esta afirmación ha sido consolidada por la doctrina del derecho, autores como Fernando Sorondo, y Manuel Garretón, quienes han sostenido que al considerar a los derechos como un producto asimilado en la conciencia colectiva, indirectamente se constituyen dos características esenciales de los derechos: a) Dimensión Histórica: Al ser producto del comportamiento y actividad humana, poseen una dimensión histórica; y, b) Sistema de Valores: Subyace la idea de un sistema de valores que podría constituirse en un ideal común para todos los pueblos y naciones.

Fernando Sorondo, Los derechos humanos a través de la historia (I), *Educación y derechos humanos* No. 3 (1998): 10, <http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/194738/mod_resource/content/0/Unidad_1/Los_Derechos_Humanos_a_traves_de_la_historia_1.pdf>.

Natalia Ayala, *Derechos humanos y globalización. Un análisis preliminar para América Latina* (Montevideo: D3e, 2003) 2, <<http://docplayer.es/6809342-Derechos-humanos-y-globalizacion-un-analisis-preliminar-para-america-latina.html>>.

⁵ Ramiro Ávila Santamaría, *Los derechos y sus garantías ensayos críticos* (Quito: Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de transición, 2012), 90.

El complemento más importante del principio de progresividad es la prohibición de regresividad que proscribe desandar lo avanzado en las condiciones establecidas para el goce efectivo de los derechos.

ser reducidos o derogados en el transcurso del tiempo. En definitiva, los derechos son una muestra palpable de las constantes reivindicaciones y reconocimientos del ser humano como tal.

En segundo lugar, al hablar de derechos humanos debemos entender que estos se han ido constituyendo y construyendo a través del paso del tiempo. Si nos remitimos a la historia y evolución de estos, podemos observar que, el Código de Urukagina⁶, elaborado en el año 2350 A.C. -Mesopotamia-, se consagró como el primer documento jurídico que promovió la protección de ciertos derechos e intentó frenar los abusos del poder.

Años después proliferó la creación de normas, pactos y códigos, así alrededor del mundo la producción de instrumentos jurídicos ha sido extensa, así por ejemplo el Código de Ur-Nammu⁷ (2050 A.C. -Babilonia-); Código de Hammurabi⁸ (1700 A.C.

Al respecto se establece que: “será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de derechos”.

Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Sentencia C-228/11], 30 de marzo de 2011. El principio de progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dentro de ellos los derechos de seguridad social. La exigibilidad judicial de la protección de un derecho social, debe ser complementada con la posibilidad de conformar contenidos o estándares mínimos constituidos por prestaciones concretas, cuya garantía se pueda posicionar de manera general como un punto sobre el cual avanzar, y de no retorno en cuanto al carácter incuestionable de su satisfacción. El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional.

⁶ El texto de las “Reformas de Urukagina” cuenta con cuatro partes. La primera es una introducción con una dedicatoria al dios Ningiris y una breve descripción de las actividades del rey como constructor. La segunda contiene una lista de antiguas prácticas que se consideran “abuso de poder” cometidos en su mayoría por la familia real o por sus funcionarios sobre la población o los sacerdotes. La tercera parte describe las soluciones a estos “abusos” propuestas por Urukagina una vez que éste ha sido elegido como rey. El texto concluye en una cuarta sección donde el monarca anuncia la liberación de ciudadanos encarcelados y la protección de viudas y huérfanos, y describe a continuación la construcción de un canal. Una de las novedades estructurales de este texto es la correspondencia casi exacta que muestra entre los “abusos” descritos en la segunda parte y las “reformas” propuestas en la tercera.

Manuel Molina, *Las «reformas» de Urukagina* (Murcia: Scripta Fulgentina, 1995), 51 - 55.

⁷ Numerosos autores consideran que la historia de la valoración del daño corporal comienza en el año 2.050 antes de Cristo, con la ley de Ur-Nammu o tablas de Nippur (sumerias) considerada como el baremo o tabla de incapacidades más antiguo del mundo, siendo la reparación proporcional al valor perdido. Uno de los grandes logros fue la creación de un código de leyes, el Código de Ur-Nammu, basado en la reparación económica de los daños, que tenía como fin aunar los criterios legales en todo su territorio, y garantizar el buen funcionamiento de la economía.

Luis Alberto Kvitko, *Antecedentes históricos de la valoración del daño corporal y baremos*, Vol. 32 (2015), <http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-0015000100008>.

⁸ El sexto rey de la dinastía amorrea de Babilonia, Hammurabi (1792 – 1750 y últimamente 1730 - 1688 a. de C.) promulgó probablemente en el año 40 año de su reinado un conjunto de leyes que para su mejor conocimiento mandó a grabar en estelas de piedra y repartirlas por las capitales de su Imperio. Tales leyes, que a modo de Código venían a sancionar en parte la jurisprudencia anterior con los adecuados retoques, constituyen el monumento literario más extenso y más importante de su época, así

-Babilonia-); Código De Draco⁹ (621 A.C. -Atenas-); Ley de las XII Tablas¹⁰ (450 A.C. -Atenas-); y, Código Justiniano¹¹ (529 -Imperio Bizantino-). No obstante, con el paso del tiempo las necesidades sociales determinaron que la protección de los derechos debía ir más allá, es decir, no sólo tenía que circunscribirse al territorio de cada nación, sino que, debía existir la posibilidad de traspasar esta frontera y ubicarse en el ámbito internacional.

Es así que, se comenzaron a desarrollar instrumentos jurídicos internacionales de protección de derechos, entre ellos se encuentran: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789); Convención de Ginebra (1864), Sociedad de

como el *corpus* legislativo más célebre del mundo antiguo oriental y aún de toda la Antigüedad. El cuerpo legal desarrolla 282 artículos, formulados de manera sencilla y en forma condicional. Si bien carece de ordenación sistemática, algunas materias aparecen tratadas más o menos en conjunto. Su contenido puede resumirse y estructurarse, a grandes rasgos y en una primera toma de contacto, del siguiente modo: Infracciones procesales; estatutos de la propiedad; beneficios y obligaciones derivadas de feudos militares; relaciones de posesión y de otra especie; préstamos y otros negocios mercantiles; matrimonio y familia; sacerdotisas; lesiones corporales y aborto; médicos arquitectos y banqueros; materias agrícolas y ganaderas con sus sanciones penales; salarios y alquileres; y, por último compraventa de esclavos.

Federico Lara Peinado, *Código de Hammurabi* (Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1997), 28-30.

⁹ Las leyes de Draco se hicieron famosas por su dureza. «Parecían estar escritas con sangre, no con tinta», Pero, las gentes ya conocían las penas que podían imponer los tribunales y magistrados. Así se suprimieron las decisiones arbitrarias de éstos. Los jueces, al aplicar la terrible ley de la esclavitud por deudas, llegaron a veces más allá de lo que aquella autorizaba, aprobando la venta como esclavos de inocentes. Es posible que la publicación del Código draconiano haya tenido una importancia excepcional por otros motivos la formulación escrita de las leyes penales ya permitía su crítica y su alteración. Los atenienses que vivían marginados, que se encontraban en una situación de inferioridad en virtud de algún gravamen que pesaba sobre sus personas, su familia o sus propiedades, tomaron conciencia de su status humillante de un modo mucho más agudo al ser reconocida oficialmente su inferioridad en la ley escrita de Draco a pesar de ser atenienses, podían ser esclavizados.

Isidro Muñoz Valle, “La reforma social de Solón en la Antigua Atenas”, *Revista de Estudios Políticos*. No. 215 (1977): 13-14, <<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=591&IDA=9558>>

¹⁰ Instrumento jurídico que estableció por primera vez en la historia universal, la separación de las reglas jurídicas de las reglas religiosas. Además se alcanzó la precisión normativa de forma precisa y clara, sin ambigüedades, adornos ni detalles irrelevantes.

Luis Alberto Kvitko, *Antecedentes históricos de la valoración del daño corporal y baremos*, Vol. 32 (2015), <http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100008>.

¹¹ Es la compilación legislativa llevada a cabo por el emperador de Bizancio Justiniano I (527-565). Los códigos de Justiniano tienen como objetivo lograr una justicia mejor, aportando celeridad a las decisiones de los tribunales y formando mejores juristas. En el Digesto logra incorporar la ética, equidad y la igualdad de los derechos que tiene que ser aplicados a todos. Adicionalmente el código de Justiniano persigue la brevedad del texto y la coherencia interna, sistemática, ordenada, de los principios y normas, entre los cuales no debe haber contradicciones. Medida de referencia de la coherencia del sistema son los hombres, de los cuales se tiende a unificar una igualitaria y común consideración jurídica de base, eliminando las diferencias entre ciudadanos y extranjeros, tendiendo a la equiparación de las mujeres con los hombres, si bien con los límites de la realidad de entonces, que no eran superados en materia de esclavitud.

Sandro Schipani, “Los códigos de Justiniano como modelo de búsqueda de la consonancia en las transformaciones y reformas del derecho y de la sociedad, y los códigos modernos”, *Revista chilena de historia del derecho*, No. 22 (2010): 143-144, <<http://www.historiadelderecho.uchile.cl/index.php/RCHD/article/view/21890>>.

Naciones (1919); Creación de la Organización de las Naciones Unidas; (1945) Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966¹²); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966¹³); y, Estatuto de Roma (1998¹⁴), entre otros.

Ahora bien, cabría preguntarse si ¿existe algún nexo entre todos los cuerpos normativos citados? La respuesta a esta interrogante es afirmativa, puesto que, como ya se refirió anteriormente su creación atiende a la protección de los seres humanos, no obstante su vínculo va más allá de eso, ya que en cada una de las normas -ya sea en menor o mayor escala- se considera el «derecho de daños».

Así, los primeros esbozos del derecho de daños y de la responsabilidad civil se distingue de forma clara en el Código Justiniano¹⁵, esto mediante la aplicación de la “Ley de Aquilia”, norma mediante la cual se intentó llenar el vacío legal que existía en lo que refería al daño injustamente causado -a una de las partes de un contrato- y a su posible reparación. La mentada ley contenía tres capítulos, el primero que refería a los daños causados de forma dolosa o culposa a los bienes de una persona¹⁶ - expresamente se habla del maltrato o muerte de esclavos y animales cuadrúpedos-; en el segundo capítulo se determinaba la acción que se concedía a la persona afectada; y, finalmente el tercer capítulo señalaba el resto de daños por los que se podía iniciar una acción -excluyendo por su puesto los ya citados en el primer capítulo-.

Conforme lo anotado, la ley de Aquilia (*lex Aquilia*) se aplica principalmente al daño hecho injustamente (*damnum injuria datum*), y condenaba al culpable del hecho a la reparación del daño y a una pena privada, cabe recalcar que, la denegación

¹² Entrada en vigor en 1976.

¹³ Entrada en vigor en 1976.

¹⁴ Entrada en vigor en 2002.

¹⁵ Los romanos clasificaban de *damnum injuria datum* en general todo daño que un hombre libre causa al patrimonio de otro por medio de un hecho ilícito (*culpa, injuria*), cualquiera que sea la relación que exista entre las dos personas. Sin embargo, cuando media un contrato entre ellas, la que causa el daño no es responsable sino de aquella parte a que se ha comprometido en el contrato; fuera del contrato, responde sin restricción de todo hecho perjudicial por pequeña que sea la falta. Pero un daño ocasionado por una omisión ilícita o por inacción no se considera bajo la noción del *damnum injuria datum*; porque no pudiendo ser ilícita la omisión, sino cuando el que la padece está ligado por un convenio, no puede tampoco producir más que la acción que resulta del convenio. Esta regla no sufre excepción sino cuando una omisión ha sido causa de que el daño haya sido el resultado de un hecho anterior.

¹⁶ En algunos casos (*ex primo capite legis Aquiliae*) el que había matado injustamente al esclavo o a un cuadrúpedo ajeno (*sic*), debía dar el precio más subido que el esclavo o el animal tuvo durante el último año. Contando desde la época del daño: en todos los demás casos estaba obligado a restituir el más alto precio que había tenido durante los treinta últimos días.

opuesta por el demandando producía -en caso de encontrarse culpable- la obligación de restituir el doble¹⁷.

Si bien la acción amparada en la ley de Aquilia fue limitada al principio¹⁸, puesto que de manera exclusiva la podía iniciar el propietario del bien maltratado; no obstante, con el paso del tiempo y considerando las necesidades de los ciudadanos, a acción podía ser iniciada por cualquier persona que considerara que su derecho real ha sufrido algún tipo de detrimento.

Al respecto se ha de señalar que, la noción de «daño» en la antigüedad comprendía exclusivamente la afectación al patrimonio¹⁹ de una persona, a pesar de ello, la concepción actual abarca otros elementos. Bejarano Sánchez en términos simples expresa que: «el daño es una pérdida» no solamente pecuniaria, sino recae también en la integralidad física de las personas, en sus sentimientos afecciones, ya sea por un hecho ilícito culpable o por un riesgo creado²⁰. En este mismo sentido Elena Vicente anota que el daño que interesa actualmente a los juristas es el «daño reparable», porque es el «daño jurídicamente relevante»²¹.

Sobre la base de lo expuesto se entiende que, la existencia de un daño acarrea su reparación o resarcimiento, es decir el detrimento al goce de los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales ²² de una persona genera directamente

¹⁷ F. Mackeldey, *Elementos del derecho romano* (Madrid: Imprenta de la sociedad literaria y tipográfica, 1845), 276 -277.

¹⁸ La acción de la ley Aquilia era muy limitada al principio. En efecto, no podía intentarse como acción directa, sino cuando se causaba el daño *corpore corpori*, y aun en ese caso el propietario solo de la cosa destruida o maltratada, podía intentar una acción directamente *ex lege Aquilia* para la reparación del daño y para la debida imposición de la pena. Estas dos restricciones desaparecieron después, y se concedió la acción como acción útil, cuando se había hecho el daño *corpori* pero no *corpore*, y hasta se dio, en el caso en que no hubiera habido daño *nec corpore nec corpori*, una acción general de indemnización.

¹⁹ Ley de las XII Tablas.- Las Tablas VI, VII contenían negocios jurídicos de la época, serían Derecho de obligaciones y Derechos reales. Regulan el negocio jurídico del *nexum*, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor, en caso de incumplir quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. El *nexum* fue derogado por la ley *Poeteliae-Papiliae*. También regulan la *stipulatio* o *sponsi*, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor y en caso de incumplimiento el acreedor podía ejercitar una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio.

²⁰ Lucía Alejandra Mendoza Martínez, *La acción civil del daño moral* (México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014), 18.

²¹ *Ibíd.* 17.

²² Javier Tamayo, *Tratado de Responsabilidad Civil-* Tomo II (Bogotá: Legis, 2008), 327. En un principio se creía posible que se presentara la lesión a un bien sin que ello necesariamente se produjese un daño, pues distinguíamos entre daño y bien lesionado. Entonces se acogió una vieja distinción entre daño y perjuicio, entendiendo por lo primero la lesión a un bien y lo segundo, la disminución patrimonial o extrapatrimonial que de esa lesión se deriva.

responsabilidades sobre quien causó el daño, puesto que la persona fue puesta en una situación desventajosa.

De forma general el daño²³ involucra esencialmente 3 elementos: a) Menoscabo o pérdida de algún beneficio de índole material, psíquica o espiritual; entendiendo así que el daño no solamente se ocasiona en objetos, derechos o cosas, sino en la intimidad de la persona titular de los mismos; hablamos entonces de daños materiales y morales; b) Debe existir como condición *sine qua non* responsabilidad civil; sin embargo no se convierte en responsabilidad hasta el momento de la petición de un tercero el cual se ve lesionado en sus bienes; y, c) El daño debe ser cierto y actual, así quien sufre un daño podrá reclamar indemnización, el resarcimiento o la compensación al menoscabo padecido²⁴.

Por último, se puede decir que la noción de “reparar un daño” no siempre va atender a los mismos lineamientos, esto se puede visibilizar en la justicia restaurativa la cual es aplicada por los pueblos indígenas. Este tipo de justicia más allá de castigar a la persona que causó un detrimento, tiene por finalidad llegar a un consenso, puesto que promueve la armonía social, siendo un proceso mucho más flexible y variable, el cual se adapta a las circunstancias particulares de caso²⁵.

²³ El “*Derecho de Daños*”: En el derecho de obligaciones la expresión “hecho ilícito”, en sentido estricto sentido, alude a acciones u omisiones antijurídicas dañosas que hacen nacer un vínculo entre el damnificado como acreedor y el responsable como deudor, con respecto a la reparación del daño sufrido por aquél, que apunta a una clara fuente de obligaciones. El hecho ilícito “*lato sensu*”, aunque cause daño, no basta por sí solo para habilitar la acción de daños y perjuicios, porque es necesario -además- que el legislador no haya previsto especialmente el daño que se padece.

A pesar de que la reparación del daño es casi tan antigua como el Derecho mismo, en los últimos 40 años el Derecho de la responsabilidad civil ha evolucionado muchísimo, fenómeno éste debido a razones de índole práctico y directamente relacionadas con el desarrollo y evolución tecnológica e intelectual. Entendiendo la responsabilidad civil como la piedra angular del derecho, porque representa la clave que garantiza la seguridad de las personas respecto a los daños y perjuicios que pueden sufrir por las conductas o actividades que vulneran sus derechos y por los riesgos y peligros a los que todos estamos expuestos al vivir en una sociedad cada vez más plagada de conductas y actividades que los generan, una vez producido el daño, se hace derivar de la culpa en que haya incurrido el agente de la acción u omisión que merece la calificación de ilícito civil. El resultado dañoso para un tercero y la actuación u omisión culposa del agente son presupuestos necesarios de generación de la responsabilidad extracontractual. De esta manera la responsabilidad civil se consagra como una de las materias más vivas del Derecho civil en este momento, que ha dado lugar incluso a la creación del Derecho de Daños, que ha provocado la evolución en los últimos años de los principios clásicos de la responsabilidad civil, culpa y riesgo, y que tiene como función prevenir los comportamientos antisociales, determinar las indemnizaciones de las víctimas y, fundamentalmente, garantizar los derechos de los ciudadanos.

Sobre “*derecho de daños*” ver: Gloria Yolanda Portillo, *Derecho de daños* (Buenos Aires: Editorial juris, 1992); Yoleida Vielma Mendoza, *Un nuevo horizonte en materia de derecho de daños* (Mérida: Revista semestral de filosofía práctica, 2008). < <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26581/1/articulo8.pdf>>; José Luis Concepción Rodríguez, *Derecho de daños* (Barcelona: Editorial Bosch, 2009).

²⁴ Mendoza Martínez, “La acción civil del daño moral”, 20.

²⁵ Sobre “*justicia restaurativa y derecho indígena*” ver: *Manual sobre programas de justicia restaurativa* (New York, Naciones Unidas, 2006) < <https://www.unodc.org/documents/justice-and->

Ahora bien, retomando el análisis de párrafos anteriores, el reconocimiento internacional de los derechos humanos, provoca la existencia de un marco jurídico con mínimos de protección que no pueden ser inobservados por parte de los Estados, sino que, por el contrario deben ser reconocidos y respetados por todos los países que suscriben cada uno de los convenios²⁶. En este orden de ideas, se ha de atender que, las «decisiones judiciales», más conocidas como jurisprudencia internacional, no tienen por misión crear Derecho, sino la de ser un medio «para determinar las reglas de Derecho»²⁷.

De acuerdo con lo anotado, el reconocimiento internacional de los derechos llegará a tener el alcance y magnitud que establezcan las constituciones de cada país. En el caso ecuatoriano, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador refieren a la “jerarquía de la Constitución”, señalando expresamente: “[l]a Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”²⁸.

Sobre este escenario, a criterio de Ramiro Ávila, se entiende que:

El derecho internacional se encuentra “atravesado” a lo largo del texto constitucional, ya como fuente de los derechos, ya como jerarquía normativa. No es cualquier derecho internacional sino aquel que tiene por objeto la protección de las personas y no las

prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf; Ramiro Ávila Santamaría, *La prisión como problema global y la justicia indígena como alternativa local. Estudio de caso*. (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2014) <
[http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/391/File/Paper%20Spondylus%20112/RamiroAvila%20\[La_prision\].pdf](http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/391/File/Paper%20Spondylus%20112/RamiroAvila%20[La_prision].pdf).

²⁶ Manuel Díez de Velasco, *Instituciones de derecho internacional público* (Madrid: Tecnos, 2008). Las Organizaciones pueden contribuir esencialmente de dos maneras a la formación de normas convencionales: en primer lugar, directamente a través de procedimientos institucionalizados y centralizados que conducen a la negociación y adopción en su seno de un convenio multilateral; y, en segundo lugar, indirectamente mediante la preparación y convocatoria de una conferencia internacional destinada a la elaboración de un convenio internacional.

La promoción y protección de los derechos humanos aparecen estrechamente unidas al fenómeno del panamericanismo, esencialmente durante el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que se va a consolidar la Organización de los Estados Americanos. Así, baste con mencionar como antecedentes directos la Resolución IX de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada en Chapultepec en 1945, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de 1947, que definen la garantía de los derechos humanos como fundamento de la paz en el continente. Sin embargo, va a ser en la IX Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá en 1948, donde esta vinculación se haga explícita, al aprobarse simultáneamente la *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre*, la *Carta Interamericana de Garantías Sociales* y la propia *Carta de la O.E.A.*, base constitucional de la nueva Organización regional americana.

²⁷ Manuel Díez de Velasco, *Instituciones de derecho internacional público* (Madrid: Tecnos, 2008), 125.

²⁸ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tít. IX, “Supremacía de la Constitución”, cap. Primero, “Principios”, art. 424 ([Quito]: Corporación de Estudios y Publicaciones):125.

relaciones entre el estado u objetos de carácter patrimonial-comercial. La expresión invocada por la Constitución es la de los “instrumentos internacionales”. Intencionalmente el abanico de instrumentos se ha abierto. No se limita a los convenios, que requiere firma, ratificación y depósito, sino a lo que se conoce en el derecho internacional como *soft law*, en cuya categoría se incluyen las declaraciones, las resoluciones de órganos de Naciones Unidas, las normas mínimas, las directrices, las observaciones generales entre otras²⁹.

En otras palabras, la jurisprudencia internacional es norma de cumplimiento obligatorio en el Ecuador³⁰, es decir, no importa si un derecho no se encuentra reconocido en la ley suprema o si su protección es escasa, basta en un principio que el Estado -específicamente en este caso el Ecuador- sea miembro para que se encuentre en la obligación irrestricta de dar la debida protección a los derechos, guardando total concordancia con lo que establezca el tratado o convenio internacional.

El entramado de derechos, tal y como lo conocemos hoy en día se ha conformado por códigos, declaraciones, reglamentos, pactos, convenciones y estatutos los cuales de forma progresiva han reconocido derechos y garantías; resulta evidente que, a través del paso del tiempo los distintos instrumentos jurídicos se han ido perfeccionado. Bajo este esquema, no sería pertinente afirmar que los derechos fundamentales no han cambiado de noción con el paso del tiempo; no obstante, actualmente los derechos han logrado convertirse en el pilar fundamental y portaestandarte de la mayoría de constituciones del mundo.

Cabe destacar que, el posicionamiento y relevancia que ha obtenido la Constitución, la ha convertido en una norma garante, considerada como la directiva fundamental de todo el ordenamiento, al respecto Maurizio Fioravanti, en su obra «Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones», señala que:

Parece necesario concebir la constitución misma, y al mismo tiempo, no solo como norma fundamental de garantía, sino que también como *norma directiva fundamental* a la que deben conformarse en sus acciones, en nombre de los valores constitucionales, todos los sujetos políticamente activos, públicos y privados. En definitiva, se concibe la constitución no sólo como mecanismo encaminado a la protección de los derechos, sino también como *gran norma directiva*, que solidariamente compromete a todos en la obra dinámica de realización de los valores constitucionales³¹.

²⁹ Ramiro Ávila Santamaría, *El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el derecho en la Constitución de 2008* (Quito: Ediciones Abya-Yala, 2001), 144 – 145.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Maurizio Fioravanti, *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones* (Madrid: Editorial Trotta, S.A., 2003), 128.

Ahora bien conviene indicar que, pese a la preeminencia y notabilidad de la cual se encuentran investidos los derechos humanos, resulta irrisible el hecho que no exista una definición concreta de lo que son los derechos humanos, ningún texto o cuerpo normativo se ha aventurado a dar una definición, esto atiende a la extensión y complejidad del tema. Pese a ello, una de las definiciones más completas es la realizada por Joaquín Herrera Flores y Alejandro M. Médici en la cual afirman que:

Los *derechos humanos*, en su integralidad (...) constituyen algo más que el conjunto de normas formales que los reconocen y los garantizan a un nivel nacional e internacional, formando parte de la tendencia humana ancestral por construir y asegurar las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que permiten a los seres humanos perseverar en la lucha por la dignidad, o lo que es lo mismo, el impulso vital que, en términos spinozianos, les posibilita mantenerse en la lucha por seguir siendo lo que son: seres dotados de capacidad y potencia para actuar por sí mismos³².

Esta definición logra abarcar aspectos fundamentales de los derechos humanos, concibiéndolos en toda su dimensionalidad. En primer lugar, resalta su tendencia ancestral, elemento esencial, ya que los derechos se infieren como una prerrogativa natural del hombre. En segundo lugar, la definición refiere que los derechos humanos son normas formales que deben ser reconocidas y garantizadas, tanto en el ámbito nacional como internacional, esto se ha logrado mediante la concreción normativa e institucionalización jurídica de los mismos en la Constitución, lo que desemboca en su reconocimiento internacional; finalmente, todos estos elementos logran conjugarse en el momento en que el Estado asegura y promueve los derechos reconocidos en la norma fundamental mediante la implementación de las correspondientes garantías.

En este sentido conviene referir lo señalado por Héctor Faúdez Ledezma, quien asevera que "... si bien la plena vigencia de los derechos sociales dependerá del grado de desarrollo económico de cada Estado, hay un mínimo esencial que éste debe garantizar de *inmediato* a toda persona bajo su jurisdicción..."³³

En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que, la protección y tutela de derechos le corresponde de manera exclusiva al Estado, al respecto José Martínez de Pisón y Andrés García Inda señalan que:

³² Joaquín Herrera Flores, "Los derechos humanos en el contexto de la globalización: Tres precisiones conceptuales", *Coloquio internacional – Direito e justiça no século XXI*, (2003): 25, <<http://www.ces.uc.pt/direitoXXI/comunic/HerreraFlores.pdf>>.

³³ Héctor Faúdez Ledezma, "La Justiciabilidad de los Derechos Sociales en el Derecho Internacional Contemporáneo", *Revista Gaceta Laboral* Vol. 6. No. 2 (2000):174-175.

El Estado así debe responsabilizarse de la situación material de los individuos y, en su caso, debe procurar la satisfacción de sus necesidades. Estos derechos, pues, imponen al Estado la obligación de establecer sistemas de prestaciones sociales, de planificar políticas sociales y de bienestar general, de promover estrategias redistributivas de riqueza y de remoción de obstáculos en el ejercicio de los derechos y libertades individuales³⁴.

Por su parte Karel Vasak, resalta que existen tres requisitos para que los derechos humanos se conviertan en realidad. En primer lugar, la organización de la sociedad en forma de Estado, de *iure*, lo que implica la autodeterminación de los pueblos y el imperio de la ley. En segundo lugar, ubica el marco legal que faculta la protección de los derechos humanos. Por último, refiere a un sistema de garantías efectivas que aseguren la protección del derecho³⁵.

A partir de lo expuesto, se advierte que las reflexiones de los autores -referidos *ut supra*- resultan ser complementarias, esto por cuanto Karel Vasak a modo general explica que son tres los elementos que deben conjugarse para que los derechos se tornen reales, y, por su parte, Martínez de Pisón y Andrés García Inda en base a un Estado ya constituido -considerando los tres elementos- sintetizan la obligación estatal en dos aspectos; en primer lugar, el Estado es el responsable de la situación material de los individuos, y en segundo lugar, se encuentra en la obligación de procurar la satisfacción de los derechos a todas las personas, para ello resulta indispensable la creación de un sistema de prestaciones, esto con el objeto de eliminar cualquier obstáculo que impida el ejercicio de los derechos.

Ahora bien, a criterio de Van Hoof, a fin de que los derechos humanos constituyan una realidad, el Estado debe dar cumplimiento principalmente a tres tipos de obligaciones, así:

Van Hoof propone un esquema interpretativo consistente en el señalamiento de “niveles” de obligaciones estatales, que caracterizarían el complejo que identifica a cada derecho, independientemente de su adscripción al conjunto de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales. De acuerdo a su propuesta, podrían discernirse cuatro “niveles” de obligaciones: una obligación de respetar, una obligación de proteger, una obligación de garantizar y una obligación de promover el derecho en cuestión³⁶.

³⁴ José Martínez de Pisón y Andrés García Inda, *Derechos fundamentales, movimientos sociales y participación* (Madrid: Ed. Dykinson, 2003), 133.

³⁵ Karel Vasak, edit. *Las dimensiones internacionales de los derechos humanos* (Madrid: UNESCO, 1984), 25-35.

³⁶ Victor Abramovich y Christian Courtis, *Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales*, 5, <http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Exigibilidad_de_los_DESC_-_Abramovich.pdf>.

De lo manifestado se observa que, los criterios esgrimidos por Karel Vasak y Van Hoof no son excluyentes entre sí, por el contrario son interdependientes, toda vez que, a fin de que tenga lugar el cumplimiento de los diferentes niveles de obligación estatal se requiere como elemento *sine qua non* la existencia de la organización de la sociedad en forma de Estado, así como la presencia de un ordenamiento jurídico que prevea la existencia tanto de garantías normativas como jurisdiccionales para la protección de los derechos.

Retomando lo manifestado por Van Hoof³⁷, debe entenderse al primer nivel como la obligación más inmediata y básica puesto que implica el goce, cumplimiento y exigencia de los derechos, generando interrelaciones entre derechos y obligaciones. En lo que respecta al segundo nivel, este se encuentra dirigido a los agentes estatales en el marco de sus funciones, exigiendo el deber de crear un marco jurídico institucional tendiente a la protección de los derechos. En lo concerniente a la tercera obligación, esta implica el asegurar el pleno goce de los derechos bajo el principio de efectividad. Finalmente, el último nivel entraña la difusión tanto de los derechos como sus mecanismos de defensa y satisfacción.

La doctrina internacional ha desarrollado varias concepciones respecto a estos niveles de obligación estatal, que en principio son respetados y cumplidos por los Estados, conforme se desprende del cuadro que se presenta a continuación:

Cuadro 1.

PROPUESTAS DE AUTORES RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

TIPOLOGÍA DE LAS OBLIGACIONES DEL DIDH³⁸				
Propuestas de:	Deberes de:			
Shue	No privación	Protección de la privación	Ayuda a los que están privados de bienes básicos	
Eide	Respetar	Proteger	Satisfacer	Proveer
Van Hoof	Respetar	Proteger	Asegurar	Promover

³⁷ Christian Courtis y Ramiro Ávila Santamaría, edit. *La protección judicial de los derechos* (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009), 6 - 7.

³⁸ Sandra Serrano, *Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la interpretación y aplicación de los derechos* (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fundación Konrad Adenauer, 2003): 102, <<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3567/9.pdf>>.

Steiner Alston	Respetar	Proteger / Prevenir	Crear maquinaria institucional	Proveer bienes y servicios	Promover
Comité DESC	Respetar	Proteger	Cumplir		
			Satisfacer	Proveer	Promover
Comité DH	Respetar	Garantizar y adoptar medidas			
		Proteger	Asegurar	Promover	
Corte Interamericana	Respetar	Garantizar y adoptar medidas			
		Proteger	Crear instituciones e investigar, sancionar y reparar		Promover

Fuente directa: Sandra Serrano, *Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la interpretación y aplicación de los derechos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fundación Konrad Adenauer (México: 2003): 102, <<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3567/9.pdf>>.

Fuente primaria: Elaboración de los autores de Magdalena Sepúlveda, *The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Países Bajos, Intersntia, 2003.

Conforme se desprende del cuadro *-ut supra-* la obligación estatal involucra cuatro niveles: respeto, protección, satisfacción y la promoción de los derechos; criterio compartido por seis de los siete proponentes, únicamente para Shue, sólo existen tres niveles, dejando de lado la promoción de los derechos, adicionalmente descarta la satisfacción o garantía de los mismos, reemplazando este nivel por «ayuda a los que están privados de bienes básicos». Ahora bien, los cuatro niveles aceptados y acogidos implican una importante actividad estatal, puesto que, para llevar a cabo cada uno de los objetivos es necesario contar con varios elementos, desde la creación de instituciones jurídicas hasta cuerpos normativos claros que permitan alcanzar cada nivel. Cabe señalar que, los cuatro niveles deben ser considerados como un «todo», es decir, su consolidación o la falta de esta dependerá exclusivamente de la función estatal, lo cual puede conducir a un sólido sistema jurídico de protección de derechos, o, por el contrario, a un sistema lleno de falencias en el que se promueva y genere la vulneración de derechos

Una vez que se ha hecho referencia a la evolución, definición y alcance de los derechos humanos al igual que a las obligaciones estatales tendientes a garantizar el ejercicio efectivo y goce de estos, es pertinente hacer referencia a su exigibilidad y justiciabilidad.

Previo a continuar se estima pertinente señalar que, lo que caracteriza a los derechos subjetivos no es simplemente el hecho que ellos confieren al individuo

determinadas prerrogativas; pues ellos suponen obligaciones correlativas y, paralelamente, la posibilidad de exigir judicialmente el respeto de estos derechos o el cumplimiento de las obligaciones que estos llevan aparejadas³⁹.

Conforme lo establecido en el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española se entiende por exigibilidad la posibilidad de pedir algo a lo que imperiosamente se tiene derecho⁴⁰; y, por justiciabilidad⁴¹ a lo que puede o debe someterse a la acción de los tribunales de justicia.

Ahora bien, para contextualizar los referidos conceptos, debe tomarse como punto de partida lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dispone:

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano⁴².

De lo anotado se infieren dos aspectos, en primer lugar el reconocimiento expreso en la Convención en cuanto al reconocimiento de toda persona como «ser humano» y en segundo lugar, la obligación inmediata que contraen los Estados al momento de suscribir la Convención, exigiendo que cada Estado parte respete todos los derechos reconocidos en ella, pero no solamente a eso, sino que, también deben garantizar su ejercicio en toda su dimensionalidad para lo cual debe evitar cualquier tipo de discriminación. Estos dos elementos permiten y procuran una protección de los derechos a nivel internacional, puesto que impone a los Estados el reconocimiento de derechos que en ciertos casos pueden no estar considerados en el ámbito doméstico de cada país.

La afirmación anterior, encuentra asidero en el artículo 2 del mentado cuerpo normativo, en el que la Convención reafirma su supremacía internacional ya que, de manera taxativa señala que es obligación de los estados “... adoptar, con arreglo a sus

³⁹ Faúndez, “La justiciabilidad de los derechos”, 167.

⁴⁰ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23a. Ed., 2014. Edición electrónica.

⁴¹ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23a. Ed., 2014. Edición electrónica.

⁴² *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (1969).

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de [la] Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos...”⁴³ los derechos y libertades reconocidas en ella. Así se reafirma la obligación de los Estados suscriptores de adecuar su legislación y de respetar los derechos reconocidos internacionalmente.

Todo lo expresado también se encuentra prescrito en el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁴⁴, mediante el cual los Estados partes se comprometen a adoptar “... tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, (...) la adopción de medidas legislativas”⁴⁵ para la plena efectividad y protección de los derechos reconocidos. Entendiéndose de esta manera que el compromiso adquirido, no comprende exclusivamente el cambio de la legislación nacional o su adecuación, sino que ineludiblemente cada Estado debe contar con recursos económicos y técnicos encaminados a la protección de los derechos.

Se destaca entonces, el compromiso de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en esta. Toda vez que se entiende que los derechos son realizables, exigibles y justiciables. Dicha obligación constituye el punto de partida para referirnos a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos.

Es oportuno señalar que la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos implican necesariamente una cierta organización estatal, apoyo social y un compromiso democrático serio -como se advierte de lo mencionado en párrafos precedentes-.

En lo que se refiere a la exigibilidad de los derechos conforme lo explica Miguel Carbonell y Eduardo Ferrer Mac-Gregor⁴⁶ supone para el Estado dos obligaciones fundamentales, la primera, que consiste en recoger en el ordenamiento jurídico interno todos los derechos que establecen los instrumentos internacionales, de esta forma no cabe duda sobre la vigencia de los mismos dentro del territorio del Estado Parte; en segundo lugar, se debe adecuar el ordenamiento interno para de esta manera eliminar

⁴³ Ibíd.

⁴⁴ *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* (1976).

⁴⁵ Ibíd.

⁴⁶ Miguel Carbonell y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, *Los derechos sociales y su justiciabilidad directa* (México: Editorial Flores, 2014), 38.

cualquier prescripción normativa contraria a los derechos, que pueda suponer un impedimento para la plena realización de estos.

Conviene señalar que, para el cumplimiento de estas dos obligaciones cada Estado “...debe determinar por sí mismo cuales son las medidas más apropiadas que debe tomar para cumplir con las obligaciones del Pacto considerando sus propias circunstancias y la relación de todos los derechos protegidos”⁴⁷.

El concepto de exigibilidad comprende el uso de las vías judiciales, pero al mismo tiempo, y fundamentalmente, implica la utilización de estándares legales para controlar el diseño y ejecución de políticas públicas en materia social⁴⁸. Al respecto debemos tener presente que, la concepción de acceso a la justicia, no se agota solo en la creación de los denominados “recursos legales”, sino que, implica también la implementación de “recursos judiciales”.

A su vez, el Estado deberá tomar en consideración la formalización y concreción de medidas económicas tendientes a garantizar el efectivo ejercicio y goce de los derechos humanos. En este sentido, Miguel Carbonell y Eduardo Ferrer Mac-Gregor afirman que no hay “derechos gratuitos” “derechos caros”: todos los derechos tienen un costo y ameritan una estructura estatal que, al menos, los proteja de las posibles violaciones perpetradas por terceras personas⁴⁹.

Es claro entonces, que el incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección por parte del Estado trae consigo un nulo desarrollo de normas destinadas a reglamentar el ejercicio de los derechos, así como también la falta de control de agentes sociales, y en sí, el impedimento del disfrute de los derechos.

Para Martínez de Pisón la justiciabilidad va a depender más de las leyes procesales que del carácter inherentemente exigible o no de determinado derecho⁵⁰. Al mismo tiempo, la justiciabilidad debe ser entendida como la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento de al menos de algunas de las obligaciones que se derivan del derecho⁵¹.

⁴⁷ *Ibíd.*, 43.

⁴⁸ Víctor Abramovich, “Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, en Comisión Andina de Juristas, *Los Derechos Humanos y la Globalización: avances y retrocesos* (Lima: Comisión Andina de Juristas, 2003), 54.

⁴⁹ Carbonell y Ferrer Mac-Gregor, “Los derechos sociales”, 29.

⁵⁰ Jesús Martínez de Pisón, “Los derechos sociales: unos derechos controvertidos”, en Virgilio Zapatero e Isabel Garrido, *Los derechos sociales como una exigencia de la justicia* (Madrid: Universidad de Alcalá, 2009), 102.

⁵¹ Carbonell y Mac-Gregor, “Los derechos sociales”, 32.

En este contexto, para Joaquín A. Mejía la justiciabilidad de los derechos humanos puede ser abordada desde dos grandes aproximaciones, una imperativista y otra normativista. Ambas coinciden en que adscribir un derecho a un sujeto (S1) implica imponer un deber a otro sujeto (S2), siendo precisamente el deber de satisfacer la pretensión o expectativa en la que consiste el derecho⁵².

No obstante de lo mencionado, para la teoría normativista un derecho existe en cuanto este es reconocido a nivel normativo sin importar que exista o no una garantía que imponga el deber correspondiente, mientras que la teoría imperativista requiere la existencia jurídica del deber y del derecho.

Así también, se ha de entender que la justiciabilidad comprende lo que para Luigi Ferrajoli constituyen las denominadas garantías secundarias, toda vez que estas implican la obligación de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos, es decir las violaciones de sus garantías primarias -entendidas estas como las expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones de prestación o prohibiciones de lesión-⁵³.

Este criterio es compartido por Guastini, cuando refiere que la “...la posibilidad de exigir judicial o cuasi-judicialmente supone una técnica de garantía del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del derecho en cuestión”⁵⁴.

En consecuencia, la exigibilidad hace referencia a aquellas prescripciones normativas de naturaleza sustantiva nacional o internacional, que se refieren principalmente al reconocimiento del derecho, así como también, a la posibilidad de reclamación ante los tribunales y la justiciabilidad; conforme lo manifestado, se encuentra vinculada con las normas adjetivas que permiten la materialización de los reconocimientos referidos.

Como corolario de lo anotado en los párrafos precedentes, se puede afirmar que, la exigibilidad y la justiciabilidad desde ningún punto de vista pueden ser considerados como conceptos análogos, pero si como nociones que se complementan en la protección y efectiva garantía de los derechos.

Con base en lo anotado, resulta necesario hacer una distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales; si bien a pesar del paso del tiempo, se sigue

⁵² Joaquín A. Mejía, “Aspectos teóricos y normativos de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, *Revista IIDH* Vol. 61, (2010):74.

⁵³ Luigi Ferrajoli, *Derechos y garantías. La ley del más débil* (Madrid: Editorial Trotta, 2004), 43.

⁵⁴ Ricardo Guastini, *Distinguiendo. Estudios de teoría y materia del Derecho* (Barcelona: Gedisa editorial, 1999), 185-186.

manteniendo un lenguaje ambiguo y poco riguroso⁵⁵ cuando se trata de definir a los derechos referidos, llegando al punto de confundirlos, o peor aún, utilizarlos como sinónimos o términos equivalentes; así, a criterio de Gregorio Peces-Barba Martínez:

Si se atiende a la praxis lingüística, nos encontramos con que existen distintas palabras que expresan el concepto de «derechos humanos», como derechos naturales, derechos públicos subjetivos, derechos morales o derechos fundamentales, derechos individuales, derechos del ciudadano etc. Estos términos tienen conexiones culturales y explicaciones derivadas de un contexto histórico, de unos intereses, de unas ideologías y de unas posiciones científicas o filosóficas de fondo⁵⁶.

Pese a la existencia de evidentes «conexiones» entre derechos fundamentales y humanos -de carácter cultural, ideológico e histórico- generados en el transcurso del tiempo, hay autores que manifiestan que estos conceptos no pueden ser considerados como similares, puesto que, cada uno posee características únicas, lo que impide que sean tratados de manera equivalente.

Winston define como los «derechos morales» o humanos a aquellos que pertenecen por igual a todo ser humano por el simple hecho y en virtud de que ellos *son* seres humanos⁵⁷, este pensamiento es compartido por Carlos Santiago Nino, quien al referirse a los derechos humanos y a sus beneficiarios señala en primer lugar que sus integrantes son *todos* los hombres y *nada más* que los hombres⁵⁸, concomitantemente manifiesta que:

...los sujetos de los derechos humanos son todos los hombres y nada más que ellos es equivalente a sostener que los principios que establecen estos derechos tienen como *única condición de aplicación* referida a los sujetos normativos la propiedad de construir un individuo humano. La pertenencia a la especie humana es, según esta formulación, condición necesaria y suficiente para gozar de los derechos en cuestión, en tanto que otras propiedades –raza, sexo, inteligencia, actos cometidos o padecidos, etc.- son irrelevantes.

Esto quiere decir que los principios fundamentales de los que los derechos humanos derivan son categóricos, en el sentido de que ellos no condicionan la *titularidad* de tales derechos a la posesión de una u otra característica. Estos principios *erga omnes*, o sea se aplican a todos y a todo⁵⁹.

⁵⁵ Carlos Santiago Nino, *Ética y derechos humanos* (Buenos Aires: Astrea, 2007), 20.

⁵⁶ Gregorio Peces-Barba Martínez, *Lecciones de derechos fundamentales* (Madrid: Dykinson, 2004), 20.

⁵⁷ Morton E Winston, “The philosophy of human rights”, en Angelo Papacchini, *Filosofía y derechos humanos* (Santiago de Cali: Facultad de Humanidades, 1994), 36.

⁵⁸ Nino, “Ética y derechos humanos”, 41.

⁵⁹ *Ibíd.*, 45.

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte que, a criterio de los autores los derechos humanos o morales son aquellos que pertenecen al hombre por el simple hecho de serlo, reconocidos para “...los seres con capacidad potencial para tener conciencia de su identidad como un titular independiente de intereses y para ajustar su vida a sus propios juicios de valor”⁶⁰; es decir, no es necesario cumplir con ciertas características o reunir determinados requisitos para ser titulares de ellos, ya que se consideran inherentes a los hombres, motivo por el que se asegura su pertenencia, de ahí que se les otorga la particular característica de ser *erga omnes*.

Ahora bien, Rubén Hernández Valle al referirse a los derechos fundamentales, señala que estos han tenido dos dimensiones; inicialmente como un límite al ejercicio del poder público y actualmente como un conjunto de valores o fines directivos de las acciones positivas del Estado y sus instituciones⁶¹, de la misma manera el autor ha sostenido que:

... los derechos fundamentales responden hoy día a un conjunto de valores y principios de vocación universal, que informan todo el contenido del ordenamiento infraconstitucional.

En su dimensión subjetiva, es evidente que los derechos fundamentales determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos, al mismo tiempo que enmarcan sus relaciones con el Estado y con los demás particulares. De esta forma, tales derechos tienden a proteger la libertad, la autonomía y seguridad de la persona no sólo frente al poder público, sino también frente a los demás miembros de la comunidad⁶².

Considerando lo expuesto por el autor, se desprende que los derechos fundamentales nacen de forma simultánea como un límite a los poderes del Estado y como un vínculo entre los ciudadanos y el Estado. Esta relación según Jellinek genera cuatro tipos de estados: a) *status sujectionis*, b) *status libertatis*, c) *status civitatis* d) *status activae*⁶³. Todos estos estatus son concebidos como instrumentos de defensa de

⁶⁰ *Ibíd.*, 47.

⁶¹ Rubén Hernández Valle, *Derechos fundamentales y jurisdicción constitucional* (Lima: Juristas Editores, 2006), 29.

⁶² Rubén Hernández Valle, *Prerrogativa y garantía* (San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia), 33-34

⁶³ *Status sujectionis*.- Determina la situación pasiva de los destinatarios de la normativa emanada del poder público. *Status libertatis*.- Comporta el reconocimiento de una esfera de libertad individual negativa de los ciudadanos, sea, la garantía de la no intromisión estatal en determinadas materias. *Status civitatis*.- Los ciudadanos pueden ejercitar su pretensiones frente al Estado, lo que implica poder reclamar un comportamiento positivo de los poderes públicos para la defensa de sus derechos civiles. *Status activae*.- Situación activa en al que el ciudadano goza de derechos políticos, lo que le permite participar activamente en la formación de la voluntad del Estado en cuanto miembro de la comunidad política.
Ibíd., 30.

los intereses individuales⁶⁴; no obstante, estos cuatro estados no han sido suficientes, puesto que, no cubren ciertas cuotas de bienestar, por lo que se ha tenido que agregar el *status positivus*, que involucra:

...el reconocimiento de los denominados derechos «sociales, económicos y culturales», no tiene como objetivo anular la libertad individual, sino más bien garantizar el pleno desarrollo de la subjetividad humana, la cual exige conjugar, al mismo tiempo su dimensión personal como social. Por tanto, tales derechos se anidan en la categoría omnicomprendiva de los derechos fundamentales⁶⁵.

Así, el pleno desarrollo de la subjetividad humana se encuentra resguardado por los derechos fundamentales, considerados como un conjunto de valores y principios que irradian el ordenamiento jurídico constitucional e infra constitucional; su relevancia radica en generar y enmarcar dos tipos de relaciones plenamente funcionales, en primer lugar, «Estado-particulares»; y, en segundo lugar, «particular-particular».

Por lo tanto, desde ningún punto de vista los derechos fundamentales pueden ser concebidos como un limitante para el desarrollo de la persona, sino que, por el contrario generan un estatuto jurídico que proporciona un adecuado ejercicio de los derechos; esto ha permitido a los derechos desempeñar una doble función y dimensión, como garantía de la libertad individual y como una institución que cumple con ciertos fines⁶⁶.

En párrafos precedentes, se señaló bajo qué criterios se puede identificar a un derecho como humano; ahora bien, resulta pertinente señalar el criterio sentado por la Corte Constitucional colombiana respecto a los elementos que sirven para identificar si un derecho es fundamental o no lo es, así:

Esta Corte considera que para que un derecho tenga la calidad de fundamental debe reunir unos requisitos esenciales. Para la identificación de un derecho de tal naturaleza existen unos criterios que ponen en evidencia los requisitos señalados y, de contera, el derecho fundamental mismo: 1) Conexión directa con los principios constitucionales; 2) Eficacia directa y 3) Contenido esencial⁶⁷.

⁶⁴ *Ibíd.*

⁶⁵ Hernández, “Prerrogativa y garantía”, 35.

⁶⁶ Antonio E. Pérez Luño, *Los derechos fundamentales* (Madrid: Tecnos, 1986), 25.

El horizonte del constitucionalismo actual los derechos fundamentales desempeñan por tanto, una doble función: en el plano subjetivo siguen actuando como garantías de la libertad individual, si bien a este papel clásico se añade ahora la defensa de los aspectos sociales y colectivos de la subjetividad, mientras que en el objetivo han asumido una dimensión institucional a partir de la cual su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines y valores constitucionalmente proclamados.

⁶⁷ Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Sentencia No. T-406/92], 5 de junio de 1992.

En cuanto al primer elemento «conexión directa con los principios», debe entenderse que los derechos fundamentales son, como todas las normas constitucionales, emanación de los valores y principios constitucionales, pero su vinculación con estos es más directa, más inmediata⁶⁸, evidenciado así su base axiológica-jurídica. En efecto, todo el ordenamiento jurídico debe tener coherencia, así, como un hilo conductor con los principios, motivo por el cual ninguna norma o institución puede ser contradictoria a los postulados expuestos en los principios constitucionales, precisando que, cualquier tipo de movilidad que pueda llegar a existir se encuentra sujeta a una interpretación acorde con los principios enunciados en la ley suprema.

Ahora bien, el segundo elemento «eficacia directa», para que un derecho constitucional pueda ser considerado como fundamental, debe ser el resultado de una aplicación directa del texto constitucional, sin que sea necesario una intermediación normativa⁶⁹, para ello, es necesario que los derechos posean un carácter tutelable, aspecto que se logra mediante la delimitación precisa de deberes tanto positivos como negativos dentro del texto constitucional.

Finalmente, el tercer elemento «contenido esencial», centra su atención en el hecho de que todo derecho fundamental posee un núcleo básico el cual no es susceptible de ningún tipo de interpretación⁷⁰ por parte de las autoridades jurisdiccionales; es decir, existe un criterio claro en cuanto a su delimitación conceptual, así como su alcance, titularidad, tipo de deberes y obligaciones que este logra abarcar.

Considerando lo referido en los párrafos precedentes, debe entenderse a los derechos humanos como aquellos derechos que son inherentes al ser humano, los cuales no necesitan de un reconocimiento expreso en ningún tipo de norma, estos derechos se refieren a todas aquellas exigencias relacionadas con las necesidades de la vida humana, las cuales no se encuentran positivizadas en los ordenamientos jurídicos⁷¹. Por su parte los derechos fundamentales, son todos aquellos derechos creados por la Constitución⁷², por lo que, se encuentran reconocidos y tutelados en un cuerpo normativo; a criterio de Rubén Hernández y Antonio Pérez Luño, se trata de

⁶⁸ Ibíd.

⁶⁹ Ibíd.

⁷⁰ Ibíd.

⁷¹ Hernández, “Derechos fundamentales”, 31.

⁷² Javier Jiménez Campo, *Derechos fundamentales: Concepto y Garantías* (Madrid: Trotta, 1999), 24.

derechos delimitados espacial y temporalmente, por lo que cuentan con remedios procesales específicos que responden al carácter básico o fundamentador del sistema jurídico del Estado⁷³.

Entendida la diferencia de los derechos humanos y fundamentales, es necesario considerar uno de los rasgos más interesantes del nuevo modelo constitucional ecuatoriano establecido por la Constitución de Montecristi, con relación a la novedosa estructura de los derechos constitucionales⁷⁴, esto por cuanto la norma constitucional a criterio de varios autores resulta ser pionera en “... la ruptura de la concepción tradicional de derechos humanos”⁷⁵.

Esta afirmación atiende a que, a partir de la vigencia de la actual Constitución en el Ecuador, se deja de lado la trillada teoría respecto de los derechos de primera, segunda y tercera generación⁷⁶, pasando a considerar a todos los derechos reconocidos en la Norma Suprema como de igual jerarquía, en este sentido, se tiende a un proceso inclusivo tanto en el goce como en el ejercicio de cada uno de los derechos. Así, norma citada en su artículo 11 numeral 6 prescribe que: “[t]odos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”⁷⁷.

A criterio de Ramiro Ávila, “[n]o cabe ya el término genérico de “derechos humanos” para referirse a los derechos que tienen una protección especial en las constituciones. Conviene denominarlos derechos fundamentales o derechos constitucionales”⁷⁸.

De este modo, se puede entender como derechos fundamentales o constitucionales “...a aquellos derechos subjetivos que le son propios a la persona en cuanto tal, que por la importancia de los bienes jurídicos que representan, tienen reconocimiento constitucional, de ahí que de dicho reconocimiento se derivan

⁷³ Hernández, “Derechos fundamentales”, 31.

⁷⁴ Juan Montaña Pinto y Patricio Pazmiño Freire, “Algunas consideraciones acerca del nuevo modelo constitucional ecuatoriano” en Jorge Benavides y Jhoel Escudero, *Manual de justicia constitucional ecuatoriana* (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2013), 43.

⁷⁵ Ramiro Ávila, *Los derechos y sus garantías. Ensayos críticos*. Tomo 1 (Quito: Corte Constitucional para el período de transición, 2012), 142.

⁷⁶ Ramiro Ávila, *En defensa del neoconstitucionalismo andino* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014), 308.

⁷⁷ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tít. II, “Derechos”, cap. primero, “Principio de aplicación de los derechos”, art. 11, ([Quito]: Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014): 5.

⁷⁸ *Ibíd.*

consecuencias de tipo jurídico, tales como la tutela judicial efectiva y el contenido esencial”⁷⁹.

Bajo este esquema y una vez analizada la diferencia de los derechos humanos y fundamentales-constitucionales -en el marco del neoconstitucionalismo ecuatoriano-, debe entenderse que, tanto la exigibilidad y la justiciabilidad son elementos que se encuentran encaminados a la protección y promoción de los derechos constitucionales. Toda vez que, los derechos constitucionales se entienden de directa e inmediata aplicación, así como plenamente justiciables⁸⁰.

Así, Oyarte y Ávila exponen que, el principio de efectividad de los derechos constitucionales determina que la estructura institucional y los procedimientos establecidos a nivel constitucional constituyan necesariamente medios de realización de estos derechos, y en ningún caso mecanismos para justificar su violación⁸¹, en este sentido, “[n]o basta, la enunciación o el mero reconocimiento de derechos fundamentales, sino hace falta el control que complementa el sistema de protección de derechos, estableciendo un real y efectivo Estado constitucional de Derecho”⁸².

Conforme lo anotado, se entiende que, los derechos constitucionales se ejercen frente o contra el Estado, como un límite a sus actos o como una exigencia de prestaciones públicas jurídicamente exigibles. En consecuencia, el Estado en cuanto tal es sujeto obligado al cumplimiento de tales derechos y no titular de los mismos⁸³.

Finalmente, en atención al artículo 11 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador que determina que: “[l]os derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes”⁸⁴, se ha de entender que efectivamente los -todos- derechos constitucionales poseen una doble dimensión ya que operan como límites y vínculos frente al poder del Estado, lo que implica la plena normatividad y exigibilidad de los mismos⁸⁵.

⁷⁹ Jorge Benavides Ordóñez, “Un repaso a la teoría general de los derechos fundamentales” en Jorge Benavides y Jhoel Escudero, *Manual de justicia constitucional ecuatoriana* (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2013), 75.

⁸⁰ Karla Andrade Quevedo, “La acción de protección desde la jurisprudencia constitucional” en Jorge Benavides y Jhoel Escudero, *Manual de justicia constitucional ecuatoriana* (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2013), 140.

⁸¹ Agustín Grijalva Jiménez, *Constitucionalismo en Ecuador*. Tomo 5 (Quito: Corte Constitucional para el período de transición, 2012), 70.

⁸² Oyarte, “Derecho constitucional ecuatoriano y comparado”, 70.

⁸³ Agustín Grijalva Jiménez, *Constitucionalismo en Ecuador*. Tomo 5 (Quito: Corte Constitucional para el período de transición, 2012), 75.

⁸⁴ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tít. II, “Derechos”, cap. primero, “Principio de aplicación de los derechos”, art. 11, ([Quito]: Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014): 5.

⁸⁵ Juan Montaña Pinto y Patricio Pazmiño Freire, “Algunas consideraciones”, 44.

1.2. La reparación integral

Para efectos de determinar que se ha de entender por reparación integral, es pertinente hacer referencia a su origen epistemológico. En este sentido, las palabras reparar e integral provienen de dos latinazgos -tardío y medieval-, «*reparatio, ōnis*» que significa “restablecimiento, renovación”⁸⁶, y por su parte «*integralis*» que comprende “todos los elementos o aspectos de algo”⁸⁷.

La concepción de reparación integral, nace dentro del contexto histórico de la humanidad, como una respuesta a las constantes y flagrantes vulneraciones de derechos humanos, producto de los diversos conflictos bélicos internacionales⁸⁸. Así, en 1948 fue aprobada la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tan solo unos meses antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, posteriormente se aprobó y entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁸⁹, también conocida como “Pacto de San José”⁹⁰.

Cabe señalar que, este no es el único instrumento de amparo de derechos, toda vez que, a través de múltiples convenciones y declaraciones se ha resaltado la importancia de la protección de los derechos así como su reparación, así tenemos, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos

⁸⁶ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23a. Ed., 2014. Edición electrónica.

⁸⁷ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23a. Ed., 2014. Edición electrónica.

⁸⁸ Como ya se mencionó anteriormente en el presente trabajo, la reparación del daño, así como, la responsabilidad civil, son casi tan antiguas como el Derecho mismo, sin embargo, en sus inicios se encontraron dirigidos exclusivamente al detrimento de los bienes patrimoniales o derechos reales, dejando de lado la protección de los derechos humanos.

⁸⁹ Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y, c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

⁹⁰ Jorge F. Calderón, *La evolución de la “reparación integral” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 2003), 9.

y del Abuso del Poder⁹¹, Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos⁹², Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes⁹³, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura⁹⁴, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas⁹⁵, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio⁹⁶, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional⁹⁷, entre otros.

Ante la necesidad de protección de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales referidos, de manera particular, aquellos constantes en el denominado “Pacto de San José”, nace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por dos órganos competentes para conocer sobre las

⁹¹ Asamblea General Organización de Naciones Unidas. *Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder*, Resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas”.

⁹² Organización de los Estados Americanos, Asamblea General. *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Resolución 2200, de 16 de diciembre de 1966. Artículo 2, literal a) del numeral 3: “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.

⁹³ Organización de las Naciones Unidas. Adoptada por la Asamblea General en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986.

⁹⁴ Organización de los Estados Americanos. Adoptada por la Asamblea General en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997.

⁹⁵ Organización de los Estados Americanos. Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

⁹⁶ Organización de las Naciones Unidas. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948.

⁹⁷ Organización de las Naciones Unidas. Adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998, aprobado mediante la Ley 742 de 2002.

violaciones a los derechos humanos: 1) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 2) La Corte Interamericana de Derechos Humanos⁹⁸.

Vale destacar que, no se puede dejar de relacionarse a la reparación integral con los conceptos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos fundamentales – constitucionales –esto cuando a ha existido una vulneración de derechos- puesto que, la noción de efectividad de estos en general, exige que los mismos no sólo sean reconocidos en las normas nacionales e internacionales, sino que, también sean protegidos, promovidos y aplicados más allá del simple formalismo jurídico y de su carácter abstracto.

Angulo Sánchez manifiesta que, a fin de que de los Estados aseguren que un derecho sea justiciable se debe poner a disposición de los individuos “toda una serie de medios y recursos complementarios que refuercen las garantías y aumenten el grado de efectividad de todos los derechos humanos para todos”⁹⁹.

Con estos antecedentes, es pertinente referirse a lo prescrito en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se menciona que disposiciones podrán ser dictadas por la Corte en caso de haber determinado la existencia de vulneración de derechos, así textualmente la norma señala:

Quando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada¹⁰⁰.

Al respecto, el artículo antes citado puede ser considerado como un precepto que acoge una norma consuetudinaria, que se traduce en la práctica generalmente aceptada por los Estados de reparar bajo la convicción de que lo hacen en cumplimiento de una norma imperativa de derecho¹⁰¹.

⁹⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, <<http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh>>.

⁹⁹ Nicolás Angulo Sánchez, “El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado”, en Nelson Melo de Moraes Rêgo, *La contribución del poder judicial a la protección de los derechos humanos en la tercera generación; especial referencia al derecho al desarrollo* (Madrid: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014), 284.

¹⁰⁰ *Convención Interamericana de Derechos Humanos* (1969).

¹⁰¹ Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Montevideo: 2012): <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Session4/NHRI_Annex3_Uruguay.pdf>.

Vale precisar que el carácter así como las potestades de la Convención Americana, resultan ser mucho más amplias que las establecidas en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, puesto que en su artículo 41 «satisfacción equitativa» señala: “Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la

Así, la reparación integral se configura como el remedio más amplio para reparar los daños de las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Bajo estas consideraciones, la Corte Interamericana dentro de su jurisprudencia ha desarrollado como concepto de reparación integral el siguiente:

...daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior (a la violación de la Convención) y a la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral¹⁰².

Compartiendo la definición de la Corte IDH, y, a criterio de Francisco Zúñiga el daño se encuentra directamente relacionado con el concepto de responsabilidad, en este sentido:

...existe responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. En términos genéricos, entonces, la responsabilidad requiere de la concurrencia de cuatro elementos o condiciones: el daño, la culpa o el dolo, una relación de causalidad entre el dolo o culpa y el daño, y la capacidad delictual. Toca al autor del daño o perjuicio indemnizar o resarcir el perjuicio específico¹⁰³.

Conforme lo señala María Fernanda Polo Cabezas, para la doctrina mayoritaria, tanto civilistas como penalistas, del delito o falta no nace un tipo de responsabilidad, sino una obligación: la deuda de reparar el daño que causa el delito o falta como exigencia de restablecimiento del orden jurídico perturbado¹⁰⁴.

Una definición de daño que se enmarque dentro del objeto de estudio o de interés sería: "... todo perjuicio o menoscabo que se infringe a un individuo o a una colectividad, en sus bienes, en su libertad, en su personalidad o en su integridad, y que lleva consigo la obligación ineludible de reparación¹⁰⁵.

Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa. En este sentido se entiende que el Tribunal se encuentra obligado a remitirse primero al derecho interno de cada Estado, y en caso de considerar pertinente se encuentra facultado a ordenar una medida de satisfacción equitativa.

¹⁰² CIDH, [*Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras*], 17 de agosto de 1990.

¹⁰³ Francisco Zúñiga Urbina, *La acción de indemnización por error judicial. Reforma constitucional y regulación infraconstitucional* (Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer, 2009), 193.

¹⁰⁴ María Fernanda Polo, "Reparación integral en la justicia constitucional", en Juan Montaña y Angélica Porras, edit., *Apuntes de derecho constitucional. Parte especial I. Garantías constitucionales en el Ecuador* (Quito: Centro de estudios y difusión del derecho constitucional, 2012), 67.

¹⁰⁵ *Ibíd.*

Es claro que, para que tenga lugar una reparación integral deben concurrir previamente determinados factores, tales como: 1) Reconocimiento de un derecho; 2) Existencia de una conducta lesiva -positiva o negativa- por parte de un sujeto -público o privado-; 3) La conducta debe ser reconocida por un órgano jurisdiccional cuya obligación se circunscriba a la determinación de los grados de responsabilidad de los sujetos transgresores; 4) Reconocimiento de los beneficiarios; y, 5) La adopción del conjunto de medidas tendientes a resarcir la transgresión del derecho o derechos vulnerados.

Sumando a lo expuesto, para Rubio-Marín las reparaciones se convierten en medidas que promueven un grado mínimo de confianza interpersonal e institucional, derivándose en el reconocimiento de las víctimas como seres humanos y como ciudadanos con iguales derechos¹⁰⁶.

En armonía con lo anotado, vale destacar el criterio sentado por la Corte Constitucional colombiana, en cuanto al real significado de la reparación integral, manifestando expresamente que:

... el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas no sólo tiene fundamento expreso en (...) la Constitución, sino también en varias normas del derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por consiguiente, resultan vinculantes en nuestro ordenamiento jurídico. Así, entonces, dijo la Corte, que la petición de reparación del daño causado surge: i) del concepto mismo de dignidad humana que busca restablecer a las víctimas las condiciones anteriores al hecho ilícito (artículo 1º superior), ii) del deber de las autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los residentes y de garantizar la plena efectividad de sus derechos (artículo 2º de la Carta Política), iii) del principio de participación e intervención en las decisiones que los afectan (artículo 2º de la Constitución), iv) de la consagración expresa del deber estatal de protección, asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos de las víctimas (artículo 250, numerales 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁰⁷.

A partir de lo anotado, surge la siguiente inquietud ¿la reparación integral es un derecho constitucional o un mandato de optimización? A criterio de ciertos autores la reparación integral -en el ordenamiento ecuatoriano y colombiano- se constituye en un derecho subjetivo cuyo titular es todo ciudadano que se considere afectado por la

¹⁰⁶ Ruth Rubio Marín, *¿Y qué fue de las mujeres? Género y reparaciones de violaciones de derechos humanos* (New York: Social Research Council, 2010), 26.

¹⁰⁷ Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Sentencia No. C-579/13], 28 de agosto de 2013.

vulneración de sus derechos¹⁰⁸; no obstante, hay quienes aseguran que la reparación integral debe ser concebida como un mandato de optimización para las garantías constitucionales¹⁰⁹. A mi criterio la reparación integral es un mecanismo que potencializa la protección de los derechos y suscribiéndome a las palabras de autores ecuatorianos guarda una función orientadora para el deber ser de la justicia restaurativa, puesto que llega a configurarse como algo más que una institución del ordenamiento jurídico convirtiéndose en un principio del derecho, que debe estar presente en toda resolución judicial referente a la vulneración de derechos. Este principio de la reparación integral respalda y brinda materialidad a las garantías jurisdiccionales¹¹⁰.

Por otra parte, al estar reconocida la reparación tanto en el ámbito nacional como internacional, pasa a formar directamente parte del *bloque de constitucionalidad*¹¹¹, lo que involucra la aplicación de los principios pro ser humano, cuando los instrumentos internacionales reconozcan derechos más favorables al contenido de la legislación nacional.

Ahora bien, la reparación surge a partir de la vulneración a un derecho, lo que genera un daño directo al titular del bien jurídico protegido¹¹²; ante este panorama, el

¹⁰⁸ Valeria Rojas, *La reparación integral. Un estudio desde su aplicación en acciones de protección en el Ecuador*. Tesis de Maestría (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2012), 57.

¹⁰⁹ Claudia Storini y Marco Navas Alvear, *La acción de protección en Ecuador. Realidad jurídica y social* (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2014), 153.

¹¹⁰ *Ibíd.*, 154, 155.

¹¹¹ En términos generales, la doctrina del bloque de constitucionalidad permite reconocer jerarquía constitucional a normas que no están incluidas en la Constitución nacional, usualmente con el fin de interpretarlas sistemáticamente con el texto de la Constitución. En América Latina, tales normas han sido usualmente instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). La inclusión de normas internacionales dentro del bloque de constitucionalidad tiene tres efectos jurídicos trascendentales: 1) los tratados de derechos humanos prevalecen sobre la legislación interna; 2) los tratados de derechos humanos pueden ser considerados como parámetros de constitucionalidad concurrentes con las normas constitucionales nacionales, por lo que un conflicto entre un tratado de derechos humanos y una ley interna puede derivar en una declaratoria de inconstitucionalidad; y 3) los derechos internacionalmente protegidos por los tratados de derechos humanos pueden ser invocados a través de las acciones nacionales destinadas a tutelar derechos constitucionales. Manuel Eduardo Góngor Mera, “La difusión del bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia latinoamericana y su potencial en la construcción del *ius constitutionale commune* latinoamericano”, en Armín von Bogdandy y otros, coordinadores, *Ius constitutionale commune en América Latina: Rasgos, potencialidades y desafíos* (México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014), 301 - 302.

¹¹² La Constitución de la República (CEC, en adelante) establece en su art. 1 que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Tal postulado afirma al valor “justicia” como una de las finalidades primigenias del Estado; por lo tanto, de ello derivan ciertas obligaciones, más concretas unas que otras, para su aseguramiento. La primera idea, que sostiene la necesidad de que el Estado asuma para sí la potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, radica –como es sabido– en la necesidad de proscribir el ejercicio de la autotutela fuera de los cauces permitidos por el ordenamiento jurídico. Si el Estado asume en exclusiva la titularidad de esa potestad, es preciso que su organización establezca mecanismos idóneos para brindar la tutela que las personas requieren para solucionar sus controversias. Se ha dicho también que el derecho a la acción o, en otros términos, derecho a la jurisdicción, es un

Estado a través de sus instituciones se encuentra obligado a restablecer a la víctima a su situación anterior, esto mediante la plena efectividad de los derechos, para lo cual resulta indispensable una consagración expresa del deber estatal para la promoción y protección del derecho vulnerado. Empero, esta obligación va más allá de un simple pronunciamiento por parte de una autoridad jurisdiccional, puesto que, previamente deben confluir ciertos elementos, como, el derecho a acceder a tribunales, poseer recursos ágiles y efectivos, y finalmente, el cumplimiento integral de las sentencias.

Conforme lo anotado, se puede advertir que la reparación integral se ha constituido como un verdadero sistema, el cual atiende a los preceptos de la justicia restaurativa o por algunos llamada reparadora¹¹³ o de conciliación¹¹⁴, la cual contempla numerosas y diversas formas: reparaciones, daños remedios, indemnizaciones, restituciones, compensaciones, rehabilitaciones o tributos¹¹⁵. En este sentido, existe un consenso internacional en dos aspectos: 1) el Estado está obligado a dar una compensación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos perpetrados por el Estado; y, 2) si el gobierno que incurrió en las vulneraciones no compensa el nuevo gobierno está obligado a realizarlas¹¹⁶. En todo caso, la reparación también tiene un ingrediente colectivo, puesto que, en los casos de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, la sociedad en su conjunto sufre perjuicios *-spill over effects-* frente a los cuales se deben adoptar medidas¹¹⁷.

Atendiendo a la finalidad de la justicia restaurativa así como al sistema de reparaciones integrales, estas se encuentran obligadas a regirse por dos principios, el

auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos, a que el poder público se organice “de tal modo que los imperativos de la justicia queden mínimamente garantizados”.

¹¹³ Término preferido por De Greiff por las siguientes razones: i) expresa la idea de que, con el fin de responder a las diversas necesidades de las víctimas, los victimarios y toda una sociedad conformada por sobrevivientes, se necesita una variedad de respuestas; (ii) no buscaría respuestas uniformes para todos los países, sino que se esforzaría por encontrar respuestas específicas según la situación nacional y con miras a que el país afectado decida sobre ellas; (iii) se esforzaría por darle una participación significativa a la población local.

¹¹⁴ *Reparaciones con perspectiva de género*, 228, <<http://www.tfca.gob.mx/work/models/TFCA/Resource/219/1/images/CAPITULO%20VI.pdf>>.

¹¹⁵ Ruti G. Teitel, *Transitional Justice* (Nueva York: Oxford University Press, 2000), 119.

¹¹⁶ Neil Kritz, “The Dilemmas of Transitional Justice”, en Neil Kritz, *Transitional Justice. How Emerging Democracies Reckon with Former Democracies*, (Nueva York: United States Institute of Peace, 1995), 29.

¹¹⁷ Pablo De Greiff, *Transitional Justice, security, and development*, World Development Report, (2010): 9, <http://web.worldbank.org/archive/website01306/web/pdf/wdr%20background%20paper_de%20greiff_0.pdf>.

de integralidad y el de proporcionalidad¹¹⁸. Al respecto de estos dos principios el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha referido:

Todas las medidas que se analizan de manera individual poseen, sin embargo, una dimensión de integralidad. Una integralidad interna, que supone que los criterios y la manera de llevarse a cabo tienen coherencia con su sentido. Y una externa, entre las diferentes medidas, dado que el significado que adquieren es interdependiente de su relación¹¹⁹.

...esta dimensión de integralidad incluye también un sentido de jerarquía. No todas las medidas de reparación tienen la misma importancia para las víctimas. Esta jerarquía se hace evidente en el diseño de las medidas, dado que deberían responder a sus expectativas o necesidades. Pero más que en una sentencia o un acuerdo de solución amistosa, es en el cumplimiento donde dicha jerarquía se hace más evidente¹²⁰.

La trascendencia de la aplicación de los referidos principios radica en dos aspectos; en primer lugar, el hecho que poseen un carácter que no los hace excluyentes ni exclusivos, sino que, poseen un carácter integral, lo que supone directamente que cada medida responda y obedezca a los distintos tipos de afectación provocados; y en segundo lugar, es necesario que siempre exista una consonancia entre la vulneración y la medida de reparación, generando de forma simultánea la eficacia y el sentido de la medida. Estos dos elementos ocasionan que, las medidas de reparación sean consideradas como un recurso efectivo el cual promueve un verdadero resarcimiento en las víctimas.

Es pertinente enfatizar y considerar que, en algunos casos la reparación integral *-desideratum-* no puede cumplir con su cometido, como bien lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto atiende a la gravedad y naturaleza de la vulneración, motivo por el cual, resulta imposible restituir la situación al estado de la transgresión del derecho¹²¹, bajo este escenario es que se ha considerado dentro de la reparación integral a la indemnización y a la compensación.

Como complemento a lo anotado, es necesario abarcar la reparación integral desde la perspectiva del derecho constitucional ecuatoriano, este mandato de optimización entró en vigencia a partir de la Constitución de 2008, esto bajo las luces

¹¹⁸ Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Sentencia No. C-579/13], 28 de agosto de 2013.

¹¹⁹ Carlos Martín Beristain, *Diálogos sobre la reparación, Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos*, Tomo 2 (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008), 14.

¹²⁰ *Ibíd.*, 18.

¹²¹ El *desideratum* es la restitución total de la situación lesionada, lo cual lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados. CIDH, [Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras], 29 de julio de 1988.

de la doctrina y jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹²².

En este sentido, el artículo 86 numeral 3 de la Constitución de la República establece que en la sustanciación de garantías jurisdiccionales, los jueces en caso de constatar vulneración a derechos, deberán declarar tal vulneración, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. Así, los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución.

Este reconocimiento expreso en el texto constitucional, provoca directamente una obligación para las autoridades jurisdiccionales, es decir, no funge como una sugerencia, sino como mandato constitucional. Sobre la base de lo referido, la reparación integral pasa a ser el fin último del proceso constitucional que implica la perfección de la garantía de derechos¹²³.

En suma, este reconocimiento genera una evolución en el ámbito jurídico, ya que el constituyente ecuatoriano pretendió generar una apropiada legislación ante la vulneración de derechos con la finalidad de compensar a las víctimas.

Justamente remitiéndonos a las actas de la Asamblea Constituyente de 2008, se puede advertir que el espíritu de incorporar la «reparación integral» al texto constitucional atendió al hecho que, la necesidad de reconocer de manera explícita todo un conjunto de derechos, involucraba directamente que las “...personas tengan el poder de exigir al Estado una debida procuración de justicia, que se vea avocado en crear un sistema de administración de justicia eficiente y que realmente investigue para poder sancionar”¹²⁴. No obstante, en un inicio el primer debate de la Mesa 1 “Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales” se puede apreciar que, el tema de la reparación integral se encontró encaminado de forma exclusiva a las víctimas de delitos sexuales; no obstante, considerando en su amplio sentido la palabra “víctima”, este derecho fue ampliado a todas las personas afectadas por la vulneración de un derecho, así como sus familiares. Todo lo descrito se puede contrastar con el texto - Intervención de la asambleísta Gina Godoy- que se desprende a continuación:

¹²² Storini y Navas, “La acción de protección”, 154.

¹²³ *Ibíd.*

¹²⁴ Ecuador, *Asamblea Constituyente* [2008], Acta 050. Sumario de 15 de mayo de 2008, ([Montecristi: Asamblea Constituyente, 2008): 145-147. Intervención de la asambleísta Gina Godoy.

Precisamente, la Mesa uno, pensando en las víctimas de delitos sexuales y violencia de género, han señalado que gozarán de protección especial, así como la garantía de no revictimización. Yo solo quiero agregar a este importante avance, que este derecho de las víctimas, debe, también, reconocer la reparación del daño, que las víctimas; que puede iniciarse, perdón, una reparación pecuniaria, pero, también, la que permite una recuperación física y síquica; además, la certeza y la garantía de que jamás un hecho como ese se pueda volver a repetir. Es necesario ampliar nuestra concepción de víctimas. ¿Qué entendemos por víctimas? Que no es solamente la persona afectada, sino su familia, su entorno más cercano que también necesitan de apoyo por parte del Estado y en esa medida, quisiera pedir se incorpore el derecho a una debida diligencia que diga lo siguiente, señor Presidente. “Todas las personas tienen el derecho a exigir al Estado una debida procuración de justicia, por lo tanto, se encuentra obligado a investigar y dictaminar, con la debida diligencia en los actos violatorios a los derechos humanos”¹²⁵.

Así también en el seno de la Asamblea Constituyente, se advierte que la obligación del Estado por garantizar un debido proceso fue analizado de manera conjunta con la revictimización, llegando a determinar que la prioridad del Estado es la protección de cualquier amenaza e intimidación, lo que incluye mecanismos que procuren “... la obtención de una reparación integral que comprenda el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición, satisfacción del derecho violado, sin dilaciones ...”¹²⁶.

Por su parte, los asambleístas María Vela y Gudo Rivas, supieron manifestar respectivamente que:

Es justo intentar la reparación integral de la víctima que comprenda el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización) rehabilitación, garantía de no repetición, satisfacción del derecho violado, sin dilaciones. Realmente la indefensión es lo más triste que un ser humano puede sentir. No hay nada más terrible que estar indefenso frente a una maquinaria coercitiva del Estado, siendo una persona común, sin medios y sin posibilidades de defensa¹²⁷.

... el Estado tiene la obligación civil de indemnizar al tenor de lo dispuesto en el artículo veintidós de la Constitución Política. Vale la pena recordar que la responsabilidad civil consiste en la obligación jurídica que tiene un sujeto de derecho

¹²⁵ Ecuador, *Asamblea Constituyente* [2008], Acta 050. Sumario de 15 de mayo de 2008, ([Montecristi: Asamblea Constituyente, 2008): 145-147. Intervención de la asambleísta Gina Godoy.

¹²⁶ Ecuador, *Asamblea Constituyente* [2008], Acta 050-A. Sumario de 16 de mayo de 2008, ([Montecristi: Asamblea Constituyente, 2008): 38 – 39.

“Conocimiento de los informes de mayoría y minoría presentados por la Mesa Constituyente No. 1, de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, para el primer debate de los textos constitucionales referentes a: Derechos civiles, al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, políticas y a la comunicación, en su parte correspondiente a los derechos al debido proceso y a una justicia sin dilaciones”. Lectura de los artículos correspondientes. Artículo innumerado, literal q).

¹²⁷ Ecuador, *Asamblea Constituyente* [2008], Acta 050-A. Sumario de 16 de mayo de 2008, ([Montecristi: Asamblea Constituyente, 2008): 44. Intervención de la asambleísta María Vela.

de resarcir los perjuicios que ha soportado otro individuo capaz o incapaz. Constancias en convenios internacionales¹²⁸.

Ante este panorama y acogiendo las palabras de Storini y Navas, es posible afirmar que el constituyente ecuatoriano, en materia de reparación integral se alineó con gran parte de los conceptos y categorías elaborados por la CIDH. Esta cercanía pretende generar el restablecimiento de la víctima a su situación anterior, puesto que su alcance no se limita a contemplar la remediación del daño causado, sino que se pretende que este sea integral, es decir, se toma en consideración todo su entorno. En consecuencia, toda violación a un derecho constitucional o derecho humano, reconocido en un tratado o instrumento internacional, genera en el ordenamiento ecuatoriano la obligación ineludible de reparar integralmente los daños derivados de dicho quebrantamiento¹²⁹.

1.2.1. Dimensión de la reparación integral

Para comprender la reparación integral de manera global, debe entenderse que esta encierra una doble dimensión; por una parte, la obligación del Estado que resulta de su responsabilidad internacional; y, por otro lado, surge como un derecho fundamental de las víctimas¹³⁰.

En cuanto a la primera dimensión, queda claro que esta implica la obligación del ente estatal de implementar todos sus recursos, así como, la movilización de su aparataje institucional en aras de asegurar una adecuada protección de las víctimas de vulneraciones de derechos. No obstante, la segunda dimensión resulta ser más compleja, por cuanto implica el reconocimiento de la calidad de víctima.

La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, en su artículo 1, define «víctima» como “...las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera

¹²⁸ Ecuador, *Asamblea Constituyente* [2008], Acta 050-A. Sumario de 16 de mayo de 2008, ([Montecristi: Asamblea Constituyente, 2008): 50. Intervención del asambleísta Guido Rivas.

¹²⁹ Storini y Navas, “La acción de protección”, 156.

¹³⁰ Calderón, “La evolución de la reparación integral”, 22.

o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación...”¹³¹.

Considerando lo señalado en el párrafo precedente, es importante distinguir que, la concepción de «víctima» a nivel internacional resulta ser sumamente amplia, la cual implica tres elementos. En primer lugar, el daño causado por las acciones u omisiones estatales; en segundo lugar, se enfatiza que el daño provocado puede ser material y/o inmaterial; y, tercero, el hecho gravoso puede ser causado a un individuo como a una colectividad. En este sentido, si una persona o colectividad ha sufrido cualquier tipo de daño -a sus derechos humanos- por causa de una acción u omisión del Estado obtiene directamente la calidad de víctima.

Asimismo, el artículo 2 del referido cuerpo normativo menciona que, la identificación de una víctima será independiente de que se determine, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.

En este punto vale destacar que, la actual concepción del daño centra su óptica en la víctima, en consecuencia, la responsabilidad de reparar surge independientemente de la existencia o identificación del sujeto que ocasionó el daño, por lo que, el Estado es el llamado a reparar. Como ya se mencionó en el acápite anterior, el consenso internacional obliga al Estado a compensar a las víctimas de graves violaciones de derechos.

Ahora bien, esta responsabilidad estatal, no sólo centra su atención en la reparación en sí, sino en la que esta involucra y los elementos previos que deben existir para que esta pueda llevarse a cabo, así:

Esta obligación implica: i) el establecimiento de mecanismos jurídicos idóneos para llegar al descubrimiento de los hechos y la condena de los responsables; ii) El deber de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos; iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo; y iv) el deber de respetar las garantías del debido proceso¹³².

Al respecto, se advierte que la obligación estatal - va más allá de respetar, proteger, satisfacer y promover los derechos, aspecto referido anteriormente-, tiene la responsabilidad de impulsar todas las condiciones necesarias para la protección de los

¹³¹ *Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder* (1985).

¹³² Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Sentencia No. C-180/14], 27 de marzo de 2014.

mismos, resultando esencial el establecimiento de un sistema jurídico, en el cual sus instituciones como las normas prevean mecanismos jurídicos idóneos para la protección de derechos, en el cual se respeten las garantías del debido proceso. La simbiosis de todos estos elementos conduce a una reparación integral, respondiendo ante el daño o agravio causado, mediante la implementación de medidas y recursos efectivos destinados a su compensación y resarcimiento.

Al conjugar los dos elementos que conforman la reparación integral, se puede asegurar que estos resultan ser subsidiarios y complementarios, ya que si bien, la calidad de víctima se ostenta desde el momento que existe una vulneración, la restitución del derecho es llevada a cabo de forma exclusiva por el ente estatal, producto de lo cual se asegura el reintegro del orden jurídico violado.

Como corolario de lo referido, resulta pertinente resaltar el criterio sentado por la Corte Constitucional colombiana¹³³, en cuanto a las características que envuelven a las medidas de reparación integral, partiendo del hecho de su complejidad, respecto a la conexión entre la protección, los derechos y la justicia, en tal sentido, no es posible garantizar una verdadera reparación sin justicia, motivo por el cual no puede confundirse a la reparación integral con la asistencia y servicios sociales y de ayuda humanitario, ya que su carácter y finalidad resultan ser totalmente disímiles.

Así los servicios sociales, se encuentran revestidos de un carácter eminentemente social, lo cual involucra una obligación estatal de creación de políticas públicas, garantizando ciertos mínimos vitales como vivienda, educación salud, entre otros; mientras que la asistencia humanitaria se hace presente en los casos de desastres. Estas particularidades provocan que ninguno de los tres conceptos puedan ser usados como sinónimos o ser sustituidos entre sí, menos aun cuando se trata de resarcir derechos vulnerados a causa de un ilícito.

1.2.2. Criterios de reparación integral

Desde la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia de forma paulatina se ha ido desarrollando cada uno de los criterios de la reparación integral, esto, en aras de un reconocimiento mucho más amplio de las afectaciones y perjuicios causados a las víctimas tanto de forma directa

¹³³ Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Sentencia No. C-579/13], 28 de agosto de 2013.

como indirecta. La amplia gama de medidas de reparación integral son tan sólo un reflejo del extenso catálogo de derechos reconocidos por el referido organismo, así:

La reparación no siempre es monetaria, sino que puede consistir en la restitución de los derechos de las víctimas, programas de rehabilitación y medidas simbólicas, como disculpas oficiales, monumentos y ceremonias conmemorativas. (i) En el plano individual, los Principios de Joinet señalan que la reparación a las víctimas puede estar compuesta por las siguientes medidas “a) Medidas de restitución (tendientes a que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación); b) Medidas de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y c) Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención psicológica y psiquiátrica)”. (ii) En el plano colectivo, los Principios de Joinet reconocen la importancia de las medidas de carácter simbólico, a título de reparación moral, tales como el reconocimiento público por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos que permiten asumir mejor el deber de la memoria¹³⁴.

Si bien, la reparación debe ser vista desde sus dos aristas «individual» y «colectiva», con el paso del tiempo y ante las flagrantes y graves vulneraciones provocadas por parte de los estados, se vio la necesidad de fusionar las medidas tanto para particulares como colectivos, motivo por el cual actualmente no se ha mantenido dicha división, sino que, se ha visto como principal finalidad la restauración de los daños provocados a las víctimas, sin importar su índole.

Vale destacar que, los distintos criterios toman como punto de partida al daño, creando así su primera división, «inmaterial» y «material». Así, el daño inmaterial, comprende tanto los sufrimientos y aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia¹³⁵. Por su parte, el daño material es la pérdida, detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso¹³⁶, este daño puede ser causado de forma directa o indirecta.

Resulta evidente la diferencia que existe entre el daño material e inmaterial, no obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en que se ha demostrado la existencia del daño inmaterial, ha estimado pertinente, fijar en equidad

¹³⁴ *Ibíd.*

¹³⁵ CIDH, [*Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala*], 19 de noviembre de 1999.

¹³⁶ CIDH, [*Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala*], 22 de febrero de 2002.

indemnizaciones de índole económico; sin embargo, la determinación del monto en los casos de daño material resulta ser una cuestión sumamente subjetiva, ya que, queda a criterio del juez la determinación del mismo. Esto, no sucede en los casos que se ha demostrado la existencia de un daño material, por cuanto, la existencia del mismo debe ser verificado, lo que facilita la determinación del monto que debe ser cancelado a favor de la víctima.

A continuación, se presenta un cuadro detallando la clasificación que posee tanto el daño material como inmaterial:

Cuadro 2.

TIPOS DE DAÑO: INMATERIAL Y MATERIAL

Tipos de daño	
Daño inmaterial ¹³⁷	a. <i>Daño moral o psicológico.</i> - Perjuicios en la honra, sufrimiento dolor, alteraciones o modificaciones a la psiquis de la persona.
	b. <i>Daño físico.</i> - Implica toda modificación del estado normal del cuerpo.
	c. <i>Daño al proyecto de vida.</i> -Alteración al curso de la vida, perjudicando de manera directa a las expectativas de realización.
	d. <i>Daños colectivos y sociales.</i> - Violaciones que repercuten a un grupo de personas, en su calidad de “grupo”.
Daño material ¹³⁸	e. <i>Daño emergente.</i> - Gastos directos e inmediatos que ha debido cubrir la víctima como producto de la vulneración. Incluye gastos funerarios.
	f. <i>Lucro cesante pérdida de ingresos.</i> - Pérdidas patrimoniales producto de la merma de ingresos.
	g. <i>Daño patrimonio familiar.</i> - Perjuicio económico causado a la víctima y/o su familia.

Nota: Cuadro de elaboración propia¹³⁹.

Fuente primaria: Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consulta de jurisprudencia.
<http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>.

¹³⁷ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado la existencia de daño inmaterial en los siguientes casos: Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Caso Paniagua Morales y otros vs. Guatemala. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006.

¹³⁸ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado la existencia de daño material en los siguientes casos: Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006.

¹³⁹ Este cuadro es de elaboración propia; más se inspira en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que se ha determinado la existencia de daño material e inmaterial.

La división que se presenta en el cuadro, ha sido acogida de forma integral por la legislación ecuatoriana, así el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, denominado «Reparación integral» señala:

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia¹⁴⁰.

En este sentido, -tanto a nivel internacional como en el ámbito ecuatoriano- una vez identificados los tipos de daños, así como, sus respectivas clasificaciones, compete identificar qué medida se adecuada para reparar el daño causado a la víctima. Dentro de las medidas de reparación se encuentran: restitución; rehabilitación; satisfacción; garantías de no repetición; obligación investigar, juzgar y sancionar; y, la indemnización compensatoria.

Ahora bien, identificadas cada una de las medidas de reparación, es imprescindible examinar cada una de ellas, esto, con la finalidad de comprender el objetivo que guardan, así como sus implicaciones. Sobre la base de lo anotado, el presente análisis se lo llevará a cabo considerando tanto el desarrollo jurisprudencial de la CIDH, así como el desarrollo legislativo en el Ecuador, toda vez que, la reparación integral fue introducida en el ordenamiento ecuatoriano conforme al modelo garantista de la Constitución de 2008 y bajo las luces de la doctrina y jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹⁴¹.

Previo a continuar, se ha de señalar que el artículo 18 de la norma precitada, se establecen los diferentes tipos de medidas de reparación integral; empero, estas no se encuentran definidas, la ley se limita hacer un desglose de ellas, determinando lo siguiente:

La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías

¹⁴⁰ Ecuador, *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* [2009], art. 18, en la *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 9.

¹⁴¹ Storini y Navas, “La acción de protección”, 154.

de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud¹⁴².

Si bien no se advierte una definición de cada uno de los diferentes tipos de medidas de reparación integral, esta ha sido desarrollada a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador -elementos que serán analizados a profundidad en el segundo capítulo del presente trabajo de investigación.

Retomando el análisis planteado, en cuanto a la **medida restitución**, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su principio 19, señala que:

La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de los bienes¹⁴³.

En este sentido, puede observarse que la medida de restitución, no es una medida que pueda ser dictada en todos los tipos de violaciones a derechos humanos, ya que su aplicación, dependerá de la gravedad, así como, de la factibilidad de restablecer las cosas al estado anterior.

Se puede asegurar que este tipo de medida resulta ser una de las más complejas puesto que la «restitución» en materia constitucional a diferencia de la restitución civil es sumamente amplia ya que involucra fundamentalmente el lado humano, es decir propende a la superación y restablecimiento del equilibrio emocional, patrimonial y dependiendo los casos hasta laboral¹⁴⁴.

Como se puede inferir, la citada medida está encaminada o pretende la restitución material de los daños provocados, así como, el restablecimiento de los derechos vulnerados; sin embargo, en la práctica judicial se ha de considerar los grandes limitantes e impedimentos a los que se encuentra sujeta la medida de restitución. En estas circunstancias, tanto la Corte Interamericana de Derechos

¹⁴² Ecuador, *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* [2009], art. 18, en la *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 9.

¹⁴³ *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* (2005).

¹⁴⁴ Luis Cueva Carrión, *Reparación integral y el daño al proyecto de vida* (Quito: Ediciones Cueva Carrión, 2015), 44.

Humanos como nuestra Corte Constitucional, para reparar el daño han acudido a las medidas sustitutivas¹⁴⁵.

A continuación se detallan las distintas medidas que han sido dictadas en aras de restablecer un derecho vulnerado; en el listado se puede advertir que este incluye desde obligaciones de hacer, hasta la creación de políticas públicas.

Cuadro 3.

MEDIDAS DE REPARACIÓN: RESTITUCIÓN

Restitución¹⁴⁶	a. Restablecimiento de la libertad.
	b. Restitución de bienes y valores.
	c. Reincorporación de la víctima su cargo y pago de los salarios dejados de percibir.
	d. Adopción de medidas necesarias para la eliminación de oficio de antecedentes penales.
	e. Recuperación de la identidad y restitución del vínculo familiar.
	f. Devolución de tierras tradicionales a los miembros de la comunidad indígena.
	g. Extracción segura de explosivos enterrados en los territorios indígenas y reforestación de las seis afectadas.

Nota: Cuadro de elaboración propia¹⁴⁷.

Fuente primaria: Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consulta de jurisprudencia.
<<http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>>.

Por su parte la **medida rehabilitación**, para la Asamblea General de las Naciones Unidas debe incluir la atención médica y psicológica, así como, servicios

¹⁴⁵ *Ibíd.*, 45.

¹⁴⁶ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas de restitución en los siguientes casos: Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Caso Apiz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Caso Conteras y otros vs. El Salvador. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Caso comunidad indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Caso pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2007.

¹⁴⁷ Este cuadro es de elaboración propia; más se inspira en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que la Corte IDH ordenó medidas de restitución por vulneración de derechos.

jurídicos y sociales¹⁴⁸; debe entenderse que, esta medida pretende reparar afectaciones físicas, psicológicas y/o morales que pueden ser objeto de atención médica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos por su parte ha referido a través de su jurisprudencia que, esta medida implica la obligación estatal de proveer un tratamiento médico, para lo cual deberá considerar todas las circunstancias y particularidades de cada víctima, de manera que el tratamiento deberá ser brindado de manera individual y familiar. Esta medida con el tiempo ha ido adquiriendo mayor relevancia, a tal punto que en la mayoría de sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena este tipo de reparación.

A criterio de Cueva Carrión involucra hasta cierto punto llegan a involucrar una forma de restituir a la víctima, ya que se pretende la superación de traumas psicológicos a fin de que se retorne a la normalidad y pueda ejecutarse con plena confianza el proyecto de vida original¹⁴⁹.

Ahora bien, la **medida satisfacción**, tiene por objeto reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a reorientar su vida o memoria¹⁵⁰. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que este tipo de medida busca *inter alia* el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, así como la transmisión de un mensaje de reprobación ante la vulneración de derechos acaecida.

Esta medida al igual que las descritas anteriormente, ha sido desarrollada de forma paulatina, llegando a desplegar un catálogo de medidas que pretenden la satisfacción de las víctimas; en su mayoría, las medidas de satisfacción conllevan un reconocimiento de carácter simbólico.

¹⁴⁸ *Principios y directrices básicos*, [Principio 21], 16 de diciembre de 2005.

¹⁴⁹ Cueva Carrión, “Reparación integral”, 46.

¹⁵⁰ *Ibíd.*, [Principio 22].

Cuadro 4.

MEDIDAS DE REPARACIÓN: SATISFACCIÓN

Satisfacción¹⁵¹	a. Publicación difusión de la sentencia.
	b. Acto público de reconocimiento de responsabilidad.
	c. Medidas en conmemoración de las víctimas o hechos y derechos.
	d. Becas de estudio y conmemorativas.
	e. Medidas socioeconómicas de reparación colectiva.
	f. Otras medidas de satisfacción.

Nota: Cuadro de elaboración propia¹⁵².

Fuente primaria: Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consulta de jurisprudencia. <http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>.

Todas las formas de reconocimiento simbólico anotadas, propenden a deshacer el desagravio u la ofensa causada, siguiendo esta línea las mismas deben presentar las siguientes características: repercusión pública; producir un impacto en la comunidad, en el entorno social y entre los funcionarios y servidores del Estado ¹⁵³, y principalmente una conciencia social para que el hecho no vuelva a ocurrir.

El beneficio de este tipo de medida es que permite al juzgador aplicar su creatividad, puesto que las formas de reparación del tipo simbólico no se agotan con las descritas en el cuadro superior, sino que dependerá del juez y de la gravedad del daño causado para que este pueda ordenar otro tipo de medidas de este tipo.

¹⁵¹ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas de satisfacción en los siguientes casos: Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995. Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador. Sentencia 19 de junio de 1998. Caso Instituto de Reeducción del Menor vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002.

¹⁵² Este cuadro es de elaboración propia; más se inspira en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que la Corte IDH ordenó medidas de satisfacción.

¹⁵³ Cueva Carrión, “Reparación integral”, 48.

La **medida garantías de no repetición**, tiene por objeto que no se vuelvan cometer o perpetrar los actos conducentes a una vulneración de derechos. La ONU¹⁵⁴ ha establecido que para que esta medida sea eficaz, el Estado se encuentra obligado a generar una cultura de protección y respeto de los derechos humanos; adicionalmente, la entidad estatal debe fortalecer la independencia judicial en todos sus niveles. Estos dos elementos sólo pueden llevarse a cabo mediante la promoción de mecanismos jurídicos destinados a prevenir y resolver conflictos en los cuales se encuentren inmersos derechos humanos.

Cuadro 5.

MEDIDAS DE REPARACIÓN: GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

Garantías de no repetición¹⁵⁵	a. Capacitaciones en materia de derechos humanos para los funcionarios públicos
	b. Medidas de derecho interno – legislativas, administrativas o de otra índole

Nota: Cuadro de elaboración propia¹⁵⁶.

Fuente primaria: Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consulta de jurisprudencia. <http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>.

Del cuadro se puede advertir, que este tipo de medida conllevan la adopción de políticas públicas, puesto que se traducen en un compromiso serio y eficiente por parte del Estado y sus instituciones para poner un fin a las acciones vulneratorias de derechos, previniendo cualquier conducta abusiva y que pueda acarrear daños a terceros¹⁵⁷.

Continuando con el análisis, la **medida obligación de investigar, juzgar y sancionar**, nace del derecho de las víctimas a acceder a un sistema judicial eficiente; ergo, esta medida implica directamente el deber del Estado de tener un sistema judicial

¹⁵⁴ *Principios y directrices básicos*, [Principio 23], 16 de diciembre de 2005.

¹⁵⁵ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas de garantías de no repetición en los siguientes casos: Caso Pacheco Teruel vs. Honduras. Sentencia de 27 de abril de 2012. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Caso de la Masacre de las dos Erres vs. Guatemala. Sentencia de 24 de noviembre de 2009.

¹⁵⁶ Este cuadro es de elaboración propia; más se inspira en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que la Corte IDH ordenó medidas de no repetición por vulneración de derechos.

¹⁵⁷ Cueva Carrión, “Reparación integral”, 54.

eficiente, el cual emplee todos sus medios de forma efectiva y completa para determinar a los culpables de las vulneraciones a derechos y sancionarlos, evitando de esta manera toda forma de impunidad. Bajo este criterio, debe concebirse esta medida como una verdadera obligación y no como una mera formalidad, puesto que, cualquier tipo o forma de denegación de justicia involucra y genera diversos tipos de afectaciones tanto en la esfera individual como colectiva.

Cuadro 6.

MEDIDAS DE REPARACIÓN: OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIONAR

Obligación de investigar, juzgar y sancionar¹⁵⁸	a. Investigación, determinación, el enjuiciamiento y, en su caso, sanción de todos los responsables materiales intelectuales
	b. Investigación administrativa
	c. Determinación del paradero de la víctima

Nota: Cuadro de elaboración propia¹⁵⁹.

Fuente primaria: Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consulta de jurisprudencia.
<http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>.

Como complemento de lo anotado, se debe señalar que esta medida para otros autores es denominada como «derecho a la verdad»¹⁶⁰, el cual involucra conocer la verdad de los hechos con la finalidad de crear una memoria colectiva. En este sentido, a mi criterio el «derecho a la verdad» no puede ser concebido como un tipo de reparación, sino como el derecho que pretende ser reparado; esto atiende a la finalidad que guardan los distintos tipos de medidas, es decir, cuando se ha dado lugar a la declaración y reconocimiento de un derecho ha sido quebrantado, añade el desagravio

¹⁵⁸ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas de obligación de investigar, juzgar y sancionar en los siguientes casos: Caso Masacre de Puebla Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008.

¹⁵⁹ Este cuadro es de elaboración propia; más se inspira en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que la Corte IDH ordenó como medida de reparación la investigación, juzgamiento y sanción de los culpables por vulneración de derechos.

¹⁶⁰ Cueva Carrión, “Reparación integral”, 57.

y el resarcimiento del derecho transgredido, situación que refleja la responsabilidad asumida por el agresor sobre el acto antijurídico y revela la intención por parte del aparato estatal de satisfacer completamente a la víctima¹⁶¹.

Así, el establecimiento de medidas de reparación integral constituye, por tanto, una actuación judicial fundamental que ofrece un sentido más amplio a la protección de derechos fundamentales¹⁶².

Finalmente, la última medida de reparación es la **indemnización compensatoria**, la cual involucra la valoración de daños materiales e inmateriales provocados a la víctima por la vulneración de derechos; según los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”¹⁶³, principio 20. En este sentido, la presente medida involucra:

La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

- a) El daño físico o mental;
- b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
- c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
- d) Los perjuicios morales;
- e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales¹⁶⁴.

Se tiene que enfatizar que este tipo de medida debe ser considerada como de tipo “subsidiaria” ya que el último recurso para reparar a una víctima de daño ha de ser el pago de una indemnización económica, puesto que esto demuestra la impotencia del Estado a reparar integralmente un derecho vulnerado, es decir, se pone un valor a un derecho humano.

Una vez detallado el catálogo de reparaciones integrales, debe considerarse varios aspectos. En primer lugar, una vez determinada la existencia de un daño, así como, la identificación de la víctima esta debe ser reparada inmediatamente; en

¹⁶¹ Storini y Navas, “La acción de protección”, 155.

¹⁶² *Ibíd.*

¹⁶³ *Principios y directrices básicos*, 16 de diciembre de 2005.

¹⁶⁴ *Principios y directrices básicos*, [Principio 20], 16 de diciembre de 2005.

segundo lugar, la adopción de cada medida siempre dependerá del daño sufrido por la víctima como producto de la violación de los derechos; y, en tercer lugar, cada una de las medidas de reparación detalladas *ut supra* son aceptadas internacionalmente por los estados suscriptores de cada uno de los convenios y/o pactos internacionales; producto de ello, las legislaciones internas han tenido que ser modificadas adecuando el ordenamiento jurídico para poder llevar a cabo cada una de las obligaciones que implican las medida de reparación.

Resulta interesante destacar el hecho que, en la mayoría de casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado más de una medida de reparación integral con la finalidad de resarcir el daño causado a las víctimas de vulneraciones; no obstante, si bien es cierto que existen medidas que no dan cabida a la subjetividad de los jueces, existen otras que dejan este campo sumamente abierto, como es el caso de la indemnización compensatoria. Este, podría ser el primero de los obstáculos que presenta una correcta reparación integral; otro aspecto que debe ser considerado al momento de reparar, es la pretensión de la víctima y lo que se ha logrado demostrar, circunstancias que van más allá de la simple valoración, por cuanto atiende a hechos reales y comprobables.

Otro de los problemas que presenta el restablecimiento del derecho, es su complejidad, si bien, pueden existir sentencias amplias y sumamente garantistas que abarquen un gran número de derechos e impliquen varias medidas de reparación, el verdadero resarcimiento de la víctima involucra que cada uno de los derechos reconocidos y medidas de reparación ordenadas sean cumplidas a cabalidad; sin embargo, debido a sistemas poco efectivos existen medidas que no pueden ser ejecutadas en su totalidad como son las de investigar, juzgar y sancionar.

Como consecuencia de lo anotado, resulta claro que la interdependencia existente entre la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos no se agota únicamente en la adopción de medidas legislativas tendientes a garantizar la debida observancia de las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados con la suscripción de convenios de derechos humanos, sino que, se manifiesta también en el preciso momento en que la autoridad jurisdiccional dispone la reparación integral de un derecho vulnerado.

Ahora bien, vale considerar lo señalado por Carlos Martín Beristain en cuanto al cumplimiento efectivo e integral de cada una de las medidas de reparación, considerando que, su cumplimiento integral presenta cierto grado de complejidad -a

más de las ya referidas- al momento de enfrentar la realidad de su ejecución; el autor refiere principalmente tres aspectos: “a) las diferentes interpretaciones de las medidas por las partes; b) el nivel de los recursos existentes para llevarlas a cabo; c) la manera específica en que se desarrolla la medida de reparación”¹⁶⁵.

Cada una de las cuestiones planteadas resultan ser fundamentales, esto en virtud de que, la configuración de estos tres elementos permite en mayor o menor grado la ejecución del elemento reparador, o, por el contrario, la carencia de los elementos antes referidos puede provocar la generación de nuevas vulneraciones, desvirtuando la finalidad y el objetivo de las medidas de reparación.

¹⁶⁵ Carlos Martín Beristain, *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos* (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009), 182 -183.

CAPÍTULO II

INTERACCIÓN Y REFERENCIAS CRUZADAS ENTRE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LAS CORTES CONSTITUCIONALES DE ECUADOR Y COLOMBIA EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

*No podemos resolver problemas
pensando de la misma manera
que cuando los creamos.*

Albert Einstein

A partir de lo expuesto en el capítulo I “exigibilidad y justiciabilidad de los derechos constitucionales y la evolución de las medidas de reparación integral”, con el paso del tiempo y conjuntamente con la evolución de la dinámica social, los estados advirtieron la necesidad de trascender las fronteras de la protección de los derechos humanos, es decir, el amparo de estos no podía circunscribirse exclusivamente al ámbito doméstico de cada país, sino que debía ser expuesto en la peana internacional; el objetivo fue llevado a cabo de manera exitosa, puesto que se crearon varios instrumentos jurídicos internacionales tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966¹⁶⁶); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966¹⁶⁷), Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros, los cuales materializan a nivel internacional la tutela de los derechos humanos y fundamentales.

La internacionalización del derecho guardó como propósito la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas planteados en materia de protección de derechos, y sobre todo una verdadera, eficaz y eficiente protección de los mismos, así el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere:

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de

¹⁶⁶ Entrada en vigor en 1976.

¹⁶⁷ Entrada en vigor en 1976.

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos¹⁶⁸.

Ahora bien, resulta indispensable analizar si la suscripción de los referidos convenios obligan directamente a los estados a ejecutar lo dispuesto en ellos, esto por cuanto, no tendría ningún sentido que los estados suscriban acuerdos internacionales si los mismos carecen de fuerza de ejecución.

No obstante de lo referido, hay quienes sostienen que los tratados internacionales no pasan de ser expresiones de buena voluntad, así Fernández Sánchez, recogiendo las palabras del profesor Austin, señala con relación a los tratados internacionales que “por el hecho de que exista el derecho y las obligaciones no pueden clasificarse al sistema de perfecto”¹⁶⁹, contrario a lo manifestado Jacot-Guillarmod, refiere que “la responsabilidad internacional no es más que la prolongación de la responsabilidad pública en el plano interno”¹⁷⁰.

En este orden de ideas, resulta pertinente recordar lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en el cual se reconoce la “importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales”¹⁷¹, motivo por el cual en la Parte III «Observancia, aplicación e interpretación de los tratados», Sección Primera «Observancia de los tratados», se establece:

26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado¹⁷².

¹⁶⁸ Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

¹⁶⁹ Pablo Antonio Fernández, *Las obligaciones de los estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos* (Madrid: Ministerio de Justicia - Centro de Publicaciones, 1997), 21.

¹⁷⁰ Jacot-Guillarmod, “Reflexions su la fusion des organes de la Convention dans la perspective des travaux intergouvernementaux du Conseil de l’Europe”, en Pablo Antonio Fernández, *Las obligaciones de los estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos* (Madrid: Ministerio de Justicia - Centro de Publicaciones, 1997), 20.

¹⁷¹ Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969).

¹⁷² *Ibíd.*

Así, se advierte que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma “*pacta sunt servanda*”¹⁷³ se encuentran universalmente reconocidos, motivo por el cual los estados signatarios de los tratados internacionales se encuentran obligados a acatar las decisiones dictadas por los organismos supranacionales en ejercicio de su potestad jurisdiccional, toda vez que con la suscripción, ratificación y aceptación de su competencia, consienten y reconocen la validez y legitimidad de sus decisiones, no obstante de la existencia o no de mecanismos de supervisión del cumplimiento de estas.

Con las consideraciones anotadas, resulta fundamental precisar si además de ser vinculantes los tratados internacionales en materia de ejecutoria, actualmente existe un proceso de aproximación y divergencia entre las cortes, es decir, en lo que respecta a sí los fallos emitidos por los organismos internacionales a más de ser ejecutados -en mayor o menor medida-, han sido acogidos por las legislaciones nacionales, replicando los criterios sentados, o si, por el contrario, los países suscriptores han optado por alejarse de la jurisprudencia internacional.

2.1. Las sentencias de la Corte Interamericana, su vinculatoriedad y cumplimiento

Claudio Nash Rojas¹⁷⁴ manifiesta que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pasado por varias etapas de desarrollo, en cuanto a lo que se refiere a la evolución del concepto de “control de convencionalidad”, mencionado por primera vez en los votos razonados del juez Sergio García Ramírez en el caso *Myrna Mack Chong vs. Guatemala* y caso *Tibi vs. Ecuador*¹⁷⁵, en los siguientes términos:

Para efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no puede

¹⁷³ Sobre “*pacta sunt servanda*” ver: Marcos del Rosario Rodríguez, coordinador. *Supremacía Constitucional*, (México D.F.: Editorial Porrúa, 2009), 135-138; Marco Gerardo Monroy Cabra, *Derecho de los Tratados*, (Bogotá: Editorial TEMIS, 1978), 77-81; M. Isabel Garrido Gómez, *Lo que queda del Principio Clásico Pacta Sunt Servanda* (2011), <http://www.derechocambiosocial.com/revista025/pacta_sunt_servanda.pdf>.

¹⁷⁴ Claudio Nash Rojas, “Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Año XIX (2013): 495, <<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32199.pdf>>.

¹⁷⁵ CIDH, *Caso Tibi vs. Ecuador*. Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, 7 de septiembre de 2004.

quedar sujeta a la división de atribuciones que señale el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio –sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto- y sustraer a otros de ese régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional¹⁷⁶.

Conforme lo referido, se advierte que para el juez García Ramírez, es fundamental que el Estado sea consiente que la obligación de dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, compete absolutamente a todo el aparato estatal, puesto que, esta obligación no puede recaer exclusivamente en una institución o en un órgano gubernamental, sino que, debe ser entendida como una obligación global, esto por cuanto debe cumplirse con todas y cada una de las medidas dispuestas por el órgano internacional ya que su única finalidad es asegurar la reparación de los derechos fundamentales conculcados.

Como ya se refirió anteriormente a criterio de Nash Rojas el desarrollo de la “convencionalidad” en la jurisprudencia de la Corte IDH, ha pasado por cuatro etapas; la *primera* que refiere a su implantación en el sistema, mediante la cual se pretende la efectividad de los derechos consagrados convencionalmente, por medio del reconocimiento de las obligaciones de los estados parte. Adicionalmente, “el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”¹⁷⁷.

Ahora bien, la *segunda* etapa a consideración del autor, tiene como eje central la legitimidad del sistema, destacando que la “Corte IDH no impone un sistema, pero sí establece cuáles son las obligaciones que tiene el intérprete, cualquiera sea el sistema constitucional nacional”¹⁷⁸. Esto, involucra directamente que los jueces nacionales se encuentran sometidos a la convención por lo que están obligados a velar por su efecto útil, evitando la aplicación de normas contradictorias.

En la *tercera* etapa, se destaca que la obligación de respetar y dar cumplimiento a lo dispuesto en el pacto compete a todos los operadores de justicia; bajo este orden

¹⁷⁶ CIDH, *Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala*. Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, 25 de noviembre de 2003.

¹⁷⁷ Rojas, “Control de convencionalidad”, 496.

¹⁷⁸ Rojas, “Control de convencionalidad”, 497.

es indispensable que las “interpretaciones constitucionales y legislativas se adecuen a los principios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal”¹⁷⁹.

Por último, en la *cuarta* etapa, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logra involucrar a todos los órganos públicos, ampliando el espectro de sujetos obligados al cumplimiento de las sentencias emitidas por el órgano internacional. Así, la Corte es enfática en resaltar que “los derechos humanos constituyen un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, de lo «susceptible de ser decidido» por parte de las mayorías en estancias democráticas, en las cuales debe primar un «control de convencionalidad»”¹⁸⁰.

Considerando lo señalado anteriormente y en atención a la teoría de George Scelle¹⁸¹, resulta necesario hacer varias precisiones con relación al “control de convencionalidad” realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz de sus fallos. En la teoría del desdoblamiento funcional de Scelle, los Estados son creadores y destinatarios del derecho internacional, sin embargo, la falta de órganos centralizados y superiores a los Estados que controlen la aplicación de las normas y sentencias, provoca que estos mismos sean los principales responsables de la aplicación del derecho internacional¹⁸². Bajo esta concepción la Corte IDH dos años después, del razonamiento esgrimido por el juez García Ramírez respecto al control de convencionalidad, aparece por primera vez conceptualmente en la jurisprudencia de la Corte IDH -el referido término-, en el caso *Almonacid vs. Chile*, señalando que:

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la

¹⁷⁹ CIDH, *Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010.

¹⁸⁰ CIDH, *Caso Gelman vs. Uruguay*. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

¹⁸¹ Luis Dallanegra Pedraza, “¿Hacia un nuevo Derecho Internacional?”, *Relaciones Internacionales*, No. 20, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), (2001): 53, <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/9886/Documento_completo.pdf?sequence=1>.

El Derecho Internacional tiene cierta característica que lo diferencia del derecho interno de los Estados, más allá de tratarse de un derecho entre Naciones. Como no hay un parlamento del mundo, el derecho internacional es la resultante de un proceso de co-legislación entre los gobiernos que pactan un acuerdo internacional o crean una organización internacional, pero cada uno de los Estados, es individualmente responsable en la medida de su poder por el cumplimiento, en los aspectos que le interesan, de ese acuerdo. George Scelle, es el mentor de este criterio que denominó desdoblamiento funcional. Se da un desdoblamiento funcional; ya que en el ámbito interno, los gobiernos legislan según las pautas constitucionales y en el ámbito internacional se transforman en colegisladores en tanto firman acuerdos internacionales.

¹⁸² Elizabeth Salmón, *Introducción al Derecho Internacional Humanitario* (Lima: Fondo Editorial PUCP, 2004), 35.

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana¹⁸³.

Resulta evidente que, una vez que un Estado ratifica un tratado internacional, como es la Convención Americana, este inmediatamente asume todas obligaciones que derivan del mismo, obligación que afecta a todo el ente estatal, involucrando directamente a los administradores de justicia, para lo cual resulta indispensable que el Poder Judicial considere todos los lineamientos establecidos en la Convención, así como la interpretación y alcances que se le ha dado al mismo a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerada como la última intérprete de la Convención.

Sobre la base de lo mencionado en los párrafos anteriores, se advierte la imperiosa necesidad de un control de convencionalidad, ahora bien, a la par de este surgió la teoría del desdoblamiento, estos dos elementos logran configurar la buena fe de los estados al momento de dar efectivo cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte IDH. Cabe agregar que, la buena voluntad por parte de los estados para dar cumplimiento a las resoluciones internacionales no ha sido inadvertida, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados¹⁸⁴, en su artículo 26, expresamente establece el principio de “*pacta sunt servanda*”¹⁸⁵, principio que obliga a los estados a respetar los tratados que se encuentran en vigor.

El aludido principio, constituye el pilar fundamental del derecho de los tratados, el cual propicia un funcionamiento armónico en la comunidad internacional, “[p]or ello, algunos teóricos han considerado que esta norma representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de las reglas de este derecho”¹⁸⁶.

¹⁸³ CIDH, *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 26 de septiembre de 2006.

¹⁸⁴ *Convención de Viena sobre el derecho de los tratados* (1969).

¹⁸⁵ *Pacta sunt servanda*. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

¹⁸⁶ Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Sentencia C-400/98], 10 de agosto de 1998.

A criterio de Marco Gerardo Monroy Cabra: “El principio *pacta sunt servanda* es una regla independiente del tratado, que es consecuencia de la moral internacional y exigencia de la comunidad internacional...”¹⁸⁷

En este orden de ideas, para Max Sorensen:

... si esa regla se desechara, toda la superestructura del derecho internacional contemporáneo se desplomaría (...). Estas consideraciones han obligado a muchos autores a clasificar la máxima *pacta sunt servanda* como principio general de derecho, para poner de relieve la posición preeminente que ocupa entre las normas de derecho internacional¹⁸⁸.

En este mismo sentido, la Corte Constitucional colombiana ha explicado que el “*pacta sunt servanda*” no sólo significa que los tratados deben ser formalmente acatados sino que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de hacerlos efectivos¹⁸⁹, es pertinente destacar que, este principio además de involucrar la buena fe de los estados, conlleva conjuntamente la prohibición de abuso del derecho¹⁹⁰, esto por cuanto, los estados suscriptores se encuentran impedidos de frustrar el objeto del tratado, es decir la protección directa de los derechos.

Esta aseveración encuentra asidero en lo prescrito en los artículos 18 y 27 del referido tratado internacional que establece lo siguiente:

18. Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado: a) si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado: o b) si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el periodo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que esta no se retarde indebidamente.

De la lectura del artículo *ut supra*, a primera vista se advierte que este involucra un condicionamiento en el accionar de los estados suscriptores de un tratado, ya que inicia con la frase “[u]n Estado deberá abstenerse de actos”; en este sentido, el alcance del mandamiento se encuentra específicamente dirigido a cualquier tipo de acción que

¹⁸⁷ Marco Gerardo Monroy Cabra, *Derecho de los Tratados*, (Bogotá: Editorial TEMIS, 1978), 77.

¹⁸⁸ Michel Virali, “Fuentes del Derecho Internacional”, en Max Sorensen, comp. *Manual de Derecho Internacional Público* (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010), 158.

¹⁸⁹ *Ibíd.*

¹⁹⁰ Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 27 de agosto de 1952 del caso relativo a los derechos de los nacionales de Estados Unidos en Marruecos y el fallo de ese mismo tribunal del 27 de junio de 1986 relativo a las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en Nicaragua y contra Nicaragua.

de forma directa o indirecta pueda llegar a entorpecer la finalidad del tratado suscrito. Vale destacar que, la norma prescribe que la limitación no sólo se encuentra dirigida a los estados miembros, puesto que, la sola manifestación del consentimiento conlleva la obligación de abstenerse de actuar.

Por otra parte, el artículo 27 de la Convención de Viena, ordena que:

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46¹⁹¹.

Más allá de la limitación de accionar, los estados están imposibilitados de invocar disposiciones de ámbito nacional para justificar el incumplimiento de un tratado, es decir, la normativa interna carece de validez ante la normativa internacional -esto exclusivamente en los casos que la normativa nacional vulnere o impida la eficaz protección de los derechos consagrados en el tratado-.

Así, los mentados artículos de la Convención de Viena, tienen como finalidad la generación de una armonía internacional puesto que exige que el orden interno-estatal no vulnere el orden internacional, ya que, ninguno de los estados se encuentran facultados para emitir argumentos de derecho interno como pretexto para no dar cumplimiento a la sentencia internacional, debido a que estas actuaciones provocarían inmediatamente la existencia de criterios unilaterales, mismos que podrían ser de fuerza, pero carecer de razón, es decir, se estaría atendiendo a los “caprichos” de los estados y no a un consenso internacional¹⁹².

En consecuencia, los fallos proferidos por los tribunales internacionales de derechos humanos, no deben tener oposición por parte de las autoridades encargadas a su cumplimiento, así, los genios locales no pueden fungir como falsos espíritus protectores para los estados¹⁹³ suscriptores de la Convención, en este sentido, la “[s]oberanía no quiere decir que el Estado no esté sometido a reglas de derecho

¹⁹¹ **46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados.** 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.

¹⁹² Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Sentencia C-276], 22 de julio de 1993.

¹⁹³ Argentina. Corte Suprema de Justicia de la Nación, [Sentencia *Espósito Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovida por su defensa*], 23 de diciembre de 2004.

internacional que le son superiores: la simple coexistencia de muchos Estado sobre el globo le impone reglas de repartición de competencias”¹⁹⁴.

No obstante de lo referido, vale aclarar que el principio “*pacta sunt servanda*” no puede ser considerado absoluto¹⁹⁵, a criterio de Álvarez Londoño¹⁹⁶, existen límites a las obligaciones de los tratados, específicamente detalla tres: 1) Límites que resultan de los principios generales del derecho¹⁹⁷; 2) Límite fundado sobre una institución jurídica: ejercicio de represalias¹⁹⁸; y, 3) Límites deducidos de consideraciones políticas: teoría de la necesidad¹⁹⁹. Aun cuando existen ciertos límites al cumplimiento de las obligaciones de los tratados, debe entenderse que estas limitaciones atienden a circunstancias atípicas, ya que la generalidad implica la obligación de cumplir con lo dispuesto en el tratado.

Actualmente, son varios los fallos del Organismo Internacional, en los que se resalta la importancia del cumplimiento de sus sentencias, identificando dos aspectos esenciales; en primer lugar, la obligación de los jueces de velar por que el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado con la aplicación de leyes contrarias²⁰⁰, y en segundo lugar, se enfatiza que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada, resulta necesario que la

¹⁹⁴ Luis Fernando Álvarez Londoño, *Derecho Internacional Público*, (Bogotá: Centro Editorial Javeriano CEJA, 1998), 154.

¹⁹⁵ Ver, artículo 33 del “*Proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados*” aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en su período de sesiones 25. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha señalado que un Estado no podrá invocar un estado de necesidad a menos que (i) exista un peligro grave e inminente, (ii) que amenace con dañar un interés esencial del Estado, (iii) que no haya sido provocado por el propio Estado, (iv) que sólo pueda atajarse mediante una conducta contraria a lo establecido por el tratado y (v) que tal conducta no afecte, a su vez, a un interés esencial del Estado víctima.

Ver, Antonio Remiro Brotons, *Derecho internacional* (Madrid: Mac-Graw Hill, 1996). 436.

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha señalado que un Estado no podrá invocar un estado de necesidad a menos que (i) exista un peligro grave e inminente, (ii) que amenace con dañar un interés esencial del Estado, (iii) que no haya sido provocado por el propio Estado, (iv) que sólo pueda atajarse mediante una conducta contraria a lo establecido por el tratado y (v) que tal conducta no afecte, a su vez, a un interés esencial del Estado víctima.

¹⁹⁶ Álvarez Londoño, “Derecho Internacional Público”, 150-151.

¹⁹⁷ Implica: *Excepción de fuerza mayor*: Exonera al Estado de la responsabilidad normalmente incurrida por la inejecución de un tratado. *Excepción de legítima defensa*: Reacción inmediata y espontánea contra una acción de fuerza ilícita.

¹⁹⁸ La represalia es una facultad que poseen los Estados de recurrir a “contra medidas” para hacer respetar un derecho. *Condiciones para el ejercicio de las represalias*: Existencia previa de un acto internacionalmente ilícito, proporcionalidad entre la réplica y la defensa, ausencia de compromiso de no apelación (la Carta de las Naciones Unidas no es clara en lo referente a represalias. *Efectos*: S extiende al carácter obligatorio de las reglas convencionales.

¹⁹⁹ Se considera la noción de la defensa de los intereses por encima de ciertas obligaciones contraídas por los Estados en el contexto internacional (*teoría de la necesidad*).

²⁰⁰ CIDH, *Caso Gelman vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

aplicación de las normas o su interpretación²⁰¹, se encuentren ajustadas al ordenamiento interno así como a la Convención. Estos dos elementos persiguen el cumplimiento del artículo 2²⁰² y 68.1²⁰³ de la Convención, mediante los cuales los Estados Partes se comprometen a “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”²⁰⁴ y “a cumplir con la decisión de la Corte”²⁰⁵.

Por todo lo dicho, se puede afirmar que el control de convencionalidad se presenta como el pilar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que mediante este se pretende el cumplimiento de las decisiones emitidas por el Organismo, este cumplimiento resulta ser fundamental “para la vitalidad e integridad del sistema de derechos humanos de la Organización”²⁰⁶.

Así, atendiendo a la teoría del desdoblamiento, Gozáini ha manifestado que “la sentencia supranacional goza de *executio* pero necesita auxiliarse de la colaboración del Estado Parte para acatar sus resoluciones”²⁰⁷, dadas las condiciones que anteceden, se entendería que el poder de ejecución no se encuentra sujeto al imperio o *autoritas* del fallo, sino a los mecanismos internos que permitan realizar los pronunciamientos vertidos²⁰⁸.

Víctor Manuel Rodríguez Rescia, sostiene que:

La verdadera fuerza conminatoria de los fallos de la Corte debería radicar en el mismo compromiso de los Estados partes de la Convención de cumplir con la decisión de la

²⁰¹ CIDH, *Caso Radilla Pacheco vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009.

²⁰² *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (1969).

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

²⁰³ *Ibíd.*

Artículo 68.-1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

²⁰⁴ *Ibíd.*

²⁰⁵ *Ibíd.*

²⁰⁶ Helio Bicudo, “Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Corte Interamericana de Derechos Humanos, *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI*, Tomo I (Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001), 233.

²⁰⁷ Osvaldo Alfredo Gozáini, *El proceso transicional, particularidades procesales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (Buenos Aires: EDIAR, 1992), 98.

²⁰⁸ Karla Irasema Quintana, *La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ejecución de sus sentencias en Latinoamérica* (Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos): 9, <<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24498.pdf>>.

Corte, tal como lo dispone el párrafo 1 del artículo 68 de la Convención. Esta referencia al “compromiso” de los Estados Partes para cumplir las decisiones de la Corte, no puede utilizarse para disminuirles fuerza coercitiva a los fallos. Más que un compromiso, es una obligación que tienen los Estados partes de respetar los derechos y libertades contemplados en la Convención, de conformidad con el artículo 1.1 de la misma²⁰⁹.

Es menester examinar este tema desde la normativa ecuatoriana, para ello se iniciará con lo expuesto por Diez de Velasco con relación al nuevo Derecho Internacional y su relación directa con los estados:

Este nuevo Derecho Internacional de los Derechos Humanos es, en lo esencial, el resultado de un proceso evolutivo en el que se han relacionado, siempre en forma dialéctica, las competencias estatales, por un lado, y el interés de la Sociedad Internacional, por otro. A lo largo del mismo se ha producido la superación del viejo principio de la competencia exclusiva del Estado y su sustitución por una nueva concepción que define a los derechos humanos como materia de interés internacional. En virtud de esta nueva concepción se establece un modelo de cooperación entre ordenamientos jurídicos que al tiempo que reconoce una competencia primigenia y directa al Estado para establecer mecanismos propios de protección y promoción, define la competencia de la Comunidad Internacional para adoptar normas en dicho ámbito e -incluso- para establecer sistemas internacionales de control y fiscalización del comportamiento estatal²¹⁰.

En efecto, la actual estructura del Estado y del Derecho Internacional permiten un modelo de cooperación entre los dos ordenamientos jurídicos, en la cual se reconoce tanto las competencias como las facultades en materia de protección de derechos humanos. En el ámbito ecuatoriano, esta cooperación es palpable a partir de la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 1317 de 08 de septiembre del 2008²¹¹ mediante el cual se confiere al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad de coordinar las obligaciones originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el sistema universal de derechos humanos, y demás compromisos internacionales en dicha materia.

Así entre las principales funciones del Ministerio de Justicia se encuentran:

1. Remitir a la autoridad competente las resoluciones para que ordene el inicio de investigaciones y la determinación de responsabilidades individuales relacionadas con la violación de derechos humanos;

²⁰⁹ Víctor Manuel Rodríguez Rescia, *La Ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana* (Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 1997), 477.

²¹⁰ Diez de Velasco, “Instituciones de derecho internacional público”, 650.

²¹¹ Ecuador, *Decreto Ejecutivo* No. 1317 [2008]. Publicado en el Registro Oficial No. 428 de 18 de septiembre del 2008.

2. Coordinar con el Ministerio de Finanzas el pago de la reparación material e inmaterial a las víctimas de violación de derechos humanos.
3. Coordinar con la entidad del Estado competente la realización de medidas necesarias para dar cumplimiento integral a las obligaciones.
4. Preparar proyectos de reforma legal para adecuar el sistema normativo a los estándares internacionales de derechos humanos.
5. Mantener a los beneficiarios, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General del Estado y demás órganos interesados, informados del avance de las gestiones de cumplimiento coordinadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
6. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación interna en el Ecuador del cumplimiento de las normas jurídicas y políticas nacionales en derechos humanos, a efectos de incorporar los datos pertinentes en los informes del Estado a los órganos de los tratados en esta materia.
7. Participar en las reuniones internacionales de derechos humanos, incluida la presentación de informes ante organismos internacionales en este ámbito, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
8. Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e integración, poner en conocimiento de las entidades públicas y la sociedad civil, las recomendaciones que emanen de comités u órganos internacionales de derechos humanos, así como realizar la evaluación de su cumplimiento.

Este Decreto Ejecutivo, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, representó un muy significativo y representativo avance en la consolidación de los procesos de aplicación de las resoluciones de los órganos de protección de derechos humanos en el ámbito interno de nuestro país²¹². En este sentido, se pretendió que las obligaciones internacionales provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -específicamente las que se desprenden de sus sentencias- puedan materializarse.

De allí que, en el caso ecuatoriano, el Decreto Ejecutivo 1317 debe ser entendido a la luz del derecho internacional de los derechos humanos como una acción positiva por parte del Estado ecuatoriano para conferir, al menos en un nivel primario de coordinación interinstitucional, eficacia jurídica a las resoluciones en mención²¹³.

Concomitantemente a lo referido vale destacar que el ordenamiento jurídico ecuatoriano -a más de otorgar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad de coordinar las obligaciones originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- también ha previsto la acción por incumplimiento²¹⁴, garantía

²¹² Francisco Albuja Varela, *Ejecución de sentencias internacionales. Mecanismos para su efectividad* (Quito: Corporación Editora Nacional, 2015), 23.

²¹³ *Ibíd.*, 24.

²¹⁴ La base legal de la acción por incumplimiento se encuentra en los artículos 93 y 436 numeral 5 de la Constitución; 52 a 57 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y

constitucional incorporada a partir de la vigencia de la Constitución de 2008 por medio de la cual se pretende el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos.

El reconocimiento de la citada garantía respecto de las sentencias e informes de derechos humanos implica un reconocimiento constitucional de la fuerza vinculante de estas decisiones²¹⁵, así como también de que su incumplimiento constituye un quebrantamiento del ordenamiento jurídico internacional desarrollado para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto es digno de resaltar y sin duda constituye un avance en materia de derechos humanos en Ecuador²¹⁶. Finalmente se ha de puntualizar que la Corte Constitucional del Ecuador es el órgano jurisdiccional encargado de conocer y resolver este tipo de acciones²¹⁷ de conformidad a lo establecido en la Constitución y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

43 a 44 de la Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

²¹⁵ Albuja, “Ejecución de sentencias internacionales”, 31, 32, 84.

La propia Corte Interamericana ha expresado que “Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (*effet utile*) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos.

El *effet utile* que los Estados otorgan a las decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, tiene suma importancia en el desarrollo de este capítulo en la medida en que, por una parte, procuramos establecer la relación existente entre las normas internacionales de derechos humanos y su aplicación directa en el Ecuador a través de las disposiciones constitucionales que así lo garantizan; y por otra, pretendemos equiparar las sentencias interamericanas como una expresión de la normativa internacional de derechos humanos de naturaleza obligatoria y vinculante (derecho objetivo).

²¹⁶ Daniela Salazar Marín, *La acción por incumplimiento como mecanismo de exigibilidad de sentencias e informes de organismo internacionales de derechos humanos respecto de Ecuador*. Vol. 15 enero-junio (Quito: Iuris Dictio, 2013), 101. <
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_15/iurisdictio_015_005.pdf.

²¹⁷ El señor José Alfredo Mejía Idrovo, por sus propios derechos, presentó una acción por incumplimiento del “informe No. 07/09 de admisibilidad y fondo del caso No. 12.530 aprobado en el Periodo Ordinario de sesiones No. 134 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” dictado el 17 de marzo de 2009. El 21 de agosto de 2013 la Corte Constitucional del Ecuador dictó la sentencia No. 008-13-SAN-CC dentro de la causa No. 0010-10-AN. En la referida sentencia, la Corte verificó que el Estado ecuatoriano dio cumplimiento íntegro a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, recogiendo y cumpliendo todas las recomendaciones realizadas por la Comisión, motivo por el cual la Corte Interamericana resolvió archivar el expediente del caso. Así la situación jurídica motivo de la acción fue atendida en su totalidad. En virtud de lo anotado el Pleno del Organismo resolvió: 1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales en la presente acción. 2. Negar la acción por incumplimiento presentada por José Alfredo Mejía Idrovo.

Con estas anotaciones, se puede afirmar que el Ecuador mediante su normativa constitucional ha pretendido generar una unidad e identidad con el Derecho Internacional en materia de protección de derechos humanos.

En términos generales, se analizó la vinculatoriedad de las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; resulta pertinente considerar la característica diferenciadora entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -TEDH-, radicando su divergencia en el carácter de sus fallos, así, la Corte IDH ha sido enfática al determinar que sus fallos poseen un efecto obligatorio y un carácter definitivo y ejecutable conforme lo establecido por el propio ente y en atención a lo dispuesto en los artículos 63, 67, y 68 de la Convención; por su parte, el propio Tribunal Europeo manifestó en el caso MARKX contra Bélgica, que sus sentencias son “esencialmente declarativas”²¹⁸.

Precisamente al respecto Rodríguez Rescia, ha señalado que:

... la falta de ejecutividad ha provocado que no exista acuerdo sobre los efectos que se derivan de esas sentencias declarativas, ya que cierto sector doctrinal considera que al ser una sentencia meramente declarativa no impone al Estado interesado a obligación de dar eficacia interna a la misma ya que, por otra parte el artículo 50 del Convenio Europeo establece un mecanismo de reparación sustitutoria. El mismo Tribunal europeo en el caso MARCKX, sostuvo que las sentencias del mismo “*dejan al Estado la decisión de los medios a utilizar en su ordenamiento jurídico interno para adaptarse a lo que impone el artículo 53*”²¹⁹.

Queda claro entonces que las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo, son meramente declarativas, producto de lo cual queda al libre albedrío de los estados dar o no cumplimiento a los fallos emitidos por el referido organismo. Dadas las condiciones que anteceden, debe entenderse que el efecto ejecutorio de una sentencia, es el elemento constitutivo que despliega la posibilidad de que un fallo o resolución emanado por una autoridad jurisdiccional -nacional o internacional- sea efectivo, es decir, que pueda llevarse a cabo lo que en ella se dispone. Ahora bien, la ejecución de una sentencia puede implicar el uso de fuerza o coerción, en este sentido, Alberto Soria, señala que “[l]a fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene una resolución judicial de ser susceptible de ejecución forzosa, es decir, de poner en

²¹⁸ Tribunal Europeo, sentencia de 13 de junio de 1979.

²¹⁹ Rodríguez Rescia, “La Ejecución de las sentencias”, 459-460.

marcha un aparato coactivo capaz de obligar al sujeto incumplidor al respeto del fallo”²²⁰.

A criterio del mentado autor, existen dos principios básicos que rigen el sistema de ejecución de las sentencias del TEDH. En primer lugar, la ejecución de la sentencia es única y exclusivamente responsabilidad del Estado infractor, puesto que -como ya se señaló anteriormente- “[l]as sentencias del Tribunal Europeo no constituyen un título de ejecución contra el Estado, que es «dueño y señor a la hora de ejecutarlas»”²²¹; y, en segundo lugar, la vigilancia con respecto a la ejecución de las sentencias corresponde al Comité de Ministros^{222/223}, sin embargo, su función no implica o asegura la ejecución de los fallos, puesto que se limita a una mera función de control.

Brevemente, conforme a lo anotado en los párrafos precedentes, se puede afirmar que, la declaratoria de una vulneración “imputable a un Estado no implica por sí sola *ipso facto* la derogación, retirada, modificación o reforma del acto del Estado que originó el incumplimiento”²²⁴, esto en concordancia con lo que prescribe el artículo 50²²⁵ del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con lo que se confirma implícitamente la ausencia de una obligación por parte de los estados, para dar cumplimiento a una sentencia emitida por el TEDH.

En este punto resulta pertinente considerar que el artículo 53²²⁶ del referido cuerpo normativo, “es categórico acerca del deber de los Estados de crear las condiciones jurídicas generales necesarias para que un pronunciamiento del TEDH

²²⁰ Alberto Soria Jiménez, *La problemática ejecución de las sentencias del Tribunal europeo de Derechos Humanos* (Madrid: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 12. No. 36. septiembre-diciembre, 1992), 314.

²²¹ Aristidis S. Calogeropoulos-Stratis, “L’efficacité des mécanismes juridictionnels de protection des personnes privées dans le cadre européen”, en Alberto Soria Jiménez, *La problemática ejecución de las sentencias del Tribunal europeo de Derechos Humanos* (Madrid: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 12. No. 36. septiembre-diciembre, 1992), 320.

²²² *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales* (1979). Artículo 54.- La sentencia del Tribunal será trasladada al Comité de Ministros, que vigilará su ejecución.

²²³ Jiménez, “La problemática ejecución”, 320.

²²⁴ *Ibíd.*, 322.

²²⁵ *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*, (1979). Artículo 50.- Si la decisión del Tribunal declara que una resolución tomada o una medida ordenada por una autoridad judicial o cualquier otra autoridad de una Parte Contratante se encuentra total o parcialmente en oposición con obligaciones que se derivan del presente Convenio, y si el derecho interno de dicha Parte sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de esta resolución o medida, la decisión del Tribunal concederá, si procede, una satisfacción equitativa a la parte lesionada.

²²⁶ *Ibíd.*

Artículo 53.- Las Altas Partes Contratantes se comprometen a conformarse a las decisiones del Tribunal en los litigios en que sean parte.

pueda generar los efectos internos que exige la plena reparación de la vulneración de derechos o libertades”²²⁷; no obstante, pese a que el artículo 53 del Convenio compromete a las partes -estados- a someterse y conformarse a las decisiones del Tribunal Europeo en los litigios que sean partes, sin embargo, no existe ningún artículo mediante el cual los estados transfieran sus competencias al Tribunal, motivo por el cual resulta ser sumamente amplio el margen de discrecionalidad que tiene los estados para dar o no efectivo cumplimiento a las sentencias, producto de lo cual las decisiones en muchas ocasiones han pasado totalmente inadvertidas.

Frente a lo dicho en los párrafos precedentes, resulta evidente cual es elemento diferenciador entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, radicando su divergencia en la ejecución de sus fallos. Así, mientras en el sistema europeo de forma explícita se ha manifestado que sus fallos no pasan de ser elementos meramente declarativos, la Corte IDH, se ha esforzado por consolidar un verdadero sistema de ejecución de sus resoluciones, esto, en base al compromiso adquirido por parte de los estados miembros de la Convención, compromiso radicado en la buena fe de los estados, así como en la reforma legislativa que cada uno de los estados partes se obligan a realizar en base al artículo 68.2²²⁸ de la Convención, lo que significa que las sentencias emitidas por la Corte IDH poseen un carácter obligatorio, definitivo e inapelable²²⁹.

A manera de colofón, se puede advertir que de una u otra manera tanto los fallos emitidos por los dos organismos internacionales, carecen de una verdadera fuerza de ejecutoria, esto, pese a los constantes esfuerzos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por radicar su competencia y así propender a un cumplimiento integral de sus fallos; como ya se refirió anteriormente, para lograr la ejecución de las sentencias de carácter supranacional, los órganos que las emiten ineludiblemente deben auxiliarse de la colaboración de los estados partes, ya que en un última instancia el cumplimiento de estas radica en el Estado, es decir, se sustenta en la «buena fe» respecto del compromiso adquirido por cada uno de los miembros.

²²⁷ Jiménez, “La problemática ejecución”, 322.

²²⁸ *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (1969).

Artículo 68.2.- La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

²²⁹ *Ibíd.*

Artículo 67.- El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

2.1.1. Mecanismos de la Corte Interamericana para ejecutar sus sentencias

Según lo anotado en el acápite precedente, el poder de ejecución de las sentencias emitidas por los órganos internacionales no se encuentra sujeto al imperio o *autocritas* del fallo, sino que, se encuentra obligado a recurrir a los mecanismos internos de cada estado miembro para realizar efectivamente los pronunciamientos emitidos por el orden supranacional.

En este orden de ideas se puede citar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Genie Lacayo vs. Nicaragua*, en la sentencia de 27 de enero de 1997, en la que textualmente al referirse al «alcance de la competencia», la Corte IDH manifestó:

... de acuerdo con el derecho internacional general, la Corte Interamericana no tiene carácter de tribunal de apelación o de casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional; solo puede (...) señalar las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención (...) pero carece de competencia para subsanar dichas violaciones en el ámbito interno...²³⁰.

Sobre la base de lo anotado, Fix-Zamudio²³¹, sostuvo que las sentencias de la Corte IDH poseen un carácter imperativo, pero carecen de carácter ejecutorio, puesto que, son los propios estados los que deben cumplir las sentencias atendiendo a su ámbito interno. Significa entonces que, la ejecución de las sentencias en gran parte depende de la cooperación que exista por parte del Estado condenado en un fallo para que este sea ejecutado o no.

Debe resaltarse que, pese a que la ejecución de una sentencia atiende a una cuestión de discrecionalidad y buena fe por parte del estado infractor, este se encuentra en la obligación de observar lo prescrito en el artículo 29 de la Convención, norma “que entrega ciertas luces que son plenamente aplicables a la etapa de ejecución del fallo”²³², textualmente el artículo dispone:

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

²³⁰ CIDH, *Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua*. Sentencia de 27 de enero de 1997.

²³¹ Héctor Fix-Zamudio, “Los derechos humanos y su protección jurídica y procesal en Latinoamérica”, en Diego Valdés y Rodrigo Gutiérrez, coordinadores. *Derechos Humanos, memorias del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional* (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2001), 23.

²³² Tábata Santelices y Mayra Feddersen, “Ejecución de sentencias internacionales sobre derechos humanos en Chile”, *Anuario de derecho público* (2010): 112.

- a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
- b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
- c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
- d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza²³³.

De la transcripción precedente se aprecia tres cuestiones, en *primer lugar*, ninguna de las disposiciones de la Convención, pueden ser interpretadas en el sentido que permita la limitación, menoscabo o pretenda impedir el goce o ejercicio de los derechos; en *segundo lugar*, “la ejecución de los fallos interamericanos no pueden ser limitados los derechos o libertades que puedan estar reconocidas en las leyes del Estado o en otra convención en que éste sea parte”²³⁴; y, en *tercer lugar*, la Convención prohíbe “excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”²³⁵.

En este punto, resulta pertinente hacer referencia a la prohibición de regresividad o prohibición de retroceso, principio que “forma parte del bagaje teórico tanto del derecho internacional como de los derechos humanos, como del derecho constitucional doméstico”²³⁶. Así, a criterio de Courtis, autores de la talla de Konrad Hesse han sostenido que la prohibición de regresividad no es ajena al derecho constitucional, “en materia de derechos sociales, la teoría de la irreversibilidad (*Nichtumkehrbarkeitstheorie*)”²³⁷, involucra directamente la obligación del Estado de respetar “el contenido sustantivo de las obligaciones sociales”²³⁸, contenido que se desprende del texto constitucional.

²³³ Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

²³⁴ Santelices y Feddersen, “Ejecución de sentencias”, 112.

²³⁵ Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

²³⁶ Christian Courtis, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios” en Christian Courtis, (compilador), *Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales* (Buenos Aires: Editores del Puerto s.r.l., 2006), 3.

²³⁷ Ver, Konrad Hesse, *Grünzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik (Deutsch-land: CF Müller, Heidelberg y Karlsruhe, 1978)*, 86-87, citado por Parejo Alfonso, Luciano Estado social y administración pública (Madrid: Civitas, 1983), 53-54, en Christian Courtis, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios” en Christian Courtis, (compilador), *Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales* (Buenos Aires: Editores del Puerto s.r.l., 2006), 17.

²³⁸ Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

En este sentido, “una vez que el legislador o la Administración ha regulado los diferentes campos mandados por la Constitución, toda medida regresiva que afecte el contenido esencial de las regulaciones establecidas es inconstitucional. Se trata de la irreversibilidad de las conquistas sociales alcanzadas -al menos de su contenido esencial-²³⁹.

Compaginando lo anotado, se ha de considerar que el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiere al «Desarrollo Progresivo», normativa mediante la cual los estados “se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos”²⁴⁰.

Esta prescripción tiene concordancia con los artículos 1, 2 y 29 del mismo cuerpo normativo, ya que involucran, el compromiso de respetar los derechos reconocidos en la Convención, así como la obligación de los estados de adoptar todas las disposiciones de derecho interno conducentes a garantizar el ejercicio de estos; y, finalmente, limita la libre interpretación del tratado.

La conjugación de los tres elementos resultan ser la base para la prohibición de regresividad, así como, la irreversibilidad de los derechos, considerando que los derechos y libertades “no admiten relativismos, de modo que sería inconcebible que lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la persona, mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental”²⁴¹. Lo anotado implica que los estados no pueden emitir actos administrativos, normas, reglamentos, resoluciones relativas a derechos subjetivos que produzcan efectos de limitación total o parcial al tratado o, pero aun que desconozcan derechos.

En atención a lo expresado, desde ningún punto de vista la Convención puede ser utilizada como “excusa para empeorar las condiciones de goce de los derechos establecidos por el ordenamiento jurídico interno o por otros tratados internacionales de los que el país en cuestión sea parte”²⁴².

Ahora bien, retomando lo analizado, los tres principios -que se desprenden del artículo 29 de la Convención-se constituyen como los estándares mínimos que deben

²³⁹ *Ibíd.*

²⁴⁰ *Ibíd.*

²⁴¹ Pedro Nikken, “La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales” en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos Vol. 52 (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010), <<https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1633/revista-iidh52.pdf>>, 71.

²⁴² Courtis, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales”, 15.

ser observados por el Estado infractor al momento de seleccionar un procedimiento para la ejecución de las sentencias internacionales²⁴³.

No obstante de lo anotado, es crucial considerar que las buenas intenciones que convergen en la Convención y que fueron la base de su construcción, no van más allá de eso, de ser un cúmulo normativo que tiene como objetivo primordial la protección de los derechos tanto en la esfera nacional como internacional; empero, llevar a la práctica y al ejercicio jurídico cada uno de los principios y prescripciones normativas ha sido un obstáculo infranqueable, esto en virtud de la reticencia de algunos estados en cuanto a dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de ámbito internacional, puede también afirmarse que estas limitaciones en gran medida atienden a la falta de un mecanismo de coerción que obligue a los estados a ejecutar lo resuelto por las cortes internacionales.

En este mismo sentido, pese a la existencia de los tres principios referidos en los párrafos precedentes, así como las disposiciones contenidas en los artículos 67 y 68 de la Convención, estos no pueden ser interpretados en términos de ejecutoria; esta falencia en la legislación internacional provoca que el procedimiento de ejecución de las sentencias quede “a discreción del Estado, o lo que es más peligroso del gobierno de turno”²⁴⁴.

Por otro lado, vale considerar el artículo 65 de la Convención, el cual literalmente señala “[l]a Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior”²⁴⁵.

El someter a consideración de la Asamblea General de la OEA, un informe respecto de la labor realizada por la Corte, tiene dos finalidades, en primer lugar, dar a conocer a los estados miembros las sentencias emitidas por la Corte, lo que involucra publicitar las resoluciones, así como las líneas de la CIDH en materia de protección de derechos, y, en segundo lugar, exponer internacionalmente a los estados que no han procedido con la ejecución de las mismas.

Esto tiene como objetivo poner de manifiesto la falta de observancia a los tratados internacionales, en cuanto respecta a la obligación de los miembros a acatar

²⁴³ Santelices y Feddersen, “Ejecución de sentencias”, 113.

²⁴⁴ *Ibíd.*, 104.

²⁴⁵ *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (1969).

de manera irrestricta lo resuelto y más aún si versa sobre un tema de vulneración a derechos.

En concordancia con lo anotado, se ha de señalar que la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados Miembros, quienes tienen derecho a hacerse representar y a emitir su voto. La definición de los mecanismos, políticas, acciones y mandatos de la Organización tienen su origen en la Asamblea General²⁴⁶.

El artículo 54 de la Carta de Organización de los Estados Americanos, determina que, la Asamblea tiene la atribución de “[d]ictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del sistema interamericano”²⁴⁷. Bajo este esquema se ha de recalcar que el artículo 23 del mismo cuerpo normativo prescribe que las medidas que se adopten tendrán como finalidad el “mantenimiento de la paz y seguridad”²⁴⁸.

Concomitantemente, se ha de hacer mención al artículo 73 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dicta: “[s]olamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión (...) que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos”²⁴⁹.

Así, se podría afirmar que, la puesta en consideración de la Asamblea General de la Organización, acarrearía directamente la materialización de una sanción o medida ya sea moral o política para el Estado que no ha dado efectivamente cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia expedida por la Corte IDH²⁵⁰, esto con el único objetivo de mantener la paz y la seguridad entre los estados miembros; sin embargo, a criterio de Víctor Manuel Rodríguez, “al ser la Asamblea General un órgano eminentemente político, puede resultar que el Estado infractor utilice los mecanismos políticos necesarios para que la resolución del seno no se emita, pierda fuerza conminatoria”²⁵¹. De ahí que se entiende que, la Asamblea no sea considerada

²⁴⁶ Organización de los Estados Americanos <http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp>.

²⁴⁷ *Carta de Organización de los Estados Americanos* (1967).

²⁴⁸ *Ibíd.*

²⁴⁹ *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (1969).

²⁵⁰ El artículo 73 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que, para dictar cualquier tipo de resolución que acarree una sanción se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión.

²⁵¹ Rodríguez Rescia, “La Ejecución de las sentencias”, 478.

como el foro más idóneo para conocer sobre el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte IDH.

Esta aserción, tiene asidero en lo ocurrido durante el Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en el año 1990. En esta oportunidad la Corte no tuvo oportunidad de informar en su proyecto de informe anual a la Asamblea General sobre el incumplimiento por parte de Honduras, respecto de las sentencias de interpretación en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz²⁵², esto por cuanto, no fue posible obtener el apoyo necesario de parte de los representantes de los Estados requeridos para que se emitiera una resolución en ese sentido²⁵³.

No obstante, el Presidente de la Corte en ese momento, juez Héctor Fízig Zamudio, hizo una exhortación en ese sentido, destacando:

Debo ahora abordar un asunto delicado y de trascendental importancia para el futuro del sistema regional de protección internacional de derechos humanos, el cual tiene que ver con la eficacia de las resoluciones del Tribunal (...) Honduras, que compareció ante la Corte a lo largo de varios años durante la tramitación de los casos “Velásquez Rodríguez”, “Godínez Cruz” y “Fairén Garbi y Solís Corrales” manifestó expresamente su intención de acatar las sentencias que establecieron las indemnizaciones a favor de los familiares de las víctimas en los dos primeros casos. Sin embargo, se limitó a cumplir las citadas sentencias de indemnización sin cubrir los recargos compensatorios ordenados en las sentencias interpretativas (...) Por eso, al someterse a la Asamblea General el proyecto de resolución sobre el informe de labores de la Corte, incluimos una exhortación al Gobierno de Honduras no desatenderá la exhortación que le haga la Asamblea y cumplirá con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos... [c]on ello no sólo dar[á] un ejemplo digno de emular por todos los demás Estados americanos y evitará que los fallos en mención se ejecuten internamente por el procedimiento vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado, sino que pasa[ía] a la historia como el primer Estado que acató las sentencias de esta tribunal internacional...²⁵⁴.

Dadas las condiciones que anteceden, se puede afirmar que la comparecencia ante la Asamblea de la OEA, aspira generar una sanción de tipo moral, ya que la reputación o «mala conducta» queda expuesta ante un foro internacional, producto de lo cual las relaciones del estado infractor podrían verse afectadas con otros países. Sin embargo, esta afectación al estado no asegura el cumplimiento de la sentencia.

²⁵² Posteriormente Honduras dio cumplimiento a las citas sentencias, así, el 10 de septiembre de 1996, la CIDH consideró que: “se infiere del examen de lo manifestado por las partes y de la documentación recibida, que Honduras ha dado cumplimiento a lo estipulado por el artículo 68.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que impone a los Estados la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte”.

²⁵³ Rodríguez Rescia, “La Ejecución de las sentencias”, 479-480.

²⁵⁴ *Ibíd.*

Como consecuencia de lo anotado en los párrafos precedentes, se puede asegurar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de mecanismos para la ejecución de sus sentencias, limitándose a generar una exposición del estado infractor en la plataforma internacional, acciones que no pasan de ser una sanción moral y política, la cual en muchos casos ni siquiera logra materializarse²⁵⁵.

La evidente y palpable falta de mecanismos por parte de la Corte IDH, dan luces respecto del vacío jurídico de la legislación internacional, aspecto que resulta ser preocupante ya que la deficiencia jurídico-técnica atenta contra la confianza del sistema interamericano; en este sentido, Jacoby y Folgueiro, han sido categóricos al aseverar que “el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es un sistema de justicia que corre el peligro de perder legitimidad si sus decisiones producen un mero efecto testimonial²⁵⁶, ya que “un verdadero sistema de justicia es aquel en el cual las relaciones pueden efectivizarse”²⁵⁷.

Como producto de lo referido se puede concluir que la Convención no estaría surtiendo el efecto deseado, así como tampoco la Corte IDH estaría cumpliendo con el propósito por el cual fue creada, puesto que sus resoluciones no pasan de ser simple retórica, deviniendo en un segmento ilusorio del sistema que las produce²⁵⁸.

Finalmente debe destacarse que la falta de ejecutoria y una total ausencia de mecanismos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ejecutar

²⁵⁵ Rodríguez Rescia, “La Ejecución de las sentencias”, 478.-479. Uno de los problemas de índole práctico para que el proyecto de resolución del informe anual de la Corte que dé cuenta del incumplimiento de sus sentencias pueda llegar al seno de la Asamblea General, es que dicho proyecto no es de conocimiento directo de ésta. Primero debe ser aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, que es la que envía el proyecto final a la Asamblea General. Si en esta fase se suprime por cualquier motivo la mención del incumplimiento de algún fallo de la Corte, se estaría obstaculizando el deber de ésta de señalar “[d]e manera especial y con las recomendaciones pertinentes... los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”. Un ejemplo que ilustra la inconveniencia del control político de la Asamblea General de la OEA lo constituyen el incumplimiento por parte de Honduras, de dos sentencias de interpretación de los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, que posteriormente si fueron debidamente cumplidas por el Estado, y que dio lugar a que se tuvieran por terminados ambos casos. Cuando el Gobierno de Honduras aún no había cumplido con dichas sentencias, la Corte Interamericana concluyó dentro de su proyecto de informe anual dicho incumplimiento. No obstante, la Corte no tuvo oportunidad de informar a la Asamblea General de la OEA dicho incumplimiento, de conformidad con el artículo 65 de la Convención, debido a que no fue posible obtener el apoyo necesario de parte de los representantes de los Estados requeridos para que se emitiera una resolución en ese sentido.

²⁵⁶ Pablo Miguel Jacoby y Hernán Luis Folgueiro, “La búsqueda de una reparación integral para las violaciones de derechos humanos. Reflexiones a partir del caso “AMIA”, en Edgardo Alberto Donna, direc., *Revista de Derecho Procesal Penal – La injerencia en los derechos fundamentales del imputado III* (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2007), 598.

²⁵⁷ *Ibíd.*, 599.

²⁵⁸ Sergio García Ramírez, *La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2001), 1127.

sus sentencias, ya fue visualizado, Cançado Trindade, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (período 1999-2004), propuso que “[p]ara asegurar el *monitoreo continuo* del fiel cumplimiento de todas las obligaciones convencionales de protección, y en particular de los fallos de la Corte”²⁵⁹ debía acrecentarse la parte final del artículo 65, con la siguiente frase: “*La Asamblea General los remitirá al Consejo Permanente, para estudiar la materia y rendir un informe, para que la Asamblea General delibere al respecto*”²⁶⁰.

La implementación de la referida frase a criterio del juez supliría la “laguna en cuanto a un mecanismo, a operar en *base permanente* (y no solamente una vez por año ante la Asamblea General de la OEA), para supervisar la fiel ejecución, por los Estados Partes demandados, de las sentencias de la Corte”²⁶¹.

Aspecto que a su vez legitimaría las actuaciones que actualmente la Corte ejerce a *motu proprio* para dar cumplimiento con lo prescrito en el artículo 65 de la Convención, lo que de manera conjunta coadyuva a reivindicar y hacer hincapié en la obligación de los estados de dar fiel cumplimiento a las resoluciones expedidas por el órgano internacional.

De igual manera el presidente de la Corte IDH, en el 2003 resaltó la necesidad de modificar el artículo 68 del mentado cuerpo normativo, puesto que, percibió la necesidad de asegurar la fiel ejecución de las sentencias en el ámbito nacional, esto una vez advertida la falta de iniciativa de dar cumplimiento a las sentencias por parte de los estados miembros, en esta línea de pensamiento propuso que al final del artículo 68 se agregue el siguiente texto: “*En caso de que dicho procedimiento interno todavía no exista, los Estados Partes se comprometen a establecerlo, en conformidad con las obligaciones generales estipuladas en los artículos 1(1) y 2 de esta Convención*”²⁶².

Pese a los esfuerzos de Cançado Trindade por modificar la Convención, para que los fallos emitidos por la Corte IDH cuenten con un respaldo en la norma que permita conminar a los estados la ejecución de sus fallos y al mismo tiempo los obligue a contar con todos los mecanismos necesarios para su fiel cumplimiento, no ha existido

²⁵⁹ Antônio Augusto Cançado Trindade, “El nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008) y su proyección hacia el futuro: La emancipación del ser humano como sujeto del derecho internacional”, en Antônio Augusto Cançado Trindade y Manuel E. Ventura Robles, *El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003), 83.

²⁶⁰ *Ibíd.*

²⁶¹ *Ibíd.*, 84.

²⁶² *Ibíd.*, 86.

ningún pronunciamiento a su favor, por lo que hasta la presente fecha la Corte IDH carece de fuerza de ejecutoria y mucho menos de mecanismos efectivos que coadyuven al cumplimiento integral de sus sentencias, recayendo esta potestad en los estados infractores. Por este motivo resulta imperioso la modificación de la legislación internacional en materia de cumplimiento de sentencias, así las sentencias pasarían de ser disposiciones vacías a ser verdaderos decretos que potencien el sistema.

2.1.2. Proceso de seguimiento de cumplimiento de sentencias a la luz de la Corte Interamericana de derechos humanos

Atendiendo a lo anotado se puede precisar dos cuestiones con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en primer lugar, la naturaleza propia del órgano provoca que sus sentencias carezcan de fuerza ejecutoria, y en segundo lugar no existe ningún mecanismo concreto mediante el cual la Corte se encuentre facultada para conminar al cumplimiento de sus fallos.

Pese a lo manifestado y considerando que la Convención en ningún momento determina de manera expresa la facultad de la Corte IDH de dar inicio a una «etapa de seguimiento» de sus sentencias, este proceso se ha iniciado en virtud de lo que dispone el artículo 65 de la Convención, “[d]e manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”²⁶³.

Por su parte, el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 63²⁶⁴ «Supervisión de Cumplimiento de Sentencias y otras decisiones del Tribunal», establece lo siguiente:

Artículo 63. Supervisión de Cumplimiento de Sentencias y otras decisiones del Tribunal

1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes legales. La Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus representantes.

²⁶³ *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (1969).

²⁶⁴ *Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (2009). Adicionado por la Corte durante su Octogésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, en la sesión celebrada el día 29 de enero de 2009.

2. La Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes sobre el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos efectos podrá también requerir las pericias e informes que considere oportunas.
3. Cuando lo considere pertinente, el Tribunal podrá convocar a las partes a una audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
4. Una vez que el Tribunal cuente con la información pertinente, determinará el estado del cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime pertinentes²⁶⁵.

Conforme lo anotado se advierte que, el hecho de que la CIDH tenga que informar a la Asamblea General de la OEA de los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos, se constituye inmediatamente en el fundamento jurídico para que el mentado organismo realice la labor de supervisión de sus decisiones, ya que sin llevar a efecto la misma difícilmente puede informar al respecto²⁶⁶.

La práctica pone de manifiesto que, desde el primer momento, la CIDH ha realizado la supervisión de sus decisiones para lo cual emite Resoluciones de cumplimiento. A tales efectos ha instituido un procedimiento escrito²⁶⁷.

De acuerdo con lo anotado, el inicio de la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias compete de manera exclusiva al Tribunal; ahora bien, previo a emitir el informe o resolución en el que se determina el estado de cumplimiento de las sentencias, el Tribunal se encuentra facultado para requerir informes estatales y hasta informes periciales sobre datos relevantes, información que contribuirá a precisar las medidas adoptadas por parte del Estado infractor para dar cumplimiento al fallo emitido por la Corte IDH, así como también para determinar el grado de satisfacción de la víctima. De presentarse el caso, que la información no sea suficiente el Tribunal puede convocar a las partes procesales -Estado y víctima- a una audiencia, en la cual el Estado se encuentra obligado a exhibir toda la documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte. Una vez que el Tribunal cuenta con toda la información pertinente, se determina el estado de cumplimiento de la sentencia y se procede a emitir la resolución que crea pertinente. La etapa de supervisión se mantiene

²⁶⁵ *Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (2009).

²⁶⁶ Ana Salinas de Frías y Marina Vargas Gómez-Urrutia, coordinadores, *Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carillo Salcedo*. Tomo II (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005), 1261-1263.

²⁶⁷ *Ibíd.*

abierta hasta que la Corte “considera que se ha producido un total y cabal cumplimiento de la sentencia”²⁶⁸.

Como se puede observar en el acápite anterior, “[l]a Asamblea General de la OEA no ha cuestionado la competencia de la CIDH para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, incluso se podría interpretar que la ha ratificado al considerar que los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las decisiones de la CIDH se deben presentar ante dicho Tribunal”^{269/270}.

Los Estados han aceptado la competencia de la CIDH a este respecto, sin perjuicio de que ésta, en algunas ocasiones, haya tenido que informar a la Asamblea General de la OEA de determinados incumplimientos e incluso solicitarle a dicho órgano político que hiciera una llamada de atención al Estado en cuestión²⁷¹.

²⁶⁸ Informe anual 2014 - Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014):74, <http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2014.pdf>.

²⁶⁹ AG/RES.1330 (XXV-0/95) de 9 de junio de 1995.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Resolución aprobada en la novena sesión plenaria, celebrada el 9 de junio de 1995). LA ASAMBLEA GENERAL, VISTAS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.3208/95) y la presentación que de dicho informe hiciera el Presidente de la Corte al Consejo Permanente; y CONSIDERANDO: Que el artículo 53 (f) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece como atribución de la Asamblea General la consideración de las observaciones y recomendaciones que eleve el Consejo Permanente de conformidad con el artículo 90 (f) de la Carta sobre los informes de los órganos, organismos y entidades de la Organización; Que el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la Corte someterá a la consideración de la Asamblea General un informe sobre su labor en el año anterior y que, de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos; y Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual al Consejo Permanente y que éste ha remitido a la Asamblea las observaciones y recomendaciones sobre el mismo, RESUELVE: 1. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organización hizo al informe anual. 2. Agradecer al Gobierno de Canadá y a la Unión Europea por la contribución que han hecho a la Corte. 3. Exhortar al Gobierno de Suriname a que se sirva informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las sentencias sobre los casos Aloeboetoe y otros y Gangaram Panday. 4. Instar a los Estados miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho a que consideren seriamente ratificar o acceder a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y que acepten la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5. Otorgar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el apoyo necesario para que continúe cumpliendo con las altas funciones que le confiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 6. Expresar su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la labor desarrollada durante el período que comprende este informe e instarla a que continúe con su importante función. 7. Recomendar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su informe anual incluya en forma detallada, además de la finalidad de las reuniones periódicas que mantiene con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los resultados de dichas reuniones.

²⁷⁰ Salinas de Frías y Gómez-Urrutia, “Soberanía del Estado”, 1262-1263.

²⁷¹ La CIDH ha aplicado el art. 65 de Convención Americana en los casos *Velazquez Rodríguez, Godínez Cruz* (*Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1990, OEA/Ser.L/V/III.23 doc.12, pp. 15-16*), *Neira Alegria y otros* (*Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1997, OEA/Ser.L/V/III.39 doc.5, p. 30*), *Castillo Páez, Loayza Tamayo y Castillo Petrucci y otros* (*Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,*

Ergo, hay quienes consideran que el consenso de los Estados tuvo una fisura en julio de 2003, puesto que Panamá impugnó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para supervisar el cumplimiento de sus sentencias, esto, a pesar de que dicho Estado desde mayo de 2001, presentó varios escritos en relación con su obligación de reparar y más concretamente, sobre como lo estaba llevando a efecto²⁷².

Pese a lo anotado, el 28 de noviembre de 2003, la CIDH declaró por unanimidad que “es competente para supervisar el cumplimiento de sus decisiones”²⁷³; asimismo, ratificó que en el ejercicio de su competencia “tiene facultad de solicitar a los Estados responsables la presentación de informes sobre las gestiones realizadas para dar aplicación a las medidas de reparación ordenadas por ella, de evaluar dichos informes, y de emitir instrucciones y resoluciones sobre el cumplimiento de sus sentencias”²⁷⁴.

Esta resolución tuvo como finalidad “[d]esestimar por improcedente el cuestionamiento” de su competencia para “supervisar el cumplimiento integral de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá”²⁷⁵.

A criterio de Santelices y Feddersen, “la supervisión de cumplimiento se ha constituido como un buen medio tanto para presionar al Estado a avanzar en la ejecución y en la reparación a la víctima, como para verificar el funcionamiento del sistema interamericano”²⁷⁶.

Más allá de lo suscrito por Santelices y Feddersen, la supervisión del cumplimiento acarrea una actividad del órgano internacional que busca impedir una actitud pasiva de los estados frente a las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto con la única intención de frenar la sistemática vulneración de derechos, ya que la efectividad de las medidas dependerá del tiempo en que estas se materializan en favor de la víctima.

1999, OEA/Ser.L/V/III.47 doc. 6, p.45 e Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2000, OEA/Ser.L/V/III.50 doc. 4, pp. 41, 42, 421, 422 y 423). También lo aplicó en el caso *James y otros* en relación con las medidas provisionales (Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998, OEA/Ser.L/V/III.43 doc. 11, pp. 35-37; Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1999, OEA/Ser.L/V/III.47 doc. 6, p.41).

²⁷² Salinas de Frías y Gómez-Urrutia, “Soberanía del Estado”, 1262.

²⁷³ Fundamenta su competencia en los artículos 67 y 68.1, así como en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana y artículo 30 de su Estatuto (párrs. 60, 84) y hace referencia a los trabajos preparatorios del artículo 65 (párrs. 89-90).

²⁷⁴ *Ibíd.*, párrs. 128-138.

²⁷⁵ *Ibíd.*, párrs. Resolutivos 1-4. La Sentencia de 2 de febrero de 2001, citada por

²⁷⁶ Santelices y Feddersen, “Ejecución de sentencias”, 100.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia emitida dentro de la supervisión de cumplimiento de sentencias ha manifestado que sus “sentencias deben ser acatadas en forma inmediata e integral; si tuviesen que ajustarse los ordenamientos internos de los Estados Partes para ser ejecutables, la protección de Derecho Internacional de los Derechos Humanos resultaría ilusoria y quedaría en la entera discreción del Estado y no del organismo supranacional²⁷⁷”.

En este orden de ideas, vale precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo un proceso totalmente transparente exterioriza²⁷⁸ los informes expedidos dentro de la etapa de seguimiento; considerando las sentencias emitidas por la Corte IDH y a la luz de la falta de ejecución de las medidas de reparación dispuestas, se advierte que Argentina²⁷⁹, Barbados²⁸⁰, Bolivia²⁸¹, Brasil²⁸², Chile²⁸³, Colombia²⁸⁴, Costa Rica²⁸⁵, Ecuador²⁸⁶, El Salvador²⁸⁷, Guatemala²⁸⁸, Haití²⁸⁹, Honduras²⁹⁰,

²⁷⁷ CIDH, *Castillo Petruzzi y otros vs. Perú*. Supervisión de Cumplimiento, Sentencia de 17 de noviembre de 1999.

²⁷⁸ Al igual que las sentencias emitidas por el Órgano Internacional, las resoluciones expedidas en etapa de supervisión se encuentran colgadas en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, <<http://www.corteidh.or.cr/>>.

²⁷⁹ CIDH, *total de casos de Argentina en etapa de supervisión: 13*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸⁰ CIDH, *total de casos de Barbados en etapa de supervisión: 2*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸¹ CIDH, *total de casos de Bolivia en etapa de supervisión: 3*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸² CIDH, *total de casos de Brasil en etapa de supervisión: 3*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸³ CIDH, *total de casos de Chile en etapa de supervisión: 6*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸⁴ CIDH, *total de casos de Colombia en etapa de supervisión: 15*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸⁵ CIDH, *total de casos de Costa Rica en etapa de supervisión: 1*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸⁶ CIDH, *total de casos de Ecuador en etapa de supervisión: 11*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸⁷ CIDH, *total de casos de El Salvador en etapa de supervisión: 6*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸⁸ CIDH, *total de casos de Guatemala en etapa de supervisión: 20*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁸⁹ CIDH, *total de casos de Haití en etapa de supervisión: 2*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹⁰ CIDH, *total de casos de Honduras en etapa de supervisión: 9*. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

México²⁹¹, Nicaragua²⁹², Panamá²⁹³, Paraguay²⁹⁴, Perú²⁹⁵, República Dominicana²⁹⁶, Surinam²⁹⁷, Trinidad y Tobago²⁹⁸, Uruguay²⁹⁹ y Venezuela³⁰⁰, no han dado efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el Organismo Internacional, motivo por el cual, los fallos emitidos en contra de los citados países se encuentran dentro de la etapa de supervisión de cumplimiento, de lo que se infiere que existen 170 casos dentro de la mentada etapa.

Ahora bien, pese a que el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue aprobado a partir del año 2009, desde el año 1999 el Tribunal ha llevado a cabo el proceso de seguimiento de cumplimiento sus sentencias, conforme se desprende en el cuadro que se muestra a continuación:

Cuadro 7.

ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	
Años	Número de informes emitidos
1999	2
2000	0
2001	4
2002	10
2003	13

²⁹¹ CIDH, *total de casos de México en etapa de supervisión*: 6. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹² CIDH, *total de casos de Nicaragua en etapa de supervisión*: 1. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹³ CIDH, *total de casos de Panamá en etapa de supervisión*: 4. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹⁴ CIDH, *total de casos de Paraguay en etapa de supervisión*: 6. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹⁵ CIDH, *total de casos de Perú en etapa de supervisión*: 34. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹⁶ CIDH, *total de casos de República Dominicana en etapa de supervisión*: 4. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹⁷ CIDH, *total de casos de Surinam en etapa de supervisión*: 4. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹⁸ CIDH, *total de casos de Trinidad y Tobago en etapa de supervisión*: 2. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

²⁹⁹ CIDH, *total de casos de Uruguay en etapa de supervisión*: 2. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

³⁰⁰ CIDH, *total de casos de Venezuela en etapa de supervisión*: 16. Consulta de casos en etapa de supervisión. <http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm>.

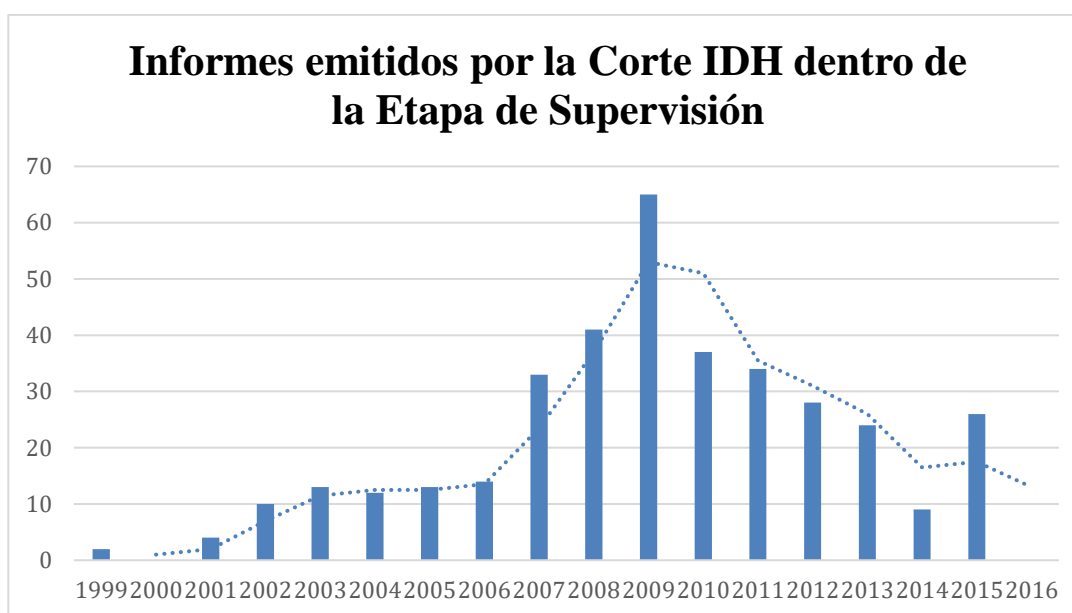
2004	12
2005	13
2006	14
2007	33
2008	41
2009	65
2010	37
2011	34
2012	28
2013	24
2014	9
2015	26
2016	0
Total de informes emitidos: 365	

Nota: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consulta de casos en etapa de supervisión.
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

Gráfico 1.

INFORMES EMITIDOS POR LA CORTE IDH DENTRO DE LA ETAPA DE SUPERVISIÓN



Nota: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consulta de casos en etapa de supervisión.
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm

Previo a analizar las estadísticas, vale precisar que la información obtenida en la página web de la Corte Interamericana disiente con lo afirmado por la misma en su Informe Anual 2015, puesto que en el referido informe señaló que, durante el 2015, la Corte emitió 36 resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencias, en 61 casos, mientras que en la página web se vislumbra que exclusivamente se realizó seguimiento a 26 causas.

Ahora bien, de acuerdo al cuadro y la gráfica *-up supra-*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instauró la etapa supervisión de sus sentencias a partir del año 1999, es decir, este proceso lleva vigente alrededor de 17 años - pese a estar legalmente instaurado desde el año 2009-. En este contexto, salta a la vista que, justamente desde la fecha en que se reconoció esta facultad al Tribunal es el año que más informes se han emitido, no obstante, conforme se aprecia en la gráfica en los años siguientes esta actividad no tomó mayor relevancia, por el contrario, fue decreciendo llegando al punto que 7 años después, el Tribunal no ha logrado emanar el número de informes – resoluciones que se emitieron en el año 2009.

Sobre la base de los resultados, se observa que desde 1999 hasta el 2016 se han emitido un total de 367 resoluciones dentro de la etapa de supervisión, sin embargo, vale destacar que, existen casos en los cuales el Tribunal ha procedido a dar un paulatino seguimiento al cumplimiento de las medidas, llegando al punto de emitir más de un informe anual; a *contrario sensu*, se evidencian casos que pese a estar considerados dentro de la etapa de supervisión hasta la presente fecha el Tribunal no ha expedido ninguna resolución, por lo que se desconoce el estado de cumplimiento de las disposiciones emanadas por el órgano internacional.

Frente al escenario expuesto -estadísticas producto de la información recopilada de la Corte IDH- resulta imperativo considerar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2015, en el cual se evidencia la relevancia que ha adquirido la etapa de supervisión, así, la Corte manifestó:

...se ha convertido en una de las actividades más demandantes del Tribunal, pues cada año se incrementan considerablemente el número de casos en esta etapa, sobre los cuales la Corte da un seguimiento detallado y puntual al cumplimiento de cada una de las reparaciones ordenadas en las sentencias. En cada sentencia se ordenan múltiples

medidas de reparación³⁰¹. Tanto el número de reparaciones ordenadas, como su naturaleza y complejidad de cumplimiento impacta en el tiempo que un caso puede estar en la etapa de supervisión de cumplimiento³⁰².

Esta notoriedad del proceso provocó que en el año 2015³⁰³ entre en funcionamiento la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, la cual se dedica exclusivamente a la supervisión de cumplimiento de sentencias, labor que anteriormente se encontraba repartida entre diferentes equipos de trabajo del área legal de la Secretaría de la Corte³⁰⁴.

Sumado a lo expuesto, la etapa de supervisión no involucra exclusivamente la emisión de resoluciones o el requerimiento de informes con datos relevantes respecto del cumplimiento de la sentencia, dentro de esta etapa la Corte IDH se encuentra facultada para convocar las partes procesales a audiencias³⁰⁵ de verificación, así como la realización de visitas *in situ*³⁰⁶.

Como complemento de lo anotado, resulta pertinente mencionar que las resoluciones emitidas en la etapa de supervisión poseen varios contenidos y fines, en primer lugar, supervisar individualmente el cumplimiento de cada una de las medidas de reparación ordenadas en cada sentencia; en segundo lugar, supervisar de manera conjunta el cumplimiento de una o varias reparaciones dispuestas por la Corte en las cuales el sujeto obligado a su cumplimiento es un mismo Estado; en tercer lugar, “supervisar el cumplimiento de la obligación del Estado de reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte”³⁰⁷.

³⁰¹ Para comprender la gran amplitud de medidas ordenadas por la Corte IDH es posible agruparlas dentro de las siguientes 6 Formas de reparación: restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, Obligación de investigar, juzgar y, su caso, sancionar, e Indemnizaciones y reintegro de costas y gastos.

³⁰² Informe anual 2015 - Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015):65, <<http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2015/espanol.pdf>>.

³⁰³ *Ibíd.*, 66. En atención al Informe Anual 2015, se destaca que, durante el último año la Corte IDH convocó a 8 audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia, supervisando el cumplimiento de 14 sentencias.

³⁰⁴ *Ibíd.*, 65.

³⁰⁵ *Ibíd.*, 66. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra facultada para realizar varios tipos de audiencias como son: 1) *Audiencias de supervisión de casos individuales*: Cada audiencia abarca individualmente un caso, este tipo de audiencias pueden ser de carácter privado o público; y, 2) *Audiencias para supervisar de forma conjunta varios casos contra un mismo Estado*: en las cuales se supervisa el cumplimiento de una o varias reparaciones ordenadas en sentencias de varios casos contra un mismo Estado, cuando en las mismas se hayan ordenado reparaciones iguales o similares.

³⁰⁶ *Ibíd.*, 67. Pese a que la etapa de supervisión se encuentra instaurada desde el año 2009, en el 2015 se realizó una diligencia *in situ*.

³⁰⁷ *Ibíd.*, 66 – 67.

En cuarto lugar, declarar el incumplimiento de los estados en cuanto al deber de informar sobre la ejecución de las sentencias o las medidas adoptadas para su cumplimiento; en quinto lugar, en aplicación del artículo 65 de la Convención, informar a la Asamblea General de la OEA del incumplimiento por parte de los estados; y, finalmente en sexto lugar, archivar los casos en caso de verificarse el cumplimiento total de las medidas de reparación ordenadas.

Como resultado de lo expuesto, salta a la vista que progresivamente la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias ha ido adquiriendo mayor importancia, producto de lo cual la Corte IDH se ha visto obligada a crear una unidad especial encargada exclusivamente de dar seguimiento a sus resoluciones; en este sentido es pertinente resaltar que, el verdadero empoderamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a dar un seguimiento a sus sentencias ha surgido en el año 2015, haciendo evidente su compromiso en el Informe Anual 2015, en el cual se pone de manifiesto las actividades realizadas por el Tribunal, esto con el fin de determinar el estado de cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en sentencia. Asimismo, es a partir del 2015 que la Corte IDH desarrolla conceptos como son las clases de audiencias públicas y los distintos contenidos que pueden abarcar las resoluciones e informes emitidos durante la etapa de supervisión.

Por último es conveniente anotar que, para que la Corte IDH proceda con el archivo de la causa y conjuntamente con la finalización de la etapa de supervisión de cumplimiento es fundamental que el Estado infractor haya cumplido con todas y cada una de las medidas de reparación ordenadas en sentencia.

Esto con atención a lo que dispone el artículo 69 numeral 4 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prescribe “[u]na vez que el Tribunal cuente con la información pertinente, determinará el estado del cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime pertinentes”³⁰⁸; así el Tribunal en su resolución final determina cuales fueron las disposiciones contendidas en la sentencia, estableciendo su «cumplimiento total», lo que conlleva a dar por concluido el caso y consecuentemente ordena el archivo del expediente.

³⁰⁸ *Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (2009). Adicionado por la Corte durante su Octogésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, en la sesión celebrada el día 29 de enero de 2009.

2.2. Proceso de aproximación y convergencia entre las cortes constitucionales de Ecuador y Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La actual dinámica de sistemas jurídicos impide concebir a los ordenamientos jurídicos como auténticas y verdaderas creaciones, esto por cuanto, el fenómeno de la globalización del derecho ha fomentado un proceso de interacción de estos, provocando que los ordenamientos jurídicos se vean obligados a “importar” y “exportar” legislación y jurisprudencia foránea³⁰⁹.

Escobar García, señala que este proceso se ha llevado a cabo tanto de forma vertical como horizontal; entendiéndose a la primera como un verdadero proceso de diálogo, intercambio y retroalimentación, y al segundo, como un sistema en el cual existe un “centro de producción jurídica” que se impone a los “centros de recepción jurídica”³¹⁰.

En este sentido, Mattias Wendel, explica y define la permeabilidad de los sistemas jurídicos, entendiéndose como la cualidad que permite a los ordenamientos jurídicos la incorporación de principios y contenidos normativos provenientes de otros regímenes jurídicos³¹¹, evidenciando un mecanismo de entrelazamiento normativo³¹²; fruto de esta impermeabilidad se puede asegurar que los sistemas jurídicos actuales son producto de un mestizaje, por lo que ninguno puede considerarse como puro.

Ahora bien, no se puede negar que cada sistema posee sus propias particularidades y que las conexiones que cada uno genere con su entorno puede variar de forma significativa^{313/314}, en este sentido, el diálogo entre cortes ocupa un papel trascendental, así Armin von Bobdady, señala que, “el dialogo jurisdiccional es un

³⁰⁹ Claudia Escobar García, *Transconstitucionalismo y diálogo jurídico* (Quito: Corte Constitucional para el período de transición, 2011), 161.

³¹⁰ *Ibíd.*

³¹¹ Mattias Wendel, “Permeabilität in europäischen Verfassungsrecht. Verfassungsrechtliche Integrationsnormen auf Staats- und Unionsebene in Vergleich”, en Mariela Morales Antoniazzi y otros, coordinadores, *El Estado abierto como objetivo del ius constitutionla commune. Aproximación desde el impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* (México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – Serie Doctrina Jurídica, 2014), 271.

³¹² Nettsheim, “Europäischer Verfassungsverbund?”, en Morales Antoniazzi, “El Estado abierto”, 271.

³¹³ Claudia Escobar García, “Entre la identidad e intercambio jurídico. El nuevo modelo de justicia y control constitucional en el Ecuador”, en Armin von Bogdandy y otros, coordinadores, *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un ius constitutionale commune en América Latina? Tomo I* (México. D.F: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010), 476.

³¹⁴ Así por ejemplo, mientras que el Supremo Tribunal Federal de Brasil mantiene un diálogo jurisprudencial activo con la Suprema Corte de los Estados Unidos y con el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, la Corte Suprema de la Nación argentina lo ha comenzado a entablar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Ecuador con el constitucionalismo colombiano.

concepto del *ius constitutionale commune* ³¹⁵, empleado para legitimar la argumentación de las decisiones a fin de convencer a otros actores jurídicos y, a la vez, como manifestación del nuevo paradigma” ³¹⁶, ya que los fallos expedidos por cualquier tribunal o corte, actualmente son objeto de control. Este tipo de actuaciones genera que no exista un único criterio, sino que, todos los fallos deben ser sometidos a escrutinio público, lo que empuja a los actores jurisdiccionales a formar y construir un *ius constitutionale commune*.

De las evidencias anteriores se puede asegurar que el intercambio normativo lejos de generar un choque entre los distintos ordenamientos ha servido para forjar una confluencia entre los mismos; a pesar de lo manifestado, conviene determinar si este intercambio y diálogo de legislaciones puede circunscribirse exclusivamente a ordenamientos nacionales o puede llegar a trascender el orden internacional.

Para determinar si efectivamente existe un proceso de convergencia, y transconstitucionalismo vertical ³¹⁷ entre las altas cortes de Ecuador y Colombia con

³¹⁵ Armin von Bogdandy, “Ius Constitutionale Commune en América Latina: Una mirada a un constitucionalismo transformador” (2015), <<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4198/4753>>.

El *Ius Constitutionale Commune* en América Latina (ICCAL) se refiere a un enfoque regional sobre el constitucionalismo transformador. Dicho enfoque se nutre de la inquietante experiencia respecto de condiciones de vida inaceptables y apunta a la transformación de la realidad política y social de América Latina por medio del fortalecimiento concertado de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Los problemas comunes a los países latinoamericanos, tales como la exclusión de amplios sectores de la sociedad y la débil normatividad del derecho, son temas centrales de este enfoque. El ICCAL no apuesta por la integración funcional de la región, sino más bien por un constitucionalismo regional de los derechos con garantías supranacionales. Como resultado de esto último, los representantes del ICCAL reconocen la muy estrecha relación que existe entre el derecho constitucional, el derecho internacional y el derecho comparado. La apertura de los ordenamientos jurídicos nacionales de numerosos países latinoamericanos hacia el derecho internacional, y en particular hacia el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es de especial importancia y constituye el núcleo normativo del ICCAL. La presente contribución analiza los elementos centrales de dicho enfoque y describe sus contornos específicamente latinoamericanos.

³¹⁶ Mariela Morales Antoniazzi y otros, coordinadores, *El Estado abierto como objetivo del ius constitutionla commune. Aproximación desde el impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, (México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – Serie Doctrina Jurídica, 2014), 281

³¹⁷ La recientemente acuñada expresión “transconstitucionalismo” sirve para explicar y comprender buena parte de los fenómenos que ocurren en torno al derecho constitucional contemporáneo. Por oposición a la concepción tradicional, que establece una equivalencia entre derecho constitucional y derecho estatal, el transconstitucionalismo pone presente que los problemas relativos a los derechos humanos y a la limitación del poder, son hoy en día asuntos que atañen a todas las instancias jurídico-políticas y, por consiguiente, a los distintos órdenes normativos: locales, nacionales, internacionales y supranacionales. La idea que subyace es que los asuntos constitucionales tienen relevancia para distintos órdenes normativos, por lo que sólo son regulados por distintos instrumentos de los diferentes sistemas jurídicos, sino que además son objeto de discusión y decisión por instancias de distinta naturaleza y estatus jurídico.

Claudia Escobar García, “Ente identidad e intercambio jurídico. El nuevo modelo de justicia y control constitucional en Ecuador”, en Armin von Bogdandy, Eduardo Ferrer, Mac-Gregor y otros, (coordinadores), *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale*

relación a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que respecta a los criterios sentados en materia de medidas de reparación integral, resulta indispensable realizar un estudio, a la luz de los parámetros desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de las medidas dispuestas por los organismos constitucionales en los casos de vulneración de derechos fundamentales-humanos puestos en su conocimiento.

De acuerdo a lo antes citado, a continuación se presenta el siguiente cuadro en el cual se detallan siete aspectos. Los primeros tres acápites “tipo de medida”, “sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos”, “criterio”, sirven para identificar el criterio emitido y sentado por la Corte IDH con relación a cada una de las medidas de reparación. En los siguientes dos puntos se identifica la sentencia y el criterio sentado por la Corte Constitucional del Ecuador, particular que se replicará con relación a la Corte Constitucional de Colombia. El esquema planteado tiene como finalidad identificar si el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido o no replicado por las cortes nacionales, en lo que respecta al contenido, alcances y finalidad de cada una de las medidas de reparación integral.

commune en América Latina (México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010), 467-468.
Marcelo Neves, *Transconstitucionalismo* (Sao Paulo: Martins Fontes, 2009).

Cuadro 8.

TIPOS DE MEDIDA DE REPARACIÓN INTEGRAL A LA LUZ DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CORTE ECUATORIANA Y COLOMBIANA

TIPO DE MEDIDA	SENTENCIA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	CRITERIO	SENTENCIA / AUTO CORTE CONSTITUCION AL ECUADOR	CRITERIO	SE COMPRARTE CRITERIO		SENTENCIA / AUTO CORTE CONSTITUCION AL COLOMBIA	CRITERIO	SE COMPRARTE CRITERIO	
					SI	NO			SI	NO
Satisfacción - Derecho a la Memoria	Caso Anzualdo Castro vs. Perú	El derecho a la memoria tiene dos dimensiones, la primera es contribuir a resarcir a los afectados con la violación de los derechos humanos y por otro lado la no repetición de las violaciones ⁱ .	—	—			Sentencia No. T-653/12 La Sala de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia conoció sobre la acción de tutela presentada por Eliécer Lobo Pacheco y otros en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación la con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de julio de 2014, que declaró la responsabilidad internacional del	“... esta Corte debe resaltar la finalidad de la medida como contributiva a despertar la conciencia del pueblo colombiano para evitar la repetición de hechos lesivo como los ocurridos y conservar las memorias de las víctimas” ⁱⁱ .	X	

							Estado colombiano en el caso “19 comerciantes vs. Colombia” ante la violación de las garantías judiciales y la integridad física.			
Rehabilitación	Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia	Con el fin de contribuir a la reparación de los daños físicos y psicológicos, el Tribunal estima necesario disponer la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente y de forma inmediata, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares declarados	<p>Caso No. 0073-10-IS Sentencia No. 007-14-SIS-CC Auto de verificación 4 de junio de 2014</p> <p>El señor Hugo Arnulfo Naranjo Places y la señora Miriam Dexzy Menoscal Tabarez, por sus propios y personales derechos, y por los derechos que representan de su hijo menor de edad José Camilo Naranjo Menoscal, interpone una acción de incumplimiento de la sentencia constitucional, expedida el 06 de</p>	“...las medidas de reparación integral referentes a la atención psicológica procuran no hacer daño a la persona afectada (<i>primun non nocere</i>) evitando la revictimización y/o el no respeto a la víctima en su dolor. Además, se trata de medidas que exigen una atención rápida y abierta para que realmente tengan una finalidad, debido a que	X		<p>Sentencia SU254-13</p> <p>La Sala Plena de la Corte constitucional colombiana dictó sentencia unificatoria en materia relativa al tema de reparación integral por vía administrativa a víctimas del desplazamiento forzado.</p>	La rehabilitación cuando las capacidades físicas y mentales se vean comprometidas por efecto de los actos ilícitos se debe garantizar la atención médica, psicosocial y los servicios jurídicos ^v .	X	

		víctimas, y por la víctima sobreviviente Arturo Salgado Garzón. El tratamiento médico de salud física debe brindarse por personal e instituciones especializadas en la atención de las dolencias que presentan tales personas que aseguren que se proporcione el tratamiento más adecuado y efectivo. El tratamiento psicológico y psiquiátrico debe brindarse por personal e instituciones especializadas en la atención de víctimas de hechos de violencia como los ocurridos en el presente caso. Dicho	agosto de 2010, por el juez séptimo de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección No. 1270-2010. La sentencia demanda como incumplida ordenó a la Dirección Provincial de Educación del Guayas que por intermedio de los Departamentos correspondientes brinden al menor una atención psicológica a fin de remediar los daños causados y de igual manera para evitar que en el futuro esos maltratos físicos y psicológicos.	están orientadas a mejorar la situación del afectado o afectada. Son medidas de rehabilitación aquellas que aluden a medidas tales como atención médica y psicológica, así como a servicios legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad. La atención psicosocial es el conjunto de medidas de rehabilitación y apoyo individual, familiar o comunitario, orientadas a hacer frente a las consecuencias del trauma de violaciones de derechos y a					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		tratamiento médico y psicológico deber ser prestado por el tiempo que sea necesario, incluir el suministro de los medicamentos que se requieran, y tomar en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual ⁱⁱⁱ .		promover el bienestar emocional y social, estimulando el desarrollo de las capacidades de las víctimas ^{iv} .						
Investigación, juzgar y sancionar	Caso de los “Niños de la Calle” (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala	226. Esta Corte ha señalado con claridad que la obligación de investigar con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser	Caso No. 1773-11-EP Sentencia No. 146-14-SEP-CC El señor Luis Jorge Ramírez Enríquez, apoderado de Soledad, Timoteo, Zoila, Manuel y Esthela Ramírez Enríquez, presentó acción extraordinaria de	Mediante el establecimiento de esta medida de reparación se genera una obligación por parte de la entidad responsable de la violación constitucional efectuada, para establecer qué	X		Sentencia No. T-025/04 Auto 009/15 Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025/04, en la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno, al constatar la	De acuerdo con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la investigación por violaciones a los derechos humanos debe ser asumida de manera oficiosa por el Estado de	X	

		<p>asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”^{vi}.</p>	<p>protección en contra de la sentencia de 7 de septiembre del 2011, dictada por la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección No. 659-2011, mediante la cual se resolvió aceptar el recurso de apelación, se revoca el fallo subido en grado y desecha la acción seguida en contra del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por declaratoria de utilidad pública y expropiación.</p>	<p>servidores públicos provocaron la vulneración, ya sea por acción u omisión, con el objetivo de determinar las respectivas sanciones a que hubiere lugar^{vii}.</p>			<p>vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de la población desplazada en Colombia.</p>	<p>manera seria, exhaustiva e imparcial; “(...) no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, sino “(...) como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”^{viii}.</p> <p>Parte Resolutiva: Séptimo.- CONSTATAR que a pesar de los esfuerzos</p>		
--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--

								adelantados por la Fiscalía General de la Nación para efectos de impulsar las investigaciones de los hechos de violencia sexual incluidos en el Anexo Reservado del auto 092 de 2008, se requiere de acciones mancomunadas entre el ente investigador, los jueces penales y las demás autoridades intervinientes para superar las dificultades y retos...”ix.		
Restitución	Caso Cantoral Benavides vs. Perú	La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere,	Caso No. 1773-11-EP Sentencia No. 146-14-SEP-CC	La medida de reparación integral comprende la restitución del derecho <i>restitutio in integrum</i> , que le fue quitado	X		Sentencia No. T-679/15 La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional conoció sobre la	“... restablecer o poner algo en el estado que antes tenía, es decir, para el caso de las personas víctimas de la	X	

		<p>siempre que sea posible, la plena restitución (<i>restitutio in integrum</i>), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación</p>		<p>o vulnerado a una persona, con lo cual se pretende que la víctima sea restablecida a la situación anterior a la vulneración; sin embargo, cuando se evidencia que por los hechos fácticos el restablecimiento del derecho no es posible, el juez tiene que encontrar otra medida adecuada que de alguna forma equipare esta restitución^{xi}.</p>			<p>acción de tutela presentada por María Clementina Jacanamijoy contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de restitución de Tierras Despojadas, por vulneración de los derechos fundamentales a la vida, restitución de tierras, vida digna, vivienda y mínimo vital^{xii}.</p>	<p>vulneración de los derechos fundamentales, se trata de regresarlas a la situación en que se encontraban antes de la transgresión de sus derechos”.</p>		
--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	--

		por los daños ocasionados ^x .								
Reparación económica – indemnización	Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador	La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (<i>restitutio in integrum</i>), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las	Caso No. 1773-11-EP Sentencia No. 146-14-SEP-CC	Este tipo de reparación se relaciona con la compensación económica que se otorgue a la víctima o a sus familiares, por las afectaciones de tipo económicas que los hechos del caso concreto ocasionaron ^{xiv}	X		Sentencia No. T-197/15 La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela presentada por Esther Ludivia Dávila Ruiz en contra de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por afectación a sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, vida digna y a la reparación individual por vía administrativa.	“La indemnización tiene la finalidad de compensar monetariamente los perjuicios causados y evaluados, la cual debe ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a la circunstancias de cada caso como parte del derecho a la reparación integral de las víctimas; siempre y cuando los perjuicios causados sean susceptibles de ser valorados económicamente y que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales	X	

		consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados ^{xii}						s de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario” ^x		
Garantía de no repetición	Caso Pacheco Teruel y Otros vs. Honduras	En casos como el presente, en el que se configura un patrón recurrente de siniestros en el sistema penitenciario hondureño (supra párr. 24), las garantías de no repetición adquieren una mayor relevancia como medida de reparación, a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y	—	—			<p>Sentencia No. C-579/13</p> <p>El dieciocho (18) de diciembre de 2012, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Gustavo Gallón Giraldo, Fátima Esparza Calderón, Mary de la libertad Díaz Márquez y Juan Camilo Rivera Rugeles, miembros de la Comisión Colombiana de Juristas, demandaron las expresiones</p>	La garantía de no repetición está directamente relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH, la cual comprende la adopción de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos.	X	

		contribuyan a la prevención ^{xvi}					“máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “todos los” contenidas en el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2012 ^{xvii} .	En particular, se han identificado los siguientes contenidos de esta obligación: (i) Reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad; (ii) Diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) Implementar programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción;		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								<p>(iv) Introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las instituciones con funciones en la materia;</p> <p>(v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención;</p> <p>(vi) Adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación de los factores y eventos de riesgo de</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								violación; (vii) Tomar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados ^{xviii} .		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Constitucional del Ecuador y Corte Constitucional de Colombia. Las sentencias pueden ser consultadas en: <http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es> / <http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/index.php> / <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/>

- ⁱ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Anzualdo Castro vs. Perú*. Sentencia Corte Interamericana, 22 de septiembre de 2009.
- ⁱⁱ Colombia. Corte Constitucional Colombiana, en sentencia No. T-653/12, 23 de agosto 2012.
- ⁱⁱⁱ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia*. Sentencia Corte Interamericana, 11 de mayo de 2007.
- ^{iv} Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia No. 007-14-SIS-CC, Auto de Verificación de 4 de junio de 2014.
- ^v Colombia. Corte Constitucional Colombiana, en sentencia No. SU254-13. 24 de abril de 2013.
- ^{vi} Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala*, Resolución del Pleno de la Corte Interamericana, 19 de noviembre de 1999.
- ^{vii} Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia No. 146-14-SEP-CC. 1 de octubre de 2014.
- ^{viii} Colombia. Corte Constitucional Colombiana, [Auto 009/15 de 27 de enero de 2015], en sentencia No. T-025/04.
- ^{ix} *Ibid.*
- ^x Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Cantoral Benavides vs. Perú*. Sentencia Corte Interamericana, 18 de agosto de 2000.
- ^{xi} Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia No. 146-14-SEP-CC. 1 de octubre de 2014.
- ^{xii} Colombia. Corte Constitucional Colombiana, en sentencia No. T-679/15. 3 de noviembre de 2015.
- ^{xiii} Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador*. Sentencia Corte Interamericana, 1 de marzo de 2005.
- ^{xiv} Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia No. 146-14-SEP-CC. 1 de octubre de 2014.
- ^{xv} Colombia. Corte Constitucional Colombiana, en sentencia No. T-197/15. 20 de abril de 2015.
- ^{xvi} Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Pacheco Teruel y Otros vs. Honduras*. Sentencia Corte Interamericana, 27 de abril de 2012.
- ^{xvii} ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2012 (Julio 31). Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así: Artículo Transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo. Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
- Una ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los criterios de selección. Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección.
- ^{xviii} Colombia. Corte Constitucional Colombiana, en sentencia No. C-579/13. 28 de agosto de 2013.

Atendiendo al cuadro *-ut supra-*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Anzulado Castro vs. Perú al declarar el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado del Perú, determinó respecto a la medida de satisfacción -derecho a la memoria-, que esta posee una doble dimensión, por un lado resarcir a los afectados y por otro evitar la repetición de las violaciones.

En esta dirección se ha de rescatar el hecho que, al tratarse de la vulneración de un derecho que no puede ser cuantificado como es el derecho a la memoria, “el dinero no puede desempeñar el mismo papel que el resarcimiento por daños materiales, toda vez que respecto de éstos, puede aceptarse que su finalidad es la de una equivalencia, más o menos completa, entre la afectación y la reparación”³¹⁸, esto por cuanto la compensación va más allá de ser un elemento equiparador o de equivalencia, sino que se presenta como una forma de compensar a las víctimas; no obstante, desde ningún punto de vista puede ser considerado como una forma de “poner precio al dolor o a los sentimientos humanos, puesto que no pueden tener equivalencia en el aspecto monetario, sino que, lo que se pretende es suministrar una compensación a quien ha sido lesionado en su personalidad”³¹⁹.

Por lo anterior, debe precisarse que cuando se da el caso de daño inmaterial, como la define la doctrina contemporánea, se otorga un amplio arbitrio de libre apreciación al juzgador para fijar el monto de la indemnización, en virtud de que su cuantificación es muy distinta a la del daño material donde existen parámetros objetivos teniendo, por tanto, que apreciar los hechos de cada caso.³²⁰

Frente a este escenario, es indispensable hacer referencia a una de las obligaciones principales de los estados en materia de protección de derechos humanos y es la «repetición», “[t]anto la Comisión como la Corte Interamericana (sic) han condenado la impunidad de hechos que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”³²¹.

Se podría llegar afirmar que, en la mayoría de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta dispone como medida de reparación la implementación de políticas públicas, el único objetivo de este tipo de medidas es

³¹⁸ México. Tribunales colegiados del circuito, [Amparo directo 5236/2005], 9 de noviembre de 2005.

³¹⁹ *Ibíd.*

³²⁰ *Ibíd.*

³²¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Organización de los Estados Americanos, *Informe sobre seguridad ciudadana*, <<http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadiv.sp.htm>>.

evitar que los hechos acaecidos producto de los cuales se generaron graves vulneraciones a derechos vuelvan a ocurrir; ahora bien, esta medida debe ser entendida en toda su dimensión, es decir, no se encuentra encaminada exclusivamente al Estado, sino que también obliga a la ciudadanía a tomar cierta actitud frente a las violaciones de derechos. Así, su rol fundamental se concibe no sólo en términos de reparación del daño causado a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno³²².

Ahora bien, retomando el análisis del cuadro, la Corte Constitucional Colombiana a más de compartir el criterio emitido por la Corte IDH señaló que la medida -derecho a la memoria- también tiene por objeto despertar la conciencia del pueblo.

Por su parte, a diferencia del organismo constitucional colombiano, la Corte Constitucional del Ecuador hasta la presente fecha no ha emitido ninguna sentencia en la que disponga una medida de satisfacción -derecho la memoria-, sin embargo, esto no necesariamente implica que la Corte Constitucional ecuatoriana no comparta el criterio del máximo órgano de interpretación de la Convención Americana de Derechos.

En cuanto a la medida de rehabilitación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta tiene por objeto reparar los daños físicos y psicológicos de las víctimas para lo cual es indispensable brindar de forma gratuita, oportuna e inmediata un tratamiento médico y psicológico.

Al respecto, se constata que las cortes constitucionales de Colombia y Ecuador han compartido los parámetros establecidos por la Corte IDH; empero, el Organismo ecuatoriano a más de compartir ha referido que este tipo de medida debe hacerse extensiva no sólo a la persona afectada, sino que, debe brindarse un apoyo individual y familiar, adicionalmente ha sostenido que esta medida pretende evitar la revictimización para lo cual es indispensable promover el bienestar emocional y social, esto mediante el desarrollo de las capacidades de la víctima.

De la revisión del cuadro, el organismo regional ha determinado que la medida de investigación y sanción va más allá de una simple formalidad ya que es concebida como un deber jurídico del Estado, que implica una iniciativa procesal, teniendo como finalidad, la búsqueda efectiva de la verdad, para lo cual es necesario la realización de

³²² *Ibíd.*

acciones mancomunadas de forma seria, exhaustiva e imparcial por parte de la entidad jurisdiccional.

Al observar el cuadro en cuestión se evidencia que el criterio sentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la medida de reparación “investigar, juzgar y sancionar”, es compartido y ha sido replicado por Colombia y Ecuador, como se desprende de los fallos emitidos por las cortes, en tanto no han visto la necesidad ni la pertinencia de ampliar el razonamiento del organismo internacional, toda vez que resulta ser completo abarcando toda su extensión y así como la finalidad que la medida persigue.

En cuanto a la medida “restitución”, se advierte un axioma, puesto que tanto la Corte Constitucional de Ecuador como la de Colombia han replicado el razonamiento sentado por la Corte IDH, así la medida de restitución involucra el restablecimiento de la víctima a su situación anterior -previo a la vulneración de derechos-, en los casos en que no se puede lograr la *restitutio in integrum*, es obligación de la autoridad jurisdiccional establecer una serie de medidas compensatorias como el pago de una indemnización.

En relación a la medida de “reparación económica” tanto Colombia como Ecuador comparten el criterio base, esto es, que este tipo de medida involucra el pago de una indemnización de tipo monetaria por los daños ocasionados, no obstante, cabe destacar que la Corte IDH resalta el hecho que este tipo de medida únicamente debe ser aplicada en los casos en que no se ha podido restituir el derecho.

Por su parte la Corte Constitucional de Ecuador ha establecido que esta compensación económica tiene por objeto cubrir las afectaciones de tipo económico que los hechos del caso concreto han ocasionado; sobre este mismo punto Colombia ha desarrollado más aun el concepto, ya que, ha determinado que la indemnización debe ser proporcional a los daños ocasionados y que esta es factible siempre y cuando los perjuicios causados sean susceptibles de ser valorados económicamente.

Ahora bien, -como ya se refirió anteriormente- la doctrina contemporánea, otorga un amplio margen de arbitrio al juzgador para fijar el monto de compensación; sin embargo, surgen varias inquietudes, ¿el poner precio a un derecho realmente provoca una satisfacción a las víctimas?, y, por otro lado, ¿qué tan alto o que tan bajo puede ser el monto que se otorgue a un derecho como forma de compensación?

Bajo la lógica de que un derecho nunca podría llegar a ser cuantificable, hay quienes en contraposición sostienen que, “los derechos cuestan dinero”³²³, esto por cuanto, su protección y garantía se encuentran íntimamente relacionadas y dependen exclusivamente de las arcas estatales.

Considerando el “costo” que pueden acarrear los derechos, cabría preguntarse respecto de la naturaleza valorativa de los mismos, no obstante, esta valoración depende de ciertos factores, principalmente cuando un derecho ha sido vulnerado, puesto que, pone en perspectiva la situación o la capacidad en que una persona puede gozar del mismo; es en este momento en que los derechos obtienen un valor cuantificable, ya que, si bien ningún derecho es más importante o meritorio que otro, cuando existe una violación, “... con frecuencia ocurre que los recursos provistos por la colectividad son canalizados...”³²⁴ para reparar los derechos vulnerados.

En este sentido, no se puede ignorarse el impacto presupuestario que a largo plazo generan los derechos, lo que acarrea un gravamen al fisco más allá de los costos directos; esto por cuanto, los costos indirectos o gastos compensatorios implican desembolsos directos del presupuesto³²⁵.

Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, sostienen que “[a]firmar que un derecho tiene un costo es confesar que tenemos que renunciar a algo a fin de adquirirlo o conservarlo”³²⁶, no obstante, este tipo de renuncia ocurre en el preciso momento en que los jueces al sustanciar una causa y constatar la flagrante transgresión a derechos, deciden en que el dinero de los contribuyentes debe ser encaminado a reparar el daño; más aún si se habla de reparaciones económicas ordenadas a nivel internacional.

En atención a la problemática expuesta, se puede afirmar que, el costo de los derechos disminuiría notablemente en tanto los estados den cumplimiento a su deber internacional de promoción en aras de prevenir la existencia de vulneración de derechos; actuaciones que se verían reforzadas si de forma simultanea los estados se esforzaran por construir un sistema judicial efectivo, el cual imponga sanciones oportunas, de esta manera se evitaría que las víctimas se vean forzadas a acudir en busca de justicia ya sea en el ámbito doméstico o internacional.

³²³ Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, *El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos* (México D.F.: Grupo editorial siglo veintiuno, 2012), 33.

³²⁴ *Ibíd.*, 37.

³²⁵ *Ibíd.*, 41.

³²⁶ *Ibíd.*, 43.

En último lugar se encuentra la medida “garantía de no repetición”, la Corte IDH ha determinado que con esta medida lo que se pretende es que hechos similares no se vuelvan a repetir, contribuyendo de esta manera a la protección de los derechos. Con relación a esta medida se advierte que la Corte Constitucional de Ecuador no ha emitido ningún criterio al respecto, es decir, no comparte ni disiente respecto del razonamiento expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la mentada medida. En tanto la Corte colombiana a más de compartir el pronunciamiento del organismo internacional ha determinado que la obligación estatal involucra la adopción de medidas de carácter jurídico, político y administrativo.

Como resultado de lo referido en los párrafos precedentes, es evidente la existencia de un conceso y entendimiento entre las cortes, proceso que tiene por finalidad la construcción de un “*ius commune* en materia de derechos humanos”³²⁷, el cual se ha ido constituyendo a través de un proceso de diálogo, que se ha puesto en evidencia al momento de contrastar los criterios replicados por Colombia y Ecuador en sus sentencias. Así acogiendo las palabras de Carazo Ortiz:

... no se trata simplemente de una imposición de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), creada y estructurada por el Capítulo II (arts. 52 a 69) de la CADH, sobre los tribunales nacionales con competencias constitucionales. Estos tribunales nacionales, también revisan su jurisprudencia a la luz de las decisiones de la Corte. Tanto donde la Corte IDH como desde las cortes estatales ha habido una disposición al “diálogo” en cuestiones constitucionales comunes referentes a la protección de los derechos humanos, de tal modo que se amplía la aplicación del derecho convencional por los tribunales domésticos³²⁸.

Partiendo de lo anotado, las decisiones emitidas por la Corte IDH lejos de ser consideradas como una imposición, deben ser vistas como la estructura central dentro de los sistemas jurídicos, el cual expone ciertos lineamientos posibilitando que el resto de tribunales a través de su jurisprudencia no solamente se limiten adoptar los criterios establecidos sino que conjuntamente puedan ampliar los mismos, teniendo como finalidad una mayor protección de los derechos; considerando que “[e]l acervo

³²⁷ Morales Antoniazzi, “El Estado abierto”, 297.

³²⁸ María Pía Carazo Ortiz, “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: democracia y derechos humanos como factores integradores en Latinoamérica”, en Armin von Bogdandy, *¿Integración sudamericana a través del derecho? Un análisis interdisciplinario y multifocal*, (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009), 231.

jurisprudencial está destinado no sólo a promover e incentivar avances a nivel doméstico, sino también a evitar retrocesos en los estándares de protección”³²⁹.

De lo expuesto se desprende que, pese a la evidente inexistencia de un poder de ejecución de las sentencias emitidas por los órganos internacionales, así como una total falta de mecanismos que permitan ejecutar las mismas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha implementado la etapa de seguimiento de cumplimiento de sus sentencias, -facultad, que como hemos visto en los párrafos precedentes se encuentra recogida en la normativa y adicionalmente se ha visto reforzada a través de la jurisprudencia emitida por el propio organismo, esto, sin llegar a rebasar sus alcances y potestades- lo que le ha permitido monitorear de cerca el cumplimiento de sus sentencias, no obstante, resulta pertinente destacar que pese a existir casos en los cuales los estados se muestran reticentes a ejecutar las medidas de reparación dispuestas en las sentencias, la Corte IDH cuenta como único medio de sanción la exposición a nivel internacional, lo que acarrea exclusivamente sanciones de tipo moral y político.

Resulta notoria la influencia de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito continental, la cual de una u otra manera ha sido replicada, convirtiéndose en el mayor eco en materia de protección de derechos, ratificando de esta manera su relevancia en el ámbito doméstico como supranacional.

Pese a los años de vigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede advertir que el sistema hasta la presente fecha no ha sido perfeccionado, muy por el contrario, con el paso del tiempo se han hecho evidentes las lagunas normativas de aplicación, supervisión y ratificación que posee el órgano internacional, aspectos que resultan ser alarmantes.

Si nos referimos a lagunas de supervisión, se ha de entender que el problema se origina cuando en la Convención se recoge un derecho, pero no se establece un mecanismo para supervisar si el mismo se está cumpliendo o no; naturalmente este tipo de laguna, se presenta como la imposibilidad de plantear directamente un recurso ante una vulneración, tanto a nivel nacional como internacional.

Ahora bien, otro de los grandes problemas es la “conexión” de derechos y su exigibilidad, ya que, en el momento que la Corte opta por proteger un derecho a la luz

³²⁹ *Ibíd.*, 231.

de otro, es la confesión expresa de que en realidad existe un vacío en la normativa, es decir, en el momento que se tutela un derecho por conexión con otro, implícitamente se está afirmando que el primero de ellos no existe, evidenciando que la tutela por conexión corre una suerte de recurso provisional³³⁰.

Por otra parte, el sistema lejos de encontrar su madurez, cuenta con situaciones asimétricas en lo que concierne a su activismo judicial, esto por cuanto, varios elementos que faltan en el sistema han sido incorporados vía activismo judicial, es decir la Corte en sus sentencias ha ido incorporando elementos en aras de disminuir la cantidad de lagunas, no obstante, el problema de esta creación pretoriana del derecho, no se encuentra reconocida en el estatuto; adicionalmente, se advierte que el reconocimiento de un derecho por vía judicial, no puede ser considerado en igual forma que uno reconocido en el mismo estatuto, ya que, no es descartable el hecho que puedan producirse ciertas regresiones, considerando que, un derecho creado jurisprudencialmente, existe mientras se mantiene esa jurisprudencia que ya cuando deja de estar vigente el derecho también.

Otro aspecto que ha de señalarse, es la limitación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para crear nuevos derechos, es decir que, toda la creación de su jurisprudencia en conjunto podría caer en algún momento, ya que podría imponerse la idea de que como no existe la autorización a crear derechos, toda esa jurisprudencia activista no tiene validez.

³³⁰ Ver, *Caso González Lluy y otros vs. Ecuador*, sentencia de 1 de septiembre de 2015, Voto concurrente, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, *Caso González Lluy y otros vs. Ecuador*. - conexividad de los derechos e interseccionalidad de la discriminación-.

En el presente caso surge con mayor intensidad la pertinencia de un análisis basado en el “derecho a la salud”. La Corte IDH avanza un poco en esta materia al delinear algunos aspectos específicos sobre el alcance de este derecho que no habían sido establecidos previamente en su jurisprudencia. Por ejemplo, el Tribunal Interamericano alude a algunos relacionados con el acceso a medicamentos y, en particular, precisa en qué forma el acceso a los fármacos antirretrovíricos es solo uno de los elementos de una respuesta eficaz para las personas que viven con VIH, dado que las personas que viven con VIH requieren un enfoque integral que comprende una secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo. Por otra parte, la Corte IDH alude a algunos temas sobre el acceso a la información en salud; derecho a la salud de las niñas y los niños, y el derecho a la salud de las niñas y los niños con VIH/SIDA. Sin embargo, el análisis de la Corte IDH es realizado a la luz de su tradicional jurisprudencia sobre la conexidad de la salud con los derechos a la vida y a la integridad personal.

En efecto, sin negar los avances alcanzados en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales por la vía indirecta y en conexión con otros derechos civiles y políticos — que ha sido la reconocida práctica de este Tribunal Interamericano—; en mi opinión, este proceder no otorga una eficacia y efectividad plena de esos derechos, desnaturaliza su esencia, no abona al esclarecimiento de las obligaciones estatales sobre la materia y, en definitiva, provoca traslapes entre derechos, lo que lleva a confusiones innecesarias en los tiempos actuales de clara tendencia hacia el reconocimiento y eficacia normativa de todos los derechos conforme a los evidentes avances que se advierten en los ámbitos nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos.

Se ha de rescatar el hecho que, toda creación jurisprudencial es un avance, pero, al mismo tiempo es el resultado de la denuncia de una insuficiencia, en otras palabras, es la confesión de que falta algo en el texto.

Pese a lo anotado en los párrafos precedentes, se ha de rescatar los esfuerzos realizados por la CIDH por ampliar el catálogo de derechos y así brindar una protección eficaz a los mismos, pese a que los jueces de la Corte no se encuentren facultados para realizar jurisprudencia activista, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema.

En contraste, se ha evidenciado que las actuaciones de los estados se han restringido, esta aserción tiene asidero en el hecho que ninguno de los miembros se ha pronunciado respecto de la necesidad de facultar a la Corte para que continúe con su activismo judicial, elemento trascendental, puesto que de no haberse “auto atribuido los jueces dicha facultad se hubieran generado graves problemas.

CAPÍTULO III

EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

*La diferencia entre ganar y perder,
frecuentemente es... no rendirse.*

Walter Elias Disney

A lo largo del capítulo I y II del presente trabajo de investigación, se abordaron dos aspectos fundamentales; en primer lugar, la importancia de los derechos fundamentales en cuanto a la exigibilidad y justiciabilidad de los mismos, para lo cual fue fundamental considerar su evolución a lo largo del tiempo, así como las diversas concepciones que fueron obteniendo los derechos, así, resultó necesario referirse al concepto de reparación integral, que, conforme lo expuesto tiene como finalidad restituir los derechos mediante el resarcimiento de los daños causados a las víctimas de flagrantes vulneraciones a sus derechos.

En segundo lugar, se hizo referencia a la facultad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hacer efectivas sus sentencias, partiendo de los principios de buena fe y *pacta sunt servanda*, preceptos que obligan a los Estados partes de la Convención a dar fiel cumplimiento a las sentencias expedidas por el mentado órgano jurisdiccional. No obstante, de lo mencionado, si bien, se llegó a concluir que las sentencias expedidas por el organismo internacional carecen de poder de ejecución debido a la falta de mecanismos, se pudo advertir que, en lo que respecta a los criterios esgrimidos por la Corte IDH en materia de reparación integral, los mismos han sido replicados por Ecuador y Colombia.

Así mismo, se coligió que, a partir de 1999 el órgano internacional lleva a cabo un seguimiento al cumplimiento de sus sentencias, actividad que fue reconocida en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del año 2009; sin embargo, la misma llegó a obtener relevancia a partir del 2015, fecha en la cual se creó la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias.

Ahora bien, retrotraigámonos por un instante a la teoría de Thomas Hobbes, para quien el ser humano por esencia es individualista y egoísta, “[e]sta concepción antropológica de Hobbes inevitablemente implica que los seres humanos, tratarán de

construir un gobierno y un Estado por razones utilitaristas, por estricto interés de garantizar la seguridad de cada uno”³³¹.

Así también, en opinión de Hobbes:

... para evitar que el ser humano se pueda destruir, habrá que construir al Estado que, entre sus tareas primordiales, debe asegurar que todos respeten ese pacto de “no agresión”, al tiempo que cooperan en la realización de sus intereses particulares. Para asegurar ese pacto, el Estado no tiene mayores limitaciones que las simples consideraciones utilitaristas relativas a la supervivencia humana; es un Leviatán sin ataduras. En Hobbes, el Leviatán debe proteger intereses, no derechos. Es el Leviatán desencadenado, libre de ejercer la violencia en aras de la realización de lo que Hobbes considera el interés principal: la seguridad³³².

La teoría expuesta implica que, la base del Estado encuentra su asidero en un pacto social. Pacto que, acogiendo las palabras de Ramírez Echeverri se fundamenta en la “obediencia de los súbditos frente al Estado”³³³, es decir, recae en la propia voluntad de los ciudadanos; ahora bien, el modelo expuesto por Hobbes involucraba que el Estado tenga la facultad de hacer uso del poder de una forma absoluta e ilimitada, producto de lo cual, se podrían cometer las más grandes vulneraciones a derechos sin existir consecuencia alguna, puesto que, ni siquiera la ley se presenta como una barrera o impedimento al desmesurado uso del poder.

No obstante, esta concepción totalitarista del Estado fue superada, por Locke y por Rousseau, en tanto manifestaron que: “... la libertad no es incompatible con la existencia de leyes. Al contrario, la Ley cumple la función de preservar la libertad”³³⁴, en efecto, la ley tiene que expresarse como un límite tanto para los ciudadanos como para el Estado.

En este sentido, el Estado tuvo que constituirse paulatinamente con una nueva visión, tomando como punto de partida la protección del conjunto de derechos inherentes al ser humano; llega a tal punto la nueva concepción que, los derechos se presentan como objetivo y fin del Estado, por lo que, la actuación estatal está limitada

³³¹ Francisco Ibarra Palafox, “El Leviatán encadenado o la legitimidad de la violencia estatal”, en Eduardo Medina Mora Icaza, coordinador, *Uso legítimo de la fuerza* (México D.F.: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009), 21.

³³² *Ibíd.*

³³³ Juan David Ramírez Echeverri, *Thomas Hobbes y el Estado absoluto: del Estado de razón al Estado de Terror* (Medellín: Universidad de Antioquia, 2010), 51.

³³⁴ Juan David Ramírez Echeverri, *Thomas Hobbes y el Estado absoluto: del Estado de razón al Estado de Terror* (Medellín: Universidad de Antioquia, 2010), 81.

en cuanto al uso irracional del poder, teniendo como máxima obligación el respeto de las libertades de los ciudadanos.

No obstante, “... lo que se creyó máxima aspiración en el pasado, el sometimiento de la administración a la ley, queda de todos modos relegado como una etapa más en la evolución. Ya no basta con que la administración esté sometida a la ley, sino que es también necesario que la ley esté sometida a la Constitución...”³³⁵.

Para Gordillo, la superación del dogma de la soberanía popular, implica una transición que otorga un papel fundamental al poder judicial, “...intérprete último del significado de las normas constitucionales y, por lo tanto, de la validez de las normas legislativas...”³³⁶, rol que le permite realizar un control de constitucionalidad de las normas, así como su correcta y proporcional aplicación.

En otras palabras, la existencia de límites para el Estado, desde ningún punto de vista implica que éste pueda renunciar a su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos. Frente a este escenario, la seguridad jurídica se presenta como la “certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución”³³⁷, es decir, brinda la convicción que “la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional”³³⁸.

Adicionalmente a lo referido, la seguridad jurídica a más de involucrar la aplicación adecuada de la legislación por parte del operador de justicia, implica indefectiblemente que la autoridad “incuestionablemente, debe ejercer sus funciones dentro de su ámbito jurídico competencial, con el fin de conseguir una correcta administración de justicia”³³⁹, de esta manera se logra la plena materialización de la sentencia.

En este sentido, no se puede descartar que la seguridad jurídica a más de implicar una adecuada aplicación de la ley, permite que el sistema proporcione certeza a todas las personas, entendida como previsibilidad, en sentido cognoscitivo, de manera que el sujeto disponga de “la posibilidad de conocer las consecuencias

³³⁵ Agustín Gordillo, *Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 8* (Buenos Aires: Fundación de derecho administrativo, 2013), 65.

³³⁶ *Ibíd.*

³³⁷ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 016-13-SEP-CC], 16 de mayo de 2013.

³³⁸ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 016-13-SEP-CC], 16 de mayo de 2013.

³³⁹ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 025-14-SEP-CC], 12 de febrero de 2014.

jurídicas de hechos o actos antes de que se produzcan”³⁴⁰, permitiéndosele adoptar decisiones informadas, siendo en consecuencia legítima, ex post, la imputación subjetiva de los resultados de derecho de la opción libremente decidida³⁴¹.

Sobre este contexto, conforme ya fue analizado en el capítulo precedente, la propia naturaleza de la Corte IDH le impide generar ciertas acciones tendientes al cumplimiento y ejecución total de sus sentencias; a pesar de ello, al remitirnos al ámbito nacional de cada Estado, se puede apreciar que ya no existen esas limitaciones, por el contrario, las autoridades jurisdiccionales nacionales se encuentran investidas con todo el poder público para dar efectivo cumplimiento a sus sentencias.

En este sentido, el artículo 436 numeral 9 de Constitución de la República del Ecuador, “atribuye la competencia exclusiva y excluyente a la Corte Constitucional para conocer, sustanciar, resolver y sancionar el incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales y así asegurar la materialización de una correcta administración de la justicia constitucional y de la tutela de los derechos”³⁴².

Por otra parte, el artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prescribe que “[l]as juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución u defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional”³⁴³.

Retomando lo ya anotado, se recalca que la titularidad de un derecho no sólo involucra la posibilidad de acceder a un órgano de justicia y de obtener una sentencia en forma oportuna, “sino que, el verdadero ejercicio de ese derecho se materializará en la medida en que los fallos dictados se cumplan de forma inmediata, integral y efectiva”³⁴⁴; es decir, la verdadera concreción de los derechos se logra a través de la materialización de una sentencia. La conjunción de los dos elementos en forma oportuna y eficaz, provocan una efectiva seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.

³⁴⁰ Gianmarco Gometz, *La certeza jurídica como previsibilidad* (Madrid: Editorial Marcial Pons, 2012), 73.

³⁴¹ Mario Rojas Sepúlveda, “En defensa de la Casación”, en *Actualidad jurídica. Revista de Derecho de la Universidad del Desarrollo* No. 29 (Enero 2014): 26. <<http://www.actualidadjuridicaudd.cl/web/wp-content/uploads/2014/09/AJ29.pdf>>.

³⁴² Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 006-13-SIS-CC], 19 de diciembre de 2013.

³⁴³ Ecuador, *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* [2009], art. 163, en la *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 46.

³⁴⁴ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 006-13-SIS-CC], 19 de diciembre de 2013.

En este sentido, la Corte Constitucional, para el período de transición, señaló que:

Los mecanismos de cumplimiento de sentencias, resoluciones y dictámenes constitucionales se constituyen per se en auténticas garantías jurisdiccionales de protección y reparación de derechos constitucionales, si no existieran mecanismos de cumplimiento como los señalados, de nada serviría la presencia de garantías para la protección de los derechos constitucionales³⁴⁵.

Al respecto, si bien se habla de mecanismos de cumplimiento de sentencias, los cuales se constituyen en una auténtica garantía jurisdiccional, ha de señalarse que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional refiere al cumplimiento de las sentencias, determinado que, “[l]a jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional”³⁴⁶, no obstante, en la ley no se señala que otros mecanismos podrían ser utilizados.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en el presente capítulo se circunscribirán todos los elementos antes expuestos, pero en el ámbito nacional, es decir, se examinará el proceso de seguimiento de cumplimiento de las sentencias en la Corte Constitucional del Ecuador, para ello resulta indispensable determinar si la Corte ecuatoriana posee un proceso especializado para dar seguimiento a sus sentencias y en caso de tenerlo que tan efectivo resulta en la justicia constitucional ecuatoriana.

3.1. La Secretaría Técnica Jurisdiccional y la Dirección Técnica de Seguimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales

El paradigma constitucional vigente, denominado «Estado Constitucional de Derechos y Justicia», instaurado en el Ecuador, a raíz de la publicación de la Constitución de la República en el 2008³⁴⁷, trajo consigo una serie de cambios tanto a nivel dogmático como orgánico.

³⁴⁵ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador para el período de transición, [Primera sentencia de jurisprudencia vinculante], en Registro Oficial No. 351, *Gaceta Constitucional*, 29 de diciembre de 2010.

³⁴⁶ Ecuador, *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* [2009], art. 21, en la *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 10.

³⁴⁷ Publicada Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

Bajo este nuevo esquema, se ha de destacar la relevancia que se otorga a la Corte Constitucional, así, el constituyente determinó en el artículo 429³⁴⁸ de la Constitución de la República, que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, cuya misión principal entre otras es, garantizar la supremacía de la Carta Magna, así como también, asegurar la efectiva vigencia y ejercicio de los derechos reconocidos en esta y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En armonía con lo expuesto, y en concordancia con lo prescrito en el artículo 436³⁴⁹ de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional confirió en el artículo 191 numeral 8³⁵⁰ de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

³⁴⁸ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tit. IX, “Supremacía de la Constitución”, cap. Segundo, “Corte Constitucional”, art. 429 ([Quito]: Corporación de Estudios y Publicaciones):126. Artículo. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Las decisiones relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán adoptadas por el pleno de la Corte.

³⁴⁹ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tit. IX, “Supremacía de la Constitución”, cap. Segundo, “Corte Constitucional”, art. 436 ([Quito]: Corporación de Estudios y Publicaciones):128. Artículo. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante. 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución. 4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo. 5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias. 6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. 7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución. 8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales. 9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. 10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley.

³⁵⁰ Ecuador, *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* [2009], art. 191, en la *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 54.

Artículo. 191.- Funciones. - Corresponde al Pleno de la Corte Constitucional: Preparar y aprobar las iniciativas de proyectos de ley que sean de competencia de la Corte Constitucional, previa su

Constitucional al Pleno de la Corte Constitucional la facultad de expedir, interpretar y modificar, a través de resoluciones los reglamentos para el funcionamiento del Organismo Constitucional.

En tal virtud, el Pleno del Organismo aprobó en sesión ordinaria de 26 de agosto 2015, el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Constitucional, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 591 de 21 de septiembre de 2015.

Concomitantemente la Corte Constitucional aprobó la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional en sesión ordinaria de 2 de septiembre de 2015, mismo que se encuentra publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 613 de 22 de octubre de 2015.

3.2. Fase de seguimiento de las sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional

Previamente se ha de iniciar señalando que, en el modelo estatal vigente, la justicia constitucional se presenta como la garante y principal protectora de la Constitución; en este sentido, la misma se encuentra conjugada por órganos especializados encargados de la tramitación y sustanciación de los procesos puestos en su conocimiento. Esta justicia ha provocado según palabras de Durán Ponce, el «surgimiento del gobierno de los jueces», así, la justicia constitucional debe ser entendida como “el conjunto de órganos judiciales para controlar al Estado y defender la libertad y el respeto de las reglas de juego democrático consagradas en la Constitución”³⁵¹.

Por el contrario, hay quienes aseguran que los derechos están en riesgo por el rol que tienen los jueces para aplicar directamente la Constitución; esto se debe a que los jueces tienen la facultad de cambiar la letra de la ley tan dolo por su poder de interpretar y aplicar la Ley Suprema, así los jueces pueden modular las sentencias de

presentación a la Asamblea Nacional, así como ejercer la potestad normativas establecidas en el numeral 10 del artículo 436 de la Constitución.

³⁵¹ Augusto Durán Ponce, “Justicia constitucional”, *Revista Judicial derechoecuador.com*, (2013): <<http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2013/01/16/justicia-constitucional>>.

tal manera que la jurisprudencia nunca podrá ser clara y objetiva. En pocas palabras estamos frente a la arbitrariedad judicial³⁵².

Frente a esta situación, bien hace Salgado en acoger las palabras de Lowenstein, cuando advertía no perder de vista a los operadores de la Constitución -desde los gobernantes y autoridades hasta los jueces- que, en definitiva, son quienes aplican los preceptos constitucionales en bien o en mal de la comunidad, subordinándose a sus mandatos o contraviniéndolos³⁵³.

Ahora bien, según se ha citado y como se analizó en los capítulos anteriores del presente trabajo, los jueces constitucionales, una vez que constaten la vulneración de derechos tienen la obligación de dictar sentencia, estableciendo las medidas de reparación integral a favor de la víctima.

En este sentido, la Constitución del Ecuador en su artículo artículo 86 numeral, establece:

La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatare la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas o negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias que deban cumplirse³⁵⁴.

Concomitantemente el artículo 18³⁵⁵ de la Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prescribe que, en caso de declararse vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial, esto, con la finalidad de que la persona o personas afectadas gocen y disfruten sus derechos de la manera más adecuada posible, restableciendo su situación anterior a la vulneración. Así, la reparación incluye: 1) Restitución del derecho; 2) Compensación económica o patrimonial; 3) Rehabilitación; 4) Satisfacción; 5) Garantías de no repetición; y, 6) Obligación de remitir a la autoridad competente para

³⁵² Ávila Santamaría, “En defensa del neoconstitucionalismo”, 22.

³⁵³ Hernán Salgado Pesantes, *¿Guardianes o sepultureros de la Constitución 2008?* Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, No.17-2013 (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013) <http://hernansalgadopesantes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40:guardianes-o-sepultureros-de-la-constitucion-2008&catid=2:articulos&Itemid=3>.

³⁵⁴ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tít. III, “Garantías Constitucionales”, cap. Tercero, “Corte Constitucional”, art. 83.3 ([Quito]: Corporación de Estudios y Publicaciones):33-34.

³⁵⁵ Ecuador, *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* [2009], art. 18, en la *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 9.

investigar y sancionar -medidas que ya fueron analizadas en el primer capítulo del presente trabajo y donde se determinó su finalidad y alcance-.

Al hacer mención al daño material e inmaterial, se determina que, el daño material comprende la compensación por las pérdidas o detrimentos de los ingresos, gastos efectuados por motivo y como consecuencia de la vulneración de derechos. En tanto la reparación inmaterial, involucra la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada.

Ahora bien, la verdadera reparación integral de una persona a la que se le vulneraron los derechos, no termina con la mera declaratoria de una sentencia, sino que, lo dispuesto en la sentencia debe ser ejecutado de forma integral y a entera satisfacción de la víctima, “[d]e ahí que las decisiones de la jurisdicción constitucional deben ejecutarse total y oportunamente, toda vez que esto constituye el presupuesto indispensable para que la reparación integral se materialice y por consiguiente que el proceso constitucional finalice”³⁵⁶.

En este sentido, ha de entenderse que ningún proceso en el que se hayan dictado medidas de reparación integral, puede ser archivado hasta el momento en que se cumplan todas y cada una de las disposiciones contenidas en la resolución constitucional. “Precisamente, para efectos de alcanzar dicho objetivo, la Constitución de la Republica, en el artículo 436 numeral 9 establece como atribución de la Corte Constitucional conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”³⁵⁷.

Así también, en el marco de las garantías jurisdiccionales reconocidas en favor de las personas -naturales o jurídicas- destaca entre otros principios establecidos por el constituyente, el referente a que las decisiones dictadas por los operadores de justicia en el conocimiento de garantías jurisdiccionales, son de cumplimiento inmediato y obligatorio, sin perjuicio de interposición de recursos, conforme lo establecido en el artículo 162³⁵⁸ de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

³⁵⁶ Pamela Juliana Aguirre, edit., *Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional*, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 131-132.

³⁵⁷ *Ibíd.*

³⁵⁸ Artículo. 162.- Efectos de las sentencias y dictámenes constitucionales. - Las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación, y sin perjuicio de su modulación.

Desde esta óptica, resulta necesario hacer referencia a la primera sentencia de jurisprudencia vinculante emitida por la Corte Constitucional para el período de transición No. 001-10-JPO-CC dictada dentro de la causa No. 0999-09-JP, el 22 de diciembre de 2010, en la cual textualmente se señaló:

El mecanismo de cumplimiento de sentencias propende a la materialización de la reparación integral adoptada dentro de una garantía jurisdiccional. La Corte Constitucional, de oficio o a petición de parte, considerando que de por medio se encuentra la materialización de la reparación integral, y sin necesidad de que comparezca exclusivamente el afectado, está en la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias constitucionales³⁵⁹.

Sumado a lo expuesto, la Corte Constitucional el 22 de octubre de 2015 expidió la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, en el cual crea la «Fase de seguimiento de las sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional».

En el artículo 100 del referido reglamento, se establece la naturaleza y efectos del proceso, llegando a determinar que:

Corresponde al Pleno de la Corte Constitucional, de oficio o a petición de parte, proceder con la fase de seguimiento de sus propias sentencias, dictámenes, acuerdos reparatorios y resoluciones expedidas por el máximo órgano de la justicia constitucional; dentro de esta fase, el Pleno de la Corte Constitucional podrá expedir todos los autos conducentes a la ejecución integral de estas decisiones. Solo una vez que el Pleno de la Corte Constitucional compruebe la ejecución integral de sus sentencias, dictámenes, resoluciones, acuerdos reparatorios y demás disposiciones relacionadas, podrá archivar la causa constitucional, conforme lo previsto en el artículo 86 numeral 3 de la Constitución de la República³⁶⁰.

De lo citado se advierte que, la fase de seguimiento se puede iniciar de oficio o a petición de parte, así mismo, esta etapa procede exclusivamente respecto de sentencias, dictámenes, acuerdos reparatorios y resoluciones expedidos por el Pleno de la Corte Constitucional. De la misma manera se constata que, durante la referida etapa el Pleno del Organismo podrá expedir todos los autos conducentes a la ejecución

³⁵⁹ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador para el período de transición, [Primera sentencia de jurisprudencia vinculante], en Registro Oficial No. 351, *Gaceta Constitucional*, 29 de diciembre de 2010.

³⁶⁰ Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador: “Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional” [2015], art. 100, en la *Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional*.

integral de la sentencia, esto en virtud de lo prescrito en el artículo 21³⁶¹ de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

En lo que refiere a la activación de la fase de seguimiento, el artículo 101 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, establece que la fase de seguimiento puede empezar “por disposición del Pleno de la Corte Constitucional, a petición de parte, o una vez que hubiere fenecido el término concedido en la sentencia, dictamen y/o acuerdo reparatorio para su ejecución”³⁶².

Una vez iniciada la fase de seguimiento el Pleno de la Corte Constitucional se encuentra facultado para realizar “el requerimiento de información pertinente a las partes procesales, terceros interesados, autoridades públicas y particulares relacionados con la ejecución”³⁶³; la norma es enfática al resaltar que “[n]o procederá la invocación de reserva respecto a la información referente a la ejecución de disposiciones emitidas por la Corte Constitucional”³⁶⁴.

Concomitantemente se señala que, durante la fase en mención el Pleno del Organismo puede emplear todos los medios que considere adecuados y pertinentes tendientes a la ejecución integral de sus sentencias, como convocar audiencia, ordenar peritajes, solicitar la intervención de la fuerza pública y hasta realizar vistas *in situ*.

³⁶¹ Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [2009], art. 21, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 10.

Artículo. 21.- Cumplimiento. - La jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares; de ser necesario, podrá modificar las medidas. La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instancia estatal, nacional o local, de protección de derechos. Estos podrán deducir las acciones que sean necesarias para cumplir la delegación. La Defensoría del Pueblo o la instancia delegada deberá informar periódicamente a la jueza o juez sobre el cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio. El caso se archivará sólo cuando se haya ejecutado integralmente la sentencia o el acuerdo reparatorio.

³⁶² Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador: “Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional” [2015], art. 101, en la *Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional*.

Artículo. 101.- Activación de la fase de seguimiento. - La fase de seguimiento se activará mediante la disposición del Pleno de la Corte Constitucional, a petición de parte, o una vez que hubiere fenecido el término concedido en la sentencia, dictamen, resolución y/o acuerdo reparatorio para su ejecución.

³⁶³ Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador: “Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional” [2015], art. 102, en la *Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional*.

³⁶⁴ Ecuador: Corte Constitucional del Ecuador: “Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional” [2015], art. 102, en la *Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional*.

Por otra parte, y en consideración a lo que establece el artículo 21 de la LOGJCC, la Corte Constitucional tiene la potestad de “evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares”³⁶⁵ y de ser necesario podrá modificar las mismas.

Finalmente se determina que, en caso de inejecución de las sentencias, dictámenes, resoluciones, acuerdos reparatorios y demás disposiciones emitidas por la Corte Constitucional, el Pleno del Organismo podrá sancionar a los sujetos obligados a su cumplimiento, esto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que ordena:

En caso de violación al trámite de garantías constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple, de conformidad con las siguientes reglas:

1. En caso de que el incumplimiento provoque daños, la misma jueza o juez sustanciará un incidente de daños y perjuicios, mediante un procedimiento sumario, por este hecho y contra la persona responsable, particular o pública, y su cuantía será cobrada mediante apremio real³⁶⁶.

Como se puede inferir de lo anotado en los párrafos precedentes, la «Fase de Seguimiento» implementada por la Corte Constitucional tiene como finalidad supervisar el cumplimiento integral de las disposiciones contenidas en las sentencias emitidas por el Pleno del Organismo.

Ahora bien, es pertinente destacar que si bien la fase de seguimiento recién se encuentra instituida a partir del año 2015 con la expedición de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, se advierte que, la Corte Constitucional para el período de transición dio inicio a este proceso con la expedición de la primera sentencia de jurisprudencia vinculante No. 001-10-JPO-CC -referida anteriormente-, puesto que pone de manifiesto la facultad y al mismo tiempo la obligación del Pleno de la Corte Constitucional de velar por la efectiva materialización de sus sentencias.

En este sentido se advierte que, la Corte Constitucional para el periodo de transición realizó los primeros esbozos de lo que hoy se conoce como la fase de

³⁶⁵ Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [2009], art. 21, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 10.

³⁶⁶ Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [2009], art. 22, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 10.

seguimiento; sin embargo, se ha de resaltar el hecho que este proceso se afianzó con la primera Corte Constitucional a partir del año 2014, formalizando finalmente en el año 2015. Ahora bien, con una estructura definida y un marco constitucional que respalda y faculta al Pleno del Organismo a dar inicio al referido proceso, se advierte que el mismo se encuentra a cargo de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, específicamente de la Dirección Técnica de Seguimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales, unidad que actúa exclusivamente a solicitud del Pleno de la Corte Constitucional.

Sobre esa base, la primera Corte Constitucional del Ecuador ha venido actuando y generando importante jurisprudencia en esta materia, tomando como referentes los estándares interamericanos relacionados con la reparación integral y su cumplimiento³⁶⁷.

Como corolario de lo referido, se ha de destacar que el nuevo procedimiento establecido por la Corte Constitucional del Ecuador, resulta ser de gran trascendencia, ya que se pone de manifiesto que, no importa cuántas sentencias pueda llegar a emitir el órgano constitucional, sino que, la importancia radica en cuantas de las medidas dispuestas por el Pleno del Organismo en sus sentencias son materializadas, es decir, cuantos derechos son realmente reparados.

A continuación se examinará los casos que se encuentran en la «Fase de Seguimiento», desde abril de 2014 a marzo de 2015³⁶⁸.

3.2.1. Causas en la Fase de Seguimiento «abril de 2014 a marzo 2015»

La Dirección Técnica de Seguimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales, desde abril de 2014 a marzo de 2015, ha realizado el seguimiento del cumplimiento de 55 causas entre las cuales se encuentran:

³⁶⁷ Aguirre, “Una lectura cuantitativa y cualitativa”, 132-133.

³⁶⁸ El periodo de tiempo determinado atiende al hecho de que no existe ninguna base de datos oficial respecto a los casos que se encuentran en la fase de seguimiento, exclusivamente se cuenta con la obra “Una lectura cuantitativa y cualitativa de los decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional” texto mediante el cual se da a conocer el proceso de seguimiento; no obstante de lo referido, considerando que la obra fue publicada en el 2015, se ha procedido con la búsqueda en la página de la Corte Constitucional - <https://www.corteconstitucional.gob.ec/>- para así determinar el estado actual de las causas.

Cuadro 9.

CAUSAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN FASE DE SEGUIMIENTO

Causas en el proceso de seguimiento de sentencias -abril de 2014 – marzo de 2015-		
No.	No. Causa	No. Sentencia
1	0043-14-IS	----
2	0003-13-IS	0707-2006-RA
3	0022-09-IS	0010-09-SIS-CC
4	0073-10-IS	007-14-SIS-CC
5	0042-10-IS	007-12-SIS-CC
6	0023-12-IS	024-14-SIS-CC
7	0003-10-IS	013-10-SIS-CC
8	0013-09-IS	009-09-SIS-CC
9	0052-10-IS	004-11-SIS-CC
10	0054-09-IS	017-10-SIS-CC
11	0015-12-IS	001-13-SIS-CC
12	0017-12-IS	021-14-SIS-CC
13	0038-10-IS	029-14-SIS-CC
14	0054-12-IS	016-14-SIS-CC
15	0063-10-IS	010-11-SIS-CC
16	0011-10-IS	007-11-SIS-CC
17	0068-10-IS	002-14-SIS-CC
18	0071-10-IS	014-14-SIS-CC
19	0029-09-IS	002-10-SIS-CC
20	0007-11-IS	023-14-SIS-CC
21	0014-09-IS	010-10-SIS-CC
22	0024-11-IS	025-12-SIS-CC
23	0037-11-IS	010-12-SIS-CC
24	0053-12-IS	006-13-SIS-CC
25	0020-09-IS	001-12-SIS-CC
26	0021-09-IS	002-12-SIS-CC
27	0019-14-IS	018-14-SIS-CC
28	0066-10-IS	005-11-SIS-CC
29	0064-10-IS	003-12-SIS-CC
30	0001-10-IS	021-10-SIS-CC
31	0072-14-CN	004-14-SCN-CC
32	0036-10-CN	006-14-SCN-2014
33	1104-11-EP	211-12-SEP-CC
34	1714-12-EP	134-14-SEP-CC
35	0971-11-EP	126-14-SEP-CC
36	1826-12-EP	175-14-SEP-CC
37	0625-09-EP	025-11-SEP-CC
38	0629-09-EP	019-11-SEP-CC
39	0440-09-EP	019-12-SEP-CC
40	0422-09-EP	034-09-SEP-CC
41	1353-13-EP	191-14-SEP-CC
42	1683-12-EP	115-14-SEP-CC
43	1852-11-EP	114-14-SEP-CC
44	0079-10-EP	077-10-SEP-CC

45	1783-11-EP	014-15-SEP-CC
46	0072-09-AN	006-09-SAN-CC
47	0068-10-AN	0001-12-SAN-CC
48	0012-03-AA	0012-03-AA
49	0014-12-AN	001-13-SAN-CC
50	0027-09-AN	008-09-SAN-CC
51	0604-04-RA	0604-04-RA
52	0070-99-RA	0070-99-RA
53	0716-07-RA	----
54	1226-06-RA	1226-2006-RA
55	1311-2007-RA	1311-07-RA

Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 134-135.

Fuente primaria: Sentencias emitidas por las Corte Constitucional del Ecuador que se encuentran en fase de seguimiento.

Conforme se advierte del cuadro *-ut supra-* el proceso de seguimiento resulta ser sumamente extenso ya que abarca todo tipo de sentencias emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador, dentro de las garantías jurisdiccionales como son: incumplimiento de sentencias (IS); acción extraordinaria de protección (EP); consulta de norma (CN); y, acción por incumplimiento (AN). Adicionalmente, la Corte realiza el seguimiento de resoluciones emitidas por el ex Tribunal Constitucional, las cuales no han sido ejecutadas, así por ejemplo de aquellas dictadas en recursos de amparo (RA) y demandas de inconstitucionalidad de acto administrativo (AA).

Del cuadro superior, del cual se desprenden todas las causas que cuentan con sentencia emitida por el Pleno de la Corte Constitucional – y algunas del ex Tribunal Constitucional- y que actualmente se encuentran en fase de seguimiento se puede advertir los siguientes datos:

Cuadro 10.

DETALLE DE LAS CAUSAS EN FASE DE SEGUIMIENTO ATENDIENDO AL TIPO DE GARANTÍA JURISDICCIONAL

Tipo de acción	No.
Incumplimiento de Sentencias - (IS)	30
Consulta de Norma - (CN)	2
Acción Extraordinaria de Protección - (EP)	13
Acción por Incumplimiento - (AN)	4
Demanda de Inconstitucionalidad - (AA)	1

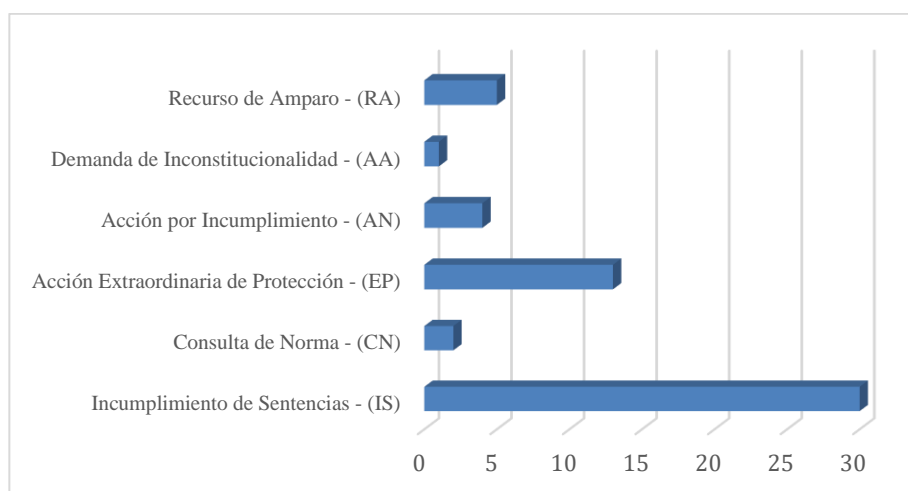
Recurso de Amparo - (RA)	5
TOTAL	55

Fuente directa: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 134-135.

Gráfico 2.

TIPOS DE ACCIONES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO



Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 134-135.

Al observar el cuadro y la gráfica en cuestión, se puede determinar que, si bien la Corte Constitucional se encuentra facultada para iniciar la fase de seguimiento de todas las sentencias que emite, ya sea de oficio o a petición de parte o como consecuencia de que hubiera fenecido el término concedido en la sentencia, entre el periodo de abril de 2014 a marzo de 2015, se han iniciado más procesos de seguimiento dentro de las acciones de incumplimiento de sentencias que en el resto de garantías.

De igual manera, salta a la vista el particular hecho que la Corte haya dado inicio al proceso de seguimiento de resoluciones expedidas por el ex Tribunal Constitucional, procesos en los cuales se advertiría que se ha mantenido un incumplimiento de lo dispuesto por más de 10 años, lo que representa una clara vulneración de derechos.

Frente a este escenario, resulta pertinente destacar que la Corte Constitucional en las rendiciones de cuentas de los periodos 2013-2014³⁶⁹ y 2014-2015³⁷⁰, dio a conocer que ha emitido un total de 850 sentencias, no obstante, tan solo se ha iniciado la fase de seguimiento a 55 causas, lo que representa un 6.47% del total de causas que cuentan con sentencia. Ahora bien, la cifra no resulta ser tan alarmante si se consideran varios aspectos.

Por un lado, no todas las sentencias emitidas por la Corte poseen un dictamen favorable; y, por otra parte, no en todos los casos el Pleno ordena medidas de reparación integral. En este sentido, podemos encontrar aquellas decisiones emitidas en el conocimiento de acciones públicas de inconstitucionalidad, en cuyo caso el Pleno del organismo dispuso ya sea la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma contraria al texto constitucional o la conservación de la misma en el supuesto de haberla encontrado conforme a la Constitución o en su defecto dispuso una interpretación condicionada a fin de garantizar la preservación y vigencia de esta.

Sucede lo contrario con garantías jurisdiccionales tales como la acción extraordinaria de protección, incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, en cuyo caso o bien la Corte Constitucional en su condición de máximo garante de la vigencia y supremacía de la Constitución de la República una vez constatada y declarada la vulneración de derechos en caso de haberlo, dispuso la práctica de medidas de reparación integral tendientes a restablecer la situación anterior a la vulneración de derechos constitucionales, o simplemente no aceptó las mismas y dispuso el archivo de las garantías en cuestión.

Se ha de entender entonces que el número de causas que se encuentran en la fase de seguimiento responden exclusivamente a aquellas decisiones en las que la Corte dispuso medidas de reparación integral.

Finalmente se ha de destacar que, es a partir de octubre de 2015 que el proceso de seguimiento se normativiza-, atendiendo a lo prescrito en la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional;

³⁶⁹ Corte Constitucional del Ecuador, rendición de cuentas periodo 2013-2014, <<https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/transparencia/institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas/2013-2014/519-informe-de-gesti%C3%B3n-2013-2014/file.html>>.

³⁷⁰ Corte Constitucional del Ecuador, rendición de cuentas periodo 2014-2015, <<https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/transparencia/institucional/rendici%C3%B3n-de-cuentas/2014-2015/523-informe-de-gesti%C3%B3n-2015-1/file.html>>.

por lo que se puede asegurar que el proceso resulta ser incipiente, puesto que lleva vigente menos de un año.

Retomando lo anotado en párrafos precedentes, la Dirección Técnica de Seguimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales, actúa exclusivamente previa disposición del Pleno del Organismo. Una vez que se ordena la realización del insumo, la dirección procede “analiza[r] y sistematiza[r] la información pertinente”³⁷¹ que consta en los respectivos expedientes constitucionales, esto, con la finalidad de generar un insumo técnico-jurídico en el cual se examina si las disposiciones contenidas en la sentencia han sido o no ejecutadas, así como a determinar su grado de ejecución, una vez realizado este, es conocido y aprobado por el Pleno del Organismo.

Es menester señalar que, ninguno de los insumos generados por la Dirección de Seguimiento son de carácter vinculante, es decir, la decisión de determinar el incumplimiento de las sentencias es facultad exclusiva del Pleno, la Dirección exclusivamente presenta informes en los que se analiza el estado actual de cada proceso a la luz de la información que contiene cada expediente; de igual manera, los informes son carácter de reservados y confidenciales, por lo que ninguna de las partes procesales o terceros interesados pueden solicitar su exhibición.

Vinculado al proceso de seguimiento de las 55 causas -referidas *ut supra*- la Corte Constitucional en uso de sus atribuciones y competencias jurisdiccionales ha emitido una serie de autos y providencias con la finalidad de dar efectivo cumplimiento a sus sentencias, hasta lograr su total materialización; aspectos que serán analizados en el siguiente acápite.

3.2.2. Autos de verificación emitidos dentro de la fase de seguimiento «abril de 2014 a marzo 2015»

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece “[d]urante [la] fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las

³⁷¹ Aguirre, “Una lectura cuantitativa y cualitativa”, 136.

víctimas y sus familiares; de ser necesario, podrá modificar las medidas”³⁷², se advierte que el Pleno de la Corte Constitucional se encuentra facultado para emitir todos los autos que crea convenientes a fin de dar cumplimiento integral a lo dispuesto en la *decisum*.

Ahora bien, continuando con el análisis de la fase de seguimiento en la Corte Constitucional, de la revisión de la obra «Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional»³⁷³, salta a la vista la potestad del Pleno del Organismo de emitir «autos de verificación», esto por cuanto, de la revisión de la Constitución, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como de la Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos y Competencias de la Corte Constitucional, no se advierte que se haga referencia a tal término de manera expresa y mucho menos la existencia de una definición, por lo que se entendería *prima facie* que la emisión de los mentados autos son de competencia exclusiva de la Corte durante la fase de seguimiento de cumplimiento de sus sentencias.

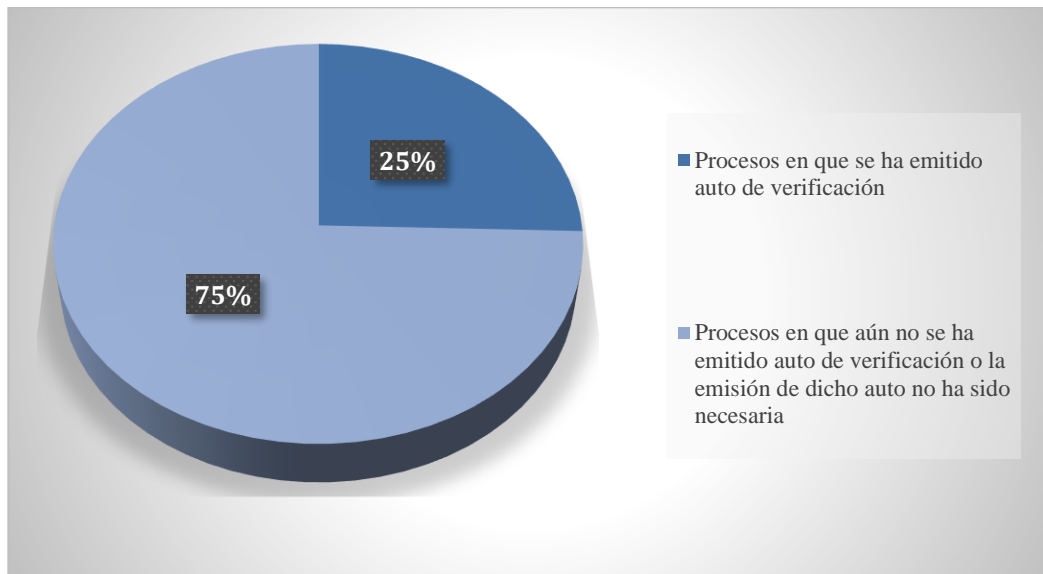
En este mismo sentido, a partir del espacio de análisis fijado -abril de 2014 a marzo de 2016- se ha de señalar que, el Pleno de la Corte Constitucional ha dictado 14 «autos de verificación», dentro de las 55 causas que se encuentran en fase de seguimiento. Considerando el total de casos que se encuentran en la fase en cuestión, se observa que apenas un 25% cuentan con un auto de verificación, como se desprende la siguiente gráfica:

³⁷² Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [2009], art. 21, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 10.

³⁷³ Como ya se ha referido anteriormente, la obra “Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional”, es el primer texto emitido por la Corte Constitucional del Ecuador en el cual se hace referencia a la Fase de Seguimiento de las Sentencias y Dictámenes emitidos por la Corte Constitucional.

Gráfico 3.

AUTOS DE VERIFICACIÓN



Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 141.

Fuente primaria: Autos de Verificación emitidos por las Corte Constitucional del Ecuador que se encuentran en fase de seguimiento.

Advirtiéndose lo plasmado en la gráfica se ha de resaltar el hecho que, en el 75% de las causas que no cuentan con auto de verificación aparece la leyenda “*procesos en que aún no se ha emitido auto de verificación o la emisión de dicho auto no ha sido necesaria*”, no obstante de lo referido, no se puede constatar que criterios son los que priman para determinar si un caso es pertinente o no la emisión del mentado auto. En este sentido y con la intención de poder determinar cuál es el razonamiento de la Corte Constitucional para emitir autos de verificación se presenta un desglose de todos los autos expedidos por el Organismo, destallando las disposiciones que contienen cada uno de ellos:

Cuadro 11.

AUTOS DE VERIFICACIÓN EMITIDOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

Autos de verificación de cumplimiento emitidos por el pleno de la corte constitucional -abril de 2014 – marzo de 2015-			
No.	Causa	Fecha de aprobación del Pleno	Medidas dispuestas en el auto
1	0042-10-IS	31 de marzo de 2015	Disponer como medida de reparación equivalente, en razón del incumplimiento de larga data de la sentencia No. 007-12-SIS-CC, que el gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas cancele a la señora Carmen Angelita Tapia Yela, un valor por concepto de indemnización de las consecuencias directas de la vulneración de los derechos constitucionales atendiendo exclusivamente al daño emergente. En caso de incumplimiento de esta medida se estará a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución.
			Disponer que para la determinación del valor de indemnización correspondiente a las consecuencias directas de los derechos constitucionales vulnerados atendiendo exclusivamente al daño emergente, se proceda a un acuerdo entre las partes en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, al que deben acudir las partes de manera obligatoria con el propósito de llegar a un acuerdo y establecer el monto de la indemnización dentro del término de treinta días. En caso de incumplimiento de esta medida se estará a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución.
			Disponer que el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y las partes involucradas en el proceso de mediación, una vez cumplida integralmente la medida de reparación equivalente, informen a esta Corte Constitucional de forma inmediata acerca del cumplimiento de la misma. En caso de incumplimiento de esta medida se estará a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución.

2	0052-10-IS	25 de marzo de 2015	Disponer que el Comandante General de la Policía Nacional en el término de veinte (20) días presente a esta Corte Constitucional, los documentos que permitan determinar la cancelación de los aportes a favor del ciudadano Luis Rosmon Lara Tapia, que por ley debía realizar la Policía Nacional en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y en el Servicio de Cesantía, así como demuestre el pago de los haberes dejados de percibir por el ciudadano Luis Lara Tapia, durante el tiempo que estuvo inconstitucionalmente fuera de la Institución Policial. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.
			Disponer al Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, así como al Director Ejecutivo del Fondo de Cesantía de la Policía Nacional o quienes ejerzan la representación legal de dichas instituciones, que en el término de veinte (20) días presenten a esta Corte Constitucional un informe pormenorizado acerca de la situación del señor teniente de policía Luis Rosmon Lara Tapia, con respecto a las aportaciones realizadas por la Policía Nacional a su favor. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.
			Poner en conocimiento del señor Ministro del Interior en calidad de representante legal de la Policía Nacional, el contenido del presente Auto de Verificación de Cumplimiento.
3	0625-09-EP	1 de octubre de 2014	Disponer que en el término de 15 días, los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, informe a esta Corte Constitucional acerca del cumplimiento integral de la sentencia No. 0025-11-SEP-CC de 21 de Septiembre de 2011, así como también informen sobre el estado actual de las medidas cautelares que se ordenaron dentro de la causa penal No. 534-2007 sustanciada en esa judicatura. En caso de incumplimiento de esta decisión, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
			Disponer que el señor Registrador de la Propiedad del cantón Samborondón provincia del Guayas y señor Registrador de la Propiedad del cantón Salcedo provincia de Cotopaxi, informen a ésta Corte Constitucional si en sus registros constan inscritas medidas cautelares de orden real en contra de las propiedades del señor Carlos Gonzalo Hidalgo Terán. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.

4	0027-09-AN	1 de octubre de 2014	Disponer que la medida de reparación integral contenida en el numeral tercero de la sentencia N°. 0008-09-SAN-CC sea entendida como una garantía de no repetición, por lo que, el Consejo de Educación Superior tiene la obligación de incorporar de forma continua e indefinida, en todos los actos jurídicos-administrativos que tengan relación con nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, principios con perspectiva intercultural, en aras de aplicar a cabalidad los derechos de estos pueblos.
			Disponer que el Consejo de Educación Superior informe continuamente a esta Corte Constitucional respecto de cualquier acto jurídico administrativo que tenga relación con nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, a efectos de verificar la inclusión de principios con perspectiva intercultural.
5	0064-10-IS	25 de marzo de 2015	Disponer que, en razón el cumplimiento tardío de la medida de reintegro, la Policía Nacional del Ecuador cancele al señor José Antonio Mera Vargas los valores correspondientes a los salarios que este dejó de percibir desde el 03 de abril del 2007 hasta el momento de su reincorporación a las filas policiales.
			Disponer que para la determinación económica a favor del señor José Antonio Mera Vargas, correspondiente a los salarios dejados de percibir, se proceda conforme a lo dispuesto en la sentencia No. 0004-13-SAN-CC emitida dentro de la causa No. 0015-10-AN, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
			Disponer que dentro del término de 15 días, a partir del cumplimiento integral de la medida de reparación económica, tanto el Comandante General de la Policía Nacional, como los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que sustancien el proceso, de forma independiente, informen a esta Corte Constitucional acerca del cumplimiento de la medida de reparación económica, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
6	0066-10-IS	1 de octubre de 2014	Disponer que el Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano cancele a Martha Cumandá Veloz Chávez los salarios que dejó de percibir desde el 12 de noviembre de 2009 hasta el 13 de junio de 2010, bajo las prevenciones de aplicación del artículo 84 número 4 de la Constitución de la República.
			Disponer que para la determinación económica correspondiente a los derechos tutelados en la sentencia No. 0005-11-SIS-CC de 24 de mayo de 2011, se proceda conforme a lo dispuesto en la sentencia No. 0004-13-SAN-CC, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.

			Disponer que una vez iniciado el proceso de determinación económica ante el respectivo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, éste deberá informar a esta Corte Constitucional respecto del estado del proceso dentro del término de 60 días, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
7	0015-12-IS	10 de diciembre de 2014	Disponer que la jueza cuarta de tránsito del Guayas remita al Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas, en el término de 5 días, todo el expediente que corresponde a la sustanciación de la acción de protección No. 407-09, cuyo incumplimiento declaró la Corte Constitucional en la sentencia No. 001-13-SIS-CC de 17 de julio de 2013, bajo prevención de aplicación del artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
			Disponer que una Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas, previo sorteo de rigor, determine el monto que corresponde a la reparación económica correspondiente a los derechos tutelados de los accionantes en la sentencia No. 001-13-SIS-CC de 17 de julio de 2013, conforme a lo dispuesto en la sentencia No. 004-13-SAN-CC, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador.
8	0011-10-IS	15 octubre de 2014	Disponer que, el Prefecto de la provincia del Azuay en el plazo improrrogable de 30 días, a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional respecto de las funciones y responsabilidades que se le ha otorgado al demandante en su cargo de “Responsable de Bodegas y Activos Fijos”, de conformidad con lo que dispone la estructura orgánica del Gobierno Provincial del Azuay. En caso de incumplimiento de esta medida se estará a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
			Disponer que, el Prefecto de la provincia del Azuay en el plazo de 30 días, a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional respecto de la realización de la auditoría administrativa al cargo de Responsable de Bodegas, estableciendo una separación de períodos entre el manejo de la bodega efectuada por el señor Julio Jaime Nicholls Merino y el señor Pablo Bravo. En caso de incumplimiento de esta medida se estará a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.

9	0037-11-IS	24 de junio de 2015 ³⁷⁴	Disponer que en razón del incumplimiento de la resolución constitucional No. 334-RA-99-IS de 11 de agosto de 2000, como medida de reparación compensatoria, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador cancele al señor Luis Alberto Tobar Abril los valores correspondientes a los salarios que este dejó de percibir desde el 11 de agosto de 2000 hasta la notificación de este auto. En caso de incumplimiento de esta medida, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución.
			Disponer que para la determinación económica correspondiente a los derechos constitucionales vulnerados, se proceda a un acuerdo entre las partes en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, al que deben acudir de manera obligatoria las partes con el exclusivo propósito de llegar a un acuerdo y establecer el monto de la indemnización pecuniaria en un plazo no mayor a treinta días.
			Disponer que el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y las partes involucradas en el proceso de mediación, una vez cumplida integralmente la medida de reparación compensatoria, informen a esta Corte Constitucional de forma inmediata acerca del cumplimiento de la misma. En caso de incumplimiento de esta medida, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución.
10	0022-09-IS	En proceso de aprobación ³⁷⁵	Disponer que el director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, autorice el funcionamiento y operación del almacén libre GALACTIC S.A. por el lapso de 34 meses, tiempo que le fue restringido por razón de la aplicación de un plazo retroactivo de renovación en el contrato de funcionamiento suscrito el 23 de noviembre de 2009. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.
			Disponer que el director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, informe a esta Corte Constitucional el cumplimiento de lo ordenado en este auto de verificación, dentro del término de 15 días a partir del cumplimiento de la obligación descrita en el numeral anterior. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.

³⁷⁴ En la fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 148, aparece la leyenda “en proceso de aprobación”, sin embargo de la revisión en la página web de la Corte Constitucional – sistema de acción de acciones constitucionales <<http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/index.php>>, se advierte que el 24 de junio de 2015 el Pleno de la Corte Constitucional expidió el auto de verificación dentro de la causa No. 0037-11-IS.

³⁷⁵ Es pertinente destacar que, de la revisión en la página web de la Corte Constitucional – sistema de acción de acciones constitucionales <<http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/index.php>>, se advierte que hasta la presente fecha el Pleno de la Corte Constitucional no aprobado el auto de verificación en el caso No. 0022-09-IS.

11	0072-09-AN	15 de octubre de 2014	Disponer que la Dirección General de Aviación Civil, a través de su representante legal, presente la demanda que dé inicio al juicio de expropiación dispuesto en la sentencia No. 019-11-SEP-CC, aparejando los requisitos que establece la ley.
			Que el ISSFA conceda los beneficios establecidos en la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, considerándose el grado de capitán de las Fuerzas Armadas del Ecuador; en consecuencia, se cancelará mensualmente la remuneración que le corresponde al señor César Rodrigo Díaz Álvarez.
			Que el ISSFA suministre al señor capitán César Rodrigo Díaz Álvarez la prótesis principal y de reserva de su pie derecho, conforme las condiciones y especificaciones establecidas por su médico tratante, cada vez que sea necesario, por su condición de persona con discapacidad y beneficiario de la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
			Que para la determinación del monto económico correspondiente a la reliquidación de las pensiones y demás beneficios que tiene derecho el capitán César Rodrigo Díaz Álvarez, se esté a lo dispuesto en sentencia No. 004-13-SAN-CC del 13 de junio del 2013.
			Que el ISSFA ofrezca disculpas públicas al señor César Rodrigo Díaz Álvarez, las mismas que deberán realizarse en un diario de circulación nacional público o privado en el término de 10 días.
12	0073-10-IS	4 de febrero de 2015	Disponer que dentro del plazo de 20 días a partir de la notificación de este auto, el Ministerio de Educación en la persona de su representante legal ofrezca las correspondientes disculpas públicas al afectado y su familia, a través de la publicación de las mismas, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulación nacional. La publicación deberá incluir el reconocimiento de la responsabilidad del Ministerio de Educación por el incumplimiento de la medida y el nombre del afectado. En caso de incumplimiento de esta medida, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.

			Disponer que dentro del plazo de 60 días a partir de la notificación de este auto, la autoridad encargada de la Dirección Distrital de Educación del cantón Durán, ordene la ejecución de evaluaciones psicopedagógicas a los docentes de la escuela Carlos Pérez Perasso y a los docentes de la escuela en la que actualmente labora el ciudadano Jackson Benenaula Rodríguez, después de que estos atraviesen un proceso de formación en base a por lo menos 5 talleres enfocados hacia las formas pedagógicas de disciplina en las instituciones educativas. En caso de incumplimiento de esta medida, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.
13	1104-11-EP	15 de octubre de 2014	Disponer al juez vigésimo octavo de lo civil de Guayaquil, que en el plazo improrrogable de 30 días a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional si el auto del 27 de abril del 2011 emitido dentro del juicio ejecutivo No. 04-2000 que se sustancia o sustanció en esa judicatura, fue dejado sin efecto, y; si el proceso judicial fue remitido a la Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para que a través de un nuevo sorteo la causa sea sustanciada y resuelta por otro juez. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.
			Disponer a la/el jefa/e de la Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que en el plazo improrrogable de 30 días a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional si el juicio ejecutivo N°. 04-2000 que se sustanció en el juzgado vigésimo octavo de lo civil de Guayaquil, fue sorteado conforme se ordenó en la sentencia N°. 211-12-SEP-CC. Además, se solicita información respecto de la fecha del sorteo de la causa y de la judicatura a quien correspondió su conocimiento. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.
			Disponer al juez quinto de lo civil de Guayaquil, que en el plazo improrrogable de 30 días a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional si actualmente sustancia la causa No. 09305-2012-0486, y si esta fue asignada a su conocimiento por sorteo del juicio ejecutivo No. 04-2000 que precedentemente fue sustanciado en el juzgado vigésimo octavo de lo civil de Guayaquil. Además, se solicita información respecto al estado de la causa. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 86 número 4 de la Constitución de la República.
14	0629-09-EP	15 de marzo de 2015	Disponer que la Dirección General de Aviación Civil, a través de su representante legal, presente la demanda que dé inicio al juicio de expropiación dispuesto en la sentencia No. 019-11-SEP-CC, aparejando los requisitos que establece la ley.

			Ordenar que la Dirección General de Aviación Civil, a través de su representante legal, informe a esta Corte Constitucional en el término de 30 días el cumplimiento de las medidas de aseguramiento.
TOTAL	14 Autos de Verificación de Cumplimiento		
TOTAL	37 Medidas dictadas por el Pleno de la Corte Constitucional en Autos de Verificación de Cumplimiento		

Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 143-152.

Fuente primaria: Sentencias emitidas por las Corte Constitucional del Ecuador que se encuentran en fase de seguimiento.

Dadas las condiciones que anteceden, se procederá a analizar los 14 Autos de Verificación emitidos durante el periodo abril de 2014 a marzo de 2016, para intentar establecer la finalidad de dichos autos.

Ahora bien, del contenido de los autos, se advierte que estos se encuentran conformados por tres acápite: 1) Antecedentes, 2) Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional; y, 3) Decisión.

En el primer apartado se detalla la sentencia cuyo cumplimiento se supervisa, adicionalmente se hace referencia a un informe de seguimiento y finalmente se establece si se ha convocado a una audiencia de verificación a las partes procesales; en el segundo numeral, se determina la finalidad de la justicia constitucional, así como, la importancia de la materialización de las sentencias constitucionales, finalmente, en el último inciso se encuentran las disposiciones de la Corte, encaminadas a ejecutar integralmente las medidas de reparación contenidas en la sentencia objeto de verificación. De lo anteriormente expuesto se precisa que, el auto de verificación es emitido exclusivamente dentro de las causas que se encuentran en fase de seguimiento.

Conforme lo mencionado, se desprende que previo a la emisión del auto de verificación, la Dirección de Seguimiento por disposición del Pleno de la Corte Constitucional presenta un informe en el cual se analiza el grado de ejecución de cada una de las medidas contenidas en la sentencia objeto de análisis, siguiendo la lógica antes planteada, el informe es conocido y aprobado por el Pleno del Organismo, posterior a ello, se expide el auto de verificación. Esta aseveración se realiza en virtud de la revisión de los 14 autos, en los cuales se hace referencia expresa a un “informe sobre el seguimiento del cumplimiento de la sentencia”, destacando lo anotado anteriormente.

Aun cuando en los párrafos precedentes se delimitó el periodo de tiempo objeto de análisis, es necesario considerar que, de la revisión en la página web de la Corte Constitucional – Sistema de Gestión de Acciones Constitucionales³⁷⁶, se advirtió que en el año 2013 la Corte Constitucional ya expidió los primeros autos de verificación; así, el primer auto de verificación data de 3 de julio de 2013, emitido dentro de la causa No. 0063-10-IS. Otras causas en las que se emitieron autos en el 2013 son las siguientes: 0072-08-AN; 0629-09-EP; y, 1341-10-EP. En este mismo sentido, se

³⁷⁶ Corte Constitucional del Ecuador
<<http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/index.php>>.

advirtió que el 6 de marzo de 2014 el Pleno de la Corte Constitucional dictó 2 autos de verificación uno en el caso No. 0020-09-IS y otro en la causa No. 0021-09-IS.

Bajo este esquema resulta necesario determinar si las disposiciones que contienen los 20 autos de verificación, exclusivamente determinan el accionar de los sujetos obligados al cumplimiento de la sentencia, o sí, por el contrario, debido a la falta de ejecución de la resolución, el Pleno en atención a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales modifica las medidas ya existentes.

Examinando las disposiciones contenidas en los 20 autos de verificación se llegó a constatar lo siguiente:

Cuadro 12.

**TIPOS DE DISPOSICIONES EN LOS AUTOS DE VERIFICACIÓN
EMITIDOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL**

Autos de verificación					
Años emitidos	Tipos de disposiciones				
	Destitución	Medida de reparación equivalente o compensatoria (cambio de medida)	Presentar documentación o informes que permitan determinar el cumplimiento	Ratificación de la medida y determina como debe ser entendida una medida	Aumenta medidas
2013	1	1	-	1	1
2014	-	4	3	1	1
2015	-	4	1	-	2
Total de autos emitidos			2013		4
			2014		9
			2015		7
			20		

Fuente directa: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 143-152.

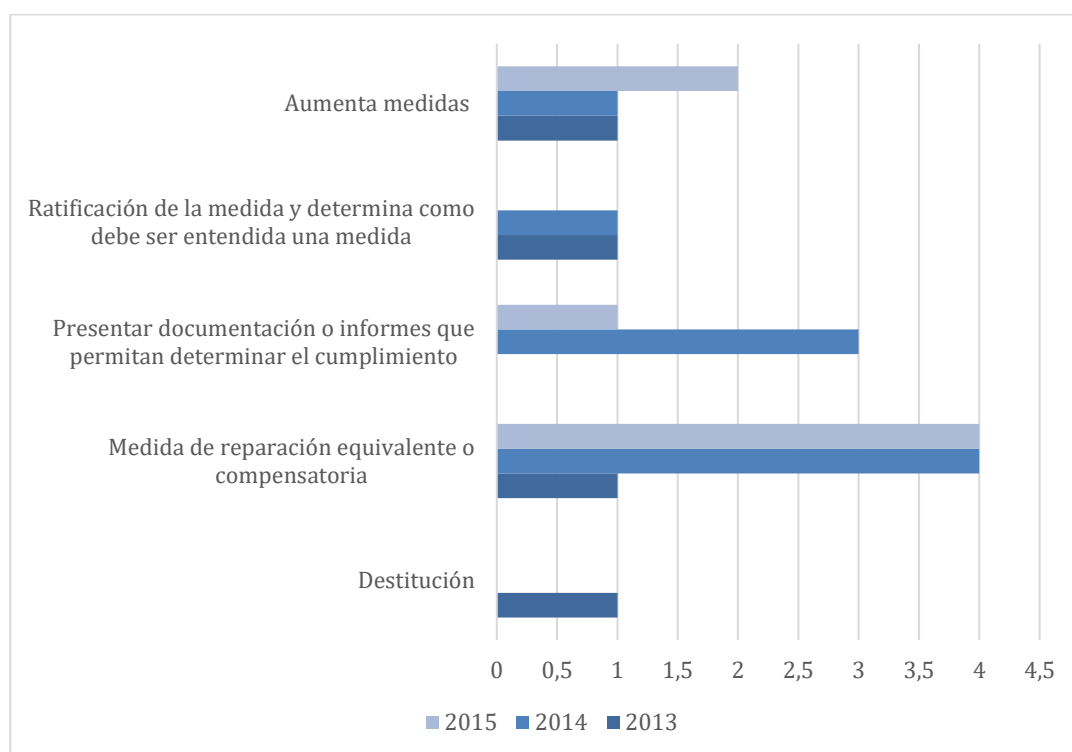
Conforme se desprende del cuadro, los autos de verificación han sido emitidos atendiendo a 5 razones: 1) Destituir; 2) Dictar una medida de reparación equivalente

o compensatoria; 3) Ordenar que se presente documentación o informes que permitan determinar el cumplimiento; 4) Ratificar la medida y determinar cómo se debe ejecutar la misma; y, 5) Disponer medidas adicionales.

Ahora bien, para poder determinar de mejor forma los motivos por los que se han emitido autos de verificación, se presenta una gráfica con indicadores anuales.

Gráfico 4.

TIPOS DE DISPOSICIONES EMITIDAS EN LOS AUTOS DE VERIFICACIÓN



Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 143-152.

En este contexto, se ha de acentuar el hecho que, exclusivamente existe un auto de verificación emitido en el 2013 por medio del cual el Pleno de la Corte Constitucional ordenó la destitución³⁷⁷ de autoridades públicas por incumplir con la decisión constitucional.

³⁷⁷ En el caso No. 0063-10-IS, mediante auto de verificación de 3 de julio de 2013 el Pleno de la Corte Constitucional resolvió destituir a la prefecta provincial del Gobierno Autónomos Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, ingeniera Lucía Sosa de Pimental, y a la abogada Rosalía Valdez Caicedo,

Por otra parte, en 4 autos de verificación se ha ordenado la presentación de documentación que certifique el cumplimiento de lo ordenado, en estos casos se entendería que el Pleno carece de la información necesaria para determinar el grado de cumplimiento de las medidas. Asimismo, en 2 casos ratificó las medidas ordenadas en sentencia y concomitantemente estableció como debían ser entendidas las medidas, siguiendo una suerte de un recurso de aclaración.

Cabe agregar que, en 4 autos el Pleno ha considerado como insuficientes las medidas dictadas en la sentencia, por lo que se ha visto obligado a ordenar nuevas medidas, esto con el objetivo de restituir plenamente el derecho a las víctimas de vulneraciones.

Finalmente, en 9 autos de verificación el Pleno ha decidido modificar la medida, es decir, ha dictado una medida equivalente en virtud de que la ordenada en la sentencia no ha sido ejecutada; este cambio de medidas atiende al tiempo transcurrido desde la emisión del dictamen constitucional, puesto que, el prolongado paso del tiempo y la falta de cumplimiento por parte de los sujetos obligados, imposibilita que las medidas ordenadas *prima facie* surtan el efecto deseado, en virtud de que, la medida ya no resulta ser la adecuada.

Sobre este contexto, se puede asegurar que en el periodo 2014-2015 el Pleno de la Corte Constitucional al emitir los autos de verificación se estaría decantando por expedir dichos autos exclusivamente cuando advierte la necesidad de modificar la medida ordenada en sentencia, generándose de esta manera un patrón en cuanto a la finalidad de los autos de verificación.

Hasta este punto se ha visualizado a los autos de verificación desde la perspectiva de la Corte Constitucional, ahora bien, resulta necesario enfocar el análisis desde otra perspectiva, es decir, se debe examinar el grado de eficacia y funcionalidad de los referidos autos y simultáneamente intentar dotarlos de una definición, puesto que, como se mencionó en párrafos anteriores estos hasta la presente fecha no cuentan con una conceptualización fija.

procuradora síndica del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, por incumplir las decisiones constitucionales: Resolución No. 0474-05-RA del 20 de junio de 2006, emitida por el Tribunal Constitucional, y Sentencia No. 010-11-SIS-CC, caso No. 0063-10-IS de octubre de 2011, emitida por la Corte Constitucional para el periodo de transición. Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Auto de verificación dentro de la causa No. 0063-10-IS], 3 de julio de 2007.

Para el examen propuesto se va a considerar varios aspectos como son, fecha de emisión de la sentencia, fecha de emisión del auto, tiempo transcurrido entre la emisión de la sentencia constitucional y el auto de verificación, así como también si el auto modificó o no las medidas ya ordenadas y finalmente si la causa ha sido archivada o no.

Cuadro 13.

EFFECTIVIDAD DE LOS AUTOS DE VERIFICACIÓN

No.	Caso	Fecha de emisión de la sentencia	Fecha de emisión del auto de verificación	Modificación de medidas		Tiempo transcurrido o aproximadamente - sentencia - auto	Archivo	
				Si	No		Si	No
1	0042-10-IS	6 de marzo de 2012	31 de marzo de 2015	x		3 años		x
2	0052-10-IS	24 de mayo de 2011	6 de mayo de 2015		x	4 años	x	
3	0625-09-EP	21 de septiembre de 2011	1 de octubre de 2014		x	3 años		x
4	0027-09-AN	9 de diciembre de 2009	1 de octubre de 2014 ³⁷⁸	x		5 años		x
5	0064-10-IS	6 de marzo de 2012	1 octubre de 2014		x	2 años	x	
6	0066-10-IS	24 de mayo de 2011	1 de octubre de 2014	x		3 años	x	
7	0015-12-IS	17 de julio de 2013	9 de diciembre de 2014	x		1 año		x
8	0011-10-IS	21 de septiembre de 2011	18 de junio de 2014		x	3 años	x	
9	0037-11-IS	27 de marzo de 2012	24 de junio de 2015	x		3 años	x	
10	0022-09-IS	8 de octubre de 2009	En proceso de aprobación ³⁷⁹	-	-	-		x

³⁷⁸ Atendiendo al tipo de medida ordenada por el Pleno de la Corte Constitucional, el caso no es susceptible de ser archivado, aspecto que se analiza en las páginas siguientes.

³⁷⁹ Es pertinente destacar que, de la revisión en la página web de la Corte Constitucional – sistema de acción de acciones constitucionales (<http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/index.php>), se advierte que hasta la presente fecha el Pleno de la Corte Constitucional no aprobado el auto de verificación en el caso No. 0022-09-IS.

11	0072-09-AN	24 de noviembre de 2009	15 de octubre de 2014	x		5 años	x	
12	0073-10-IS	22 de enero de 2014	4 de junio de 2014	x		6 meses		x
13	1104-11-EP	12 de mayo de 2012	4 de junio de 2014		x	2 años		x
14	0629-09-EP	1 de septiembre de 2011	13 de marzo de 2015	x		4 años		x

Fuente directa: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 143-152.

Atendiendo a los datos que se desprenden del cuadro, se puede observar lo siguiente:

1. No existe un tiempo determinado dentro de la fase de seguimiento para que el Pleno de la Corte Constitucional proceda con la emisión de los autos de verificación, puesto que existen casos en los que este tipo de auto ha sido emitido apenas 6 meses después de la emisión de la sentencia, y otros en los cuales su emisión ha sido 5 años después. Es decir, su emisión atiende a la voluntad de los jueces constitucionales. En otras palabras, se podría decir que, las particularidades de cada caso, son los factores esenciales y determinantes para que el organismo constitucional advierta la necesidad de expedir este tipo de autos.
2. Como ya se analizó en párrafos anteriores, la emisión de los autos de verificación no necesariamente implica la modificación de las medidas ordenadas en un principio en la sentencia.
3. Se puede señalar concomitantemente que, los autos objeto de análisis mismos pueden ser expedidos en más de una ocasión en una misma causa, como ha sucedido en los casos No. 0072-09-AN³⁸⁰ y No. 0629-09-EP³⁸¹.
4. El dictar medidas equivalentes o nuevas medidas no asegura su cumplimiento, es decir, no en todos los casos que se modificaron las disposiciones constitucionales, los sujetos obligados a su cumplimiento

³⁸⁰ Autos de verificación de 10 de julio de 2013 y 15 de octubre de 2014.

³⁸¹ Autos de verificación de 24 de julio de 2013 y 13 de marzo de 2015.

procedieron con su ejecución, en otras palabras, el dictar un auto de verificación no implica que poco tiempo después la causa será archiva debido a su cumplimiento integral.

Con estas consideraciones se puede afirmar que no resulta ser palpable la eficacia y la funcionalidad que brindan los autos de verificación en la fase de seguimiento, puesto que, de una u otra manera su ejecución siempre dependerá de la voluntad del sujeto obligado a su cumplimiento.

El presente panorama trae consigo dos elementos que se encuentran intrínsecamente relacionados, los cuales no pueden ser dejados de lado, que son, la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Entendiéndose a la primera como, todas las conductas obligadas, permitidas y prohibidas que están predeterminadas en la ley³⁸²; mientras que, la cosa juzgada³⁸³ implica la irrevocabilidad de los efectos de las sentencias.

Atendiendo a la normativa constitucional vigente, el artículo 440 de la Constitución de la República prescribe que: “[l]as sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de definitivos e inapelables”³⁸⁴. Sobre lo anotado, se entiende que las sentencias emitidas por la Corte Constitucional adquieren el carácter de cosa juzgada, y atendiendo al principio inmutabilidad de las decisiones jurisdiccioanles, se podría asegurar que estas desde ningún punto de vista pueden ser sujetas a modificaciones.

³⁸² Ramiro Ávila Santamaría, edit., *La Constitución del 2008 en el texto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado* (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008), 31.

³⁸³ Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, Expediente No. 506, Primera Sala, R.O. 2, 13-VIII-96.

Cosa juzgada formal.- Es la imposibilidad jurídica de acceder a recursos ante determinado resultado procesal; la cosa juzgada formal no resuelve el fondo del proceso, el objeto mismo de la litis sino únicamente las excepciones dilatorias, aquellas excepciones que extinguen en todo o en parte la pretensión a que se refiere la demanda. Nada impide que subsanadas dichas excepciones pueda tratarse nuevamente la causa de fondo de la litis en un nuevo proceso.

La Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia explica: “cosa juzgada formal puede ser correctamente definida como la imposibilidad de que una cierta decisión procesal sea recurrida: el cierre de los recursos procedentes contra la misma”. (...): “Cosa juzgada material es la inatacabilidad indirecta o mediata de un resultado procesal, el cierre de toda posibilidad de que se emita, por la vía de apertura de un nuevo proceso, ninguna decisión que se oponga o contradiga a la que goza de esta clase de autoridad.” Expediente No. 435-99, Primera Sala, R.O. 274, 10-IX-99.

Cosa juzgada material.- Es la imposibilidad jurídica de iniciar un nuevo proceso sobre la causa que goce de esta calidad; dicha calidad impide casi de manera absoluta un nuevo tratamiento, la sentencia adquiere un resultado definitivo frente al órgano jurisdiccional que la dictó, como frente a los demás órganos jurisdiccionales, los cuales no solo están impedidos expresamente de conocer el fallo sino de rever sus resultados. La prohibición alcanza también a los sujetos del proceso quiénes no pueden ejercer su derecho de acción nuevamente sobre el mismo supuesto.

³⁸⁴ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tít. IX, “Supremacía de la Constitución”, cap. Segundo, “Corte Constitucional”, art. 440 ([Quito]: Corporación de Estudios y Publicaciones):129.

Ahora bien, de manera conjunta debe analizarse lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece que, durante la fase de cumplimiento el juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e inclusive podrá modificar las medidas.

En torno a lo descrito en los párrafos precedentes, se puede aseverar que la emisión de autos de verificación por parte de la Corte Constitucional desde ningún punto de vista vulneran el principio a la seguridad jurídica o la cosa juzgada, puesto que no se está realizando un nuevo juzgamiento, ya que la declaratoria de la vulneración del daño no es susceptible de modificación, así la propia normativa constitucional ha previsto exclusivamente la «modificación» de las medidas y exclusivamente en los casos que los jueces lo crean pertinente. Es decir, el cambio de las medidas de reparación no conlleva una vulneración de derechos puesto que no se provoca una falta de estabilidad en el proceso o con respecto de los sujetos.

En referencia al examen realizado, se podría definir a los autos de verificación como: resolución judicial emitida por el Pleno de la Corte Constitucional exclusivamente durante la fase de seguimiento, mediante la cual se determina el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en una sentencia constitucional. En caso de verificarse la falta de ejecución o ejecución defectuosa de las disposiciones constitucionales el Pleno del Organismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 102 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencias de la Corte Constitucional, mediante auto de verificación, se encuentra facultado para requerir a las partes procesales información en cuanto al cumplimiento de las medidas. De la misma manera en caso de ser necesario podrá dictar medidas equivalentes e inclusive emitir nuevas disposiciones, esto con la finalidad de dar cumplimiento integral a sus sentencias y en consecuencia restaurar la situación de las víctimas de vulneración de derechos.

Al ser el propósito fundamental de esta investigación, se puede asegurar que la Corte Constitucional al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuentan con un «proceso» o «fase» de seguimiento, no obstante de aquello, se comienzan a advertir ciertos rasgos diferenciadores de cada sistema, puesto que si bien la creación de una fase de seguimiento tiene como propósito la ejecución integral de las sentencias; no se ha advertido en ninguno de los casos examinados en el segundo

capítulo del presente trabajo, que la CIDH se encuentre facultada para modificar las medidas ordenadas en sus sentencias, no así la Corte Constitucional del Ecuador.

De forma general, se ha de señalar que, el órgano constitucional ecuatoriano se ha visto en la necesidad de modificar sus propias medidas de reparación integral, esto con la única finalidad de restablecer los derechos a los afectados, evitando de esta manera la revictimización, o peor aún, la vulneración sistemática de derechos.

3.2.3. Tipos de medidas de reparación integral emitidas por la Corte Constitucional

Una vez determinada la finalidad y objeto de los autos de verificación conviene hacer referencia al tipo de medidas emitidas por la Corte Constitucional en sus sentencias cuando se ha determinado la existencia de vulneración de derechos, medidas que son objeto de verificación. Sobre este escenario, resulta pertinente destacar que la Corte, dentro del universo de los 55 casos analizados, ha utilizado cinco tipos diferentes de medidas de reparación integral³⁸⁵, conforme se advirtió en el capítulo anterior la Corte Constitucional del Ecuador ha acogido la gama de medidas de reparación dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A continuación, se presentará un detalle del número de medidas emitidas por el Pleno de la Corte Constitucional atendiendo a su naturaleza específica, así se advierte del siguiente cuadro y gráfica la siguiente información:

³⁸⁵ Aguirre, “Una lectura cuantitativa y cualitativa”, 158.

Cuadro 14.

TIPOS DE MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ORDENADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

Tipos de medidas de reparación integral ordenadas	No. de medidas
Garantías de no repetición	8 ³⁸⁶
Medidas de rehabilitación	2 ³⁸⁷
Medidas de restitución	59 ³⁸⁸
Medidas de satisfacción	31 ³⁸⁹
Medidas de reparación económica	17 ³⁹⁰
Total de medidas ordenadas en 55 procesos	116³⁹¹

Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 157.

Fuente primaria: Sentencias emitidas por las Corte Constitucional del Ecuador que se encuentran en fase de seguimiento.

³⁸⁶ Caso No. 0072-14-IS, Caso No. 0014-09-IS, Caso No. 0027-09-IS, Caso No. 0014-12-AN.

³⁸⁷ Caso No. 0073-10-IS.

³⁸⁸ Caso No. 0022-09-IS, Caso No. 0003-13-IS, Caso No. 0068-10-AN, Caso No. 1104-11-EP, Caso No. 0073-10-IS, Caso No. 0072-14-CN, Caso No. 0007-11-IS, Caso No. 0014-09-IS, Caso No. 0037-11-IS, Caso No. 0053-12-IS, Caso No. 0070-99-RA, Caso No. 0422-09-EP, Caso No. 1226-06-RA, Caso No. 1683-12-EP, Caso No. 1852-11-EP, Caso No. 0017-12-IS, Caso No. 0038-10-IS, Caso No. 0440-09-EP, Caso No. 066-10-IS, Caso No. 0064-10-IS, Caso No. 0029-09-IS, Caso No. 0011-10-IS, Caso No. 0068-10-IS, Caso No. 0054-12-IS, Caso No. 0063-10-IS, Caso No. 0027-09-AN, Caso No. 0042-10-IS, Caso No. 1714-12-EP, Caso No. 0023-12-IS, Caso No. 0971-11-EP, Caso No. 1826-12-EP, Caso No. 0013-09-IS, Caso No. 0052-10-IS, Caso No. 0054-09-IS, Caso No. 0625-09-IS, Caso No. 629-09-EP, Caso No. 0072-09-AN, Caso No. 0604-04-RA, Caso No. 0036-10-CN.

³⁸⁹ Caso No. 0019-14-IS, Caso No. 0014-12-IS, Caso No. 0036-10-CN, Caso No. 0022-09-IS, Caso No. 1104-11-EP, Caso No. 0073-10-IS, Caso No. 0007-11-IS, Caso No. 0053-12-IS, Caso No. 1683-12-EP, Caso No. 0017-12-IS, Caso No. 0038-10-IS, Caso No. 0001-10-IS, Caso No. 0071-10-IS, Caso No. 0011-10-IS, Caso No. 0068-10-IS, Caso No. 0054-12-IS, Caso No. 0042-10-IS, Caso No. 1714-12-EP, Caso No. 0023-12-IS, Caso No. 1826-12-EP, Caso No. 0014-12-AN, Caso No. 0003-10-IS, Caso No. 0013-09-IS, Caso No. 0052-10-IS, Caso No. 0629-09-EP, Caso No. 0072-09-AN, Caso No. 0604-07-RA.

³⁹⁰ Caso No. 0003-13-IS, Caso No. 0015-12-IS, Caso No. 0007-11-IS, Caso No. 0037-11-IS, Caso No. 0070-99-RA, Caso No. 1683-12-EP, Caso No. 0020-09-IS, Caso No. 0021-09-IS, Caso No. 0019-14-IS, Caso No. 0017-12-IS, Caso No. 0038-10-IS, Caso No. 0071-10-IS, Caso No. 0440-09-EP, Caso No. 0068-10-IS, Caso No. 0023-12-IS, Caso No. 0003-10-IS, Caso No. 0052-10-IS.

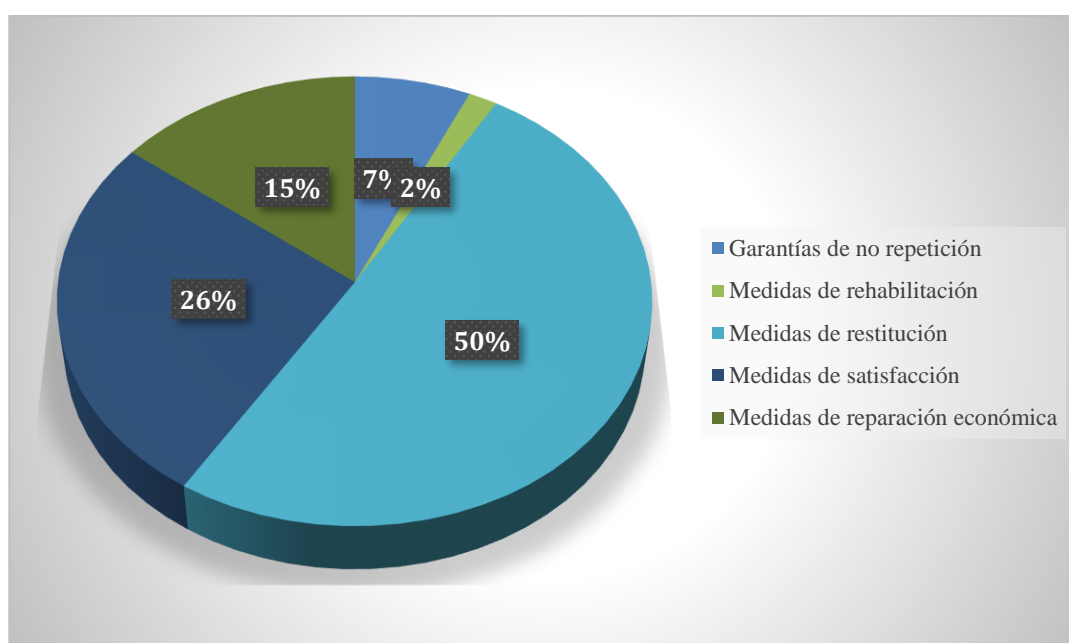
³⁹¹ En el levantamiento de la información se identificaron ciento dieciséis (116) medidas de reparación integral emitidas dentro de las cincuenta y cinco (55) causas que se encuentran en el proceso de seguimiento de cumplimiento de sentencias. De ahí que, en la mayor parte de los procesos se ha dictado más de una medida de reparación integral.

Con base en la situación descrita, del universo total de 55 de casos la Corte Constitucional ha dictado un total de 116 medidas de reparación, conviene señalar en armonía con lo referido en el capítulo II del presente trabajo, que las altas cortes y todos los operadores de justicia tienen la potestad y se encuentran en la obligación de dictar cuantas medidas crean necesarias para restituir plenamente los derechos de las víctimas.

Ahora bien, con la finalidad de ilustrar de mejor manera lo antes anotado, se presenta la siguiente gráfica, en la cual se puede apreciar en su conjunto los tipos de medidas de reparación integral dictadas por la Corte Constitucional, para así comparar gradualmente que medida se ha dictado con mayor frecuencia por el Órgano Constitucional.

Gráfico 5.

TIPOS DE MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ORDENADAS



Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 158.

Fuente primaria: Autos de Verificación emitidos por las Corte Constitucional del Ecuador que se encuentran en fase de seguimiento.

Examinando los datos arrojados se pueden advertir varios aspectos, en primer lugar, los 55 casos puestos en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional

versan sobre todo tipo de vulneración de derechos, motivo por el cual la Corte ha tenido que dictar ya sea en menor o mayor grado todos los tipos de medidas de reparación integral con la finalidad de resarcir los daños provocados a las víctimas.

En segundo lugar, si bien se han presentado varios tipos de vulneraciones, la mayor parte han sido susceptibles de restitución, motivo por el cual el 50% de las medidas dictadas son de tipo “restitución”.

En tercer lugar, la segunda medida más dictada por el organismo constitucional son las medidas del tipo “satisfacción”, esto demuestra que el Pleno da singular importancia a las medidas simbólicas, las cuales tienen por finalidad causar un efecto en la sociedad para que las vulneraciones a derechos no se vuelvan a repetir. Finalmente, se observa que en menor grado la Corte ha dictado medidas del tipo “garantías de no repetición”, “rehabilitación” y “económicas”.

Aun cuando las medidas del tipo “reparación económica” han sido dictadas en menor grado, ocupando el 15% de la totalidad de casos objeto de análisis, resulta pertinente considerar la particular división que la Corte Constitucional ha generado en torno a esta medida, en cuanto a la forma de determinar los montos a ser cancelados a favor de los beneficiarios.

Ahora bien, resulta pertinente destacar un aspecto fundamental, que marca la diferencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional del Ecuador al momento de ordenar medidas de tipo “reparación económica”, esto por cuanto, la Corte IDH se encuentra facultada para determinar los montos exactos que deben ser cancelados a favor de las víctimas y sus familiares por parte de los Estados; sin embargo, el Pleno de la Corte Constitucional no cuenta con esta facultad, exclusivamente se limita a ordena medidas de tipo “reparación económica”. Es por este motivo que la Corte ha establecido tres formas para la determinación de los montos a ser cancelados a favor de los beneficiarios de la medida, que son: 1) Pago directo; 2) Por contencioso administrativo; y, 3) Por mediación.

En este orden de ideas, el Pleno de la Corte Constitucional en su sentencia No. 024-14-SIS-CC dictada dentro del caso No. 0023-12-IS, estableció que “la reparación integral tiene un mínimo intocable (esfera de lo no decidible) y es el derecho de la persona afectada a recibir su reparación material o económica sin dilaciones o trabas

procesales...”³⁹². Así también la Corte Constitucional para el periodo de transición en su sentencia No. 012-09-SIS-CC dictada dentro del caso No. 0007-09-IS, señaló:

... que la reparación integral es una forma de hacer justiciables y garantizar los derechos contenidos en la Constitución; su incumplimiento da paso a que las garantías secundarias actúen para que sus disposiciones sean observadas, por lo que la obligación Estatal no se limita remediar el daño inmediato; al contrario, debe reparar el daño íntegro, incluso aquellos que no forman parte de la pretensión del accionante, pero que se deslindan a partir de la violación del derecho fundamental³⁹³.

Continuando con el análisis y retomando los criterios sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta ha sido categórica al determinar los parámetros que deben ser observados al momento de realizar una reparación económica, entre los cuales constan:

a) los montos deben ser pagados dentro de un año generalmente; b) el pago de intereses moratorios sobre la cantidad adeudada, se realizará en observancia al interés bancario moratorio en el Estado en cuestión; c) prohibición de aplicación de cargas fiscales sobre los pagos por concepto de daño material, inmaterial, costas y gastos establecidos en la sentencia ...³⁹⁴.

Si bien, la Corte IDH establece como siete parámetros que deben ser observados para el pago de la reparación económica, para los fines del presente análisis nos remitiremos de manera exclusiva a los primeros tres, que refiere al tiempo en que deben ser cancelados los valores a favor de las víctimas; se determina que el monto a ser cancelado debe incluir intereses y finalmente se prohíbe la aplicación de cargas fiscales sobre los pagos por concepto de daño material o inmaterial, así como costas y gastos establecidos en la sentencia.

Siguiendo esta línea, el interés compensatorio³⁹⁵ constituye una aplicación del principio de reparación integral ya que se trata de un mecanismo de indexación o

³⁹² Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 024-14-SIS-CC], 22 de octubre de 2014.

³⁹³ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 012-09-SIS-CC], 8 de octubre de 2009.

³⁹⁴ CIDH, [*Xákmok Kásek vs. Paraguay*], 24 de agosto de 2010.

Jorge Calderón Gamboa, “La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano”, en Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo Caballero Ochoa y otros, coordinadores, *Derechos Humanos en la Constitución. Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana* (México D.F.: Fundación Konrad Adenauer, 2013), 203.

³⁹⁵ Tratándose de una acción indemnizatoria derivada de la responsabilidad y reclamándose en la demanda la reparación integral de los daños, los intereses están implícitos en la pretensión. Se ha dicho también que el otorgamiento de intereses compensatorios no reclama aporte probatorio alguno, su procedencia es inequívoca y que el arranque de su cómputo parte, indudablemente desde la fecha del hecho ilícito respectivo.

corrección monetaria del importe de la indemnización que persigue su adecuación al valor de la moneda al momento de su pago³⁹⁶.

Al respecto, el Pleno del Organismo en su sentencia No. 273-15-SEP-CC emitida dentro del caso No. 0528-11-EP determinó que para la determinación de un valor, la autoridad contenciosa administrativa se encuentra obligada a observar varios aspectos: 1) La retención ilegítima de los recursos, razón por la cual se debe considerar el pago de intereses sobre la base del valor del dinero en el tiempo; 2) El costo de la vida en los diferentes períodos, es decir, el correspondiente a los años en que se retuvieron los recursos económicos del accionante deben ser considerados en valor presente, siendo necesaria la realización de un cálculo actuarial; y, 3) El reconocimiento de todos los gastos generados por los servicios jurídicos contratados durante los años de litigio³⁹⁷.

En observancia a lo manifestado por el Pleno del Organismo así como en consideración a los criterios constantes en la jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en consideración al objeto que pretende la reparación integral, debe considerarse que el pago del interés compensatorio tiene como finalidad que el responsable de la vulneración pague el monto total de la indemnización a la víctima, lo cual incluye la compensación por los perjuicios que conlleva la tardanza sufrida por la víctima en recibir oportunamente su dinero.

Lo referido anteriormente tiene por objeto que ya sea que se determine que el pago sea directo, por mediación o ante el contencioso administrativo, las distintas autoridades se encuentran obligadas a calcular no solamente los valores por concepto de reparación económica, sino que subsidiariamente deben realizar el cálculo de intereses.

En este sentido, esta no ha sido la única regla emitida por la Corte Constitucional en lo que refiere al pago y cálculo de la reparación integral; previamente al dictar la sentencia No. 004-13-SAN-CC el 13 de junio de 2013 dentro en la causa No. 0015-10-AN, en ejercicio de sus competencias establecidas en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno del Organismo emitió una regla jurisprudencial, que dicta:

Ver, Amalia Fernández Balbis, *El principio de congruencia y la reparación integral del daño*, < <http://elatenio.org/documents/trabajosBajar/LaReparacionIntegralYelPrincipioDeCongruencia.pdf>.

³⁹⁶ República Dominicana. Suprema Corte de Justicia [Sentencia 2009-996], 19 de septiembre de 2012.

³⁹⁷ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 273-15-SEP-CC], 19 de agosto de 2015.

El monto de la reparación económica, parte de la reparación integral, como consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho reconocido en la Constitución, se la determinará en la jurisdicción contenciosa administrativa cuando la deba satisfacer el Estado y en la vía verbal sumaria cuando deba hacerlo un particular. Dicho procedimiento se constituye en un proceso de ejecución, en el que no se discutirá sobre la declaratoria de vulneración de derechos.

Adicionalmente, en la misma sentencia resolvió declarar la inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 19, frase final, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente a:

“De estos juicios se podrán interponer los recursos de apelación, casación y demás recursos contemplados en los códigos de procedimiento pertinentes”, por la frase “Solo podrá interponerse recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite”.

En consecuencia, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispondrá:

Art. 19.- Reparación económica.- Cuando parte de la reparación, por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo si fuere contra el Estado. Solo podrá interponerse recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite.

Por último, el 22 de marzo de 2016 con la expedición de la sentencia No. 011-16-SIS-CC el Pleno del Organismo en el numeral 7 de la parte resolutive dispuso *la forma como deben sustanciarse los procesos de ejecución de reparación económica derivados de garantías jurisdiccionales*, aquí la Corte estableció que los procesos a más de sustanciarse en atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la LOGJCC, como en lo que determina la regla jurisprudencial contenida en la sentencia No. 004-13-SAN-CC; así mismo se determinó que, los procesos deben ser sencillos, rápidos y eficaces de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 2 literal b) de la Constitución de la República.

Para cumplir tales objetivos el Pleno determinó una serie de reglas³⁹⁸ que deben ser acatadas por los jueces de lo contencioso administrativo, bajo los nuevos estándares

³⁹⁸ **b.** Cuando el Estado sea el encargado del pago, el proceso de ejecución de reparación económica ordenada en sentencia de garantías jurisdiccionales, estará a cargo de la jurisdicción contenciosa administrativa a través de un proceso de ejecución. En este proceso no tienen lugar las diligencias procesales propias de los juicios de conocimiento, tales como, presentación de demanda, concesión de términos para la presentación de excepciones por parte del demandado, apertura de prueba, aceptación de alegatos, designaciones de varios peritos por impugnaciones reiteradas a los informes periciales, entre otros.

b.1 El proceso de ejecución de reparación económica inicia a partir de la disposición constitucional constante en la sentencia constitucional ejecutoriada, para lo cual el juez de primera instancia, según sea el caso, en el término máximo de 10 días, a partir de la notificación de la sentencia constitucional

ejecutoriada, deberá remitir el expediente respectivo y la sentencia constitucional en que se ordenó dicha medida a la judicatura contenciosa administrativa competente. En el caso que el juez de instancia incumpliere su obligación, la solicitud de inicio del proceso puede realizarla la persona beneficiaria de la reparación económica y/o el sujeto obligado, sin perjuicio del incumplimiento de sentencia en el que incurra el juez de instancia. En el caso que sea la Corte Constitucional la que emita la sentencia constitucional en la que se disponga que parte de la reparación integral sea cuantificada por el contencioso administrativo, remitirá el expediente constitucional, junto con la sentencia en el término máximo de 10 días a partir de la notificación de la sentencia.

b.2 Una vez dispuesto el inicio del proceso de ejecución de reparación económica, la autoridad contenciosa administrativa competente debe en el término de 5 días, avocar conocimiento de la causa, mediante auto en atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la LOGJCC y la regla jurisprudencial contenida en la sentencia No. 004-13-SAN-CC, dentro de la causa N.º 0015-10-AN.

b.3 Con el avoco conocimiento se notificará a las partes procesales, lo cual se realizará en las casillas judiciales o correos electrónicos señalados por las partes en el proceso de ejecución, o en los que consten en el proceso de garantías jurisdiccionales que derivó en la sentencia que contiene la medida de reparación económica.

b.4 En la misma providencia en que se avoque conocimiento, se deberá nombrar perito para que realice el cálculo de la reparación económica; disponer la fecha de su posesión; el término para la presentación del informe pericial; la fijación de los honorarios profesionales que deberán ser cancelados por el sujeto obligado, salvo acuerdo en contrario; y, se establecerá término para que las partes procesales presenten la documentación pertinente que servirá de base para el informe pericial, bajo apercibimiento que el informe se elaborará en atención a la información presentada por cualquiera de las partes.

b.5 En caso de no contar con copias o el original del expediente constitucional inicial, el tribunal contencioso administrativo correspondiente, avocará conocimiento de la causa y solicitará de forma inmediata que el juez de instancia remita el expediente respectivo, luego de lo cual nombrará perito y procederá conforme fue señalado precedentemente.

b.6 El perito elaborará el informe pericial sobre la base de la documentación presentada por las partes procesales y la que conste del expediente constitucional. En el caso en que solo una de las partes presente documentación, el perito utilizará únicamente la información que conste de la documentación presentada y la contenida en el expediente constitucional. Si ninguna de las partes remite documentación, el perito utilizará la información del expediente constitucional y aquella información que sea pública.

b.7 Una vez recibido el informe pericial, el tribunal contencioso administrativo de forma inmediata correrá traslado con el mismo a las partes procesales, por un término máximo de tres días, con objeto que presenten las observaciones que consideren pertinentes. Dichas observaciones junto con el informe pericial serán analizadas por el órgano contencioso administrativo y de estimar que las mismas son justificadas en atención a criterios técnicos, se pedirá que el perito realice la corrección, aclaración o ampliación respectiva; de lo contrario la autoridad jurisdiccional deberá resolver sobre la base del informe pericial presentado. A partir de mayo de 2016, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, los informes periciales no serán susceptibles de la impugnación de error esencial.

b.8 Únicamente en caso de duda debidamente justificada de parte de la autoridad jurisdiccional, que no responderá a la petición de las partes procesales, se podrá ordenar un nuevo peritaje, cuyo informe será puesto a conocimiento de las partes procesales y servirá de sustento para la resolución del órgano jurisdiccional. En el proceso de determinación económica, como parte de la reparación integral, son admisibles el máximo de dos peritajes.

b.9 Una vez concluida la fase de sustanciación, el tribunal contencioso administrativo correspondiente deberá emitir su resolución debidamente motivada, a través de un auto resolutorio, en que se determinará con claridad el monto que debe ser cancelado por el sujeto obligado como reparación económica a favor del beneficiario de la medida; además, deberá establecerse el término y condiciones para el pago respectivo.

b.10 Cuando la determinación del monto por las particulares circunstancias del caso concreto resulte compleja, como acaece cuando la reparación corresponde a una vulneración ocurrida cuando el Ecuador utilizaba como moneda de curso legal el “sucre”. La autoridad jurisdiccional competente al momento de determinar el monto de reparación económica debe considerar: 1) La retención ilegítima de recursos económicos en razón de lo cual se deberán considerar los intereses sobre la base del valor del dinero en el tiempo; 2) El cambio de moneda adoptado en el Ecuador en el año 2000 y 3) El costo de la vida en los diferentes períodos, siendo necesaria la realización de un cálculo actuarial, que de ninguna manera se traduce en la simple liquidación con base a lo dispuesto en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador.

instituidos, en los procesos subjetivos³⁹⁹ -o denominados por la Corte como de ejecución de reparación económica- no se debe dar lugar a las diligencias procesales en virtud de que no son juicios de conocimiento, sino de ejecución en virtud de que su única finalidad es determinar el monto, en este sentido no es necesario la presentación de demanda, concesión de términos para la presentación de excepciones por parte del demandado, apertura de la causa a prueba, aceptación de alegatos, designaciones de varios peritos por impugnaciones reiteradas a los informes periciales, entre otros.

Para una mejor comprensión del proceso instaurado por la Corte Constitucional se presenta el siguiente diagrama de flujo:

b.11 De la decisión que emita el tribunal contencioso administrativo, no podrá interponerse ningún recurso en tanto se trata de un proceso de única instancia. Sin embargo, en el caso en que las partes procesales consideren que el auto resolutorio es vulneratorio de sus derechos constitucionales, pondrán dicho particular en conocimiento de la Corte Constitucional ya sea a través de una acción extraordinaria de protección cuando el auto definitivo o sentencia que ordenó la medida de reparación económica provenga de un proceso constitucional en el que no participó la Corte Constitucional, o a través de un escrito presentado dentro del proceso correspondiente, dentro del término de 20 días, cuando la sentencia que ordenó la medida de reparación hubiere sido emitida por la Corte Constitucional.

b.12 Una vez emitido el auto resolutorio dentro del proceso de ejecución de reparación económica, el tribunal contencioso administrativo correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la LOGJCC, deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute el mismo, pudiendo incluso disponer la intervención de la Policía Nacional.

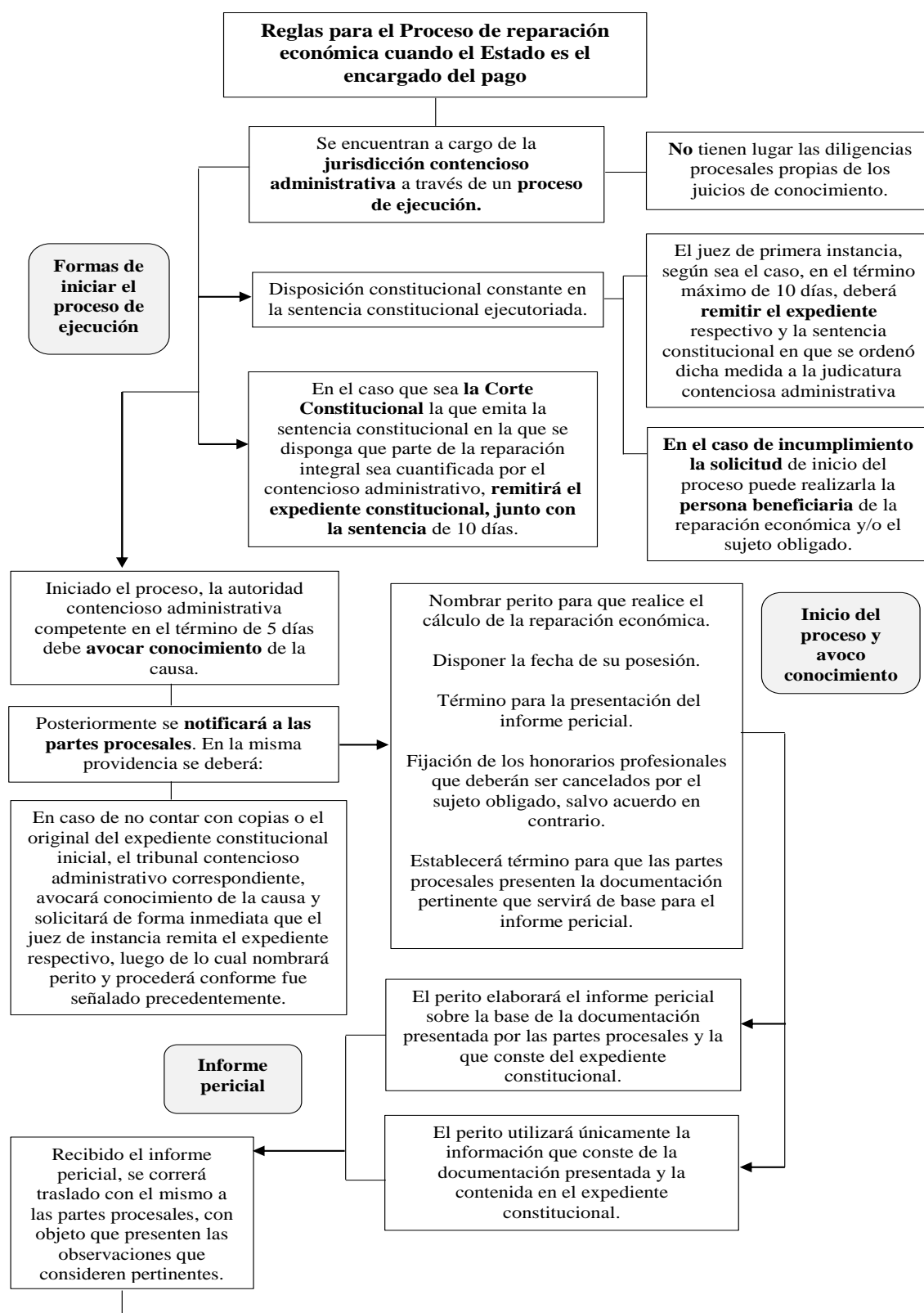
b.13 Cuando el tribunal contencioso administrativo hubiere comprobado la ejecución integral de la reparación económica, no archivará el proceso; sino que previamente pondrá tal particular en conocimiento de la autoridad jurisdiccional que emitió dicha medida dentro de la causa de garantías jurisdiccionales, esto es, del juez de instancia o de la Corte Constitucional para que sea esta autoridad quien proceda al archivo respectivo.

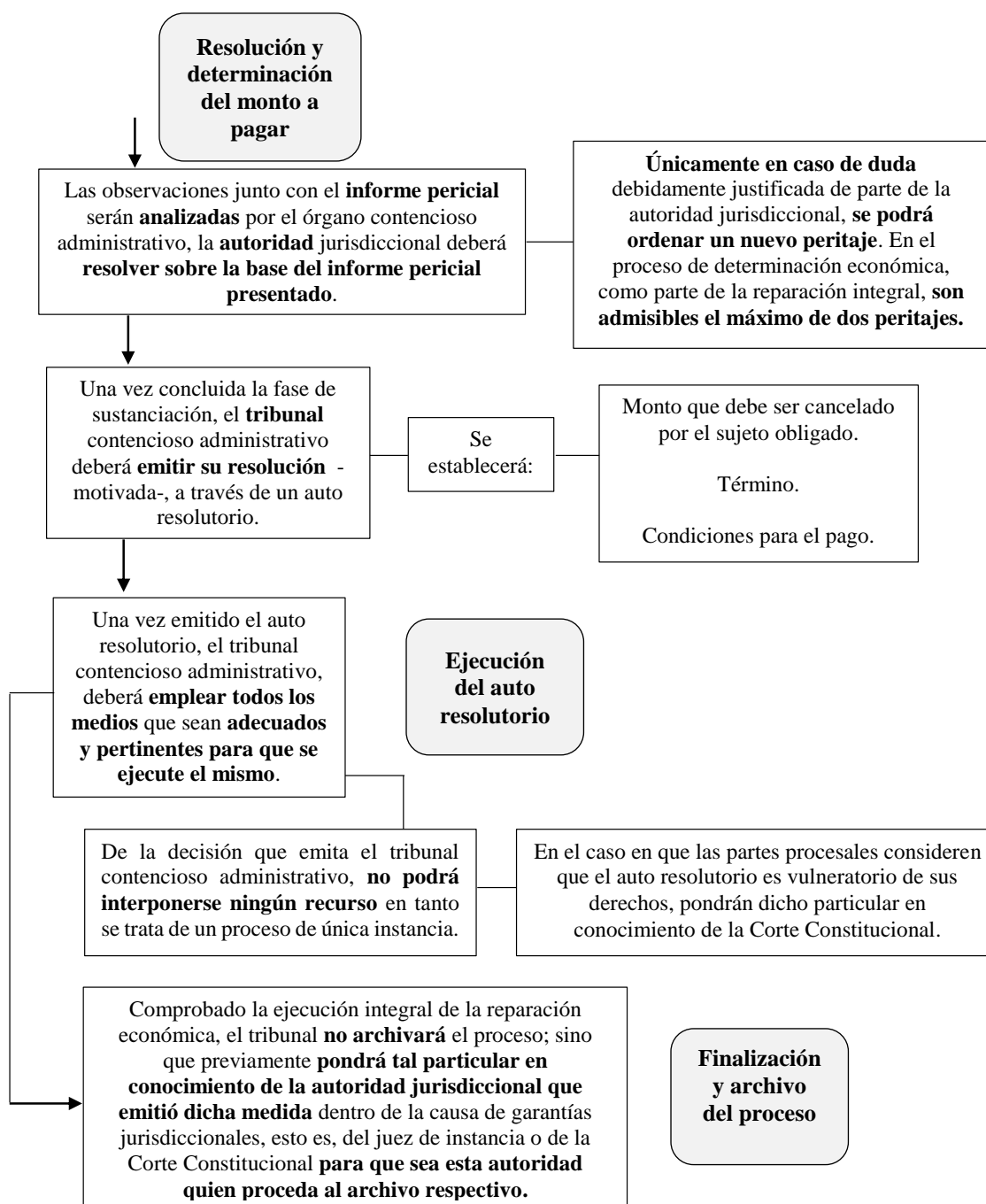
b.14 Únicamente en el caso en que el competente tribunal contencioso administrativo después de emplear todos los medios necesarios y pertinentes para la ejecución del auto resolutorio, no lograre que el sujeto obligado cumpla con lo dispuesto se deberá poner en conocimiento de la Corte Constitucional dicha circunstancia, evitando de esta manera la imposición directa de sanciones por incumplimiento.

³⁹⁹ A partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos -COGEP- el 23 de mayo de 2016, el proceso subjetivo para ser denominado como «Procedimiento Monitorio», artículos 356 al 361 de la norma antes citada.

Gráfico 6.

REGLAS PARA EL PROCESO DE REPARACIÓN ECONÓMICA CUANDO EL ESTADO ES EL ENCARGADO DEL PAGO





Fuente directa: Diagrama de elaboración propia.

Fuente primaria: Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 011-16-SIS-CC.

Una vez explicado el proceso, se advierte que este sirve exclusivamente en los casos en los que el sujeto obligado es el Estado, puesto que, en el caso que un particular sea quien tiene que pagar el monto por concepto de reparación económica, el referido proceso estará a cargo la misma autoridad jurisdiccional que conoció en primera instancia la causa de garantías jurisdiccionales a través de un proceso sumario, no

obstante en lo pertinente se aplicará lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales mencionadas anteriormente.

Dado el propósito de las reglas ya mencionadas, se tiene que recordar que cada uno de los pasos que conforman el procedimiento de ejecución de reparación económica son de obligatorio cumplimiento, razón por la cual no pueden ser inobservados bajo ninguno concepto por parte de los operadores de justicia.

De otro lado, es preciso señalar los problemas que presenta el establecimiento de las referidas reglas. Así, el literal b) de las «Reglas para la sustanciación de los procesos de ejecución de reparación económica derivados de garantías jurisdiccionales» dicta que:

Cuando el Estado sea el encargado del pago, el proceso de ejecución de reparación económica ordenada en sentencia de garantías jurisdiccionales, estará a cargo de la jurisdicción contencioso administrativa a través de un proceso de ejecución. En este proceso **no tienen lugar las diligencias procesales** propias de los juicios de conocimiento, tales como, **presentación de demanda, concesión de términos para la presentación de excepciones por parte del demandado, apertura de prueba, aceptación de alegatos, designaciones de varios peritos** por impugnaciones reiteradas a los informes periciales, entre otros. (Negritas fuera del texto original).

Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos -COGEP- se estableció el «procedimiento monitorio» el cual pasó a remplazar al proceso subjetivo. En este sentido la norma es clara en determinar que: “[e]l procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda que contendrá además de los requisitos generales, la especificación del origen y cantidad de la deuda; o con la presentación del formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura”⁴⁰⁰.

Concomitantemente, el artículo 359 de la mentada norma señala que: “[s]i la parte demandada comparece y formula excepciones, el juzgador convocará a audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Si no hay acuerdo o este es parcial, en la misma audiencia dispondrá se practiquen las pruebas anunciadas...”⁴⁰¹.

Sobre la base de anotado, se colige que el actual procedimiento monitorio implica necesariamente la presentación de una demanda, en este mismo sentido, se

⁴⁰⁰ Ecuador, *Código Orgánico General de Procesos* [2016], art. 357, en el *Código Orgánico General de Procesos*. Publicado en el Registro Oficial Suplemento 506, 22 de mayo de 2015.

⁴⁰¹ *Ibíd.*, art. 359.

prevé la formulación de excepciones por parte del demandado y hasta la convocatoria a una audiencia, elementos que -como se advirtió anteriormente- fueron totalmente descartados por la Corte Constitucional al momento de emitir las «Reglas para la sustanciación de los procesos de ejecución de reparación económica derivados de garantías jurisdiccionales».

Continuando con el análisis, no puede descartarse principios como la reserva de ley y la independencia judicial. La propia Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 002-14-SIN-CC emitida dentro de la causa No. 0056-12-IN en cuanto al principio de reserva de ley, destaco que:

... el principio constitucional de reserva de ley o reserva legal establece que determinadas materias deben ser reguladas exclusivamente por normas expedidas por el órgano legislativo, constituyéndose en una importante garantía del orden democrático que asegura a la ciudadanía representada por el Parlamento, la facultad de definir y regular las materias de especial importancia a través de debates plurales y transparentes dotados de legitimidad⁴⁰².

Así también ha determinado que:

La reserva de ley puede ser absoluta o relativa, podemos hablar de reserva absoluta cuando la propia ley incluye todos los elementos necesarios de una materia determinada con lo cual se impide que se acuda a otras fuentes secundarias o de rango inferior para complementar el mandato legal⁴⁰³.

Al considerar lo dicho por el máximo órgano de justicia constitucional en el país, este ve al citado principio desde una óptica sumamente flexible -como lo ha referido textualmente en sus sentencias- ya que atendiendo a la visión “relativa” del principio, conviene la creación de normas “secundarias”, las cuales tienen por finalidad colaborar a diagramar ciertos elementos que no pueden ser concebidos en la norma principal.

Sobre lo manifestado, podría entenderse que la Corte Constitucional acogiendo a esta flexibilidad del principio de reserva de ley y en razón de ser la intérprete final y auténtica de la Constitución, en ejercicio del artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución⁴⁰⁴, procedió a dictar las «Reglas para la sustanciación de los procesos de ejecución de reparación económica derivados de garantías

⁴⁰² Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 002-14-SIN-CC], 14 de agosto de 2014.

⁴⁰³ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 007-16-SIN-CC], 27 de enero de 2016.

⁴⁰⁴ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 004-13-SAN-CC], 13 de junio de 2013.

jurisdiccionales», tal y como ya lo realizó anteriormente al emitir la sentencia No. 004-13-SAN-CC dentro de la causa No. 0015-10-AN.

Como se señaló párrafos anteriores, es preciso también analizar el principio de independencia judicial a la luz de las reglas emitidas por la Corte Constitucional en los procesos que devengan de garantías jurisdiccionales. Se entiende por independencia la ausencia de presiones indebidas provenientes desde fuera o desde dentro del sistema judicial sobre los actos decisorios del juez, los cuales deben responder a su propio y profesional entendimiento de la ley⁴⁰⁵.

Si se habla de independencia externa, se puede vislumbrar que ésta a partir de la expedición de las citas reglas se encuentra en peligro, toda vez que las autoridades jurisdiccionales no solo están siendo obligadas apartarse de las normas pertinentes - aplicables a los casos en concreto-, sino que, adicionalmente todo su accionar se encuentra limitado al momento de sustanciar los procesos de ejecución de reparación económica.

A primera vista surge un impacto en cuanto al poder de intromisión de la Corte Constitucional en cuanto a llegado a determinar todo un proceso y hasta tiempos exactos que tienen que ser acatados por los jueces de lo contencioso administrativo, no obstante, para poder llegar a determinar la finalidad de dichas normas es pertinente considerar como previo a la emisión de las reglas, las autoridades jurisdiccionales estaban dando tramite a los procedimientos subjetivos ordenados por el Pleno del Organismo mediante sentencia constitucional.

Ante la búsqueda realizada en la página del Consejo de la Judicatura tres procesos llamaron mi atención, los cuales serán estudiados a continuación:

Cuadro 15.

PROCESOS DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN ECONÓMICA TRAMITADOS POR LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -PREVIO A LA EMISIÓN DE LAS REGLAS-

Causa Corte Constitucional	No. de Proceso TDCA	Problemas evidenciados
0014-09-IS	17811-2011-00859 17811-2011-00879	Inicio de procesos

⁴⁰⁵ Agustín Grijalva, “Independencia judicial y derechos en Ecuador” en Ecuador Debate No. 83, agosto 2011 (Quito: Caap, 2011), 38. <
<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3570/1/RFLACSO-E83-03-Grijalva.pdf>.

0115-11-IS	178-11-2015-01344	Cobro de impuesto sobre el valor total de la reparación integral
0031-10-IS	17811-2015-01031	Tardanza injustificada en el proceso y falta de nombramiento de perito

Fuente directa: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Corte Constitucional del Ecuador <<https://www.corteconstitucional.gob.ec/>> y Consejo de la Judicatura <<http://www.funcionjudicial.gob.ec/>>.

El primer caso presenta ciertos elementos que llaman la atención, para poder divisarlos de una mejor previamente se van a establecer los antecedentes de la causa. Así, el señor Fausto Eduardo Aguiar Falconi presentó ante la Corte Constitucional una acción por incumplimiento de sentencia en contra de la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el supuesto incumplimiento de la sentencia de 16 de junio de 2009, dictada por la Segunda Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

La demanda de incumplimiento dio origen a la causa No. 0014-09-IS, dentro de la cual el Pleno de la Corte Constitucional para el período de transición, emitió la sentencia No. 010-10-SIS-CC el 3 de junio de 2010. El Pleno del Organismo resolvió que no existía incumplimiento del fallo, por cuanto el mismo se encontraba en “plena ejecución”.

Ahora bien, pese a que la Corte Constitucional para el período de transición resolvió negar la acción, el 30 de marzo de 2016 resolvió emitir un auto dentro de la referida en la cual en su considerando tercero textualmente señala:

El Pleno de la Corte Constitucional para el período de transición el 3 de junio de 2010, emitió la sentencia N.º 010-10-SIS-CC dentro de la causa N.º 0014-09-IS. En la referida sentencia como medida de reparación integral se dispuso que la jueza de primera instancia adopte las medidas necesarias para la ejecución integral del fallo e informe a esta Corte Constitucional, una vez finalizado el proceso. En este sentido, se advierte que el juzgado tercero de Tránsito de Pichincha, debía informar respecto del cumplimiento de las siguientes medidas: a) Cese toda facturación futura a la cuenta de suministro N.º 1217840 que pertenece a la indicada persona, que no sea por consumo real, basado en la lectura del correspondiente medidor; b) El inmediato restablecimiento del servicio; y, c) Se indemnice por el perjuicio que la suspensión haya causado al accionante. La liquidación y orden de pago estará a cargo del juez de origen.

En tal sentido dispuso:

La determinación del valor de indemnización como consecuencia directa de la vulneración de derechos constitucionales al señor Eduardo Aguiar, que debe cancelar la Empresa Eléctrica Quito S.A., se realizará por la vía contencioso administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la regla jurisprudencial contenida en la sentencia N.º 004-13-SAN-CC emitida en el caso N.º 0015-10AN.

Resulta difícil comprender como la Corte Constitucional procedió a emitir un auto con nuevas disposiciones dentro de una causa que fue negada debido a que se llegó a la terminación que el fallo demandado como incumplido se encontraba en “proceso de ejecución”; es decir, no se emitió ningún tipo de medida de reparación integral, por lo que no procedería que 6 años después el Pleno del Organismo realice una interpretación extensiva de lo que le correspondía hacer al juzgado tercero de Tránsito de Pichincha, puesto que eso no competía a su órbita jurisdiccional. De allí pues, que queda en tela de juicio los motivos por los cuales en ciertas causas se estaría dando inicio a la fase de seguimiento, toda vez que el presente caso no correspondía el inicio de tal proceso.

No obstante de lo anotado, al revisar el sistema SATJE⁴⁰⁶, se advirtió que los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 efectivamente procedieron a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto de 30 de marzo de 2016 emitido dentro de la causa No. 0014-09-IS. Sucede entonces que, la autoridad jurisdiccional inicio dos procesos de ejecución de reparación económica (No. 17811-2011-00859 y No. 17811-2011-00879) para la determinación del monto de reparación económica a favor del señor Fausto Eduardo Aguiar Falconi. Procesos que se estaban llevando de manera simultánea, mientras que en el primero ya se procedió a nombrar perito para la realización del cálculo correspondiente, en el segundo se emitió una providencia por medio de la cual se disponía a las partes que remitan la información correspondiente.

El inicio de dos procesos de ejecución de reparación económica genera dilación en el mismo, producto de lo cual no se estaría dando la celeridad que corresponde,

⁴⁰⁶ El sistema SATJE es una herramienta necesaria para registrar todos los trámites judiciales que se desarrollan dentro de las diferentes judicaturas; de la misma manera el SATJE registra y permite realizar un seguimiento de las actividades realizadas en cada una de las causas que se llevan en las diferentes judicaturas, obteniendo así información rápida y confiable en tiempo real. De esta forma con esta herramienta se facilitan las necesidades de gestión y búsqueda de información.

dado que al ser procesos de ejecución en los cuales ya se ha resuelto respecto de la vulneración de un derecho, estos deben ser tramitados en la brevedad posible.

Otro caso a ser analizado es el No. 0115-11-IS, aquí, el señor Franklin Honelki Méndez Benavides, por sus propios derechos, propuso ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento de sentencia constitucional en contra del Ministerio del Interior y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El accionante cuestionó el cumplimiento de la resolución No. 0160-2007-RA emitida el 27 de febrero de 2008, por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional, en la cual se dispuso reincorporar al accionante a la Policía Nacional y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

No obstante, si bien fue reincorporado a la institución, nunca se le cancelaron las remuneraciones ni beneficios de ley no percibidos durante el tiempo que duró su destitución.

La referida demanda de incumplimiento de sentencia dio origen a la causa No. 0115-11-IS, dentro de la cual el Pleno de la Corte Constitucional el 24 de junio de 2015, emitió la sentencia No. 043-15-SIS-CC, en la cual dispuso que la reparación económica que corresponde al accionante sea determinada en la vía contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional, mediante la sentencia No. 004-13-SAN-CC, caso No. 0015-10-AN, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional el 13 de junio de 2013.

De acuerdo con el acontecer procesal, el 28 de abril de 2016, es decir aproximadamente 1 año después de la emisión de la sentencia, el Pleno del Organismo emitió un auto en el cual ordenó:

Que los jueces del Tribunal Distrital del Contencioso Administrativo No. 1 dejen sin efecto el auto resolutorio de 17 de diciembre de 2015, dictado dentro del proceso de ejecución de reparación económica No. 17811-2015-01344, por cuanto, desconociendo la normativa pertinente han excluido ciertos rubros del monto de reparación económica a favor del señor Franklin Honelki Méndez Benavides. De esta manera, se deberá emitir un nuevo auto resolutorio dentro del proceso de ejecución de reparación económica No. 17811-2015-01344, debidamente motivado, en el cual se determine el monto que debe cancelarse al señor Franklin Honelki Méndez Benavides por concepto de remuneraciones dejadas de percibir, observando la normativa adecuada⁴⁰⁷.

⁴⁰⁷ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 043-15-SIS-CC], 24 de junio de 2015.

A primera vista y conforme consta del auto, la autoridad jurisdiccional efectivamente dio inicio a un proceso de ejecución de reparación económica para determinar el monto a ser cancelado a favor del beneficiario de la medida; sin embargo, el 31 de mayo de 2016, los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, procedieron a dictar una providencia, en la que dispusieron que del valor total de la reparación económica se descuenta cierto monto por concepto de impuesto a la renta⁴⁰⁸.

Considerando lo expuesto, es necesario recalcar que en materia de reparación integral la Corte Constitucional comparte los criterios sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este sentido el Organismo internacional ha sido enfático al determinar que “el pago de las indemnizaciones estará exento de todo impuesto actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro”⁴⁰⁹.

Sobre esta premisa, se advierte que, la autoridad jurisdiccional de forma arbitraria y sin ningún tipo de motivación resolvió descontar el monto de USD 290,64 por concepto de “impuesto a la renta”, desconociendo así los principios que rigen en materia de reparación integral, como es el hecho que “el pago de las indemnizaciones está exento de todo impuesto”. Una vez más este tipo de actuaciones dilatan los

⁴⁰⁸ SEGUNDO.- Por lo expuesto, en virtud de no existir oposición alguna al informe presentado por el perito referido y de conformidad con el considerando CUARTO del Auto de Verificación emitido el 28 de abril del 2016 por la Corte Constitucional, el Tribunal aprueba el informe pericial que establece los siguientes rubros 1.- USD. 7.487,44 correspondiente a los sueldos de febrero 2002 a marzo de 2004. 2.- USD. 1.508,34 correspondiente a las décimas tercera y cuarta remuneraciones. 3.- USD. 158,46 correspondiente a las décimas quinta y sexta remuneraciones. 4.- USD. 3.232,08 correspondiente a rancho y compensaciones al rancho. 5.- USD. 3.420,00 correspondiente a bono de comisariato. 6.- USD. 935,28 correspondiente al día de la Policía Nacional. 7.- USD. 228,00 correspondiente a estímulo de servicio activo. 8.- USD. 8,00 correspondiente a bono pecuniario. 9.- USD. 1.791,24 correspondiente a los aportes del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y cesantía. La suma de los valores referidos asciende a USD. 15.186,36. TERCERO: Por tanto se dispone que el Ministerio del Interior y la Comandancia General de Policía en el término de CINCO DÍAS paguen o dimitan bienes a favor del legitimado activo señor Franklin Honelki Méndez Benavides por la cantidad de USD. 15.186,36 (QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS), desglosada de la siguiente manera: a) USD. 13.104,48 correspondiente al monto de reparación económica que debe recibir personalmente el legitimado activo, valor que deberá ser depositado en la cuenta No. 017010999976 que este Tribunal mantiene en Banco Ecuador B.P.; b) USD. 290,64 correspondiente al impuesto a la renta, que será retenido y cancelado al Servicio de Rentas Internas por el legitimado pasivo; y, c) USD. 1.791,24 correspondiente al aporte personal del ISSPOL y cesantía, que será retenido y cancelado al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por el legitimado pasivo. No se dispone el pago de intereses por cuanto no ha sido ordenado en la sentencia No. 043-15-SIS-CC de 24 de junio de 2015, emitida dentro del caso No. 0115-11-IS, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador. CUARTO.- Oficiase al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL con el objeto que tenga conocimiento de este auto en el que se ha reconocido el pago cesantía a favor del señor Franklin Honelki Méndez Benavides dentro del período objeto de la controversia; así como el cálculo correspondiente al aporte personal que ha sido restado del valor total de la reparación económica

⁴⁰⁹ CIDH, *Caso Neira Alegría y otros vs. Perú*. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. (Reparaciones y Costas).

procesos, puesto que la referida providencia deberá ser dejada sin efecto y la autoridad jurisdiccional se encuentra en la obligación de emitir una nueva, acogiéndose a los parámetros antes citados.

Por último, en el caso No. 0031-10-IS el cual se inició en virtud de la acción de incumplimiento propuesta por el coronel Wilson Renán Saavedra Polanco, ante la Corte Constitucional, en su demanda el accionante afirmó que el Ministerio de Defensa Nacional no dio cumplimiento a la resolución No. 030-2000-TP dictada por el Tribunal Constitucional, el 15 de marzo de 2000. La acción de incumplimiento presentada dio origen a la causa No. 0031-10-IS, dentro de la cual el 29 de abril de 2015, el Pleno de la Corte Constitucional dictó la sentencia No. 031-15-SIS-CC y resolvió aceptar la acción en vista que se demostró el incumplimiento en el que incurrió la entidad accionada, lo que ocasionó la vulneración de los derechos constitucionales, así se ordenó que, el Ministerio de Defensa Nacional pague al accionante las remuneraciones no canceladas y beneficios de ley que este dejó de percibir.

Continuando con el estudio en el sistema SATJE, se constató la existencia de ciertas inconsistencias en el proceso de ejecución de reparación económica No. 17811-2015-01031, iniciado en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional dentro de la causa No. 0031-10-IS. Analizando cada una de las actuaciones de la magistratura se llega a determinar, lo siguiente.

En primer lugar, el proceso de ejecución de reparación económica No. 17811-2015-01031 inició 30 de junio de 2015, es decir, lleva aproximadamente un año y hasta la presente fecha no se ha ejecutado lo dispuesto por el Pleno de la Corte Constitucional en la sentencia No. 031-15-SIS-CC, esto es, la determinación del monto de reparación económica a favor del señor Wilson Renán Saavedra Polanco.

En segundo lugar, los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 han inobservado la jurisprudencia emitida por esta Corte Constitucional -sentencia No. 004-13-SAN-CC emitida dentro de la causa No. 0015-10-AN, así como la sentencia No. 011-16-SIS-CC dictada en el caso No. 0024-10-IS- en materia de reparación integral, pese a que en la sentencia No. 031-15-SIS-CC el Pleno del Organismo fue enfático en señalar que la jurisdicción contencioso administrativa debía actuar de conformidad con las reglas jurisprudenciales antes citadas.

Por otra parte, la autoridad jurisdiccional omitió en un principio designar a un perito para que cuantifique el valor a ser cancelado por concepto de reparación

integral, ya que en su providencia de 30 de junio de 2015, ordenó que el Ministro de Defensa Nacional, en el término de tres días, presente el detalle de las remuneraciones dejadas de percibir por el señor Coronel de Estado Mayor Conjunto de Aviación Abogado Wilson Renán Saavedra Polanco, con la pertinente documentación habilitante que demuestre el pago al accionante.

De la misma manera, se observa que mediante providencia de 4 de agosto de 2015 se designó como perita a la señora Rosa Guadalupe Espinosa Bastidas, no obstante, -en la misma fecha- los jueces de manera arbitraria y antojadiza decidieron que no se realice el peritaje puesto que, el mismo acarrea cierta complejidad ya que deben calcularse montos cuando la moneda en circulación era el sucre, y en su lugar insisten al Ministerio de Defensa Nacional para que de cumplimiento a lo dispuesto en la providencia de 30 de junio de 2015.

Continuando con las irregularidades en el proceso de ejecución de reparación económica No. 17811-2015-01031, se constató que el 4 de septiembre de 2015 se emitió una nueva providencia por medio de la cual se designó como perito al señor Dorian Addin Campos Mejía, empero, debido a que el experto no se posesionó en la fecha indicada, en lugar de proceder a nombrar uno nuevo, los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 el 22 de septiembre de 2015 resolvieron ampliar el plazo otorgado al Ministerio de Defensa Nacional –providencia de 30 de junio de 2015- para que en el término de tres días informe sobre el cumplimiento.

En tercer lugar, se advierte inconsistencias en cuanto al valor a ser cancelado a favor de accionante, ya que, mediante providencia de 4 de noviembre de 2015 los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 manifestaron que: “Al no existir observación alguna a la liquidación económica presentada por el Ministerio de Defensa Nacional por parte del legitimado pasivo en este proceso; en el término de cinco días, el citado ministerio deberá consignar el valor de US \$ 25.264.62...”. Sin embargo de lo anotado, el 25 de enero de 2015 la autoridad jurisdiccional dispuso al “... Ministerio de Defensa Nacional que en el término de tres días, consigne el valor de \$ 18.600.63...”.

Las anomalías e irregularidades evidenciadas en la sustanciación de los procesos subjetivos o de ejecución de reparación económica por parte de la jurisdicción contenciosa, denotan la importancia del establecimiento de las reglas emitidas por la Corte Constitucional, puesto que se constituye en la única manera para

evitar la injustificada tardanza en la ejecución de las medidas de carácter económico y más allá de eso, a fin de propender a una reparación eficaz y oportuna, evitando cualquier tipo de revictimización o vulneración sistematizada de los derechos ya reconocidos y tutelados en una sentencia constitucional.

Retomando lo anotado, se puede advertir una especie de “buena voluntad” por parte de la Corte Constitucional, puesto que, a aunado esfuerzos por intentar dar agilidad a los procesos subjetivos, esto mediante la reglamentación de los procedimientos de pago de la reparación económica en la vía contencioso administrativa, delimitando el accionar de los jueces y fijando términos de tiempo que deben ser acatados a cabalidad.

Pese a esta predisposición por parte del organismo constitucional, se puede aseverar que existen límites infranqueables en el ordenamiento jurídico los cuales no pueden ser inobservados desde ningún punto de vista, con esto nos referimos a los principios de reserva de ley y de manera acentuada al principio de independencia judicial.

El deponer a una ley un sin número de reglas en la cuales se fijan plazos sumamente breves, no asegura la eficacia del proceso, por el contrario, tramitar causas en la brevedad posible puede ser perjudicial, toda vez que para dar efectivo cumplimiento a los términos ordenados se pueden pasar asuntos por alto, los que podrían llegar afectar gravemente a las partes procesales. Si bien las reglas entraron en vigencia aproximadamente hace 6 meses, aún el lapso de tiempo es corto para determinar los efectos tanto positivos como negativos que estarían generando las mismas en la sustanciación de los procesos de ejecución de reparación económica.

Continuando con el análisis y como ya se manifestó anteriormente, la Corte Constitucional cuenta con tres mecanismos -contencioso administrativo, pago directo y mediación- para determinar los montos que deben ser cancelados por concepto de reparación. Ahora bien, son innegables los esfuerzos realizados por el Pleno del Organismo para reforzar el pago de la reparación por vía contencioso administrativa, dejando de lado el pago directo y la mediación; esto atiende al hecho que, en casos excepcionales y cuando la Corte ha tenido total certeza respecto a que el sujeto obligado tiene noción del valor que debe ser cancelado a la víctima ha dispuesto que el mismo sea directo, de otro lado, cuando ha transcurrido largos períodos de tiempo y no existe información suficiente, el Pleno del Organismo ha optado por que sea el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado quien en concesión con

las partes determine los montos. En cualquiera de los tres escenarios las autoridades se encuentran obligados a informar documentadamente a la Corte Constitucional sobre sus actuaciones. A continuación, se detallan los casos y las formas de determinación del monto de reparación económica dictadas por el Pleno de la Corte Constitucional:

Cuadro 16.

FORMAS DE DETERMINACIÓN DE MONTOS

Forma de determinación del monto de reparación económica	No. de medidas
Pago directo	6 ⁴¹⁰
Determinación vía judicial	8 ⁴¹¹
Determinación vía mediación	3 ⁴¹²
Total de medidas de reparación económicas ordenadas en 55 procesos	17

Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 162.

Fuente primaria: Ibíd.

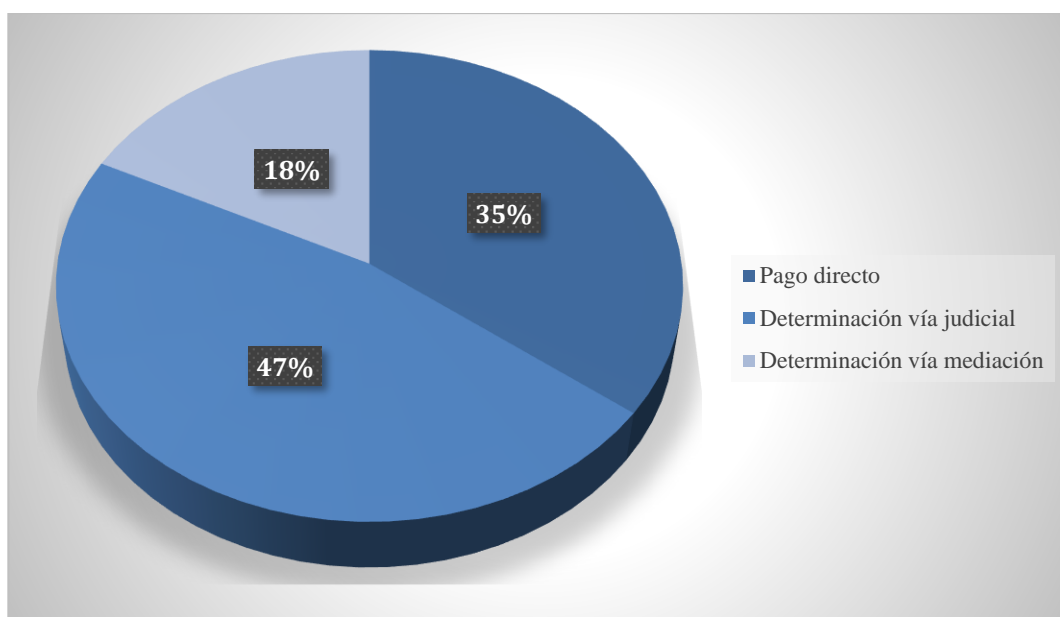
⁴¹⁰ Caso No. 0003-13-IS, Caso No. 0007-99-IS, Caso No. 0037-11-IS, Caso No. 0023-12-IS, Caso No. 0003-10-IS, Caso No. 0052-10-IS.

⁴¹¹ Caso No. 0015-12-IS, Caso No. 0070-99-RA, Caso No. 1683-12-EP, Caso No. 0017-12-IS, Caso No. 0038-10-IS, Caso No. 0071-10-IS, Caso No. 0440-09-EP, Caso No. 0068-10-IS.

⁴¹² Caso No. 0020-09-IS, Caso No. 0021-09-IS, Caso No. 0019-14-IS.

Gráfico 7.

**FORMAS DE DETERMINACIÓN DEL MONTO DE REPARACIÓN
ECONÓMICA**



Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 163.

Fuente primaria: Autos de Verificación emitidos por las Corte Constitucional del Ecuador que se encuentran en fase de seguimiento.

Conforme se desprende del cuadro y la gráfica y atendiendo a lo señalado en párrafos precedentes, la Corte Constitucional entre las tres formas para la determinación del monto de reparación económica ha optado por que sean los jueces de los tribunales contencioso administrativo quienes se encarguen de la determinación de los valores a favor de los beneficiarios de la medida.

Finalmente, se advierte que la medida de “reparación económica” resulta ser una constante en todas las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en las cuales se declara vulneración de derechos, este tipo de actuaciones han generado la desnaturalización de la medida objeto del presente análisis, puesto que la misma guarda un carácter eminentemente residual, es decir, esta tiene que ser dictada en los casos en los cuales resulta imposible restituir el derecho vulnerado a la víctima. En este sentido se ha primado dictar esta medida por sobre las otras, dejando de lado la naturaleza y finalidad que implica la reparación integral.

3.2.4. Medidas de verificación de cumplimiento continuo

En un principio y según se ha venido analizando en los párrafos precedentes, cada una de las medidas de reparación integral son de ejecución inmediata, esto provoca que, una vez que se ejecuten de forma integral todas las medidas dispuestas en una sentencia, el Pleno de la Corte Constitucional se encuentra en la obligación de archivar el proceso.

No obstante de lo referido, existen ciertas medidas que resultan imposibles que se ejecuten de manera integral en un solo acto, su naturaleza obliga a que las mismas sean ejecutadas de manera progresiva, en consecuencia, se entendería que en los procesos en los que se dictó ese tipo de medidas no van a poder ser archivados, esto en virtud de la naturaleza de las mismas, lo que obliga a la Corte Constitucional a mantener abierto el expediente y solicitar informes paulatinamente para tener conocimiento acerca del estado actual del proceso.

A continuación, se detallarán en un cuadro y grafica las medidas de verificación continúa adoptadas por el Pleno de la Corte Constitucional entre abril de 2014 a marzo de 2015:

Cuadro 17.

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN CONTINÚA

Medidas de reparación con verificación de cumplimiento continua	No. de medidas
Medidas con verificación continúa emitidas en tres casos con analogía fáctica ⁴¹³ .	8
Medidas con verificación en casos concretos emitidas en cincuenta y cinco casos ⁴¹⁴ .	108

⁴¹³ Caso No. 0014-12-AN, Caso No. 0027-09-AN, No. 0072-14-CN.

⁴¹⁴ Caso No. 0043-14-IS, Caso No.0003-13-IS, Caso No. 0022-09-IS, Caso No.0073-10-IS, Caso No. 0042-10-IS, Caso No. 0023-12-IS, Caso No. 0003-10-IS, Caso No. 0013-09-IS, Caso No. 0052-10-IS, Caso No. 0054-09-IS, Caso No. 0015-12-IS, Caso No. 0017-12-IS, Caso No. 0038-10-IS, Caso No. 0054-12-IS, Caso No. 0063-10-IS, Caso No. 0011-10-IS, Caso No. 0068-10-IS, Caso No. 0071-10-IS, Caso No. 0029-09-IS, Caso No. 0007-11-IS, Caso No. 0014-09-IS, Caso No. 0024-11-IS, Caso No. 0037-11-IS, Caso No. 0053-12-IS, Caso No. 0020-09-IS, Caso No. 0021-09-IS, Caso No. 0019-14-IS, Caso No. 0066-10-IS, Caso No. 0064-10-IS, Caso No. 0001-10-IS, Caso No. 0072-14-CN, Caso No. 0036-10-CN, Caso No. 1104-11-EP, Caso No. 1714-12-EP, Caso No. 0971-11-EP, Caso No. 1826-12-EP, Caso No. 0625-09-EP, Caso No. 0629-09-EP, Caso No. 0440-09-EP, Caso No. 0422-09-EP, Caso No. 1353-13-EP, Caso No. 1683-12-EP, Caso No. 1852-11-EP, Caso No. 0079-10-EP, Caso No. 1783-11-EP, Caso No. 0072-09-AN, Caso No. 0068-10-AN, Caso No. 0012-03-AA, Caso No. 0014-12-AN,

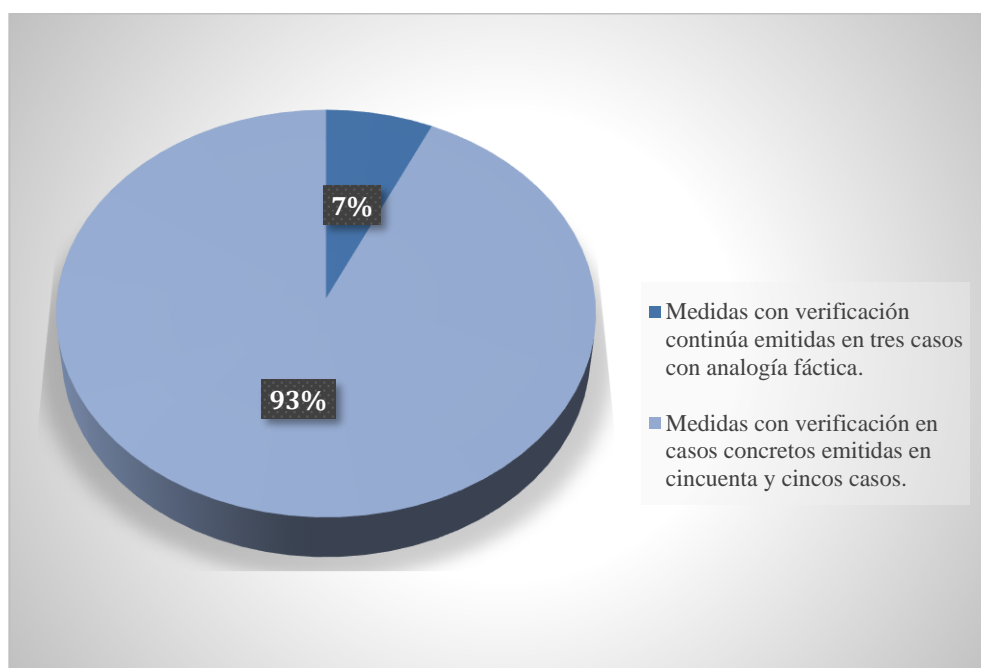
Total de medidas revisadas	116⁴¹⁵
-----------------------------------	--------------------------

Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 137.

Fuente primaria: Medidas de verificación continua emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador que se encuentran en fase de seguimiento.

Gráfico 8.

MEDIDAS DE REPARACIÓN CON VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTINUA



Fuente directa: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 138.

Fuente primaria: Autos de Verificación emitidos por las Corte Constitucional del Ecuador que se encuentran en fase de seguimiento.

Conforme se advierte del cuadro y la gráfica, la Corte Constitucional del Ecuador ha dictado 8 medidas de reparación de “verificación continua” contenidas en

Caso No. 0027-09-AN, Caso No. 0604-04-RA, Caso No. 0070-99-RA, Caso No. 0716-07-RA, Caso No. 1226-06-RA, Caso No.1311-2007-RA.

⁴¹⁵ En el levantamiento de la información se identificaron ciento dieciséis (116) medidas de reparación integral emitidas dentro de las cincuenta y cinco (55) causas que se encuentran en el proceso de seguimiento de cumplimiento de sentencias. De ahí que, en la mayor parte de los procesos se ha dictado más de una medida de reparación integral, e incluso en las causas Caso No. 0014-12-AN, Caso No. 0027-09-AN, 0072-14-CN, se identificaron tanto medidas de garantías de No repetición como medidas de verificación concreta.

3 casos con analogía fáctica, siendo estos los siguientes: 1) Caso No. 0014-12-AN; 2) Caso No. 0027-09-AN; y. 3) No. 0072-14-CN.

En el primer caso, la medida de reparación con verificación continua fue dictada a favor de las personas que se encuentran internas en los Centros de Rehabilitación Social⁴¹⁶, así se ordenó:

La obligación de aperturar el expediente, en observancia de lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, es al momento del ingreso del interno al Centro de Rehabilitación Social. Esta obligación deberá ser observada por los directores de los Centros de Rehabilitación Social bajo prevenciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, conforme lo dispone el artículo 439 numeral 9 de la Constitución, y artículo 162 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para lo cual, la Defensoría del Pueblo verificará el cumplimiento de esta disposición e informará acerca del cumplimiento al Pleno de la Corte Constitucional quincenalmente⁴¹⁷.

Esta medida obliga a los directores de los Centros de Rehabilitación Social a aperturar el expediente de todas las personas que se encuentren privadas de la libertad apenas ingresen en dichos centros, adicionalmente se dispuso que la Defensoría del Pueblo sea la encargada de verificar el cumplimiento de la referida disposición e informar periódicamente a la Corte Constitucional.

La precitada sentencia ha sido considerada por el Pleno del Organismo como «hito» por lo garantista que resulta ser; no obstante, debido al tipo de disposiciones que en ella se dictaron, el caso requiere que de forma continua la Corte Constitucional requiera información que le permita verificar que los sujetos obligados a su cumplimiento están realizando todas las acciones pertinentes para ejecutar lo ordenado. En este sentido, se puede afirmar que la emisión de medidas de reparación sumamente garantistas no implican que éstas puedan ser ejecutadas integralmente, esto se debe, a que conllevan un grado alto de complejidad, y como ya se ha referido en párrafos anteriores, finalmente el cumplimiento de las medidas recae en el sujeto obligado -o entidad accionada-, es decir, su ejecución o falta de esta atenderán a su voluntad y a las facilidades que existan para poder llevar a cabo las disposiciones constitucionales.

Dentro de esta perspectiva, conviene aclarar que, el hecho que una sentencia sea considerada o no como «hito» va más allá de lo garantista que esta pueda llegar a

⁴¹⁶ Aguirre, “Una lectura cuantitativa y cualitativa”, 138-139.

⁴¹⁷ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. [Sentencia No. 001-13-SAN-CC], 25 de abril de 2013.

ser, ya que en mayor o menor grado todas las sentencias propenden a la protección de uno o varios derechos. Sobre esta premisa, debe entenderse que la sentencia dictada a favor del señor Néstor Napoleón Marroquín Carrera, resulta ser transcendental por lo que obliga a que dos instituciones estatales –Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Defensoría del Pueblo- unan esfuerzo y que de una manera mancomunada velen por la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, en este sentido, la sentencia No. 001-13-SAN-CC emitida dentro de la causa No. 0014-12-AN, más que tutelar el derecho del accionante, demarcó el proceso que deben seguir los centros de rehabilitación desde el momento que una persona ingresa, tutelando los derechos reconocidos en la Constitución y reafirmando el principio de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.

Atendiendo al grado de complejidad que comporta esta medida, se podría llegar a pensar que la misma resulta ser de imposible ejecución, ya que esta dispone que dos instituciones estatales mantengan canales de comunicación continuos entre ellas y de manera simultánea con la Corte Constitucional; esto a su vez conlleva que cada institución cuente con grupos de trabajo destinados exclusivamente al cumplimiento de la medida de reparación, ya que es iluso creer que la realización de informes periódicos puedan realizarse precipitadamente sin contar con estudios previos realizados de forma paulatina mediante los cuales se pueda visibilizar la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, para posteriormente informar al órgano constitucional.

Por otra parte, en el caso No. 0027-09-AN el Pleno de la Corte Constitucional como medida de reparación a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios en temas de educación⁴¹⁸ estableció:

Disponer que el CONESUP incorpore en y para todos sus actos jurídico-administrativos, que tengan relación con nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, principios con perspectiva intercultural, en aras de aplicar a cabalidad los derechos de estos pueblos, en el marco de lo expuesto y considerado en esta sentencia⁴¹⁹.

Al respecto, se advierte que la intención de la Corte Constitucional fue la promoción y aplicación de los principios con perspectiva intercultural en los actos

⁴¹⁸ Aguirre, “Una lectura cuantitativa y cualitativa”, 139.

⁴¹⁹ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. [Sentencia No. 0008-09-SAN-CC], 9 de diciembre de 2009.

jurídico-administrativos generados por el CONESUP. Se ha de destacar que, pese a que el sujeto obligado al cumplimiento de la disposición ya no existe, esto no ha eximido a que la institución que asumió dichas facultades -Consejo de Educación Superior (CES)- sea la encargada de continuar con la ejecución progresiva de la medida ordenada.

Por último, en la sentencia No. 004-14-SCN-CC, la medida de reparación integral dictada fue a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas de reciente contacto, involucrados en procesos penales⁴²⁰, así se determinó que:

De conformidad con el artículo 143 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la figura penal del genocidio solo podrá ser aplicada en el caso concreto por el juez consultante, siempre que se verifique de manera argumentada el cumplimiento de todos y cada uno de los presupuestos convencionales determinados en la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, todo ello en observancia a los parámetros de interculturalidad en los términos previstos en esta decisión.

Que el juez segundo de garantías penales de Orellana, que conoce el caso, previo a la aplicación de la norma consultada, implemente las medidas urgentes necesarias, entre otros peritajes sociológicos, antropológicos, con el fin de asegurar que el proceso penal sea sustanciado desde una interpretación con perspectiva intercultural, con observancia de los parámetros señalados en la parte motiva de esta sentencia (*ratio decidendi*).

Todo lo resuelto se implementará de manera celer, sin perjuicio de las medidas y acciones procesales inmediatas que deberá adoptar el juez segundo de garantías penales de Orellana, en conocimiento del caso, para subsanar las actuaciones y omisiones establecidas.

Las normas penales que fueren aplicables en el presente caso, de conformidad con el criterio del juez, deberán observar los principios constitucionales analizados y deberán ser interpretadas desde una perspectiva intercultural.

Que la Defensoría del Pueblo, de conformidad con la Constitución, realice la vigilancia del debido proceso e informe a la Corte Constitucional periódicamente sobre el cumplimiento de esta decisión, durante todo el desarrollo del proceso penal hasta su culminación⁴²¹.

Al dictar esta medida al igual que en el primer caso, la Corte Constitucional se apoya en la Defensoría del Pueblo disponiendo que esta sea la institución encargada de vigilar que las distintas autoridades jurisdiccionales observen los principios constitucionales analizados en la sentencia, así como la aplicación de una perspectiva intercultural en la sustanciación de los casos en los que fuere aplicable lo analizado por la Corte.

⁴²⁰ Aguirre, “Una lectura cuantitativa y cualitativa”, 139.

⁴²¹ Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. [Sentencia No. 004-14-SCN-CC], 6 de agosto de 2014.

Hechas las observaciones anteriores, se advierten ciertas cuestiones relevantes en torno al tipo de medidas de verificación continua. En *primer lugar*, las tres medidas involucran aspectos que continuamente se generan, lo que involucra que las instituciones encargadas de dar cumplimiento a la medida deben ser conscientes de su permanente obligación.

En *segundo lugar*, las tres medidas han sido dictadas con la finalidad de garantizar derechos, pero no solamente a los involucrados en el caso concreto sino que extienden su ámbito, puesto que generan una protección a futuro, esto implica que este tipo de medidas guarden estrecha relación con las garantías de no repetición ya que procuran que un hecho no se vuelva a generar.

En *tercer lugar*, se advierte que no importa que el sujeto obligado cambie, la institución o la persona que asuma la función, ineludiblemente tiene que continuar con el cumplimiento de lo ordenado.

En *cuarto lugar*, se puede observar que, debido a la magnitud de las disposiciones, la Corte Constitucional se ha visto en la necesidad de auxiliarse de otras instituciones⁴²² para que por medio de estas se pueda realizar una verificación paulatina y constante del cumplimiento. Finalmente, se ha de destacar que la esencia de las medidas obliga a que los sujetos obligados informen continuamente a la Corte, y de no hacerlo el Pleno se encuentra facultado para requerir toda la información que crea pertinente, mediante la cual se justifique las acciones ejecutadas en aras de dar cabal cumplimiento con lo ordenado, asegurando de esta manera el eficaz ejercicio de los derechos.

3.2.5. Actuaciones de la Corte Constitucional dentro de la Fase de Seguimiento

En párrafos precedentes ya se hizo referencia a la facultad y competencia de la Corte Constitucional de emplear todos los medios que considere adecuados y pertinentes tendientes a la ejecución integral de sus sentencias, como convocar audiencia, ordenar peritajes, solicitar la intervención de la fuerza pública y hasta realizar vistas *in situ*, esto en atención a lo dispuesto en el artículo 102 de la

⁴²² Ecuador, *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* [2009], art. 21, en la *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015): 10

Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

A efectos de determinar cuáles han sido las acciones adoptadas por el Pleno de la Corte Constitucional dentro de las 55 causas objeto del presente análisis se detalla el siguiente cuadro y gráfica:

Cuadro 18.

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PLENO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL EN FASE DE SEGUIMIENTO**

Actividades realizadas por la Corte Constitucional en Fase de Seguimiento	No. de causas
Procesos en que se ha realizado visitas <i>in situ</i>	4 ⁴²³
Procesos en que se han realizado audiencias de verificación	17 ⁴²⁴
Procesos en los que se han realizado visita <i>in situ</i> y audiencia de verificación	1 ⁴²⁵
Procesos en los que no se ha visto la necesidad de realizar actividades de otra índole	33
Total de procesos revisados	55

Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 154-155.

⁴²³ Caso No. 0015-12-IS, Caso No. 0071-10-IS, Caso No. 0068-10-IS, Caso No. 0072-07-AN.

⁴²⁴ Caso No. 022-09-IS, Caso No. 0003-13-IS, Caso No. 0068-10-AN, Caso No. 0072-14-CN, Caso No. 0015-12-IS, Caso No. 0024-11-IS, Caso No. 0020-09-IS, Caso No. 0021-09-IS, Caso No. 0019-14-IS, Caso No. 0064-10-IS, Caso No. 0029-09-IS, Caso No. 0054-12-IS, Caso No. 0042-10-IS, Caso No. 1714-12-EP, Caso No. 0012-03-AA, Caso No. 1826-12-EP, Caso No. 0013-09-IS.

⁴²⁵ Caso No. 0063-10-IS.

Gráfico 9.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN FASE DE SEGUIMIENTO



Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 154-155.

Observando la gráfica y el cuadro detallados en la parte superior se puede advertir que en el 60% de las causas que se encuentran en la fase de seguimiento la Corte Constitucional no ha procedido a convocar audiencia o a realizar una visita *in situ*, en este sentido se tiene que entender que el realizar o convocar a dichas diligencias es una cuestión meramente facultativa, puesto que, el Pleno del Organismo no se encuentra en la obligación de emplear todas las medidas descritas en el artículo 102 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, ya que éstas serán empleadas atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.

Se ha de precisar también, que el Pleno de la Corte Constitucional no se encuentra sujeto a disponer la práctica de diligencia alguna, cuando a su criterio de la documentación que se desprenda del expediente constitucional, se cuente con todos los elementos de convicción necesarios para determinar el grado de ejecución de la sentencia.

Resulta claro que, la realización de diligencias atiende a casos especiales en los cuales la Corte Constitucional necesita generar elementos de juicio para así ordenar las disposiciones que crea pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas de reparación integral contenidas en la sentencia.

3.2.6. Causas archivadas

En atención a lo prescrito en el último inciso del numeral 3 del artículo 86 de la Constitución de la República, que señala “[l]os procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución”⁴²⁶, en este sentido una vez que el Pleno de la Corte Constitucional ha comprobado que no existen obligaciones pendientes por ejecutar respecto de sus sentencias, así como las disposiciones contenidas en sus autos y de conformidad con el último inciso del artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se encuentra facultado para archivar los procesos.

Atendiendo al universo de casos que han sido tratados a lo largo de este capítulo, finalmente se advertirá en cuántos de ellos la Corte Constitucional ha logrado que se ejecute de manera integral sus sentencias, así se desprende el siguiente cuadro y gráfica:

Cuadro 19.

CAUSAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ARCHIVADAS

Causas archivadas por cumplimiento integral	No. de causas
Casos en los que se dispuso el archivo	23 ⁴²⁷
Casos activos en proceso de seguimiento	32
Total procesos revisados	55

Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

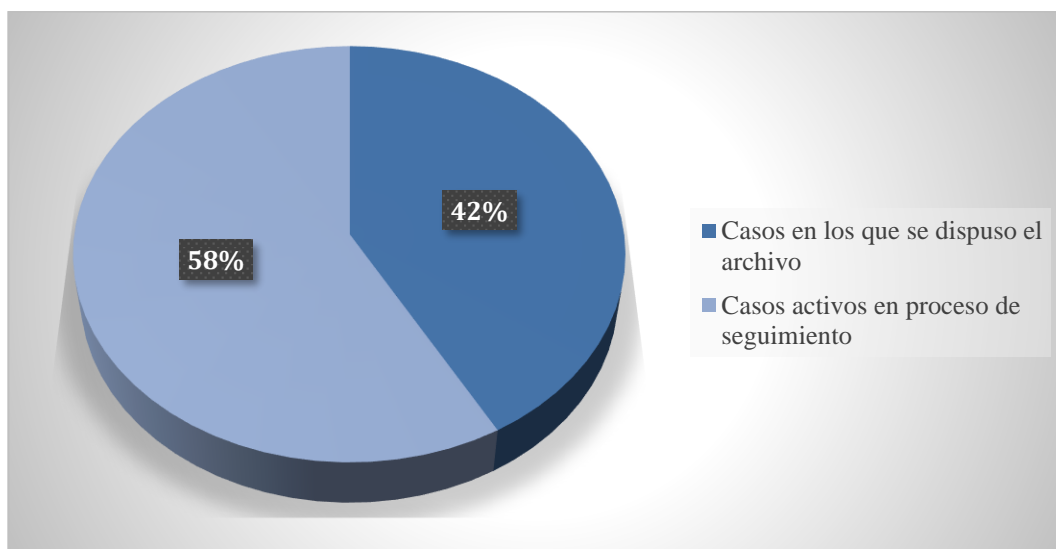
⁴²⁶ *Constitución de la República del Ecuador* [2008], tit. III, “Garantías Constitucionales”, cap. Tercero, “Corte Constitucional”, art. 86 ([Quito]: Corporación de Estudios y Publicaciones): 33.

⁴²⁷ Caso No. 0068-10-AN, Caso No. 007-11-IS, Caso No. 0024-11-IS, Caso No. 0037-11-IS, Caso No. 0422-09-EP, Caso No. 0020-09-IS, Caso No. 0021-09-IS, Caso No. 0017-12-IS, Caso No. 0001-10-IS, Caso No. 0071-10-IS, Caso No. 0066-10-IS, 0 Caso No. 064-10-IS, Caso No. 0029-09-IS, Caso No. 0011-10-IS, Caso No. 0066-10-IS, Caso No. 1714-12-EP, Caso No. 0012-03-AA, Caso No. 0023-12-IS, Caso No. 0013-09-IS, Caso No. 0052-10-IS, Caso No. 0054-09-IS, Caso No. 0072-09-AN, Caso No. 0604-04-RA.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 168.

Gráfico 10.

CAUSAS ARCHIVADAS



Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015), 168.

Previo a realizar el respectivo análisis conviene señalar que, los datos arrojados en la obra *Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional*, la cual ha servido de base en la realización del presente estudio, se hace alusión exclusivamente a un lapso de tiempo, de abril de 2014 a marzo de 2015; en este sentido y con el objeto de contar con información actualizada se procedió a realizar la búsqueda de los casos que se encuentran en fase de seguimiento en la página web de la Corte Constitucional, esto con la finalidad de contar con información actualizada hasta la presente fecha.

Dadas las condiciones que anteceden se advirtió que, de las 55 causas que se encuentran en fase de seguimiento 23 ya han sido archivadas. Si bien, resulta ser mayor el número de causas que aún no finalizan, es imposible desconocer las actuaciones de la Corte Constitucional por dar efectivo cumplimiento a las medidas de reparación integral contenidas en sus sentencias; esto por cuanto, el accionar del Pleno se encuentra condicionado a las acciones de las partes procesales.

Pese a que la Corte Constitucional se encuentra facultada para expedir los autos que considere necesarios, se ha de resaltar que en muchas ocasiones las entidades accionadas no dan respuesta ágil a los requerimientos del Organismo, o que la información remitida no es la pertinente; en este mismo sentido, la convocatoria a audiencias tampoco resulta ser el medio más idóneo, puesto que, las partes procesales no asisten a las diligencias. Las actuaciones antes descritas generan dilaciones en el cumplimiento efectivo de las sentencias, conductas que salen de la esfera competencial de la Corte Constitucional.

En resumidas cuentas, la Corte Constitucional sólo procederá al archivo de la causa una vez que verifique y tenga la absoluta certeza que se han ejecutado de manera integral todas las medidas, así como las disposiciones ordenadas en la sentencia y durante la fase de seguimiento de las misma. Debe hacerse énfasis en el hecho de que 3 de las 55 causas cuentan con medidas de verificación de cumplimiento continuo, motivo por el cual no son susceptibles de ser archivadas.

3.3. Efectividad de la fase de seguimiento

A lo largo del presente capítulo se analizó la fase de seguimiento que posee la Corte Constitucional del Ecuador, ahora bien, para determinar su grado de eficacia es necesario considerar la forma en que son dictadas las medidas en un inicio, es decir, resulta pertinente retrotraernos a la fase de sustanciación de las causas, puesto que es el paso previo para que puedan ser dictadas las medidas de reparación y concomitantemente se pueda llegar a iniciar una fase de seguimiento.

En este sentido, resulta trascendental citar lo dicho por Ávila:

Lo óptimo es que la jueza o juez escuche a los intervinientes, tanto a la víctima como a los agentes del estado. Nada se gana haciendo una sentencia maravillosa de imposible ejecución. Para ello, conviene la creación de espacios para la coordinación. Las reparaciones deben ser útiles y posibles, sin caer en aquel pretexto intolerable de la falta de recursos. Las soluciones a los casos deben ser adecuados para cada caso, para cada víctima y en la medida también de los responsables. No hay recetas, no hay forma de establecer reglas únicas, no hay modelos únicos. La innovación y la creatividad están a la orden del día⁴²⁸.

Sin lugar a dudas es determinante que previo a dictar las medidas de reparación integral la autoridad jurisdiccional escuche a las partes procesales, esto se debe a que

⁴²⁸ Ávila Santamaría, “Los derechos y sus garantías”, 223.

el juez debe tener un conocimiento real en cuanto a la situación actual de la víctima, puesto que es poco probable que durante la sustanciación de la causa se mantengan las mismas condiciones, más aún si hablamos de los casos que llegan a la Corte Constitucionales, los cuales tardan años en ser resueltos. En este sentido, se entendería que previo a dictar sentencia -en todos los casos en los que se haya determinado la existencia de vulneración de derechos constitucionales- el Pleno del Organismo debería convocar a una audiencia pública, de esta manera se estaría asegurando que las medidas que se vayan a dictar sean las adecuadas, encaminadas a cesar todo tipo de daño causado.

De esta manera se genera la restitución del derecho, conociendo la realidad de la víctima, así como las potencialidades de la entidad o la persona accionada⁴²⁹, es decir, se tiende a una dictar una medida que cumpla dos objetivos simultáneamente, por un lado se emite una medida ejecutable lo que genera directamente la satisfacción del beneficiario de la misma.

No obstante de lo anotado, son escasas las causas en las cuales previo a dictar sentencia la Corte Constitucional convoca a una audiencia, este tipo de actuaciones genera que las medidas que se dictan no cumplan con su finalidad, o por el contrario las mismas son inejecutables desde un inicio, producto de lo cual la Corte debe proceder a emitir autos de verificación, esto con la finalidad de rectificar las medidas, puesto que, como ya se ha señalado, el Pleno ha tenido que buscar medidas equivalentes debido a que el sujeto obligado no puede ejecutar las mismas o por el paso del tiempo estas no pueden producir el efecto deseado.

El autor antes citado, también involucra la «creatividad» al momento de dictar medidas de reparación integral, lamentablemente esta es una de las cuestiones que carecen las medidas dictadas por la Corte Constitucional, como ya se refirió anteriormente se ha optado por indemnizar económicamente a las víctimas dejando de lado la amplia gama que ofrece la reparación y más allá de eso, los jueces están dejando de lado su labor, que involucra el reparar a las víctimas.

Continuando con el análisis, se puede asegurar que para que las medidas de reparación integral cumplan con su objetivo, - a más de ser indispensable el conocer el estato actual de los sujetos- es necesario que estas cumplan con ciertos parámetros.

⁴²⁹ *Ibíd.*, 240.

Por lo antes expuesto, a mi criterio cada medida debería cumplir con 5 parámetros, los cuales los he planteado en forma de interrogante, estos son:

1. ¿Qué tipo de medida es?
2. ¿Quién es el sujeto beneficiario de la medida?
3. ¿Quién es el sujeto obligado al cumplimiento de la medida?
4. ¿Cómo debe llevar a cabo la medida?
5. ¿En qué tiempo debe llevarse a cabo la medida?

Mediante la primera pregunta, se tiene que establecer qué tipo de medida es la que se está dictando, es decir, si es de restitución, satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición, obligación de investigar, juzgar y sancionar o reparación económica. La segunda interrogante implica que debe determinarse dos sujetos, tanto al sujeto beneficiario de la medida como el sujeto obligado al cumplimiento de la misma. En el caso de ser instituciones estatales es pertinente referirse como sujeto obligado al representante del órgano estatal (representante legal, ministro, secretario, etc). El tercer cuestionamiento es fundamental, ya que de manera explícita y manifiesta se debe determinar la forma en la que se debe llevar a cabo la medida de reparación integral. Finalmente la última pregunta, involucra el tiempo (término o plazo) que se concede para la materialización de la medida ordenada.

Sumado a lo expuesto, considero conveniente que deben existir dos cláusulas al final de emitir todas las medidas de reparación, una que refiera al tiempo en que se debe informar documentadamente a la Corte Constitucional respecto del efectivo cumplimiento y otra cláusula mediante la cual se puntualice que el Pleno del Organismo se encuentra facultado para iniciar de oficio, a petición de parte o una vez que fenezcan los términos establecidos el proceso de seguimiento de la sentencia.

Continuación se presentan 3 fichas en las que se analizan 9 medidas de reparación dictadas por la Corte Constitucional:

Cuadro 20.

EFFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL No.1

Caso	Sentencia	Medidas de reparación integral ordenadas	¿Qué?	¿Quiénes?		¿Cómo?	¿Cuándo?	Cláusula de información y remisión
				SB ⁴³⁰	SO ⁴³¹			
0073-10-IS	007-14-SIS-CC	Disponer como medida de reparación integral que el director provincial de Educación del Guayas informe en el plazo improrrogable de treinta días acerca de las acciones realizadas para el fiel cumplimiento de la sentencia emitida por el juez séptimo de Garantías Penales del Guayas el 06 de agosto de 2010 dentro de la acción de protección N.º 12702010, esto es, brindar al menor una atención psicológica a fin de remediar los daños causados y así evitar que en el futuro esos maltratos físicos y psicológicos se repitan; disponer también que los profesores de ese instituto de educación sean sometidos a una evaluación psicopedagógica, conforme lo dispuesto en la referida sentencia, solicitando que la señora directora informe sobre el cumplimiento de la misma.			X	X	X	X
		Remitir copia de la presente sentencia al Ministro de Educación con el fin de que disponga al director provincial de Educación del Guayas, cumpla con lo dispuesto en esta sentencia.			X			

Fuente directa: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Corte Constitucional del Ecuador <
<https://www.corteconstitucional.gob.ec/>>

Cuadro 21.

EFFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL No.2

Caso	Sentencia	Medidas de reparación integral ordenadas	¿Qué?	¿Quiénes?		¿Cómo?	¿Cuándo?	Cláusula de información y remisión
				SB ⁴³²	SO ⁴³³			

⁴³⁰ Sujeto beneficiario de la medida de reparación integral.

⁴³¹ Sujeto obligado al cumplimiento de la medida de reparación integral.

⁴³² Sujeto beneficiario de la medida de reparación integral.

⁴³³ Sujeto obligado al cumplimiento de la medida de reparación integral.

0007-11-IS	023-14-SIS-CC	Disponer que las autoridades y personeros respetos de la Municipalidad del cantón Salinas, en el término de 15 días, cumpla la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Santa Elena el 23 de julio de 2010, dentro de la acción de protección No. 1612010; para el efecto deberá cumplir lo dispuesto por el juez de Instancia mediante providencia de 29 de noviembre de 2010 y además el pago de las remuneraciones adeudadas.			X			X
		Notificar al juez de la causa para el cumplimiento de lo ordenado, debiendo, en el término de 20 días, informar a esta Corte al respecto.			X			X

Fuente directa: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Corte Constitucional del Ecuador <
<https://www.corteconstitucional.gob.ec/>>

Cuadro 22.

EFFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL No.3

Caso	Sentencia	Medidas de reparación integral ordenadas	¿Qué?	¿Quiénes?		¿Cómo?	¿Cuándo?	Cláusula de información y remisión
				SB ⁴³⁴	SO ⁴³⁵			
0017-12-IS	021-14-SIS-CC	El pago completo de las remuneraciones dejadas de percibir por la Ing. Nelly Concha Urgiles y a las que tiene derecho, a partir de enero del 2012 hasta el momento de su reintegro. La reparación económica se la determinará en la vía contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la regla (...); en consecuencia se dispone que, previo sorteo, el proceso se remita a una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la que deberá informar sobre el procedimiento en el término de 30 días.	X	X		X		X
		Que el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bajo prevenciones (...), de forma inmediata reintegre o reincorpore a sus habituales funciones en su puesto de trabajo, esto es como coordinadora de recursos humanos del hospital nivel 1, en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con sede en el cantón Eloy Alfaro, Duran,		X	X	X	X	

⁴³⁴ Sujeto beneficiario de la medida de reparación integral.

⁴³⁵ Sujeto obligado al cumplimiento de la medida de reparación integral.

	provincia del Guayas, con todos sus derechos y obligaciones como servidora del IESS, a la Ing. Nelly Concha Urgiles, sin que sea necesaria la suscripción de un nuevo contrato ocasional.						
	Que el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de esta sentencia, presente a esta Corte un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de esta sentencia			x			x
	Que el juez trigésimo de lo Civil y Mercantil del Guayas, con asiento en el cantón Duran, informe a esta Corte, en el término de 20 días desde la notificación de la presente sentencia, acerca del cumplimiento total de la misma.			x			x
	Para la repetición se estará a lo dispuesto en el artículo 11 numeral 9incisos segundo y tercero de la Constitución de la República y artículos 20, 67 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional						

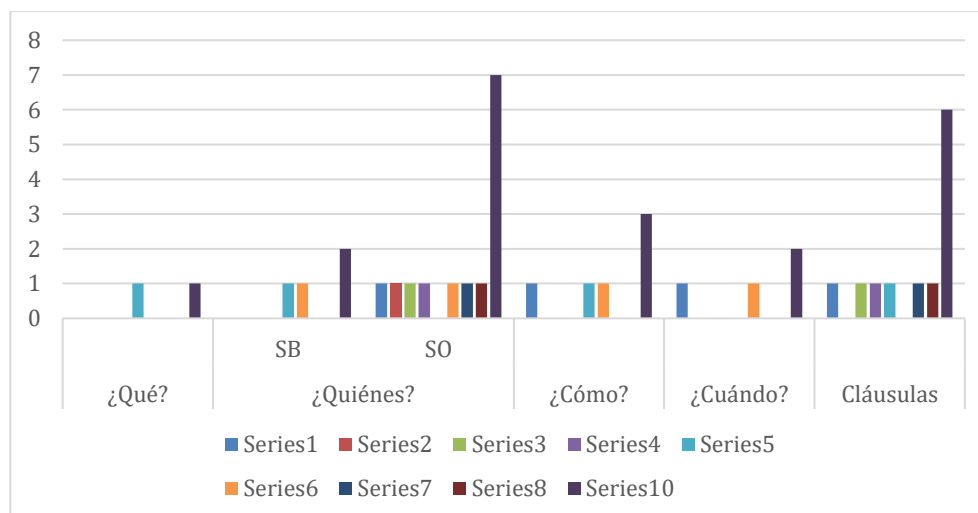
Fuente directa: Cuadro de elaboración propia.

Fuente primaria: Corte Constitucional del Ecuador <
<https://www.corteconstitucional.gob.ec/>>

De la revisión de las tres fichas se puede apreciar que ninguna de las 9 medidas cumple con los 5 parámetros señalados, así se puede observar lo siguiente:

Gráfico 11.

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DICTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR



Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Corte Constitucional del Ecuador <
<https://www.corteconstitucional.gob.ec/>>

Conforme se puede advertir de la gráfica, ninguna de las 9 medidas cumplen con los 5 requisitos planteados, es decir existe una falencia al momento de emitir una medida, ya que como se indicó los 5 parámetros resultan ser indispensables, pues que la falta de alguno de ellos provoca inmediatamente inconvenientes tanto al momento de ejecutarla como en el preciso instante que se da inicio a la fase de seguimiento.

Continuando con el examen de la gráfica, en apenas una medida se establece el tipo de medida de reparación integral que se está dictando. Si bien, esto no es indispensable cuando apenas se dicta una medida, en los casos que se disponen varias medidas si es necesario su identificación.

Por otra parte tan solo en 2 medidas se llega a determinar el sujeto beneficiario; al contrario de ello, en 7 de las 9 medidas si se determina el sujeto obligado al cumplimiento. Esta determinación resulta ser indispensable puesto que es la Corte la encargada de determinar específicamente quien debe llevar a cabo la ejecución, esto permite a su vez la generación de futuras responsabilidades en caso de incumplimiento. Se puede llegar a creer que no tiene sentido el determinar al sujeto beneficiario de la medida ya que se entendería que es la accionante de la causa, sin embargo, existen casos en que no resulta ser la misma persona -acciones que son iniciadas por procuradores o en los que existen varios beneficiarios de las medidas- por lo que su determinación es fundamental, más aún si se considera que el beneficiario de la medida es el único que puede solicitar el inicio de la fase de seguimiento.

Partiendo de la necesidad de identificar la medida y los sujetos, la determinación exacta de cómo debe ejecutarse una medida resulta ser el eje central si se busca la reparación integral de la víctima. Dentro de este marco se puede asegurar que la efectividad de una medida puede ser determinada si la misma es clara y precisa, es decir, si no deja ningún tipo de margen para la equivocación o la discrecionalidad del obligado a su cumplimiento. Sobre lo mencionado y atendiendo a la gráfica, solo en 3 medidas se llega a determinar «como» estas tienen que ser ejecutadas, es decir, en 6 medidas se deja al libre albedrío de la institución accionada, la forma en la que se ejecutará la medida.

Frente a este escenario, es pertinente ser más específicos cuando nos referimos a «como debe llevarse a cabo la medida», esto quiere decir, que deben puntualizarse las acciones que deben adoptarse, ya que mediante esta disposición se materializará la reparación integral.

El penúltimo de los requisitos implica la especificación del tiempo en que debe ejecutarse la medida, considerando que la Constitución de la República del Ecuador determina que las sentencias constitucionales serán de inmediato cumplimiento, se podría entender *a priori* que no es indispensable el fijar una fecha límite para su cumplimiento; sin embargo de aquello, es necesario el establecimiento de un término o un plazo, puesto que su vencimiento implica indefectiblemente el inicio de la fase de seguimiento. Atendiendo a las estadísticas descritas en las páginas anteriores sólo en dos medidas la Corte precisó un término para la ejecución de las mismas.

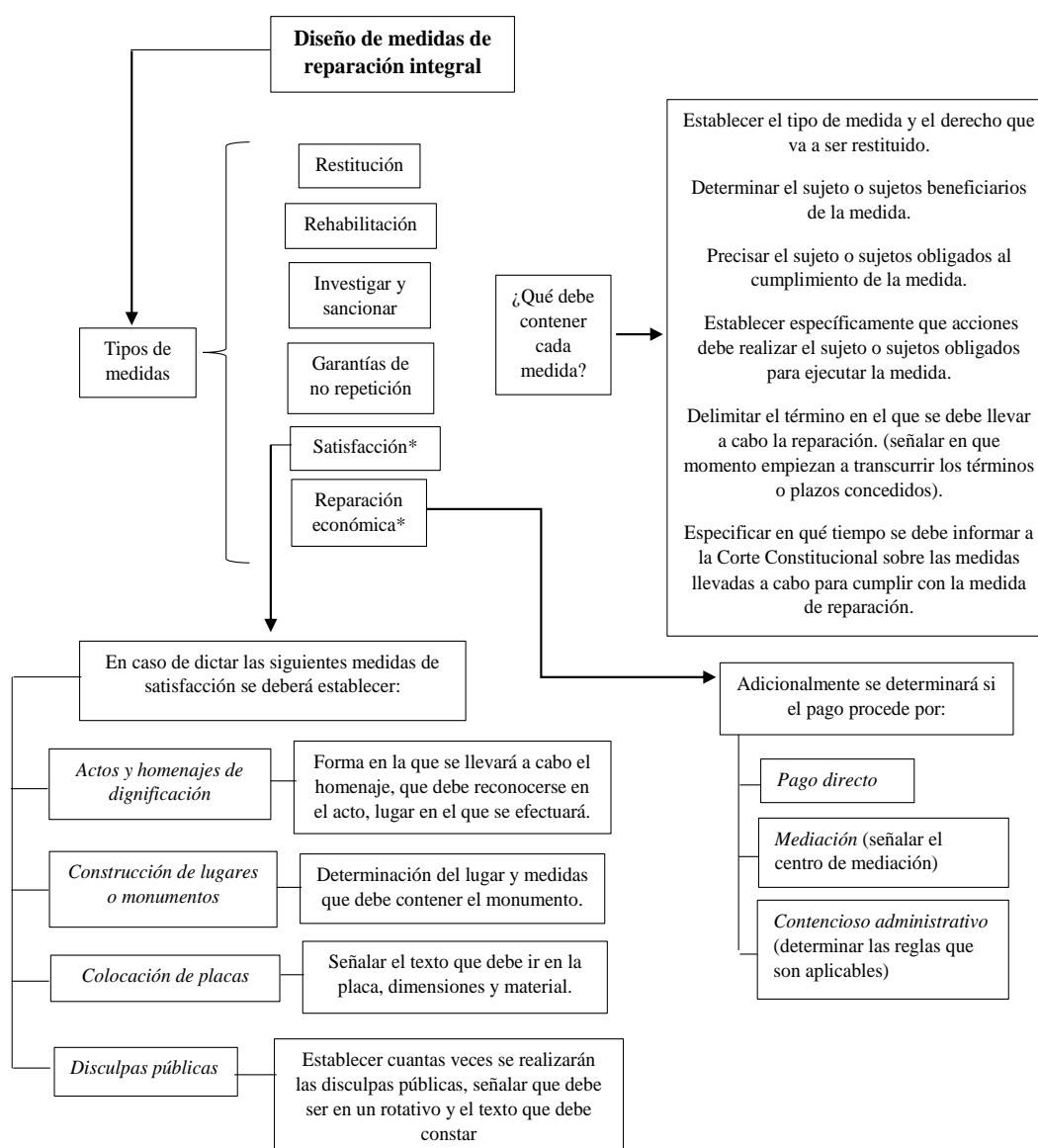
En último lugar se encuentran las cláusulas de información y seguimiento, en cuanto a la primera se puede colegir que en 6 de los 9 casos la Corte ordenó que se informe inmediatamente respecto del cumplimiento, mientras que en ninguna señaló la posibilidad del inicio de la fase de seguimiento.

También se puede decir que, otra forma de contribuir al diseño de las medidas, atiende al hecho que es necesario que cada disposición contenga exclusivamente una medida, ya que la conjugación de varias medidas pueda derivar en complicaciones en su ejecución.

A continuación, se presenta un diagrama determinado el diseño de cada una de las medidas que han sido analizadas en el presente trabajo de investigación:

Gráfico 12.

DISEÑO DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL



Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

En esta dirección, se ha determinado que existen elementos preponderantes al momento de dictar cada una de las medidas de reparación integral los cuales no pueden ser inobservados desde ningún punto de vista, ya que, es mediante estos elementos que se puede llegar a una ejecución integral de las medidas de reparación integral. El diseño de cada medida requiere de precisión y un vasto conocimiento en el caso, y más aún implica una gran dosis de creatividad por parte de la autoridad jurisdiccional, puesto que, cada una de las medidas de reparación deben atender al caso concreto

teniendo siempre como finalidad su ejecución y con ello la satisfacción de la víctima⁴³⁶.

3.4. Factibilidad de ejecución de las medidas de reparación integral

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando la fase de seguimiento de las sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional tiene como finalidad de garantizar el cumplimiento integral de las medidas de reparación dispuestas en las sentencias; de la misma manera se pudo colegir que en casos excepcionales el Pleno de la Corte Constitucional ha visto la necesidad de modificar las medidas de reparación integral cuando estas por motivos ajenos al beneficiario de la medida no pueden llevarse a cabo.

Ahora bien, también existe otro escenario y este es cuando los sujetos – beneficiario y sujeto obligado al cumplimiento de la medida- no llegan a un acuerdo en cuanto a la reparación. Este tipo de divergencias son constantes cuando se refiere a la determinación de un monto económico; bajo esta premisa, -como se advirtió en párrafos anteriores- la determinación de la reparación económica se puede llevar a cabo de tres formas, por mediación, ante la jurisdicción contenciosa administrativa y pago de forma directa. Sobre lo señalado, llama la atención que, de las tres formas determinadas por la Corte Constitucional, sea la mediación la que ha ocasionado ciertos problemas.

En este sentido, existen 3 casos específicos en los cuales la mediación no ha cumplido con su objetivo, esto por cuanto las partes no han podido llegar a un acuerdo respecto del monto de reparación económica a ser cancelado. Así, en los casos No. 0019-14-IS, No. 0042-10-IS y No. 0180-11-IS el Pleno de la Corte Constitucional ordenó que las partes procesales asistan de forma obligatoria al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, esto, con la finalidad que suscriban un acta de acuerdo; no obstante, en los 3 casos después de aproximadamente un año en mediación no se pudo llegar a un acuerdo, así, ante la ineficacia de la vía determinada en la

⁴³⁶ Ver: Corte Constitucional del Ecuador, [Sentencia No. 016-16-SEP-CC], de 13 de enero de 2016. En la referida sentencia se puede advertir como el intento de la Corte Constitucional por ser extremadamente garantista falla al momento de dictar las medidas de reparación integral, las cuales son confusas, no determinan específicamente los sujetos obligados al cumplimiento o la forma de ejecución de cada una de las medidas ordenadas. Adicionalmente, varias medidas no pertenecen a la clasificación otorgada en la sentencia, provocando mayor confusión.

sentencia y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Pleno del Organismo ha terminado ordenando que la jurisdicción contenciosa sea la que determine el valor por concepto de reparación económica.

A continuación, se presenta un cuadro detallando la información de los tres casos:

Cuadro 23.

MODIFICACIÓN DE LA VÍA DE DETERMINACIÓN DEL MONTO DE REPARACIÓN ECONÓMICA

Caso No.	Sentencia	Proceso de Mediación		Auto cambio de vía para la determinación del monto de reparación económica
		No. Proceso	No. Audiencias	
0019-14-IS	018-14-SIS-CC 1 de octubre de 2014	Proceso de mediación No.896-DNCM-2014-QUI	42 audiencias	25 de noviembre de 2015
0042-10-IS	Auto de Verificación 31 de marzo de 2015	Proceso de mediación No. 328-DNCEM-2015-QUI	14 audiencias	13 de abril de 2016
0108-11-IS	019-15-SIS-CC 31 de marzo de 2015	<i>En el auto no se hace referencia al número del proceso de mediación.</i>	12 audiencias	28 de abril de 2016

Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Sistema de Gestión de Acciones Constitucionales < <http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/index.php>>.

Atendiendo al cuadro saltan a la vista ciertos aspectos. En primer lugar, en los tres casos pasó un año después de que la Corte Constitucional decidiera modificar la vía de determinación del monto por concepto de reparación económica. En segundo lugar, tanto en el caso No. 0019-14-IS como en el caso No. 0108-11-IS la vía de determinación fue dispuesta en sentencia; no obstante, en el caso No. 0042-10-IS la medida deviene de un auto de verificación, auto en el cual se dictó como «medida de reparación equivalente» el pago por concepto de indemnización.

Finalmente se advierte que, el cambio de vía para la determinación del monto de reparación económica, no puede ser considerada como un cambio de medida puesto que la finalidad que persigue se mantiene, lo único que varía, es la forma en que se va a determinar dicho monto, por este motivo el Pleno de la Corte no dicta autos de verificación, simplemente realiza el cambio mediante la expedición de un auto el cual es notificado a las partes procesales.

En un principio se pensaría que la mediación resulta ser la vía más idónea, sin embargo, conforme lo anotado se evidencia que no resulta ser así, puesto que, las partes no logran llegar a un acuerdo respecto del valor que debe ser cancelado en favor de la víctima.

Desde mi punto de vista, la única manera de repotenciar este mecanismo es a través de la superación de diversos factores; así, en un inicio debe entenderse que este medio únicamente puede ser utilizado si existe una voluntad entre las partes de llegar a un acuerdo, lo que implica que participaran activamente en el proceso. Por otra parte, los involucrados deben estar conscientes que, el acuerdo a ser suscrito debe ajustarse a las necesidades de todos los intervinientes, y finalmente, para que el proceso resulte eficaz debe ser a corto plazo, puesto que, el prolongar en el tiempo la mediación evita que se pueda llegar a acuerdos que contengan planteamientos serios y que sean ejecutables lo antes posible.

Si bien es cierto en los tres casos señalados la vía no ha sido la solución, no se puede estigmatizar a la mediación, en casos como el No. 0020-09-IS y No. 0021-09-IS el proceso llegó a feliz término, producto de lo cual la Corte Constitucional procedió con el archivo de las causas, una vez que la entidad accionada ejecutó integralmente lo acordado en el Acta de Acuerdo de Mediación, así como lo ordenado en la sentencia constitucional.

Por último se ha de señalar que, existen casos en los que el Pleno de la Corte Constitucional se ve obligado a suspender la fase de seguimiento por cuanto se ha presentado una garantía jurisdiccional, esto sobre todo sucede en las acciones extraordinarias de protección, ya que los accionantes ante la falta de ejecución de lo dispuesto deciden presentar acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. Lo anotado se ha evidenciado en los casos que se presentan a continuación en el siguiente cuadro:

Cuadro 24.

CASOS SUSPENDIDOS DE LA FASE DE SEGUIMIENTO

Acción extraordinaria de protección	Acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales
Caso No. 1852-11-EP	Caso No. 0002-15-IS
Caso No. 1773-11-EP	Caso No. 0016-15-IS
Caso No. 1035-15-EP	Caso No. 0016-16-IS

Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Sistema de Gestión de Acciones Constitucionales <<http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/index.php>>.

En esta dirección, se ha de resaltar el hecho que la Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, si bien, ninguno de sus artículos prescriben la «suspensión de la fase de seguimiento», no cabe duda que este es el único camino, por cuanto, la nueva acción planteada -acción de incumplimiento⁴³⁷ -, pretende que, mediante sentencia el Pleno de la Corte Constitucional se pronuncie respecto del incumplimiento de la acción extraordinaria de protección, en este sentido, se advierte que la «fase de seguimiento» que debe iniciarse corresponde a la nueva sentencia, puesto que, en la misma se alude a las medidas de reparación no ejecutadas contenidas en la resolución recurrida.

A más de los elementos expuestos, y al tratarse de una investigación empírica no se han evidenciado otros elementos que deban destacarse en cuanto a la fase de seguimiento que posee la Corte Constitucional, no obstante de aquello, esto no implica desde ningún punto de vista que al interior del organismo no hayan surgido otro tipo de contratiempos, sin embargo los mismo no han salido a la esfera pública por lo que se desconoce de su existencia.

⁴³⁷ Ver, *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional*, Capítulo III, Título IV, artículos 162 a 165. [Incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales].

CONCLUSIONES

- La exigibilidad y justiciabilidad de los derechos conforme lo expuesto no pueden ser considerados como dos conceptos excluyentes o análogos entre sí, por el contrario los mismos deben ser vistos desde una perspectiva de interdependencia y complementariedad, en tanto no es del todo efectivo la simple existencia de prescripciones normativas de naturaleza sustantiva nacional o internacional que se refieran principalmente al reconocimiento del derecho -exigibilidad-, sino que, se requiere de la existencia de normas de carácter adjetivas que viabilicen la materialización de los reconocimiento referidos -justiciabilidad-. Como consecuencia de lo anotado, resulta claro que la interdependencia existente entre la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos no se agota únicamente en la adopción de medidas legislativas tendientes a garantizar la debida observancia de las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados con la suscripción de convenios de derechos humanos, sino que, se manifiesta también en el preciso momento en que la autoridad jurisdiccional dispone la reparación integral de un derecho vulnerado.
- Ahora bien, el cumplimiento efectivo e integral de cada una de las medidas de reparación, comprenden cierto grado de complejidad, aspectos que se advierten al momento de enfrentar la realidad de su ejecución, como son los recursos económicos y su grado de vaguedad, cuestiones que permitirán en mayor o menor grado la ejecución del elemento reparador, o, por el contrario, la carencia de los elementos antes referidos puede provocar la generación de nuevas vulneraciones, desvirtuando la finalidad y el objetivo de las medidas de reparación.
- Las decisiones emitidas por la Corte IDH lejos de ser consideradas como una imposición, deben ser vistas como la estructura central dentro de los sistemas jurídicos, el cual expone ciertos lineamientos posibilitando que el resto de tribunales a través de su jurisprudencia no solamente se limiten adoptar los

criterios establecidos sino que conjuntamente puedan ampliar los mismos, teniendo como finalidad una mayor protección de los derechos.

- Pese a la evidente inexistencia de un poder de ejecución de las sentencias emitidas por los órganos internacionales, así como una total falta de mecanismos que permitan ejecutar las mismas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha implementado la etapa de seguimiento de cumplimiento de sus sentencias, -facultad, que se encuentra recogida en la normativa y adicionalmente se ha visto reforzada a través de la jurisprudencia emitida por el propio organismo, esto, sin llegar a rebasar sus alcances y potestades- lo que le ha permitido monitorear de cerca el cumplimiento de sus sentencias, no obstante, pese a existir casos en los cuales los estados se muestran reticentes a ejecutar las medidas de reparación dispuestas en las sentencia, la Corte IDH cuenta como único medio de sanción la exposición a nivel internacional, lo que acarrea exclusivamente sanciones de tipo moral y político.
- Es notoria la influencia de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito continental, la cual de una u otra manera ha sido replicada, convirtiéndose en el mayor eco en materia de protección de derechos, ratificando de esta manera su relevancia en el ámbito doméstico como supranacional.
- Indistintamente que los sistemas de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Constitucional del Ecuador, tengan más similitudes que diferencias, se puede afirmar que los dos procesos han sido formalizados -normativizados- a partir de año 2015, lo que implica que aún les queda un largo camino por recorrer. Bajo esta esta premisa, se ha advertido más aciertos que desaciertos en cada uno de los procesos de seguimiento que se llevan a cabo tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte Constitucional del Ecuador, sin embargo, esto no implica que los mismos no puedan ser perfeccionados.
- Los rasgos esenciales del proceso o fase de seguimiento que se han podido evidenciar en estos tres capítulos, a partir de un estudio dogmático y empírico, denotaron la necesidad de la existencia de una supervisión del cumplimiento

de sentencias, aspecto para lo cual ha sido esencial presentar cuadros y gráficas, a fin de contar con un panorama nacional como internacional, que permitió evidenciar la existencia de falencias de distinta índole en la consecución de la tutela judicial efectiva.

A lo largo del presente trabajo, se pudo colegir que la tutela judicial efectiva de los derechos no se agota exclusivamente en la posibilidad que tienen los ciudadanos en acudir a los órganos jurisdiccionales –exigibilidad y justiciabilidad- y obtener de estos una decisión fundada en derecho, sino que se constituye en un requisito sine qua non, que las disposiciones en esta constante, sean ejecutadas de una manera integral y sin dilaciones, es ahí cuando en realidad se puede afirmar que un derecho ha sido debidamente tutelado, caso contrario la vulneración de derechos persistirá. Es decir, es necesario que concurren todos los elementos arriba descritos para poder afirmar que un derecho ha sido tutelado. Ahora bien, el dejar al libre albedrío de los sujetos obligados el cumplimiento de una sentencia ha provocado que las mismas no se ejecuten, es por este motivo que se ha visto la necesidad de crear un órgano de supervisión de cumplimiento de los fallos emitidos tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por la Corte Constitucional del Ecuador.

- A lo largo de la presente investigación y sobre la base del análisis de los resultados, se puede afirmar que, la funcionalidad de un sistema jurídico no depende exclusivamente del número de sentencias emitidas o de lo garantistas que estas puedan llegar a ser, es decir, los números se relativizan. La verdadera funcionalidad y eficacia de un sistema jurídico radica en las medidas de reparación integral sean ejecutadas, que las víctimas de vulneraciones de derechos sean reparadas en su integralidad, que los daños sean resarcidos, en otras palabras, cuando todo tipo de daño haya cesado y cuando de una u otra forma se ha restablecido la situación de la víctima al estado anterior a la vulneración del derecho.

BIBLIOGRAFÍA

- Abramovich, Víctor. *Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, en Comisión Andina de Juristas, Los Derechos Humanos y la Globalización: avances y retrocesos*. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2003.
- Abramovich, Victor, y Christian Courtis. «Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.» *Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales*, 5. s.f. http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Exigibilidad_de_los_DES C_-_Abramovich.pdf.
- Álvarez Londoño, Luis Fernando. *Derecho Internacional Público*. Bogotá: Centro Editorial Javeriano CEJA, 1998.
- Angulo Sánchez, Nicolás. “*El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado*”, en Nelson Melo de Moraes Rêgo, *La contribución del poder judicial a la protección de los derechos humanos en la tercera generación; especial referencia al derecho al desarrollo*. Madrid: Universidad de Salamanca, 2014.
- Asamblea General Organización de Naciones Unidas. «Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.» *Resolución 40/34*. 29 de noviembre de 1985.
- Ayala, Natalia. «Derechos humanos y globalización. Un análisis preliminar para América Latina.» 2003. <http://docplayer.es/6809342-Derechos-humanos-y-globalizacion-un-analisis-preliminar-para-america-latina.html>.
- Beristain, Carlos Martín. *Diálogos sobre la reparación, Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos, Tomo 2*. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008.
- . *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009.
- Bicudo, Helio. “*Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*”, en Corte Interamericana de Derechos Humanos, *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I*. Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001.

- Calderón, Jorge F. *La evolución de la “reparación integral” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 2003.
- Cançado Trinidad, Antônio Augusto. “El nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008) y su proyección hacia el futuro: La emancipación del ser humano como sujeto del derecho internacional”, en Antônio Augusto Cançado Trinidad y Manuel E. Ventura Robles, *El futuro d*. San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003.
- Carbonell, Miguel, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor. *Los derechos sociales y su justiciabilidad directa*. México: Flores, 2014.
- Constitución de la República del Ecuador. *Principio de aplicación de los derechos*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Corte Interamericana de Derechos Humanos.» *Informe anual*. 2014 .
http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2014.pdf.
- . «Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.» *Adicionado por la Corte durante su Octogésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones*. 29 de enero de 2009.
- Courtis, Christian. “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios” en Christian Courtis, (compilador), *Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales*. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006.
- Courtis, Christian, y Ramiro Ávila Santamaría. *La protección judicial de los derechos*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009.
- De Greiff, Pablo. «Transitional Justice, security, and development.» *World Development Report*. 2010.
http://web.worldbank.org/archive/website01306/web/pdf/wdr%20background%20paper_de%20greiff_0.pdf.
- de Pisón, Jesús Martínez. *Los derechos sociales: unos derechos controvertidos*, en Virgilio Zapatero e Isabel Garrido, *Los derechos sociales como una exigencia de la justicia*. Madrid: Universidad de Alcalá, 2009.
- de Pisón, José Martínez, y Andrés García Inda. *Derechos fundamentales, movimientos sociales y participación*. Madrid: Ed. Dykinson, 2003.

- del Rosario Rodríguez, Marcos. *Supremacía Constitucional*. México D.F.: Porrúa, 2009.
- Escobar García, Claudia. *Transconstitucionalismo y diálogo jurídico*. Quito: Corte Constitucional para el período de transición, 2011.
- Faúndez. *La justiciabilidad de los derechos*. s.f.
- Fáundez Ledesma, Héctor. «La Justiciabilidad de los Derechos Sociales en el Derecho Internacional Contemporáneo.» *Gaceta Laboral Vol. 6. No. 2*, 2000.
- Fernández, Pablo Antonio. *Las obligaciones de los estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos*. Madrid: Ministerio de Justicia - Centro de Publicaciones, 1997.
- Ferrajoli, Luigi. *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Madrid: Trotta, 2004.
- Fioravanti, Maurizio. *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*. Madrid: Editorial Trotta, S.A., 2003.
- Fix-Zamudio, Héctor. “Los derechos humanos y su protección jurídica y procesal en Latinoamérica”, en Diego Valdés y Rodrigo Gutiérrez, coordinadores. *Derechos Humanos, memorias del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2001.
- García Ramírez, Sergio. *La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2001.
- Garrido Gómez, M. Isabel. «Lo que queda del Principio Clásico Pacta Sunt Servanda.» *Derecho de los Tratados*, (Bogotá: Editorial TEMIS, 1978), 77-81. 2011. http://www.derechoycambiosocial.com/revista025/pacta_sunt_servanda.pdf.
- Góngor Mera, Manuel Eduardo. “La difusión del bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia latinoamericana y su potencial en la construcción del ius constitutionale commune latinoamericano”, en Armín von Bogdandy y otros, coordinadores, *Ius constitutionale commune en América Lat.* México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.
- Gozaíni, Osvaldo Alfredo. *El proceso transicional, particularidades procesales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Buenos Aires: EDIAR, 1992.
- Guastini, Ricardo. *Distinguiendo. Estudios de teoría y materia del Derecho*. Barcelona: Gedisa, 1999.
- Hernández Valle, Rubén. *Derechos fundamentales y jurisdicción constitucional*. Lima: Juristas Editores, 2006.

- . *Prerrogativa y garantía*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2010.
- Herrera Flores, Joaquín. «Los derechos humanos en el contexto de la globalización: Tres precisiones conceptuales.» *Coloquio internacional – Direito e justiça no século XXI*. 2003.
<http://www.ces.uc.pt/direitoXXI/comunic/HerreraFlores.pdf>.
- Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. «Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.» 2012.
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Session4/NHRI_Annex3_Uruguay.pdf.
- Irasema Quintana, Karla. «La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ejecución de sus sentencias en Latinoamérica.» *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. s.f. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24498.pdf>.
- Jacoby, Pablo Miguel, y Hernán Luis Folgueiro. “*La búsqueda de una reparación integral para las violaciones de derechos humanos. Reflexiones a partir del caso “AMIA”, en Edgardo Alberto Donna direc., Revista de Derecho Procesal Penal – La injerencia en los derechos fundamentales del imputado III*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2007.
- Jacot-Guillarmod. “*Reflexions su la fusion des organes de la Convention dans la perspective des travaux intergouvernementaux du Conseil de l’Europe*”, en Pablo Antonio Fernández, *Las obligaciones de los estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos*. Madrid: Ministerio de Justicia - Centro de Publicaciones, 1997.
- Jiménez Campo, Javier. *Derechos fundamentales: Concepto y Garantías*. 1999: Trotta, Madrid.
- Kritz, Neil. “*The Dilemmas of Transitional Justice*”, en Neil Kritz, *Transitional Justice. How Emerging Democracies Reckon with Former Democracies*. Nueva York: United States Institute of Peace, 1995.
- Kvitko, Luis Alberto. «Antecedentes históricos de la valoración del daño corporal y baremos.» 2015.
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100008.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado la existencia de daño material en los siguientes casos*. Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006 (Caso Anzualdo Castro vs. Perú, 29 de julio de 1988).

- Lara Peinado, Federico. *Código de Hammurabi*. Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1997.
- Mejía, Joaquín A. «“Aspectos teóricos y normativos de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”» *Revista IIDH Vol. 61*, 2010: 74.
- Molina, Manuel. *Las «reformas» de Urukagina*. Murcia: Scripta Fulgentina, 1995.
- Monroy Cabra, Marco Gerardo. *Derecho de los Tratados*. Bogotá: TEMIS, 1978.
- Muñoz Valle, Isidro. «La reforma social de Soló en la Antigua Atenas.» *Revista de Estudios Políticos*. No. 215. 1977.
<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=3&IDN=591&IDA=9558>.
- Nash Rojas, Claudio. «Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”» *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XIX (2013)*: 495. 2013. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32199.pdf>.
- Nikken, Pedro. «“La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales”» *Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos Vol. 52*. 2010.
<https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1633/revista-iidh52.pdf>.
- Nino, Carlos Santiago. *Ética y derechos humanos*. Buenos Aires: Astrea, 2007.
- Organización de las Naciones Unidas. «Adoptada por la Asamblea General en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986.» 1986.
- Organización de los Estados Americanos. «Adoptada por la Asamblea General en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997.» 1997.
- . «Asamblea General. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.» *Resolución 2200. Artículo 2*. 16 de diciembre de 1966.
- Oyarte, Rafael. *Derecho constitucional ecuatoriano y comparado*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014.
- Peces-Barba Martínez, Gregorio. *Lecciones de derechos fundamentales*. Madrid: Dykinson, 2004.
- Pérez Luño, Antonio E. *Los derechos fundamentales*. Madrid: Tecnos, 1986.
- Polo, María Fernanda. “*Reparación integral en la justicia constitucional*”, en Juan Montaña y Angélica Porras, edit., *Apuntes de derecho constitucional. Parte especial 1. Garantías constitucionales en el Ecuador*. Quito: Centro de estudios y difusión del derecho constitucional, 2012.

- Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*, 23a. Edición electrónica. 2014. <http://dle.rae.es/?w=diccionario>.
- Rodríguez Rescia, Víctor Manuel. *La Ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana*. Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 1997.
- Rubio Marín, Ruth. *¿Y qué fue de las mujeres? Género y reparaciones de violaciones de derechos humanos*. New York: Social Research Council, 2010.
- Salinas de Frías, Ana, y Marina Vargas Gómez-Urrutia. *Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carillo Salcedo. Tomo II*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005.
- Salmón, Elizabeth. *Introducción al Derecho Internacional Humanitario*. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2004.
- Santelices, Tábata, y Mayra Feddersen. “Ejecución de sentencias internacionales sobre derechos humanos en Chile”, *Anuario de derecho público*. 2010.
- Schipani, Sandro. «Los códigos de Justiniano como modelo de búsqueda de la consonancia en las transformaciones y reformas del derecho y de la sociedad, y los códigos modernos.» *Revista chilena de historia del derecho*, No. 22. 2010.
<http://www.historiadelderecho.uchile.cl/index.php/RCHD/article/view/21890>.
- Serrano, Sandra. «Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores: una relación para la interpretación y aplicación de los derechos.» *Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fundación Konrad Adenauer*. 2003.
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3567/9.pdf>.
- Soria Jiménez, Alberto. «La problemática ejecución de las sentencias del Tribunal europeo de Derechos Humanos.» *Revista Española de Derecho Constitucional*. Año 12. No. 36. septiembre-diciembre, 1992.
- Sorondo, Fernando. «Los derechos humanos a través de la historia.» *Educación y derechos humanos* No. 3. 1998.
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/194738/mod_resource/content/0/Unidad_1/Los_Derechos_Humanos_a_traves_de_la_historia_1.pdf.
- Teitel, Ruti G. *Transitional Justice*. Nueva York: Oxford University Press, 2000.
- Vasak, Karel. *Las dimensiones internacionales de los derechos humanos*. Madrid: UNESCO, 1984.

- Virali, Michel. *"Fuentes del Derecho Internacional"*, en Max Sorensen, comp. *Manual de Derecho Internacional Público*. México D.F. : Fondo de Cultura Económica, 2010.
- Winston, Morton E. *"The philosophy of human rights"*, en Angelo Papacchini, *Filosofía y derechos humanos*. Santiago de Cali: Facultad de Humanidades, 1994.
- Zúñiga Urbina, Francisco. *La acción de indemnización por error judicial. Reforma constitucional y regulación infraconstitucional*. Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer, 2009.

ANEXO

CUADRO DE DETALLE DE LAS 55 CAUSAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN FASE DE SEGUIMIENTO

No.	Caso	Sentencia	Medidas de reparación integral	Tipo de medida	Determinación de medidas de reparación económicas			Sujeto beneficiario/s	Sujeto/s obligado/s	Audiencia	Verificación in situ	Auto de Verificación / Disposiciones	Sanciones por incumplimiento	Auto de archivo
					Vía judicial	Vía mediación	Pago directo							
1	0022-09-IS	0010-09-SIS-CC	Disponer que la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por medio del funcionario competente, proceda a la renovación del contrato de funcionamiento del Almacén Libre GALACTIC S.A.	Restitución	-	-	-	GALATIC S.A.	CAE	X	-	Disponer que el director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, autorice el funcionamiento y operación del almacén libre GALACTIC S.A. por el lapso de 34 meses, tiempo que le fue restringido por razón de la aplicación de un plazo retroactivo de renovación en el contrato de funcionamiento suscrito el 23 de noviembre de 2009.	-	-

			La ex Corporación Aduanera Ecuatoriana, actualmente Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (en adelante SENA), debe presentar toda la información pertinente que permita verificar la ejecución integral de la misma, en el término de cinco días.	Informativa							Disponer que el director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, informe a esta Corte Constitucional el cumplimiento de lo ordenado en este auto de verificación, dentro del término de 15 días a partir del cumplimiento de la obligación descrita en el numeral anterior.		
2	0003-13-IS	0707-2006-RA	Dejar sin efecto el acto administrativo contenido en el memorando No. 12 GPS 2005, de 6 de enero de 2005, suscrito por el Prefecto Provincial de Sucumbíos, mediante el cual se declaró la terminación de la relación laboral con el accionante.	Restitución	-	-	-	Juan Augusto García Márquez	Gobierno Provincial de Sucumbíos	X	-	-	-
			El reintegro del accionante al puesto que ocupaba en el Consejo Provincial de Sucumbíos al momento de su separación del cargo.	Restitución	-	-	-						

			El pago de los haberes que el accionante dejó percibir debido a su separación ilegítima del cargo.	Económica	-	-	X							
3	0068-10-AN	0001-12-SAN-CC	Restitución al puesto de servidores municipales de Tatiana Elizabeth Jara Fernández y Luis Fernando Arias Jácome.	Restitución	-	-	-	Tatiana Elizabeth Jara Fernández y	Municipio Quito	X	-	-	-	X
4	1104-11-EP	211-12-SEP-CC	Dejar sin efecto jurídico el auto que se impugna, emitido el 27 de abril de 2011 las 11h02, por el juez vigésimo octavo de lo civil del Guayas dentro del juicio ejecutivo No. 04-C-2000.	Restitución	-	-	-	Gustavo Alfonso Pesantez Aguirre y Janet Beberly Román	Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil	-	-	Disponer al juez vigésimo octavo de lo civil de Guayaquil, que en el plazo improrrogable de 30 días a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional si el auto del 27 de abril del 2011 emitido dentro del juicio ejecutivo No. 04-2000 que se sustancia o sustanció en esa judicatura, fue dejado sin efecto, y; si el proceso judicial fue remitido a la Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para que a través de un nuevo sorteo la causa sea sustanciada y resuelta por otro juez.	X	-

			<p>Retrotraer el proceso hasta el momento en el que se dictó el auto resolutorio que se impugna; para lo cual, previo sorteo, otro juez sustanciará y resolverá la causa.</p>	Restitución							<p>Disponer a la/el jefa/e de la Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que en el plazo improrrogable de 30 días a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional si el juicio ejecutivo No. 04-2000 que se sustanció en el juzgado vigésimo octavo de lo civil de Guayaquil, fue sorteado conforme se ordenó en la sentencia No. 211-12-SEP-CC. Además, se solicita información respecto de la fecha del sorteo de la causa y de la judicatura a quien correspondió su conocimiento.</p>		
			<p>Que el juez vigésimo octavo de lo civil de Guayaquil informe documentadamente el estado actual del juicio ejecutivo No. 04-C-2000, con el fin de verificar el cumplimiento de la sentencia 211-12-SEP-CC.</p>	Informativa							<p>Disponer al juez quinto de lo civil de Guayaquil, que en el plazo improrrogable de 30 días a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional si actualmente sustancia la causa No. 09305-2012-0486, y si esta fue asignada a su conocimiento por sorteo del juicio ejecutivo No. 04-2000 que precedentemente fue sustanciado en el juzgado vigésimo octavo de lo civil de Guayaquil. Además, se solicita información respecto al estado de la causa.</p>		

5	0073-10-IS	007-14-SIS-CC	Disponer como medida de reparación integral que el director provincial de Educación del Guayas informe en el plazo improrrogable de 30 días acerca de las acciones realizadas para el fiel cumplimiento de la sentencia emitida por el juez séptimo de Garantías Penales del Guayas el 06 de agosto de 2010, dentro de la acción de protección No. 1270-2010, esto es, brindar al menor una atención psicológica a fin de remediar los daños causados y así evitar que en el futuro esos maltratos físicos y psicológicos se repitan; disponer también que los profesores de ese instituto de educación sean sometidos a una evaluación psicopedagógica, solicitando que la señora directora informe sobre el cumplimiento de la misma.	Restitución y rehabilitación	-	-	-	menor José Camilo Naranjo Menoscal	director provincial de Educación del Guayas	-	-	Disponer que dentro del plazo de 20 días a partir de la notificación de este auto, el Ministerio de Educación en la persona de su representante legal ofrezca las correspondientes disculpas públicas al afectado y su familia, a través de la publicación de las mismas, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulación nacional. La publicación deberá incluir el reconocimiento de la responsabilidad del Ministerio de Educación por el incumplimiento de la medida y el nombre del afectado.	-	X
---	------------	---------------	---	------------------------------	---	---	---	------------------------------------	---	---	---	---	---	---

			Remitir copia de la sentencia al Ministro de Educación con el fin de que disponga al director provincial de Educación del Guayas, cumpla con lo dispuesto en esta sentencia.	Informativa							Disponer que dentro del plazo de 60 días a partir de la notificación de este auto, la autoridad encargada de la Dirección Distrital de Educación del cantón Durán, ordene la ejecución de evaluaciones psicopedagógicas a los docentes de la escuela Carlos Pérez Perasso y a los docentes de la escuela en la que actualmente labora el ciudadano Jackson Benenaula Rodríguez, después de que estos atraviesen un proceso de formación en base a por lo menos 5 talleres enfocados hacia las formas pedagógicas de disciplina en las instituciones educativas.		
6	0072-14-CN	004-14-SCN-CC	Declarar que en el caso concreto la aplicación del artículo innumerado inserto antes del artículo 441 del Código Penal merece una interpretación desde una perspectiva intercultural, con el fin de evitar vulneraciones a derechos constitucionales.	Restitución y garantía de no repetición	-	-	-	Pueblo indígena Waoraní	Juez segundo de Orellana y autoridades jurisdiccionales	X	-	-	-

[illegible]

[illegible]

7	0015-12-IS	001-13-SIS-CC	La reparación económica que corresponda se la determinará en vía contencioso administrativa, conforme la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional, en el numeral 4 de la parte resolutive, de la sentencia No. 004-13-SAN-CC, dentro del caso No. 0015-10-AN, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional el 13 de junio de 2013.	Económica	X	-	-	Universidad de Guayaquil	Jubilados de la Universidad de Guayaquil	X	X	Disponer que la jueza cuarta de tránsito del Guayas remita al Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas, en el término de 5 días, todo el expediente que corresponde a la sustanciación de la acción de protección No. 407-09, cuyo incumplimiento declaró la Corte Constitucional en la sentencia No. 001-13-SIS-CC de 17 de julio de 2013.	-	-
												Disponer que una Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas, previo sorteo de rigor, determine el monto que corresponde a la reparación económica correspondiente a los derechos tutelados de los accionantes en la sentencia No. 001-13-SIS-CC de 17 de julio de 2013, conforme a lo dispuesto en la sentencia No. 004-13-SAN-CC.		

9	0014-09-IS	010-10-SIS-CC	Se conmina a la Jueza de Primera de Instancia a que adopte las medidas necesarias para la ejecución integral del fallo e informe a esta Corte, una vez finalizado el proceso, los términos en los que se cumplió.	Restitución	Restitución	
8	0007-11-IS	023-14-SIS-CC	Disponer que las autoridades y los personeros respectivos de la Municipalidad del cantón Salinas, en el término de 15 días, cumpla la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Santa Elena el 23 de julio de 2010, dentro de la acción de protección No. 161-2010; para el efecto, deberá cumplir lo dispuesto por el juez de Instancia mediante providencia del 29 de noviembre de 2010 y además el pago de las remuneraciones adeudadas.	Restitutión y Económica		
			Notificar al juez de la causa para el cumplimiento de lo ordenado, debiendo en el término de 20 días, informar a esta Corte al respecto.	Informativa		
						X
				Karina Elizabeth Perero Tomalá	Juez décimo sexto civil del cantón Salinas	Autoridades y los personeros respectivos de la Municipalidad del cantón Salinas
						X
						-
				Fausto Eduardo Aguiar Falconi	Jueza tercera de tránsito de Pichincha	Empresa Eléctrica Quito S.A.
						-
						-
						-
						X

				Garantía de no repetición	X	-	-							
10	0024-11-IS	025-12-SIS-CC	S/M	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
11	0037-11-IS	010-12-SIS-CC	Se dispone que el ministerio de Defensa Nacional, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y a todas las autoridades obligadas a cumplir con lo dispuesto en la resolución No. 334-RA-99-I.S, en el término de 45 días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, dicten los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de la resolución aludida.	Restitución	-	-	-	Luis Tobar Abril	Fuerzas Armadas del Ecuador	X	-	Disponer que en razón del incumplimiento de la resolución constitucional No. 334-RA-99-IS de 11 de agosto de 2000, como medida de reparación compensatoria, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador cancele al señor Luis Alberto Tobar Abril los valores correspondientes a los salarios que este dejó de percibir desde el 11 de agosto de 2000 hasta la notificación de este auto.	-	X
				Restitución	-	-	-				-	Disponer que para la determinación económica correspondiente a los derechos constitucionales vulnerados, se proceda a un acuerdo entre las partes en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, al que deben acudir de manera obligatoria las partes con el exclusivo propósito de llegar a un acuerdo y establecer el monto de la indemnización pecuniaria en un plazo no mayor a treinta días.		

				Económica	-	-	X				Disponer que el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y las partes involucradas en el proceso de mediación, una vez cumplida integralmente la medida de reparación compensatoria, informen a esta Corte Constitucional de forma inmediata acerca del cumplimiento de la misma.		
--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

12	0043-14-IS	<p>S/M</p> <p>Por resolución del Pleno del Organismo, adoptada en sesión de 22 de octubre del 2014, se apertura como incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, por desconocer lo establecido en la jurisprudencia vinculante de la sentencia No. 001-10-PJO-CC del caso No. 0999-09-JP, de la Corte Constitucional, así como la sentencia de carácter vinculante de la Corte Constitucional No. 034-13-SCN-CC, adoptada dentro del caso No. 0561-12-CN, dentro de la acción de medidas cautelares No. 4678-2014, seguido por el señor Carlos Arturo Grijalva González, gerente general de la empresa DUAYINE, en contra del director nacional del servicio de contratación pública SERCOP, por la cual se resolvió disponer la eliminación de la compañía DUAYINE S.A. del registro de contratistas incumplidos.</p>		-	-	-			-	-	-	-	-	-
----	------------	--	--	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---

13	0053-12-IS	006-13-SIS-CC	Conforme a la sentencia expedida el 18 de junio de 2012, por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que confirma la sentencia expedida por el juez segundo adjunto del trabajo de Pichincha, el 23 de abril de 2012, que el gerente general y representante legal de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, bajo prevenciones establecidas en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República, inmediatamente reincorpore a las funciones de su puesto de trabajo en la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, a la ciudadana Patricia Verónica Carpio Becerra, de conformidad con la sentencia materia de esta acción, observando las formalidades de ley.	Restitución	-	-	-	Patricia Verónica Carpio Becerra	EP. PETROECUADOR	-	-	-	-	X
----	------------	---------------	---	-------------	---	---	---	----------------------------------	------------------	---	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

16	0716-07-RA	0716-07-RA	S/M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1226-06-RA	1226-2006-RA	Dejar sin efecto el acto jurídico demandado.	Restitución	-	-	-	Lourdes Pinos Hernández	Fiscalía General del Estado	-	-	-	-
18	1353-13-EP	191-14-SEP-CC	S/M	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
19	1683-12-EP	115-14-SEP-CC	Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia expedida el 1 de octubre de 2012, por los jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, caso No. 0195-2012. En consecuencia, se deja firme la sentencia expedida en primera instancia por el juez tercero de la Niñez y Adolescencia del cantón Quito caso No. 0316-2012.	Restitución	-	-	-	Luis Alfonso Correa Proaño	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

21	0020-09-IS	001-12-SIS-CC	Como medida compensatoria a la inobservancia a la que fueron sometidos los legitimados activos, esta Corte ordena que se proceda a la liquidación o reliquidación a la que tuvieren derecho, debiendo informar a esta Corte sobre el cumplimiento de esta sentencia en el plazo de 45 días.	Económica	-	X	-	Hugo Washington Moreno Pinto y otros	Ministerio de Defensa Nacional	X	-	Disponer que, como al momento las partes están acudiendo al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, para lograr la determinación económica correspondiente a los derechos tutelados en la sentencia No. 001-12-SIS-CC del 05 de enero de 2012, con el propósito de llegar a un acuerdo respecto al monto de la indemnización pecuniaria, se conceda una prórroga de 60 días término para la culminación del mismo.	-	X
												Disponer al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado que una vez concluido el proceso de acuerdo de indemnización pecuniaria, informe inmediatamente a esta Corte Constitucional.		

22	0021-09-IS	002-12-SIS-CC	Como medida compensatoria a la inobservancia a la que fue sometido el accionante, esta Corte ordena que se proceda a la liquidación o reliquidación a la que tuvieran derecho, debiendo informara a esta Corte sobre el cumplimiento de esta sentencia en el plazo de 45 días.	Económica	-	X	-	Luis Alberto Velasco Álvarez	Ministerio de Defensa Nacional	X	-	Disponer que, como al momento las partes están acudiendo al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, para lograr la determinación económica correspondiente a los derechos tutelados en la sentencia No. 001-12-SIS-CC del 05 de enero de 2012, con el propósito de llegar a un acuerdo respecto al monto de la indemnización pecuniaria, se conceda una prórroga de 60 días término para la culminación del mismo.	-	X
												Disponer al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado que una vez concluido el proceso de acuerdo de indemnización pecuniaria, informe inmediatamente a esta Corte Constitucional.		

23	0019-14-IS	018-14-SIS-CC	Disponer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que en el plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha de firma del acuerdo transaccional, ejecute la reparación económica fijada en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, bajo prevenciones de aplicación del artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.	Económica	-	X	-	Hernando Vicente Velásquez Torres	IES	X	-		-	X	-
			Disponer que para la reparación económica generada como consecuencia del incumplimiento de la resolución constitucional por aproximadamente 15 años, se proceda mediante acuerdo entre las partes, en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.	Económica	-		-		Centro de Mediación de la Procuraduría Estado						

[illegible]

24	0017-12-IS	021-14-SIS-CC	El pago completo de las remuneraciones dejadas de percibir por la Ing. Nelly Concha Urgilés, a partir de enero del 2012 hasta el momento de su reintegro. La reparación económica se la determinará en la vía contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la regla jurisprudencial dictada por la esta Corte en la sentencia; en consecuencia se dispone que, previo sorteo, el proceso se remita a una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la que deberá informar sobre el procedimiento en el término de 30 días.	Económica	X	-	-	Nelly Concha Urgilés	Tribunal de lo Contencioso Administrativo	-	-	-	-	-	X
----	------------	---------------	---	-----------	---	---	---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

			Que el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de esta sentencia, presente a esta Corte un informe pormenorizado sobre el cumplimiento de esta sentencia.	Informativa	-	-	-		IESS						
			Que el juez trigésimo de lo Civil y Mercantil del Guayas, con asiento en el cantón Duran, informe a esta Corte, en el término de 20 días desde la notificación de la presente sentencia, acerca del cumplimiento total de la misma.	Informativa	-	-	-		Juez trigésimo de lo Civil y Mercantil del Guayas						
25	0038-10-IS	029-14-SIS-CC	Disponer que la autoridad demandada, en el término máximo de 15 días, cumpla inmediatamente con lo ordenado en resolución del 6 de octubre del 2008, y providencia aclaratoria de 15 de octubre del 2008 expedida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, esto es, reintegre al accionante a las funciones de abogado del Patronato Provincial de Sucumbíos.	Restitución	-	-	-	Edgar Genaro Villareal Pantoja	Patronato Provincial de Sucumbíos	-	-	-	-	-	-

[illegible]

26	0079-10-EP	077-10-SEP-CC	S/M		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
27	1783-11-EP	014-15-SEP-CC	S/M		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
28	1311-07-RA	1311-07-RA	S/M		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-

29	0001-10-IS	021-10-SIS-CC	Disponer que el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el plazo improrrogable de cinco días, informe y certifique sobre las medidas adoptadas con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 2 y 3 de la Resolución No. 0618-2009, dictada el 08 de octubre del 2009 a las 08h02, por el Juez Décimo Primero de lo Civil y de Garantías Jurisdiccionales de El Oro.	Informativa	-	-	-	Germania Sarango Jumbo	Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial	-	-	-	-	-	X
30	0071-10-IS	014-14-SIS-CC	En virtud de las atribuciones previstas en el artículo 436 numeral 9 de la Constitución, se dispone que el Gobierno Provincial de Sucumbíos, a través de su máxima autoridad, cumpla con la sentencia en lo señalado en el numeral anterior, bajo las prevenciones establecidas en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República, e informe en el término de treinta días a la Corte Constitucional, las acciones tendientes al cumplimiento de la sentencia constitucional.	Informativa	-	-	-	Clemencia de Jesús Yunga Capa	Gobierno Provincial de Sucumbíos	-	X	-	-	-	X

31	0440-09-EP	019-12-SEP-CC	Se declara la validez de la sentencia del 11 de mayo del 2009, emitida por el juez de trabajo de Latacunga dentro de la acción de protección No. 168-2009.	Restitución	-	-	-	Norma Guadalupe Hidalgo Martínez	Directora del Hospital Provincial General de Latacunga	-	-	-	-	-	X
			La reparación económica que corresponda se la determinará en la vía contenciosa administrativa, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional, en la sentencia No. 004-13-SAN-CC, en el caso No. 0015-10-AN, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, el 13 de junio de 2013.	Económica	X	-	-		Tribunal de lo Contencioso Administrativo						

32	0066-10-IS	005-11-SIS-CC	Disponer que el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, bajo la prevención contemplada en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, en el término de quince (15) días ejecute la sentencia expedida por la Segunda Sala de lo Penal de la (sic) corte Provincial de Justicia de Pichincha. Para el efecto, deberá emitir la respectiva providencia judicial, mediante la cual se ordena al Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, representado por la señora María Esperanza Vera Calderón, Presidenta del Directorio de la JNDA, que informe sobre el reintegro de la recurrente al cargo de Vicepresidenta y vocal Artesanal de la Junta Nacional de	Restitución	-	-	-	Martha Cumandá Veloz Chávez	Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano	-	-	Disponer que el Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano cancele a Martha Cumandá Veloz Chávez los salarios que dejó de percibir desde el 12 de noviembre de 2009 hasta el 13 de junio de 2010.	Disponer que para la determinación económica correspondiente a los derechos tutelados en la sentencia No. 0005-11-SIS-CC de 24 de mayo de 2011, se proceda conforme a lo dispuesto en la sentencia No. 0004-13-SAN-CC.	-	X
				Económica	X	-	-		Tribunal de lo Contencioso Administrativo						

			Defensa del Artesano, debiendo informar en el término anteriormente señalado, a esta Corte sobre el cumplimiento de la presente sentencia.									Disponer que una vez iniciado el proceso de determinación económica ante el respectivo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, éste deberá informar a esta Corte Constitucional respecto del estado del proceso dentro del término de 60 días.		
33	0064-10-IS	003-12-SJS-CC	Aceptar la acción de incumplimiento planteada por el accionante y declarar el incumplimiento incurrido por la Institución Policial respecto de la Resolución No. 0389-2006-RA del 03 de abril del 2007, dictada por el Pleno del ex Tribunal Constitucional.	Restitución	-	-	-	José Antonio Mera Vargas	Policía Nacional del Ecuador	X	-	Disponer que, en razón el cumplimiento tardío de la medida de reintegro, la Policía Nacional del Ecuador cancele al señor José Antonio Mera Vargas los valores correspondientes a los salarios que este dejó de percibir desde el 03 de abril del 2007 hasta el momento de su reincorporación a las filas policiales.	-	X

										<p>Disponer que para la determinación económica a favor del señor José Antonio Mera Vargas, correspondiente a los salarios dejados de percibir, se proceda conforme a lo dispuesto en la sentencia No. 0004-13-SAN-CC emitida dentro de la causa No. 0015-10-AN.</p>		
										<p>Disponer que dentro del término de 15 días, a partir del cumplimiento integral de la medida de reparación económica, tanto el Comandante General de la Policía Nacional, como los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que sustancien el proceso, de forma independiente, informen a esta Corte Constitucional acerca del cumplimiento de la medida de reparación económica.</p>		

34	0029-09-IS	002-10-SIS-CC	Disponer que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), en cumplimiento de la resolución expedida por el Pleno de la Corte Constitucional, proceda al registro de los títulos de Doctor otorgados por las Facultades de Filosofía y de Jurisprudencia, como de cuarto nivel, de acuerdo a los registros que constan en el CONESUP y que sirvieron de base para su inscripción como de tercer nivel.	Restitución	-	-	-	Ciudadanos que obtuvieron el título de doctores en las facultades de	SENESCYT	X	-	-	-	X
35	0011-10-IS	007-11-SIS-CC	Declarar el incumplimiento de la resolución No. 0596-2008-RA, adoptada por la Segunda Sala del ex Tribunal Constitucional el 13 de octubre del 2008, al no haber reincorporado al demandante al cargo que inicialmente ocupaba, extendiéndole acción de personal para ocupar un cargo que no consta en el distributivo de la institución y, obviando además otorgarle sus respectivas funciones y responsabilidades del cargo que le corresponde como “Responsable de Bodegas”.	Restitución	-	-	-	Julio Jaime Nicholls Merino	Gobierno Provincial del Azuay	-	-	Disponer que, el Prefecto de la provincia del Azuay en el plazo improrrogable de 30 días, a partir de la notificación de este auto, informe a esta Corte Constitucional respecto de las funciones y responsabilidades que se le ha otorgado al demandante en su cargo de “Responsable de Bodegas y Activos Fijos”, de conformidad con lo que dispone la estructura orgánica del Gobierno Provincial del Azuay.	-	X

			El Prefecto del Gobierno de la Provincia de Azuay, dentro del plazo de 30 días, deberá informar a esta Corte sobre el cumplimiento de la sentencia.	Informativa	-	-	-				Disponer que, el Prefecto de la provincia del Azuay en el plazo de 30 días, informe a esta Corte Constitucional respecto de la realización de la auditoría administrativa al cargo de Responsable de Bodegas, estableciendo una separación de períodos entre el manejo de la bodega efectuada por el señor Julio Jaime Nicholls Merino y el señor Pablo Bravo.	
36	0068-10-IS	002-14-SIS-CC	Declarar el incumplimiento parcial de la resolución dictada el 04 de febrero del 2009 por la Segunda Sala de la Corte Constitucional, para el período de transición, dentro de la acción de amparo No. 1519-07-RA en lo concerniente al pago de remuneraciones dejadas de percibir desde que el accionante fue separado de su cargo hasta su reincorporación al mismo.	Informativa	-	-	-	Jorge Vicente Merchán Encarnación		-	Disponer que, el Gobierno Provincial de Sucumbíos informe a la Corte Constitucional en el término de 20 días sobre el cumplimiento de la medida de reparación integral que consistía en el pago de las remuneraciones dejadas de percibir a favor del señor Jorge Vicente Merchán Encarnación desde que este fue separado de su cargo hasta su reincorporación al mismo.	X
			En virtud de las atribuciones previstas en el artículo 436 numeral 9 de la Constitución, se dispone que el Gobierno Provincial de Sucumbías, a través de su máxima autoridad, cumpla con la sentencia en lo señalado en el numeral primero.	Restitución	-	-	-		Gobierno Provincial de Sucumbíos	-	Disponer al Jefe de la Sala de Sorteos de la Corte Provincial de Pichincha, disponiéndose informe a esta Corte sobre el sorteo de la causa que debía seguirse para la reparación económica del señor Jorge Vicente Merchán Encarnación por parte del Gobierno Provincial de Sucumbíos, indicando en que Sala de lo Contencioso Administrativo recayó la sustanciación del proceso.	

X

X

			<p>La reparación económica que corresponda se la determinará en la vía contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la regla jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional; en consecuencia se dispone que, previo sorteo, el proceso se remita a otra Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, la que deberá informar sobre el procedimiento en el término de 30 días.</p>	Económica	X	-	-		Tribunal de lo Contencioso Administrativo			Disponer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1, se informe a la Corte Constitucional sobre el estado procesal de la causa que se está llevando para determinar la reparación económica del señor Jorge Vicente Merchán Encarnación, con la identificación del número de proceso y de la fecha de inicio de la misma.	
37	0054-12-IS	016-14-SIS-CC	<p>Dejar sin efecto y validez jurídica el auto dictado el 04 de octubre de 2011, por la jueza décimo octava de lo civil de Yaguachi (E), dentro de la acción de medidas cautelares No. 657-2011 y todos los actos generados a partir de la emisión de ese auto, disponiéndose en consecuencia el archivo de aquel proceso.</p>	Restitución	-	-	-	Pacientes que padecen de linfoma, lupus, cáncer, artritis	Ministerio de Salud Pública	X	-	-	-
													X

			Que el Ministerio de Salud Pública cumpla con la resolución dictada el 25 de junio de 2012, por el juez quinto adjunto de Tránsito del Guayas, dentro de la acción de medidas cautelares No. 271-2012.	Informativa									
38	0063-10-IS 010-11-SIS-CC	Disponer que H. Consejo Provincial de Esmeraldas, bajo prevenciones de destitución de sus autoridades de conformidad con el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución de la República, reintegre de manera inmediata a los accionantes a las actividades que venían desempeñando al momento de su separación de la Institución, debiendo informar a esta Corte en el término de quince días, sobre el cumplimiento de esta sentencia.	Restitución	-	-	-	Señores Patricio Jarrín Tello y otros	Gobierno Provincial de Esmeraldas	X	X	-	X	-

39	0027-09-AN	008-09-SAN-CC	Disponer que el CONESUP incorpore en y para todos sus actos jurídico-administrativos, que tengan relación con nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, principios con perspectiva intercultural, en aras de aplicar a cabalidad los derechos de estos pueblos, en el marco de lo expuesto y considerado en esta sentencia.	Garantía de no repetición	-	-	-	La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas "AMAWTAY WASI"	CES	-	-	Disponer que la medida de reparación integral contenida en el numeral tercero de la sentencia N°. 0008-09-SAN-CC sea entendida como una garantía de no repetición, por lo que, el Consejo de Educación Superior tiene la obligación de incorporar de forma continua e indefinida, en todos los actos jurídicos-administrativos que tengan relación con nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, principios con perspectiva intercultural, en aras de aplicar a cabalidad los derechos de estos pueblos.	-	-
			Disponer que el Juez Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas adopte las medidas necesarias para exigir el cabal cumplimiento de la Resolución No. 0474-05-RA del 20 de junio del 2006, en la forma que se expresa en esta sentencia, debiendo informar a esta Corte sobre el cumplimiento de la misma.	Restitución	X	-	-		Juez Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas					

		<p>En concordancia con el Convenio 169 de la OIT (artículos. 2, 3, 4, 5 y 27), el CONESUP se sujetará para la autorización solicitada por la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “AMAWTAY WASI”, a las disposiciones de dicho Convenio, en lo siguiente: a) la apertura de Programas Académicos en los territorios de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, según su cultura y cosmovisión; b) que en pleno ejercicio de la autonomía universitaria, desarrolle sus propias modalidades y ponga en práctica sus propios métodos de aprendizaje, y esto sirva como un aporte innovador de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas al Sistema Nacional de Educación Superior; y, c) que implemente sus propios métodos de aprendizaje, sus modalidades, planes o programas que sean necesarios acorde con sus Centros de Saber y de conformidad con su Ley de creación, en estricto respeto a los derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas reconocidos en la Constitución de la República.</p>	Restitución							<p>Disponer que el Consejo de Educación Superior informe continuamente a esta Corte Constitucional respecto de cualquier acto jurídico administrativo que tenga relación con nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, a efectos de verificar la inclusión de principios con perspectiva intercultural.</p>		
--	--	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	0042-10-IS	007-12-SIS-CC	<p>El juez primero de lo Civil de Pichincha, en el plazo de 30 días, debe informar a esta Corte sobre el cumplimiento de la resolución No. 289-2002, por parte del gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMOP).</p>	<p>Restitución</p>	<p>Informativa</p>	-	-	-	Carmen Angelita Tapia Yela	EMOP	X	-	<p>Disponer como medida de reparación equivalente, en razón del incumplimiento de larga data de la sentencia N.º 007-12-SIS-CC, que el gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas cancele a la señora Carmen Angelita Tapia Yela, un valor por concepto de indemnización de las consecuencias directas de la vulneración de los derechos constitucionales vulnerados atendiendo exclusivamente al daño emergente.</p>	-	-
			<p>La Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte, actualmente Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, debe otorgar a la señora Carmen Angelita Tapia Yela un cupo de transporte, con objeto de que la accionante pueda cederlo a favor de un tercero de forma gratuita u onerosa.</p>			-	-	-					<p>Disponer que para la determinación del valor de indemnización correspondiente a las consecuencias directas de los derechos constitucionales vulnerados atendiendo exclusivamente al daño emergente, se proceda a un acuerdo entre las partes en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, al que deben acudir las partes de manera obligatoria con el propósito de llegar a un acuerdo y establecer el monto de la indemnización dentro del término de treinta días.</p>		
													<p>Disponer que el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y las partes involucradas en el proceso de mediación, una vez cumplida integralmente la medida de reparación equivalente, informen a esta Corte Constitucional de forma inmediata acerca del cumplimiento de la misma.</p>		

41	1714-12-EP	134-14-SEP-CC	Dejar sin efecto la sentencia del 8 de febrero de 2012 a las 16h00, emitida por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, dentro de la acción de protección No. 17122-2012-080, mediante la cual se niega la acción de protección planteada; así como la sentencia emitida el 2 de octubre de 2012 a las 08h11, por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.	Restitución	-	-	-	EP. PETROECUADOR	Juzgado Décimo Segundo Civil Pichincha	X	-	-	-	-	X
----	------------	---------------	---	-------------	---	---	---	------------------	--	---	---	---	---	---	---

			Remitir copia de la sentencia constitucional al Consejo de la Judicatura con el objeto que se investigue la conducta de los jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, debiéndose además informar al Pleno de la Corte Constitucional sobre lo que se actué y resuelva al respecto.	Informativa	-	-	-		-					
42	0012-03-AA	0012-03-AA	Declarar la inconstitucionalidad de la escriturización del acuerdo de 19 de septiembre 1989 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito.	Restitución	-	-	-	Cooperativa del Pueblo	Registro de la propiedad del cantón Quito	X	-	Dejar sin efecto el Oficio No. 400-TC-SG del 22 de abril de 2004, emitido por la Secretaría General del ex Tribunal Constitucional del Ecuador, que imposibilita las futuras inscripciones de bienes inmuebles de los socios de la cooperativa Julio Zabala.	-	X
												Ordenar que la Notaría décimo sexta del cantón Quito margine el presente auto en el protocolo a su cargo.		

43	0023-12-IS	024-14-SIS-CC	Disponer que en el término de 15 días a partir de la notificación de la presente sentencia, el Gobierno Provincial del Guayas cumpla con el pago dispuesto en la sentencia constitucional y que corresponde al valor total de las remuneraciones adeudadas al accionante por el lapso que dejó de laborar como consecuencia del acto violatorio de su derecho constitucional.	Económica	-	-	X	Víctor Raúl Palacios Palacios	Gobierno Provincial del Guayas	-	-	-	-	X
			Disponer que, con el objeto de hacer efectiva la sentencia incumplida, se notifique al juez primero del trabajo del Guayas para el cumplimiento de lo ordenado, quien a su vez deberá notificar con el presente fallo constitucional al prefecto, autoridades y personeros respectivos del Gobierno Provincial del Guayas.	Informativa	-	-	-		Juez Primero del Trabajo de Guayas					
			Disponer bajo prevenciones constitucionales y legales, que en el término de 20 días, el juez primero de trabajo del Guayas, informe a esta Corte Constitucional del cumplimiento total de la sentencia constitucional.	Informativa	-	-	-		Juez Primero del Trabajo de Guayas					

[illegible]

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de su representante legal, debía devolver al accionante el valor de USD. 9.236,04 dólares, lo que debía ser informado a la Corte Constitucional en el plazo de 15 días.	Restitución e informativa	-	-	-
Dejar sin efecto la sentencia dictada el 24 de octubre de, por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección No. 828-12.	Restitución	-	-	-
Dejar sin efecto la sentencia dictada el 20 de agosto de 2012 por la jueza noveno de lo civil de Pichincha.	Restitución	-	-	-
IESS				
-				
-				

46	0014-12-AN	001-13-SAN-CC	<p>La obligación de aperturar el expediente, en observancia de lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, desde el momento del ingreso del interno al Centro de Rehabilitación Social.</p> <p>Esta obligación deberá ser observada por los directores de los Centros de Rehabilitación Social, para lo cual, la Defensoría del Pueblo verificará el cumplimiento de esta disposición e informará acerca del cumplimiento al Pleno de la Corte Constitucional quincenalmente.</p>	Garantía de no repetición	-	-	-	Nestor Napoleón Marroquín Carrera	-	-	-	-	-	-
----	------------	---------------	--	---------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

			Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, director nacional de Rehabilitación Social y director provincial del Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito No. 1, presenten disculpas públicas al legitimado activo, por el incumplimiento del artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación social, al no aperturar el expediente inmediatamente después de su ingreso, las que deberán ser publicadas en uno de los diarios de mayor circulación nacional, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta sentencia.	Satisfacción	-	-	-		Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos								
--	--	--	---	--------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos investigue y sancione por la denegación de la ejecución del derecho contenido en el artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y el 35 del Reglamento del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. Estas actuaciones deberán ser informadas a esta Corte Constitucional en el término de un mes desde la notificación de la sentencia.	Informativa	-	-	-							
47	0003-10-IS	013-10-SIS-CC	Ordenar que el Ministerio de Educación cumpla de inmediato con el contenido de la resolución N°. 1260-2008-RA, esto es, cumplir con el pago ordenado en el artículo 24 numeral 5 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, para lo cual instruirá a los funcionarios que corresponda las gestiones que el caso amerita.	Económica	-	-	X	UNE de Huaquillas	Ministerio de Educación	-	-	-	-	-

[illegible]

49	0052-10-IS	004-11-SIS-CC	Marginación de las faltas disciplinarias y Tribunales de Disciplina que ocasionaron la interposición de la acción de amparo constitucional y que se encuentran constantes en la hoja de vida del oficial; Regularizar la situación del accionante con respecto al ISPOL; Regularizar la situación del accionante con respecto al Servicio de Cesantía de la Policía Nacional; y, el pago de los haberes correspondientes. Todo esto de conformidad con las providencias de ejecución del 30 de julio de 2008 del doctor Julio Cesar Amores Robalino, Juez Tercero de lo Civil de Pichincha; del 4 de noviembre del 2008 y del 21 de noviembre de 2008.	Restitución y Económicas	-	-	-	Luis Rosmon Lara Tapia	Comandancia General de Policía	-	-	Disponer que el Comandante General de la Policía Nacional en el término de veinte (20) días presente a esta Corte Constitucional, los documentos que permitan determinar la cancelación de los aportes a favor del ciudadano Luis Rosmon Lara Tapia, que por ley debía realizar la Policía Nacional en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y en el Servicio de Cesantía, así como demuestre el pago de los haberes dejados de percibir por el ciudadano Luis Lara Tapia, durante el tiempo que estuvo inconstitucionalmente fuera de la Institución Policial.	-	X
----	------------	---------------	--	--------------------------	---	---	---	------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---

			Disponer a la Comandancia General de Policía y al Consejo Superior de Policía, como medida de ejecución, que dispongan al órgano competente, que proceda al pago de los emolumentos dejados de percibir por el señor Luis Rosmon Lara Tapia desde cuando fue dado de baja de las filas policiales hasta su reintegro a la Institución de manera efectiva; así como el pago de los valores adeudados al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y al Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, en el término de 15 días de haber recibido la sentencia, bajo prevenciones de ley.	Económica	-	-	X					Disponer al Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, así como al Director Ejecutivo del Fondo de Cesantía de la Policía Nacional o quienes ejerzan la representación legal de dichas instituciones, que en el término de veinte (20) días presenten a esta Corte Constitucional un informe pormenorizado acerca de la situación del señor teniente de policía Luis Rosmon Lara Tapia, con respecto a las aportaciones realizadas por la Policía Nacional a su favor.		X
			Concluido el término señalado en el numeral anterior, los legitimados pasivos informarán documentadamente a ésta Corte Constitucional sobre el cabal cumplimiento de ésta sentencia.	Informativa	-	-	-					Poner en conocimiento del señor Ministro del Interior en calidad de representante legal de la Policía Nacional, el contenido del presente auto de verificación de Cumplimiento.		
50	0054-09-IS	017-10-SIS-CC	Declarar el incumplimiento parcial de la resolución No. 1133-07-RA del 22 de Noviembre de 2007, emitida por la Segunda Sala del ex Tribunal Constitucional, por el contenido del oficio No. GG.OFIC-0280 del 20 de enero de 2009,	Restitución	-	-	-	Compañía Lavin S.A.	SENAE	-	-	-	-	

52	0629-09-EP	019-11-SEP-CC	Dejar sin efecto el auto del 7 de septiembre del 2005 a las 09H00, dictado por el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Portoviejo, dentro del juicio No. 0137-2002, así como las resoluciones posteriores dadas por el Tribunal Distrital el 6 de diciembre de 2005, el 23 de febrero del 2006 y el 4 de abril del 2006; debiendo sujetarse a los términos estrictos de la sentencia dictada el 21 de julio de 2003.	Restitución	-	-	-	DAC	-	-	Disponer que la Dirección General de Aviación Civil, a través de su representante legal, presente la demanda que dé inicio al juicio de expropiación dispuesto en la sentencia No. 019-11-SEP-CC, aparejando los requisitos que establece la ley.	-	-	
			Disponer que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo en el término de treinta días de la notificación con la presente sentencia, informe a este Organismo sobre su cumplimiento.	Informativa	-	-	-	Tribunal Contencioso Administrativo Portoviejo			Ordenar que la Dirección General de Aviación Civil, a través de su representante legal, informe a esta Corte Constitucional en el término de 30 días el cumplimiento de las medidas de aseguramiento.			
53	0072-09-AN	006-09-SAN-CC	Disponer que el ISSFA dé estricto cumplimiento a la Resolución No. 737-2005-RA dictada por la Tercera Sala del ex Tribunal Constitucional, en las condiciones de favorabilidad que manda la Constitución y la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995.	Restitución	-	-	-	Cesar Rodrigo Díaz Álvarez	ISSFA	-	X	Disponer que la Dirección General de Aviación Civil, a través de su representante legal, presente la demanda que dé inicio al juicio de expropiación dispuesto en la sentencia No. 019-11-SEP-CC, aparejando los requisitos que establece la ley.	-	X

			El Director del ISSFA informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la sentencia en el término de 15 días.	Informativa	-	-	-			<p>Que el ISSFA conceda los beneficios establecidos en la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, considerándose el grado de capitán de las Fuerzas Armadas del Ecuador; en consecuencia, se cancelará mensualmente la remuneración que le corresponde al señor César Rodrigo Díaz Álvarez.</p> <p>Que el ISSFA suministre al señor capitán César Rodrigo Díaz Álvarez la prótesis principal y de reserva de su pie derecho, conforme las condiciones y especificaciones establecidas por su médico tratante, cada vez que sea necesario, por su condición de persona con discapacidad y beneficiario de la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995.</p> <p>Para la determinación del monto económico correspondiente a la reliquidación de las pensiones y demás beneficios que tiene derecho el capitán César Rodrigo Díaz Álvarez, se esté a lo dispuesto en sentencia No. 004-13-SAN-CC del 13 de junio del 2013.</p> <p>Que el ISSFA ofrezca disculpas públicas al señor César Rodrigo Díaz Álvarez, las mismas que deberán realizarse en un diario de circulación nacional público o privado en el término de 10 días.</p>
--	--	--	---	-------------	---	---	---	--	--	---

55	0036-10-CN y 0006-11-CN	006-14-SCN-2014	En relación al caso No. 0036-10-CN, el archivo inmediato del proceso No. 412-2010 que se sustancia en el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Cotopaxi y cualquier otro que se derive del supuesto delito de plagio; debiendo informar a esta Corte sobre el cumplimiento de esta disposición.	Restitución		-
					-	-
					-	-
				Juez tercero de garantías penales de Cotopaxi		
					-	
					-	
54	0604-04-RA	0604-04-RA	Revocar la resolución del Juez de instancia, en consecuencia, conceder el amparo solicitado, dejando sin efecto la declaratoria de bien mostrenco que había decidido el Municipio de Babahoyo, en relación al inmueble de propiedad de la Cooperativa de Vivienda Primero de Diciembre.	Restitución		-
			Remitir el expediente al juez de origen para el cumplimiento de los fines legales.	Informativa	-	-
					-	-
					-	-
				Cooperativa de vivienda Primero de Diciembre		
				Juez Segundo de lo Civil de los Ríos y Municipio de Babahoyo		
					-	
						-
						X

			En relación al caso No. 0006-11-CN, se continúe con la tramitación de la causa signada con el No. 143-2010-TPCX, que se sustancia en el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi.	Satisfacción	-	-	-		Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi						
--	--	--	--	--------------	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--

Fuente directa: Gráfica de elaboración propia.

Fuente primaria: Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Constitucional a la primera Corte Constitucional, (Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2015) y Sistema de Gestión de Acciones Constitucionales <
<http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/index.php>>.